

Tinkazos



revista boliviana **6** *de ciencias sociales*

Mayo de 2000

473

DD-0300





Itinerario de un concepto de moda
Capital social: del boom a la resaca

George Gray Molina **7**

Campeños y migrantes en América Latina
Naciones en movimiento

Fernando Calderón **25**

En los municipios
Planificación participativa: una experiencia ambigua

Into A. Goudsmit y James Blackburn **37**

Estrategias migratorias
Tarijeños en la Argentina, vidas fronterizas

*Alfonso Hinojosa Gordonava (coord.),
 Guido Cortez Franco y Liz Pérez Cautín* **48**

Existencias fronterizas

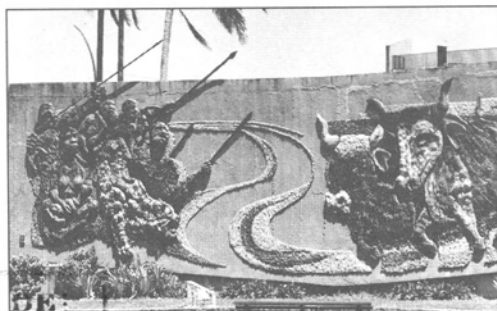
**Ser "chango" en El Alto:
 entre el rock y los sikuris**

Rafael Archondo **67**

La gente se concentra en las ciudades

**Urbanización, estructura
 productiva y empleo
 en Bolivia**

Carmen Ledo **79**



LIBRO DOCUMENTO DE

PIRB

Tinkazos

FECHA DE INGRESO:

2 1 0 6 1 2 0 0 0



Tinkazos

MAYO/AGOSTO 2000 AÑO 3 Nº6

La utopía de no ser pobres

Cómo las políticas sociales se someten al ajuste liberal

Franco Gamboa Rocabado **121**

Un proyecto de Jorge Sanjinés

Un viejo sueño: La Escuela Andina de Cine

Nadya Gutiérrez Aldayuz **154**

Políticas Culturales

La Visión del Postprogresismo

Willen Assies y Ton Salman **161**

Reseñas

..... **179**

Consejos para escribir en Tinkazos

..... **190**



Revista Boliviana de Ciencias Sociales, del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), cuatrimestral

Director

Rafael Archondo

Consejo Editorial

Rafael Archondo

Rossana Barragán

Pamela Calla

Pierre Lavaud (Francia)

Cecilia Moreno

Rodney Pereira

Godofredo Sandóval

Javier Sanjinés (EE.UU.)

Diseño gráfico

Willmer Galarza

Pintura de portada

Lorgio Vaca

Esta publicación cuenta con el auspicio del DGSI

(Directorio General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos)

Depósito legal: 4-3-722-98

Impresión

"EDOBOL" Ltda.

Derechos reservados

Fundación PIEB,

abril 2000

Dirección: Edif. Fortaleza,

piso 6 of. 601. Av. Arce

Teléfono: 431866

Fax: 432582

Casilla de correo: 12668

Correo electrónico

fundapieb@unete.com

Página Web:

www.pieb.org.

Cosas de migrantes

No es la primera vez que abordamos el tema. Los migrantes de diversas regiones y culturas han sido nuestra preocupación desde el primer número de esta revista, allá por el año 1998, cuando Geneviève Cortes dejaba aportes importantes sobre el tema que aún sirven de referencia. Ahora, en este sexto número de *T'inkazos*, publicación de ciencias sociales editada cada cuatro meses por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), retomamos el análisis de esas existencias en mudanza y persecución de nuevos destinos.

Encabezan el esfuerzo Alfonso Hinojosa Gordonava, Guido Cortez Franco y Liz Pérez Cautín, quienes pintan un retrato preciso de las rutas e imaginarios de los migrantes tarijeños que se mudan a la Argentina o retornan de allí. Granjas y empleos eventuales son parte de esas vidas, edificadas en mutua interconfluencia entre dos culturas penetradas por sus códigos y necesidades, complementariedades y antagonismos.

Desde su curso de doctorado en Holanda, Carmen Ledo completa estas visiones desde ángulos más complejos: la urbanización de Bolivia, la movilidad de la gente dentro de sus espacios geográficos y las grandes transformaciones demográficas del país. El tema es relevante si se considera que en el año 2010, el 70 por ciento de los bolivianos podría tener como residencia a las ciudades.

En el mismo sentido, Into A. Goudsmit y James Blackburn se ocupan de hacer un examen riguroso de las administraciones municipales una vez puesta en marcha el proceso de participación popular. El estudio intenta recoger las experiencias planificadoras de las alcaldías, entidades que en caso de funcionar correctamente, pueden ayudar a fundar existencias humanas dignas, que no requieran de la migración para resolver sus carencias.

Por su parte, el sociólogo boliviano Fernando Calderón entrevista a Wilfredo Lozano, secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), con quien recoge un panorama de la situación en Centroamérica y el continente en torno al acuciante tema de la identidad. Muy a tono con los otros

artículos de este número, en el diálogo se traza con nitidez la importancia de los migrantes caribeños en los Estados Unidos.

Ya en otro ámbito reflexivo, George Gray Molina contribuye al debate boliviano en torno a un concepto de moda: el capital social. Haciendo uso de distintas corrientes y definiciones, Gray Molina esclarece el uso de esta definición tan empleada en casi todos los últimos estudios sobre la realidad boliviana.

Por su parte, Franco Gamboa hace un exhaustivo recuento de las políticas sociales aplicadas en el país en estas últimas décadas. Su revisión traza interesantes comparaciones entre los distintos gobiernos y muestra de manera clara que tras varios años de ajuste estructural, la cuestión social y la pobreza siguen siendo los desafíos centrales de la república.

Finalmente es importante destacar un cambio que deja de lado una pequeña tradición de *T'inkazos*. A partir de este número, reemplazamos la sección dedicada a resumir brevemente el contenido de las últimas publicaciones académicas editadas en Bolivia por reseñas más completas que van más allá de lo meramente informativo. Creemos que de esta manera contribuiremos mejor al conocimiento de los aportes bibliográficos en ciencias sociales.

Es además un orgullo para la revista contar entre sus ilustraciones con el trabajo de un segundo artista cruceño. En esta ocasión nos honra con su estética el muralista Lorgio Vaca, cuya obra conocemos aquí en una retrospectiva bastante completa elegida por él mismo y en la que se incluyen grabados inéditos, elaborados especialmente para esta edición.

ACLARACIÓN

En este número de *T'inkazos* volvemos a publicar el coloquio titulado «Ser 'chango' en El Alto; entre el Rock y los Sikuris». La repetición se justifica, porque debido a errores de imprenta la versión publicada en el anterior número resultó dañada, lo que lo hacía ilegible.

PÁGINA WEB

El Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) ha entrado plenamente al ciberespacio. Todas las personas interesadas en conocer sobre las actividades del PIEB, sus publicaciones y aportes al conocimiento de la realidad boliviana pueden acceder a la página web: www.pieb.org

Lorgio Vaca. La gesta del oriente boliviano. (Fragmento)



Capital social: del *boom* a la resaca

George Gray Molina¹

El concepto de capital social lo ha inundado todo. Lo usan desde los revolucionarios de nuevo cuño hasta los burócratas del Banco Mundial. Se ha expandido tanto que ya comienza a tener significados ambigüos. ¿Hacia dónde va esta discusión? Este artículo echa luces sobre el tema, dotado de abundante bibliografía

El capital social se apresta a repetir la experiencia de tantos otros conceptos promisorios: de bullada contribución intelectual a frase política de moda; de ahí a cliché periodístico para eventualmente desaparecer sin pena ni gloria. Alejandro Portes y Patricia Landolt (1996:19)

La literatura de capital social apenas empieza a recobrar fuerzas luego del *boom* conceptual, empírico y político de los últimos años. Del trabajo sociológico de Pierre Bourdieu, Glenn Loury y James Coleman a las agendas de desarrollo del Banco Mundial y otros, el capital social ha ganado protagonismo en el lenguaje de académicos, políticos y periodistas. A medida que mengua el *boom*, algunos analistas se empiezan a preguntarse si el término ha sido utilizado “para explicar demasiado con demasiado poco” (ver Woolcock 1998 y Portes 1998). Mientras definiciones alternativas de capital social han surgido en diferentes disciplinas, y ha sido utilizadas en estudios tan distintos como comparaciones internacionales de crecimiento y análisis de pobreza familiar, no se cuenta aún con un paraguas conceptual o enfoque unificador que hilvane las múltiples ideas y marcos conceptuales asociados a él.

¹ El autor es estudiante de doctorado en el Nuffield College en la Universidad de Oxford. Un resumen de este trabajo fue presentado en el Centro de Estudios Latinoamericanos, St. Antony's College, Universidad de Oxford, en marzo de 1999.

Este documento analiza tres aspectos de la creciente literatura de capital social, vinculadas a la frontera del campo de desarrollo. La primera parte analiza el debate conceptual, desde los orígenes neoinstitucionalistas, hasta las críticas sociológicas y políticas que juntas muestran las confrontaciones paradigmáticas del “estado del arte”. La segunda parte analiza la cara empírica del capital social, haciendo un repaso de evidencia micro, macro y meso de los determinantes y efectos del capital social. La última sección presenta algunas de las implicaciones analíticas de investigaciones recientes y considera si “uno” o “muchos” capitales sociales moldearán la frontera de investigación a futuro.

EL DEBATE CONCEPTUAL

La literatura de capital social emergió de un largo y confrontado debate sociológico, que rápidamente se expandió hacia las agendas de investigación y de política de economistas, politólogos, antropólogos, historiadores y otros investigadores de las ciencias sociales. La riada de innovaciones conceptuales que le siguió se ha resistido exitosamente a la “captura” disciplinaria. Definiciones y tipologías alternativas han contribuido a la expansión de las fronteras de aplicabilidad, agregación y generalidad del análisis del capital social. Sin embargo esta nueva “abundancia de capitales” puede haber llevado a un uso sobre-extendido del término (ver Baron y Hannan 1994). Esta sección muestra los dilemas nacidos de pugnas conceptuales sobre capital social, y hace un repaso de las recientes contribuciones a la literatura del desarrollo como también las críticas sociológicas y políticas de las mismas. Más que adoptar un enfoque unificador, se presentan los alcances y limitaciones de concepciones alternativas y se ofrece un análisis crítico del capital social desde un punto de vista interdisciplinario.

ENFOQUES NEOINSTITUCIONALES

Como otras formas de capital, el capital social es productivo, y hace posible el logro de ciertos fines imposibles de obtener sin él... A diferencia de otras formas de capital, el capital social se define por la estructura de las relaciones entre individuos. (James Coleman 1990:302)

El capital social se refiere a ciertas características del orden social como la confianza, las normas y las redes sociales que pueden facilitar la resolución de dilemas de acción colectiva para así mejorar la eficiencia social. (Robert Putnam 1993:167)

El capital social incluye conocimientos, instituciones y patrones de interacción compartidas que caracterizan a la acción en grupo... [] Puede estar basado en la evolución o construcción de normas o reglas que la rigen y en mecanismos para el monitoreo de compromisos y sanciones. (Elinor Ostrom 1997:158)

Las concepciones más conocidas del capital social han surgido del enfoque neoinstitucionalista y de decisiones racionales, de la pluma de James Coleman (1998; 1990) y Robert Putnam (1993; 1995; 2000). Si bien cada autor ha propuesto una concepción distintiva del capital social, ambos comparten un marco metodológico común, que concibe el análisis de dilemas de acción colectiva como problemas de cooperación o coordinación. Coleman ha propuesto quizás la definición más difundida del capital social, anclando su concepto a tres suposiciones controversiales. La primera es que “el capital social se define por su función”, (Coleman, 1990:302). Coleman concibe del capital social como un conjunto de “recursos socio-estructurales”, que actúan como lubricantes para resolver problemas de coordinación institucionales rela-

cionados al cumplimiento, monitoreo y sanción de normas. La definición funcionalista de Coleman ha llevado a su tipificación como tautológica, ya que los aspectos de una exitosa acción colectiva (resultados) no explicados por expectativas racionales puede ser atribuida a la presencia de esos mismos recursos productores de resultados. Un segundo aspecto contencioso de la definición de Coleman se relaciona a la idea de capital social como bien público. Él asevera que “el capital social existe como derivado de la producción de otros bienes” (Coleman 1990:312). Esta característica de externalidad, arguye Coleman, sugiere que la producción de capital social siempre será deficitaria. No habrá incentivos racionales para que los individuos produzcan un bien público no excluible, menos si el proceso de producción en sí está sujeto a problemas de bien público de segundo orden (para una discusión crítica ver Dasgupta 1997). La tercera suposición tiene que ver con la endogenidad de las causas y efectos del capital social. “A diferencia de otras formas de capital social, el capital social es inherente a la estructura de relaciones entre personas...[] No nace ni de los individuos ni de los implementos físicos de producción” (Coleman 1990:302). La endogenidad sugiere para Coleman que un tipo de capital social que es valioso en una circunstancia, puede ser inútil o inclusive dañino en otras. También cuestiona si el peculiar proceso de producción de capital social puede ser tipificado como “capital”.

El análisis de Robert Putnam sobre determinantes de rendimiento institucional en Italia construye sobre la concepción de Coleman que concibe al capital social “como lubricante”, pero trabaja con mayor detalle sobre dos aspectos de la producción del capital social: las normas de reciprocidad y las redes cívicas. Para Putnam, el capital social creado por la interacción social en la esfera cívica, incluyendo la participación en clu-

bes de fútbol o grupos de coro, puede rebalsar hacia otras esferas de la vida social y pública. Putnam distingue entre redes horizontales y verticales (coros vs. empresas, por ejemplo), y argumenta que las primeras producen más capital social que las segundas. Las asociaciones horizontales “vinculan actores de poder y estatus equivalente”, mientras que las asociaciones verticales “vinculan actores con relaciones de jerarquía y dependencia asimétricos” (Putnam, 1993:173).

La lectura realizada por Putnam ha atraído muchas críticas. Dos aspectos de su análisis empujan la frontera del capital social desde la perspectiva neoinstitucionalista. Primero, Putnam se ha centrado en las fuentes del capital social. Boix y Posner argumentan que lo que Putnam intenta, pero no termina de demostrar, es que las asociaciones productoras de bienes públicos y bienes privados tienen diferentes efectos sobre la producción de capital social. Las asociaciones productoras de bienes privados, como los grupos de coro y los clubes de fútbol, no requieren de tanto capital social como las de bienes públicos como las juntas vecinales o de padres de familia. La presencia de un beneficio excluible, como cantar o jugar deportes, sugiere que el primer tipo de asociación requerirá de menos “lubricante” para la acción colectiva que el segundo (Boix y Posner 1996:8).

Segundo, Putnam centra su atención sobre los efectos del capital social. Sin embargo, los mecanismos institucionales por los cuales “grupos de ornitología y clubes de fútbol llevan a un mayor nivel de participación cívica y mayor democracia” (Levi 1996:46) son problemáticos, y requieren de un desarrollo más explícito en las presunciones institucionales y racionales. El trabajo de Elinor Ostrom sobre problemas de recursos comunes sugiere que el análisis de la estructura de juegos institucionales que vinculan al capital social a diferentes tipos de resultados

deben distinguir entre causa y efecto. Ostrom observa que “cuando los participantes de un grupo tiene capacidades e intereses dispares, las reglas adoptadas afectan la distribución de los resultados de manera significativa. Pero si los participantes tienen diferencias complementarias, las reglas adoptadas suelen generar resultados mutuamente beneficiosos” (Ostrom 1994:559). El capital social puede actuar como lubricante para la cooperación en ciertos contextos institucionales, pero no en otros.

Paul Collier (1998) propone un recuento más formal sobre la producción y los efectos del capital social, incluyendo cómo afectan a la generación de ingresos. Observa la triple vinculación entre el capital social y las externalidades públicas. “Primero, la iniciación de la interacción social siempre involucra una externalidad (se requiere de dos para bailar el tango). Segundo, las interacciones sociales tienen un efecto económico no mediatizado por el mercado. Tercero, generalmente este efecto económico no es el objetivo en sí de la interacción social, sino un resultado secundario (Collier 1998:2)”.

Collier analiza cuatro tipos de interacción social:

- Relaciones unilaterales entre agentes.
- Relaciones recíprocas entre agentes.
- Clubes caracterizados por algún bien excluible.
- Organizaciones jerárquicas.

Al integrar la producción y los efectos del capital social a un solo marco microeconómico, Collier condensa una vasta literatura neoinstitucionalista de fallas del mercado. El autor distingue entre fuentes gubernamentales o civiles de producción de capital social, para así exogenizar aquellos aspectos del capital social que dependen de la acción pública, como la educación, la legislación penal/civil o el cobro de im-

puestos. El enfoque que adelanta Collier es probablemente el más acabado desde la perspectiva neoinstitucionalista, porque analiza causa y efecto y sugiere puentes entre los niveles micro y macro de producción de capital social.

LA CRÍTICA SOCIOLÓGICA

A pesar de su reciente popularidad, el capital social no representa nada nuevo para la sociología... Los procesos sociales que lo contienen han sido estudiados bajo otros rótulos en el pasado. Lllamarlos capital social, es en gran medida, sólo una manera atractiva de presentar lo viejo con ropaje nuevo. Alejandro Portes (1998:21)

Los fundamentos revisionistas del capital social intentan explicar mucho con poco... [] Si el capital social puede ser racional, pre-racional e inclusive no-racional, ¿qué no lo es? Michael Woolcock (1998:155-56)

Los enfoques neoinstitucionales han sido criticados por mostrar una concepción “asocial” de la conducta humana, que concibe a los actos sociales como motivados por intereses racionales, inmunes de las contingencias locales y de la especificidad de reglas y normas sociales. El grueso de la crítica sociológica al comentario de capital social deriva de esta apreciación. Granovetter, Portes, Landolt y Woolcock han mostrado los peligros de abstraer al capital social de sus referentes conceptuales. No sólo importa el contexto, sino que el capital social sólo es significativo en contextos y lugares específicos. Cuando se utiliza como un concepto para todas las medidas, pierde toda fuerza analítica.

Granovetter sugiere un enfoque contextual que disminuye el nivel de abstracción del capital social. Hace referencia a las consecuencias economicistas de concebir de la confianza social:

“los economistas han señalado que el mejor incentivo para no engañar es el daño a la reputación, pero ésta sugiere una concepción “asocial” de la reputación como un bien abstracto...[] en el mundo real utilizamos abstracciones sólo cuando no hay nada mejor disponible; siempre vamos en búsqueda de mejores fuentes de información. En este sentido, es insuficiente oír a una persona decir de sí misma que es honesta; es mejor saberlo de terceras personas; mejor aún saberlo por experiencia propia” (Granovetter 1985:490). En vez de analizar el capital social de una manera altamente abstracta, este enfoque considera más valioso y significativo el análisis de instancias concretas de reciprocidad, confiabilidad y cumplimiento de normas.

Alejandro Portes (1998) y Portes y Landolt (1996) cuestionan el uso asocial e instrumental del capital social, y también el peligro de saturación conceptual que ocurre cuando se trasladan medidas individuales e interpersonales a niveles comunitarios, intracomunitarios y nacionales de agregación. Portes sugiere reconceptualizar los determinantes del capital social en términos de motivaciones instrumentales y no instrumentales, y efectos sociales positivos y negativos. Las motivaciones no instrumentales tales como la internalización de las normas y las acciones por solidaridad de grupo, generalmente se excluyen de las perspectivas de decisiones racionales e institucionalistas. Aún las motivaciones instrumentales, por ejemplo los intercambios recíprocos, argumenta Portes, deben ser analizados de manera conceptual, pensando como tales intercambios surgen de un entramado específico de normas y convenios sociales. “En el caso de los intercambios recíprocos, la motivación del prestamista es instrumental, pero la expectativa de repago no está basada en el conocimiento del deudor, sino en la inserción de ambos actores a una estructura social común. Esta inserción tie-

ne dos consecuencias. Primero, el pago al prestamista incluye no sólo lo recibido del deudor, sino también el estatus, el honor y la aprobación social de la comunidad. Segundo, la comunidad en sí funge de garante para el pago de deudas.” (Portes 1998:8) Tanto para motivaciones instrumentales como no instrumentales, el capital social puede tener efectos negativos y no negativos, desde el cumplimiento de normas, el apoyo familiar y beneficios de redes sociales en el primer caso, hasta restricciones a la libertad y demandas abusivas sobre miembros de un grupo, en el segundo.

Michael Woolcock construye sobre la concepción de Granovetter y añade contrastes entre los niveles microsociales (familia-comunidad) y macrosociales (estado-sociedad). A nivel micro, las familias y comunidades muestran un alto nivel de integración, en la medida en que utilizan fuentes próximas de capital social, y un alto nivel de eslabonamiento, en la medida en que usan sus recursos comunitarios para acceder a sus recursos extracomunitarios. Los *pasanakus* y créditos del Banco Sol ejemplifican el uso de la integración y el eslabonamiento a de manera simultánea. A nivel macro, Woolcock sugiere que las relaciones entre la sociedad y el Estado pueden caracterizarse por ciclos de sinergia, periodos de activismo estatal que movilizan recursos e incentivan a la participación social. En la medida en que unidades corporativas como el estado desarrollan un alto nivel de autonomía, el equivalente macro a la integración local es la integridad estatal. Estados en colapso, troceados o irregulares tendrán menor capacidad de promover relaciones sinérgicas con la sociedad. Asimismo, estados capaces, pero no accesibles, tendrán menor éxito en promover eslabonamientos entre los niveles micro y macro de capital social. Esta concepción cuatripartita de capital social (integración, eslabonamientos, sinergia e integridad) de-

penden más de referentes contextuales que bajo el enfoque neoconstitucional. La crítica sociológica sin embargo comparte con el neoinstitucionalismo una negligencia benigna de la política, el poder y la confrontación social, que se hacen más relevantes en la aplicación de la idea de capital social a temas de desarrollo.

LA CRÍTICA POLÍTICA

Uno de los retos de la literatura del capital social es como integrar el conflicto político al análisis de las relaciones entre el Estado y los "capitalistas sociales". De lo contrario, se hace difícil saber por qué algunos actores estatales promueven la producción de capital social, mientras otros la inhiben. Jonathan Fox (1996:1089)

La política generalmente queda relegada en las discusiones de capital social. La mayoría de los autores presupone que un grupo relativamente homogéneo intenta resolver problemas de acción colectiva...[] Pero si una comunidad está asediada por el conflicto interno, la naturaleza y el significado de capital social se tornan más complicados. Peter Evans (1996:1127)

Si la ausencia de capacidad cívica es un subproducto de la política, y de las relaciones entre el Estado y la estructura social...[] entonces aquellos que atacan la ausencia de capital social promoviendo asociaciones civiles estarían atacando los síntomas más que la enfermedad. Sidney Tarrow (1996:396)

La mayor parte de las críticas políticas sobre capital social han sido desarrolladas en el contexto de las políticas públicas y la teoría democrática. Entre las más conocidas, el estudio de Robert Putnam que vincula capital social a democracia en *Making Democracy Work*, devino en una ola de crítica a lo que se percibía era una lectura inusualmente "apolítica" del funcionamiento de

la democracia local (Levi 1996; Tarrow 1996; Whitehead 1997). ¿Qué condiciones políticas conducen a la construcción de capital social y acción cívica? y ¿a través de qué mecanismos institucionales tiene efectos el capital social? Mas allá del debate en torno a *Making Democracy Work*, el optimismo de diseño institucional implícito en los enfoques neoinstitucionalistas y los eslabonamientos y sinergías observadas por la crítica sociológica, han pecado de una concepción de "caja negra" de la política. Sidney Tarrow (1996), Jonathan Fox (1996) y Peter Evans (1996), enfatizan un análisis cuidadoso de los mecanismos por los cuales ocurre la acción colectiva entre organizaciones comunitarias y funcionales. En el mundo real, los puentes que hacen posible que el capital social funcione, suelen ser puentes políticos, caracterizados por luchas de poder, enfrentamiento y conciliación de resultados. Desde esta perspectiva, las caracterizaciones idealizadas, folklóricas o monolíticas del capital social no sólo que pecan de inocencia, sino también llevan a acciones políticas erradas. Más que preguntar de dónde viene el capital social, las preguntas más relevantes son cómo se construye, cómo se sostiene en el tiempo, y cómo impacta en el curso de la acción colectiva local y regional.

Peter Evans (1996) sugiere una concepción sinérgica de la construcción política del capital social. La sinergia entre el Estado y la sociedad, argumenta Evans, puede ser un importante catalizador del desarrollo al proveer una estructura institucional al intercambio entre actores públicos y privados. Evans sugiere que más importante que la dotación de capital social, es la trayectoria institucional a través de la cual se desarrollan y utilizan las dotaciones sociales. En países en desarrollo, el Estado se caracteriza frecuentemente por la debilidad burocrática, la presencia territorial discontinua y una frágil legitimidad política.

Longio Vaca. El carricón de la vida. (Fragmento)



Las complementariedades entre tales estados y las asociaciones de la sociedad civil puede derivar en beneficios mutuos, al ligar a las organizaciones populares con los gobiernos locales y mejorar la eficiencia y legitimidad del gobierno. Un sistema político competitivo ayuda a sobrellevar obstáculos a la sinergia, siempre y cuando las reglas de competencia se determinen de mutuo acuerdo. El enfoque sinérgico reserva un importante rol del Estado en la agregación del capital social. El reformismo estatal y el activismo político de día a día suelen ser los puentes más efectivos para vincular esferas locales y nacionales de acción colectiva.

Jonathan Fox (1996) profundiza el enfoque de Evans. Un enfoque de construcción política, argumenta Fox, debe poder explicar no sólo la dotación del capital social, sino también el desarrollo desigual y discontinuo de movimientos sociales, enmarcados en instituciones democráticas, autoritarias o clientelares. Fox sugiere que diversos tipos de capital social debieran analizarse desde la óptica de distintas trayectorias institucionales y políticas. Identifica tres tipos de trayectoria para el caso mexicano. La primera muestra la coproducción de capital social entre reformistas estatales y grupos comunitarios dispuestos a aprovechar aperturas políticas desde arriba. Una segunda trayectoria involucra actores externos no gubernamentales que apoyan esfuerzos locales y regionales de acción colectiva. Una tercera trayectoria, caracterizada por su independencia de actores externos, lleva a un estilo más contestatario de política, como la evidenciada por el movimiento Zapatista en Chiapas. Apoyando el enfoque constructivista, Whitehead y Gray-Molina (2000) sugieren una lectura histórica de la construcción de capacidades políticas que vinculan diversos tipos de capital social con diferentes escenarios políticos. El proceso por el cual emergen la identidad, las capacidades

organizativas y la confianza política se constituye por periodos cortos y largos de acción e inacción política. Mientras el capital social puede ser un recurso valioso a nivel comunal e inclusive local, las capacidades políticas requieren de habilidades más amplias necesarias para tender puentes entre las esferas locales y nacionales.

EL DEBATE EMPÍRICO

El trabajo empírico sobre capital social es vasto. Incluye análisis micro, meso y macro sobre los determinantes y efectos del capital social. Esta sección presenta avances en tres categorías amplias de estudio:

- Análisis de la pobreza y el crecimiento.
- Análisis de la participación y la democracia.
- Análisis de la voz comunitaria y el desarrollo.

POBREZA, CRECIMIENTO Y CAPITAL SOCIAL

Uno de los primeros estudios sobre capital social y crecimiento económico analizó la hipótesis de Putnam para el caso italiano (Halliwell y Putnam 1995). Los autores incluyen tres tipos de mediciones de capital social (percepciones ciudadanas, rendimiento gubernamental y un índice de acciones cívicas). Halliwell y Putnam encuentran que cada una de estas medidas se correlaciona positiva y significativamente con el crecimiento económico durante el periodo 1950-1990. A nivel internacional, Keefer y Knack (1999) revisan la más reciente literatura sobre capital social y crecimiento. En su propio estudio, (Keefer y Knack 1997) los autores utilizan dos índices subjetivos de riesgo político, el IRCG (guía de riesgo internacional) y el BERI (índice de riesgo empresarial), como proxies de capital social a nivel nacional. Keefer y Knack encuentran que la tasa de convergencia del crecimiento de los países más pobres varía positivamente con

la calidad de instituciones de gobierno, ejemplificados por los índices IRCG y BERI. Otros estudios que utilizan índices subjetivos, como Mauro (1995), Easterly y Levine (1997) y Calderón y Chong (1997) apoyan los resultados de Keefer y Knack. Calderón y Chong realizan un test de exogenidad utilizando una serie de tiempo de los datos BERI. Encuentran evidencia clara de causalidad doble: el crecimiento aumenta las tasas BERI, pero altas tasa BERI incrementan el crecimiento. Una limitación potencial del uso de índices de riesgo político, notada por Knack (1999), es que estos tienden a reflejar las percepciones de inversores extranjeros más que las condiciones enfrentadas por inversores nacionales. Un enfoque más equilibrado ha intentado recolectar percepciones extranjeras y domésticas sobre derechos de propiedad, cumplimiento de contratos y transparencia pública (Brunetti, Kisunko y Weder 1997). Brunetti et. al., construye un índice de credibilidad a partir de los datos de las encuestas empresariales. Para una muestra de 41 países y controlando por ingreso inicial y logro educativo, los autores encuentran una correlación positiva y significativa entre su índice de credibilidad y el crecimiento económico entre 1983 y 1994. La Porta, López, Schleifer y Vishny (1997) y Zak y Knack (1998) usan una medida alternativa de capital social con datos individuales de la Encuesta de Valores Mundiales (EVM). Las EVM incluyen aproximadamente mil individuos de una treintena de países a través de tres olas de entrevistas en los años 80, principios de los 90 y finales de los 90. La Porta et. al., encuentran que sus medidas de confianza individual tienden a estar asociadas a medidas similares de eficiencia gubernamental, corrupción y calidad de la infraestructura. Los autores también analizan una regresión de los ingresos brutos de las 20 empresas más grandes como proporción del Producto Interno Bruto

(PIB), sobre ingresos *per cápita*, confianza familiar y en el prójimo. Encuentran una positiva correlación de la confianza en el prójimo, pero negativa correlación con la confianza en la familia.

A diferencia del enfoque agregado utilizado en los estudios de crecimiento, los estudios de pobreza y capital social suelen utilizar datos en el plano del hogar. Narayan (1999) hace la revisión mas exhaustiva de esta literatura. Uno de los primeros análisis de pobreza y capital social a nivel de encuestas de hogar fue hecho por Narayan y Pritchett (1997). Los autores construyen una medida de capital social a partir de una encuesta rural de Tanzania. Narayan y Pritchett encuentran que un aumento de una desviación estandar en capital social comunal incrementa el ingreso proyectado por 30%, equivalente a una triplicación del logro educativo. Grooteart (1998) utiliza datos a nivel de hogar y comunidad de Indonesia para medir el capital social en seis dimensiones: densidad de afiliaciones comunitarias, heterogeneidad interna de las asociaciones (por edad, género, religión, y otros), nivel de asistencia, de participación en la toma de decisiones, pago de membresía y orientación comunitaria. El autor encuentra que los efectos más significativos del capital social derivan de la densidad de afiliaciones (cada afiliación adicional incrementa el ingreso *per cápita* por 1.5%), heterogeneidad interna (un incremento del 20% en el índice de heterogeneidad lleva a un incremento del 3%) y un nivel de participación en la toma de decisiones (un incremento del 20% en el índice de participación lleva a un incremento del 3% en ingresos).

Una extensa literatura sobre microcrédito, también se refiere a las contribuciones del capital social. Van Bastelaer (1999) hace una revisión minuciosa de ésta. Si bien los proponentes del capital social han destacado el efecto positivo de la confianza social sobre la elección de prestata-

rios, el monitoreo y la tasa de repago del crédito, la más reciente evidencia sugiere que los hogares más pobres hacen un uso discontinuo e irregular del capital social (Morduch 1998) y cuestionan el efecto positivo del crédito solidario (Jain 1998; Martin 1998). Van Bastelaer sugiere que la controversia sobre crédito solidario y amortiguamiento incompleto de riesgos por parte de los pobres, ha llevado a una renovada atención sobre otros eslabones del microcrédito, incluyendo las relaciones prestatario-prestamista y la importancia de la cultura empresarial dentro de las organizaciones de crédito.

DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN Y CAPITAL SOCIAL

Los trabajos de Robert Putnam (1993, 1995) son los puntos de partida del grueso del trabajo empírico sobre capital social y democracia. El índice más citado de Putnam es el de la “comunidad cívica”, que mide el orden de preferencias electorales entre 1953 y 1979, niveles de abstención electoral entre 1974 y 1987, incidencia de lecturas de periódicos en 1975 y número de asociaciones deportivas y culturales en 1981. Putnam encuentra una alta correlación entre este índice y una docena de indicadores de rendimiento gubernamental (tres de los cuales reflejan procesos de formulación de política pública, seis procesos de implementación y tres aspectos administrativos). El autor concluye en que la confianza social, las normas y las redes sociales que facilitan la acción coordinada están detrás del éxito cívico en el norte italiano, que a su vez se explican por siglos de desarrollos históricos de construcción cívica. En 1995, Putnam fijó su atención en los Estados Unidos. Utilizando datos de la Encuesta General Social (EGS), el autor encuentra un patrón progresivo de abstención cívica ejemplificado por la baja asistencia a iglesias, sindicatos, juntas escolares y otras organizaciones incluyendo a los

Boy Scouts y la Cruz Roja. Putnam explica la apatía política en términos de procesos demográficos, tecnológicos y laborales de largo plazo.

El primer análisis comparativo de capital social y democracia fue elaborado por Francis Fukuyama, con *Trust* (Fukuyama 1995) y *The Great Disruption* (Fukuyama 1999). En la primera obra, Fukuyama analiza la trayectoria económica y política de países de “alta” y “baja confianza”. Entre las primeras incluye a Japón y Alemania, entre las segundas a China, Francia, Italia y Corea. Analiza en detenimiento las relaciones entre capital social y organización industrial. Argumenta que sociedades de alta confianza tienen más capacidad de innovación organizativa de cara a los avances tecnológicos. Además extiende este argumento al ámbito político al sugerir que la sociabilidad es vital para la cohesión social y la efectividad de las instituciones democráticas (Fukuyama 1995:325). En *The Great Disruption*, Fukuyama concentra su atención sobre el tema más amplio de orden social y las posibilidades de creación y destrucción del capital social. En el análisis empírico, el autor procura medir la ausencia de capital social, aproximada por tasas de crimen, estadísticas de fragmentación de la familia nuclear, el uso de drogas, el suicidio, la evasión impositiva y los litigios. A diferencia de Putnam, Fukuyama sostiene que el declive de capital social iniciado en los años 60 con “la gran ruptura” ya terminó. La reconstitución del orden, según Fukuyama, se sostiene sobre nuevas formas de construcción del capital social y el reclamo por mayores espacios de participación y valoración comunitaria.

Los trabajos de Putnam y Fukuyama se basan en gran medida sobre las Encuestas de Valores Mundiales recogidas por Ronald Inglehart desde los años 70 (Inglehart 1990, 1997). Inglehart analiza la hipótesis de Putnam entre participación cívica y democracia para 43 países. Encuentra que

la afiliación en asociaciones cívicas tiende a estar significativamente correlacionada a la democracia. Los resultados de Inglehart han sido comentados y extendidos por Norris (1999) y Newton (1999). Newton examina la relación entre confianza social y confianza política y pregunta si las teorías de capital social pueden ayudar a comprender el declive de la confianza política en democracias establecidas. Utilizando datos del Eurobarómetro, Newton concluye que no existen correlaciones significativas entre confianza social y política, ni entre participación cívica y actitudes políticas. La confianza social, sugiere Newton, tiende a estar asociada, no a la afiliación a asociaciones cívicas, sino al logro educativo, nivel de ingresos y clase social. Norris (1999) analiza la pregunta más amplia sobre cómo se relacionan confianza social y política con el apoyo a los ideales e instituciones democráticas. Sugiere que la era de post-guerra fría ha llevado al surgimiento de “ciudadanos críticos”, desconfiados del rendimiento de los actores e instituciones democráticas, pero simpatizantes de la democracia como ideal.

VOZ, DESARROLLO Y CAPITAL SOCIAL

Los temas de voz y participación ciudadana están de moda entre reformistas y agencias de desarrollo. Los enfoques participativos se han nutrido de redes sociales preexistentes y normas de reciprocidad que a menudo hacen posible la acción colectiva entre organizaciones populares. La distinción hecha por Albert Hirschman entre “voz”, “salida” y “lealtad”, ha tomado fuerza en el campo de evaluación y el análisis del impacto de la participación ciudadana sobre rendimientos institucionales en proyectos de desarrollo (Paul 1994; Picciotto 1997; Picciotto y Wiesner 1998). Trabajos empíricos recientes sobre capital social

y participación han analizado instancias público-privadas de cooperación en la provisión de servicios públicos y sociales. Narayan (1995) analiza la participación ciudadana en 121 proyectos rurales de agua potable en 49 países en desarrollo. Encuentra una positiva correlación entre participación ciudadana y efectividad del proyecto y también entre capacidades organizativas y participación exitosa (Hisham, Narayan y Pritchett 1995). Una revisión más reciente de proyectos de agua potable y saneamiento básico apoya las conclusiones de Narayan y las extiende al análisis de proyectos de coproducción de servicios a nivel local (Kahakonen 1999; Hisham y Kahakonen 1998).

Evans (1996) hace una revisión cualitativa de capital social en Brasil, México, India, Nepal y Taiwan. Él enfatiza la dinámica complementaria entre iniciativas estatales y capacidades sociales. El capital social en este contexto es un determinante, entre muchos, de una exitosa acción colectiva. Si bien el capital social pareciera estar omnipresente entre las organizaciones populares, ¿cómo explicar entonces la marcada divergencia de trayectoria entre unas organizaciones y otras? Evans considera que la respuesta se encuentra en la estructura de instituciones públicas y el contexto político que envuelve a los actores populares. Tandler (1997) profundiza sobre esta perspectiva en el contexto de relaciones intergubernamentales en el noreste del Brasil. El paradigma de “descentralización y participación” utilizado por las agencias de desarrollo, argumenta Tandler, suelen hacer caso omiso de la naturaleza conflictiva y disputada de la participación política. Tandler sugiere reemplazar el modelo dual de descentralización y participación por otro más dinámico que integra iniciativas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y de contactos horizontales entre actores políticos.

¿UNO O MUCHOS CAPITALES SOCIALES?

La literatura de capital social confronta un dilema recurrente. La proliferación de definiciones alternativas de capital social, que intentan maximizar la aplicabilidad conceptual, se contraponen a la necesidad de profundizar en el poder explicativo de cada una, lo que aumenta así su poder explicativo. Al jalar en ambas direcciones, el peligro de sobreextensión conceptual, el intentar explicar mucho con poco, se hace patente. Cinco aspectos de sobreextensión conceptual de particular interés en el caso de literatura de capital social, tomadas en conjunto, cuestionan si el debate sobre “uno o muchos capitales sociales” tiene sentido.

ABSTRACCIÓN

El primer problema tiene que ver con el nivel de abstracción utilizado en trabajos teóricos y empíricos. La combinación de ideas abstractas y concretas bajo un mismo rótulo lleva a un desarrollo confuso del concepto. Como lo plantea Giovanni Sartori, la relación entre precisión conceptual y el número de casos a los cuales puede ser aplicado se entiende en función de una “escalera de abstracción” (Sartori, 1970). La escalera de Sartori sugiere la existencia de múltiples niveles de generalidad para cada concepto de ciencia social (ver Collier y Mahon 1993). Los conceptos de capital social utilizados por Coleman, Putnam y Fukuyama, se acomodan en los escalones más altos de la escalera, porque contienen numerosos subtipos de capital social incluyendo, “normas”, “redes” y “confianza” social. Bajando la escalera, encontramos aplicaciones más concretas como “garantías mutuas” o mecanismos de “riesgo compartido” para el microcrédito. Más abajo aún están instancias particulares de garantías y riesgos como ser *pasanakus* sujetos a normas locales y altamente contextuales de entendi-

miento. Si bien los *pasanakus*, las “garantías mutuas” y la “confianza” están claramente interrelacionadas. Juntarlas bajo una misma definición incluye la posibilidad de ganar poder explicatorio subiendo o bajando la escalera de abstracción, notando relaciones jerárquicas y características compartidas. Lo que hace falta es utilizar el concepto de capital social “con todo el abecedario” y no tan sólo con las “vocales” o “consonantes”. La tarea de conectar puntos entre diversos niveles de abstracción requiere de un mapa conceptual más amplio, que traduzca los paradigmas y subparadigmas económicos, sociológicos o políticos con más fluidez.

AGREGACIÓN

Cuando pasamos de la teoría a la práctica nos encontramos con problemas recurrentes de agregación. Individuos, hogares, comunidades, regiones, naciones e incluso continentes son depositarios del capital social. Para cada nivel de abstracción se pueden tomar varias mediciones empíricas de capital social, sin que éstas sean necesariamente “agregables”. Como lo notan Tarrow (1996), Woolcock (1998) y otros, la confianza intensa que sienten miembros de una “familia de la mafia”, no se traduce necesariamente a un mayor nivel de “confianza extra-familiar”. Si el capital social no es aditivo, como argumentan Portes y Landolt (1996) y Portes (1998), extrapolar del nivel familiar al comunal o nacional no tiene sentido. Si el capital social es poco aditivo, como sugieren Ostrom (1994) y Boix y Posner (1996), entonces el mover de un nivel de agregación a otro, requiere de un análisis más contextual que explique cada problema de coordinación o cooperación en su medio. El derroche de confianza que cultivan participantes de un *pasanaku* no tiene por qué traducirse en una cultura política más solidaria, o en una democracia más incluyente.

CONTINUIDAD

Un tercer problema surge de la acumulación de capital social a través del tiempo. Elinor Ostrom (1997) argumenta que el capital social se “deprecia con el desuso”. A diferencia del capital humano o físico que se deprecian con el tiempo, Ostrom sugiere que el capital social se extiende y acumula cada vez que hacemos uso de las redes sociales. Esta “discontinuidad” pone en tela de juicio si efectivamente se gana algo al llamarlo “capital”. Si bien el debate semántico no es terriblemente importante, sí lo son las implicaciones prácticas. Si el capital social no es “acumulable” y requiere más bien de la práctica discontinua de estrechamiento de lazos sociales, disminuye dramáticamente su aplicabilidad a niveles altos de abstracción y agregación (qué sentido tiene decir que Japón es un país de “alta dotación” de capital social, si más útil es saber quiénes lo usan y para qué). Quizás la contingencia de la producción de capital social favorece, entonces, el análisis de instancias más concretas de normas, redes y acción cívica. La discontinuidad también tiene implicaciones intertemporales: ¿se puede “prender” y “apagar” el capital social en el tiempo?

MANIPULABILIDAD

¿Cuán manipulable es el capital social? Si las normas de reciprocidad y redes sociales que producen capital social, dependen, a su vez de procesos largos de incubación, décadas y siglos según Putnam y Fukuyama, ¿qué puede hacer la política pública hoy? En cambio, si el capital social puede ser inducido a través de intervenciones de política pública y sostenido a través de relaciones de sinergia entre el Estado y la sociedad, como sostienen Evans (1996), Fox (1996) y Woolcock (1998), el ámbito de acción estatal crece. Las concepciones de alta manipulabilidad suelen ir acompañados por una preferencia

metodológica que privilegia la endogenidad estado/capital social. Concepciones de baja manipulabilidad tienden a hacer separaciones más rígidas entre “Estado” y “sociedad”. El uso de prefijos como capital social “-gubernamental” o “cívico” (Collier 1998 y Knack 1999) privilegian la segunda concepción. También lo hacen contrastes entre fuentes “étnicas” o “no-étnicas” de acción colectiva y cohesión social (Hardin 1995; Varshney 1998; Bates 1999). El debate sobre manipulabilidad suele ser uno de los puntos más contenciosos entre proponentes y detractores del capital social.

PROBLEMAS NORMATIVOS

Los analistas de capital social tienden a diferenciar entre capital social “bueno” (amigos que se ayudan) y capital social “malo” (amigos que se ayudan para formar una mafia). A diferencia de muchos otros conceptos de ciencia social que tienen connotaciones normativas, las justificaciones usadas para diferenciar el capital social “bueno” del “malo” tienden a ser parte de la definición del concepto. Como lo notan Portes (1998) y Woolcock (1998), cuando el capital social bueno (cohesión social) se vuelve malo (familismo mafioso), la fuente del problema es el capital social mismo, un “exceso de confianza”. Desde el punto de vista empírico, la bondad o maldad del capital social tiene particulares consecuencias cuando se agregan niveles de análisis sin referentes contextuales. Las agregaciones nacionales de confianza y otros componentes de capital social suelen presuponer que “más es mejor”, pero al desagregar los componentes vemos que la agregación depende de conocimientos locales, a veces idiosincráticos, del uso de capital social.

CONCLUSIONES

Una década después de la publicación de *Foundations of Social Theory* de James Coleman,

la literatura de capital social sigue provocando más preguntas que respuestas a académicos y políticos. Parte del problema ha sido disciplinario. Economistas, sociólogos, politólogos y otros han peleado por colonizar atributos del capital social desde sus respectivos paradigmas de análisis. El paso de una disciplina a otras condujo a un afán explosivo por “precisar” una definición en cada disciplina, llegando incluso a subdefiniciones dentro de cada una. La otra parte del problema, sin embargo, se explica por el *boom* político del capital social, que lo arrancó de las torres de academia y devolvió a las agendas de las agencias internacionales de desarrollo en cosa de meses. El paso de la teoría a la práctica, condujo al “estiramiento” conceptual, a la sobreutilización de la idea para aplicarlo en variadas intervenciones de política pública.

Ambas urgencias, la de “precisar” y “estirar” el concepto, precipitaron la torre de babel que caracteriza hoy el debate sobre capital social. Más que una idea original, el capital social se yergue como un concepto paraguas de alta abstracción. Incluye no sólo subconceptos, sino vocabularios enteros (neoinstitucionalistas, post-estructuralistas, y racionalistas, entre otros). Pocos analistas intentan conectar los puntos entre uno y otro paradigma o entre diferentes niveles de abstracción, pero a muchos les tienta apropiarse de la idea para su uso sintético.

Una de las tendencias más interesantes de la literatura reciente de capital social es la de trascenderse a sí misma. Narayan (1999), Woolcock (1998) y el Banco Mundial (2000) ya no hablan de capital social a secas, sino de capital social “que eslabona” horizontalmente, entre organizaciones sociales, y capital social “que vincula” verticalmente con el Estado, las ONG o la Iglesia. Lo que interesa son los efectos y las consecuencias de juntar redes y no el análisis de las redes en sí. Es probable que a estas alturas ya no

debiera hablarse de capital social, sino de relaciones políticas y sociales extendidas. El efecto ulterior de la “proliferación de capitales sociales” quizá sea su insalvable disgregación. Como lo anota Alejandro Portes, la utilidad del concepto de capital social no radica necesariamente en su originalidad y precisión, sino más bien en la ambigüedad y el sincretismo que observamos en sus múltiples usos interdisciplinarios.

BIBLIOGRAFIA

Baron, James y Hannon, Michael, 1994, *The Impact of Economics on Contemporary Sociology*, Revista de Literatura económica, Volumen 32, pp. 1111-1146.

Bates, Robert, 1999, *Ethnicity, Capital Formation and Conflict*. Social Capital Initiative Working Paper No. 12, Washington, D.C., Banco Mundial.

Boix, Carles y Posner, Daniel, 1996, *Making Social Capital Work: A Review of Robert Putnam's Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Centro de Asuntos Internacionales, Cambridge, Universidad de Harvard.

Brunetti, Aymo, Kisunko, Gregory y Weder, Beatrice, 1997, *Credibility of Rules and Economic Growth*, Policy Research Working Paper 1760, Washington, D.C., Banco Mundial.

Chong, Alberto y Calderón, César, 1997, *On the Causality and Feedback Between Institutional Measures and Economic Growth*, Mimeo, Washington, D.C., Banco Mundial.

Coleman, James, 1990, *Foundations of Social Theory*, Cambridge, Universidad de Harvard.

----- 1988, *Social Capital in the Creation of Human Capital*, Revista americana de Sociología, 94.

Collier, David, y Mahon, James, 1993, *Conceptual 'Stretching' Revisited: Adapting Categories in Comparative Analysis*, Revista americana de Ciencia política, No. 87.

Collier, Paul, 1998, *Social Capital and Poverty*, Social Capital Initiative Working Paper No. 4, Washington, D.C., Banco Mundial.

Evans, Peter, 1996, *Government Action, Social Capital and Development: Reviewing the Evidence on Synergy*, World Development, Vol. 24, No. 6, pp. 1119-1132.

Dasgupta, Partha, 1997, *Social Capital and Economic Performance*, Mimeo, Environmentally and Socially Sustainable Development Network, Washington, D.C., Banco Mundial.

Easterly, William y Levine, Ross, 1997, *Africa's Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions*. Quarterly Journal of Economics, 112(4), noviembre 1997, pp. 1203-1250.

Fox, Jonathan, 1996, *How Does Civil Society Thicken? The Political Construction of Social Capital in Rural Mexico*, World Development, Vol. 24, No. 6, pp. 1089-1103.

Fukuyama, Francis, 1999, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*, Londres, Profile Books.

_____, 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*, Nueva York, The Free Press.

Goldberg, Ellis, 1996, *Thinking About How Democracy Works*, Política y Sociedad, Vol. 24, No. 1, pp. 7-18.

Granovetter, Mark, 1985, *Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness*, American Journal of Sociology, Volume 91, número 1, pp. 481-510.

Grootaert, Cristiaan, 1998, *Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indonesia*. Policy Research Working Paper 2148, Washington, D.C., Banco Mundial.

Hardin, Russell, 1995, *One for All: The Logic of Group Conflict*, Princeton, Universidad de Princeton Press.

Helliwell, John and Robert Putnam, 1995, *Economic Growth and Social Capital in Italy*, Eastern Economic Journal, Volume 21, pp. 295-307.

Inglehart, Ronald, 1997, *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies*, Princeton, Universidad de Princeton.

_____. 1990, *Culture Shift in Advanced Industrial Society*, Princeton, Universidad de Princeton.

Isham, Jonathan y Kahkonen, Satu, 1998, *Improving the Delivery of Water and Sanitation: A Model of Coproduction of Infrastructure Services*, IRIS Working Paper Series No. 210.

Isham, Jonathan, Narayan, Deepa y Pritchett, Lant, 1995, *Does Participation Improve Performance? Establishing Causality with Subjective Data*, Revista de Economía del Banco Mundial 9(2): pp. 175-200.

Jain, Paul, 1996, *Managing Credit for the Rural Poor: Lessons from the Grameen Bank*, World Development, Vol. 24, No. 1, pp. 79-89.

Kahkonen, Satu, 1999, *Does Social Capital Matter in Water and Sanitation Delivery?: A Review of the Literature*, Social Capital Initiative Working Paper No. 9, Washington, D.C., Banco Mundial.

Keefe, Philip and Stephen Knack, 1997, *Does Social Capital have an Economic Pay-Off? A Cross Country Investigation*. *Quarterly Journal of Economics*, 112 (4) noviembre 1997, pp. 1251-1288.

Knack, Stephen, 1999, *Social Capital, Growth and Poverty: A Survey of Cross Country Evidence* Social Capital Initiative Working Paper No. 7, Washington D.C., Banco Mundial.

La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, Florencio, Schleifer, Andrei, W. Vishny, Robert, 1997, *Trust in Very Large Organizations*, American Economic Review Papers and Proceedings, 82, pp. 333-338.

Levi, Margaret, 1996, *Social and Unsocial Capital: A Review Essay of Robert Putnam's Making Democracy Work*, *Política y Sociedad*, Vol. 24, No. 1., pp. 45-55.

Matin, Ian 1998, *Rapid Credit Deepening and the Joint Liability Credit Contract: A Study of Grameen Bank Borrowers in Madhupur*, Doctoral Dissertation, Universidad de Sussex.

Morduch, Jonathan, 1998, *The Microfinance Schism*, Development Discussion Series Paper No. 626, Cambridge, HIID.

Mauro, Paolo, 1995, *Corruption and Growth*, *Quarterly Journal of Economics*, 110, pp. 681-712.

Narayan, Deepa, 1999, *Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty*. Policy Research Working Paper 2167, Washington, D.C., Banco Mundial.

Narayan, Deepa y Pritchett, Lant, 1997, *Cents and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania*, Policy Research Working Paper 1796, Washington, D.C., Banco Mundial.

Narayan, Deepa, 1995, *The Contribution of People's Participation: Evidence from 121 Rural Water Supply Projects*. Environmentally Sustainable Development Occasional Paper Series No. 1, Washington, D.C., Banco Mundial.

Newton, Kenneth, 1999, *Social and Political Trust in Established Democracies*, in Norris, Pippa (ed.), 1999. *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government*, Oxford, Oxford University Press, pp. 169-187.

Norris, Pippa (ed.), 1999, *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government*, Oxford, Universidad de Oxford.

Ostrom, Elinor, 1997, *Investing in Capital, Institutions and Incentives*, In Clague, Christopher (ed.), *Institutions and Economic Development: Growth and Governance in Less-Developed and Post-Socialist Countries*, Baltimore, Universidad Johns Hopkins, pp. 153-181.

_____. 1994, *Constituting Social Capital and Collective Action*. *Journal of Theoretical Politics* 6(4): pp. 527-562.

Paul, Samuel 1994, *Does Voice Matter? For Public Accountability, Yes*. World Bank Policy Research Paper 1388, Washington, D.C., Banco Mundial.

Picciotto, Robert y Eduardo Wiesner, 1998. *Evaluation and Development: The Institutional Dimension*, London, Transaction Books.

Picciotto, Robert, 1997, *Putting Institutional*

Economics to Work: From Participation to Governance, en Christopher Clague, 1997, Institutions and Economic Development: Growth and Governance en Less-Developed and Post-Socialist Countries, Baltimore y Londres, Universidad Johns Hopkins, pp. 343-367.

Portes, Alejandro, 1998, *Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology*. Revista anual de Sociología, 1998 Vol. 24, pp. 1-24.

Portes, Alejandro y Patricia Landolt, 1996, *The Downside of Social Capital*, American Prospect 26: pp. 18-22.

Putnam, Robert, 2000, *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Boston, Simon & Schuster.

_____. 1995, *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*. Journal of Democracy, Vol. 6, No. 2.

_____. 1993, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, Universidad de Princeton.

Sartori, Giovanni, 1970, *Concept Misformation in Comparative Politics*, American Political Science Review. No. 64.

Tarrow, Sidney, 1996, *Making Social Science Work Across Space and Time: A Critical Reflection on Robert Putnam's Making Democracy Work*, American Political Science Review No. 90, pp. 389-397.

Tendler, Judith, 1997, *Good Government in the Tropics*, Baltimore, Universidad Johns Hopkins.

Tendler, Judith y Sara Freedheim, 1994, *Trust in a Rent-Seeking World: Health and Government Transformed in Northeastern Brazil*, World Development, Vol. 22, No. 12, pp. 1771-1791.

Van Bastelaer, Thierry 1999, *Does Social Capital Facilitate the Poor's Access to Credit?: A Review of the Microeconomic Literature*, Social Capital Initiative Working Paper No. 8. Washington, D.C., Banco Mundial.

Varshney, Ashutosh, 1998, *Ethnic Conflict and Structure of Civic Life*, presented at American Political Science Association Annual Meeting, Boston, septiembre 1998.

Whitehead, Laurence, 1997, *Bowling in the Bronx: The Uncivil Interstices between Civil and Political Society*, Democratization, Volumen 4, número 1, pp. 94-114.

Whitehead, Laurence y George Gray-Molina, 2000, *Political Capabilities over the Long Run*, in Houtzager, Peter y James Putzel (2000), *Changing Paths: The Short and Long Term Politics of Poverty Alleviation*, Sussex, IDS.

Woolcock, Michael 1998, *Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework*, Teoría y Sociedad 27: pp. 151-208.

World Bank, 2000, *Attacking Poverty: World Development Report 2000/1* (preliminary draft), Washington, D.C., Banco Mundial.

Zak, Paul y Knack, Stephen, 1998, *Trust and Growth*, IRIS Center Working Paper No.219, Universidad de Maryland.

Lorgio Vaca. Cristo viene del trigo



Naciones en movimiento

Fernando Calderón

Un diálogo con Wilfredo Lozano, secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que parte de las realidades campesinas en América Latina y concluye con el creciente poder de los migrantes caribeños en sus sociedades de origen y de destino.

La presente entrevista es con el sociólogo Wilfredo Lozano en San José, Costa Rica. Su tema central es la trayectoria intelectual de Wilfredo, en las que se destacan sus vinculaciones y afinidades intelectuales, su visión de América Latina y el Caribe, de sus grandes problemas y el perfil cultural en un mundo paradójicamente envuelto en las tensiones que provocan los procesos y tendencias globalizadoras, atravesadas por la explosión de corrientes y fuerzas culturales y políticas que acentúan los particularismos y la presencia de la cultura latinoamericana en la pluralidad de sus escenarios nacionales. Wilfredo se detiene sobre todo en el campesinado y el porvenir de los pueblos caribeños en ese mundo en cambio y destaca el lugar que las migraciones internacionales juegan y jugarán en la construcción de su futuro.

Fernando Calderón (FC): Wilfredo, tú has trabajado diversos temas y problemáticas caribeñas como las migraciones, las relaciones la-

borales, los problemas del desarrollo, el cambio político y las relaciones internacionales. Tus vinculaciones con autores como Alejandro Portes, Bryan Roberts y Orlandina de Oliveira te colocan como un académico de un perfil regional. Por otro lado, tu trayectoria política te ha llevado desde la militancia de izquierda, tu colaboración con Peña Gómez y tus relaciones con Milagros Ortiz Bosch y el PRD de la República Dominicana, hasta ocupar hoy una posición académica de alcance latinoamericano como Secretario General de FLACSO. Todo esto señala un perfil biográfico interesante como académico y hombre público. Entiendo que entre tus trabajos y preocupaciones iniciales figura el tema campesino. Podrías decirme, para comenzar, ¿cómo aprecias hoy el lugar que ocupa el campesinado en la América Latina en las puertas de un nuevo siglo y próximo milenio?

Wilfredo Lozano (WL): Con los campesinos ocurre lo que acontece con los países atrasados o

subdesarrollados: su destino casi siempre se decide fuera. Por lo general fuerzas ajenas a su entorno presionan para precipitar los grandes cambios que finalmente los campesinos motorizan. Esta es una vieja idea que atraviesa los estudios clásicos, desde Barrington Moore a Manuel Castells. Pues bien, partiendo de este escenario es entendible que de alguna manera cualquier latinoamericanista que se respete, en algún momento de su vida intelectual, ha tenido que toparse con el mundo campesino, pero también, si aborda en serio el asunto campesino y agrario, se ha visto forzado a salir de la agricultura e ir a las ciudades para comprender precisamente la tragedia campesina.

De alguna forma yo soy un ejemplo de esos dilemas. Si de alguna manera el drama campesino es el drama de la América Latina, comprender al campesinado es comprender a América Latina más allá de su contexto agrario. Pero también comprender ese contexto agrario, obliga a una reflexión sobre la América Latina toda. En esa línea de reflexión diría que hay al menos dos cuestiones que debemos atender. En primer lugar la acelerada urbanización que ha caracterizado a nuestro continente desde los años de entreguerras. Naturalmente, este fenómeno es parte de un proceso mundial, pero en América Latina dicho proceso ha sido particularmente más acentuado. En los años 60 asistimos a una América Latina campesina, 30 años después, en los 90, asistimos a un escenario latinoamericano básicamente urbano. Esa gran transformación no sólo modificó el escenario rural y cambió la dinámica de los mercados laborales, sino que modificó, a su vez, los espacios culturales urbanos y transformó radicalmente la práctica de la política. Todavía hoy creo que no hemos asumido en su justa dimensión las implicaciones de esta revolución social. Lo que ahora me interesa destacar es que pese a esta transformación el campesinado mantiene presencia

e importancia política. Naturalmente, no es la misma que hace 40 años, y las situaciones varían de acuerdo a cada espacio nacional, pero el campesinado continúa ahí. Obviamente, en la perspectiva del conjunto de países subdesarrollados, en África la presencia del campesinado es masiva, importante en el sudeste de Asia, en China y en la India. En esas regiones, los campesinos continúan ejerciendo una fuerte influencia en la vida política. En América Latina la escena política se decide esencialmente en las ciudades, pero aún así, pese a la gran transformación que apunté, en nuestra región los campesinos mantienen su peso específico. Pensemos en los sin tierra de Brasil, los campesinos de Chiapas y el sur pobre de México, los campesinos y comunidades indígenas andinos y guatemaltecos, que hoy por hoy son actores importantes del proceso de globalización que vive el continente. Definitivamente, los campesinos son más importantes que lo que nuestros lentes urbanos desean demostrar o creerse.

FC: Me parece que estás tocando un tema importante. Pero no entiendo qué es lo que estás diciendo. ¿Estás diciendo que el campesino pese a que no es la fuerza que acompaña a la modernización, la sobrevive?

WL: La dirección de mi argumento es la siguiente: por un lado, asistimos a un acelerado proceso de modernización, uno de cuyos rasgos claves es la creciente urbanización. Esto conduce, tema clásico en la literatura sobre el desarrollo, a una sistemática pérdida de poder del mundo rural en relación al urbano. Pero ello no implica que la modernidad condena al silencio a los trabajadores del agro, específicamente a los campesinos.

¿Hasta qué punto la modernidad puede pensar al campesinado como una fuerza actuante dentro de la lógica que le es propia, esto es, den-

tro de la lógica de secularización, mercantilización y cambio democrático que le ha acompañado? (Como observarás, al afirmar esto último tengo de referente a Habermas).

En otras palabras, ¿hasta qué punto la modernidad puede pensar al campesinado como un elemento que la constituya, como un actor participante de su construcción y no como su negador? Tanto las ideas originales de Marx, la Segunda y Tercera Internacional, como la propia teoría de la modernización (recuerda el continuun folk-urbano de Foster o las tesis de Parsons respecto a la tensión entre particularismo y universalismo en sus famosas variables patrón), asumían al campesinado como el remedo del ayer que la modernidad superaría. Su sucesor o sustituto era más difuso, pero señalaba lo mismo. En el marxismo, la clase obrera era el espacio de reconstitución del campesinado, visto ahora con su nuevo ropaje urbano. La teoría de la modernización pregona los valores universales (el mercado, la fábrica o la tecnología industrial) como aquellos que los campesinos debían asumir para hacerse precisamente modernos. Hoy, a casi un siglo de un revolucionario proceso de urbanización y de penetración de la modernidad en las estructuras socio culturales y políticas de nuestro continente, venimos a reconocer que pese a la pérdida de terreno de ese campesinado en el espacio político y societal, de alguna manera mantiene una presencia. Si es así, ese prolongado lapso histórico permite reconocer, aún cuando pensemos al campesinado como un grupo no esencial para el porvenir de la modernidad, que al menos aquí sí lo es para asumir el perfil propio del continente en un mundo global, heterogéneo y profundamente desigual e injusto. De esta forma el campesinado no representa un impasse de la modernidad en su proceso de afirmación en nuestra América. Nuestra historia reciente nos obliga a reconocerlo no como una clase destinada a su des-

aparición casi por orden natural del proceso evolutivo de la historia, o a su permanencia, como lo planteó el debate interminable entre campesinistas y descampesinistas. Más allá de esta aporía (real o construida), el campesinado debe ser pensado en su presencia actuante para poder reconocer las posibilidades de la modernidad latinoamericana. De lo contrario, estaríamos manteniendo la vieja lectura eurocentrista que pretende leer en su rasero histórico, el espejo de nuestro propio porvenir.

FC: Aquí hay una pregunta de cajón. Yo veo a Chiapas como una lógica campesina, respecto al Tratado de Libre Comercio, ¿cómo interpretas eso?

WL: De alguna manera pudiéramos ver a Chiapas como una toma de posición política, precisamente de ese campesinado, ante un mundo que lo excluye. Esa es una lectura legítima, pero incompleta, puesto que también esa, la historia de los campesinos chiapanecos, es la historia de México.

FC: Con esto me estás diciendo que es viable imaginarse una voz campesina en contextos más fuertes de modernización.

WL: Yo pienso que en Chiapas, de alguna forma, hasta los métodos políticos revelan cierta capacidad de las minorías étnicas, de los grupos campesinos, para asumir valores modernos, hasta modernistas, en el sentido dado por Marshall Bergman a este término. Pero lo más importante es que, independientemente de su destino final, en Chiapas asistimos al despliegue de un movimiento social inserto en la dinámica misma de la modernidad en su cara excluida, lo que podría estar indicando una de las modalidades de expresión histórica de los oprimidos de la tierra en el siglo XXI.

FC: Probablemente la consecuencia más significativa de los sucesos de transformación campesina son los migrantes. Esa es el tema central en América Latina y en el Caribe, en República Dominicana, en Bolivia, en toda Centroamérica. Tú has estudiado temas de migraciones caribeñas asociadas con procesos de transformación más amplios, junto a autores como Alejandro Portes. ¿Cómo entiendes hoy en día el funcionamiento de la identidad cultural de los migrantes en este mundo transnacionalizado, particularmente el de los dominicanos, sea en Nueva York o en Puerto Rico?

WL: En materia de migrantes yo establecería una diferencia (clásica) entre migraciones internas e internacionales. La diferencia es importante, porque las primeras se verifican en un espacio nacional, que implica el dominio homogéneo de un Estado sobre sus ciudadanos, mientras las segundas se desplazan como mínimo entre dos estados naciones, lo que trae consigo un desplazamiento de las esferas de control estatal sobre los ciudadanos: en este caso, en su polo de expulsión los migrantes son realmente ciudadanos, en su polo de recepción o no lo son (los ilegales), o si lo son, tienen problemas para alcanzar la ciudadanía.

De esta forma, mientras por lo general se asume a las migraciones internas por sus consecuencias socioeconómicas en el plano laboral, de demanda de servicios en las ciudades, etc., las migraciones internacionales remiten por definición a las variables políticas. En el fondo, unas como las otras se mueven en ambos niveles, el socioeconómico y el político.

Esto es tan claro que si nos colocamos en una perspectiva más allá de la lógica propiamente socioeconómica o demográfica que explica los movimientos poblacionales de campesinos de áreas rurales a urbanas. Es fácil reconocer cómo

los migrantes han transformado no sólo el uso del espacio urbano, la dotación de servicios en las ciudades y los mercados de trabajo, sino también la propia cultura urbana y, sobre todo, la vida política.

De alguna forma la migración no es sólo una respuesta a la carencia económica del mundo rural por parte del campesinado, también representa una respuesta política de los grupos rurales, a las instituciones políticas que dirigen y controlan el proceso y los frutos de la modernización y el desarrollo.

A diferencia de Inglaterra, de Europa en general y de los Estados Unidos, en América Latina la industrialización no fue precedida por la modernización del campo, de modo que el campesinado no tuvo más alternativa para su inserción en el proceso modernizador que abrirse paso en las ciudades, como marginales, trabajadores eventuales e informales. No fueron integrados como obreros industriales al aparato capitalista en expansión, sino excluidos del mismo como sujetos económicos informales. De modo que su vinculación al desarrollo se hizo de forma marginal, generando no sólo una gran desigualdad, sino exclusión social masiva.

Hay un libro clásico de Bryan Roberts, *Ciudades de Campesinos*, cuyo título lo dice todo. No podemos comprender la ciudad latinoamericana sin ese peso socio-cultural campesino. Pero esto, a su vez tiene un correlato político, de ahí surge gran parte del éxito de los movimientos nacionales populares, el populismo como esquema de movilización política, pero el punto a donde voy es a que más allá de cualquier otra consideración, pienso que ahí hay una formidable respuesta política del campesinado, frente a la excluyente modernización latinoamericana de los años 30 a nuestros días. Es una hipótesis quizás demasiado generalizadora, pero es un punto que a mi manera de ver es fundamental para enten-

der gran parte el sentido político incluso de movimientos sociales aparentemente territoriales, por ejemplo el barrio, o de movimientos sociales de limitaciones muy sectoriales.

El segundo aspecto tiene que ver con la migración internacional. No podemos ver la migración como una situación, sino como un proceso. En consecuencia, dicho proceso establece momentos diferenciales que deben ser observados en su especificidad en cada caso, de forma que los momentos antecedentes influyen sobre los subsiguientes, pero no los determinan de manera mecánica ni unilateral. Por ejemplo, en el caso dominicano, es en los años 60 en que comienza la gran migración a Estados Unidos. Ésta se hace masiva a partir de un acontecimiento no económico, sino político: la intervención norteamericana en Santo Domingo durante la Revolución Constitucionalista de 1965. La respuesta norteamericana a la explosividad de esta crisis pasó por la apertura de la válvula de escape de la emigración, sobre todo a ciertos bolsones de campesinos blancos, que por lo menos desde el punto de vista étnico eran más fácilmente movilizables en favor de los Estados Unidos, pero también porque desde el punto de vista económico tenían mayor capacidad para financiar la emigración. Estos eran campesinos medios, incluso campesinos ricos. El primer momento de la migración dominicana, lo determinó la necesidad del control político, centrado en el juego geopolítico regional. Por otro lado, al movilizar a grupos de campesinos con una cierta estabilidad de ingresos o por lo menos con mayor capacidad de financiamiento, esta migración focalizaba sus fuentes regionales no sólo en regiones campesinas potencialmente más ricas, o con más capacidad para financiar esta aventura, sino también óptimas para su adaptación racial en el contexto norteamericano. En un segundo momento, en la medida en que los campesinos dominicanos emi-

graban masivamente a las ciudades, a partir de los años 70, este cambio en el patrón migratorio interno gravitó a su vez en la migración internacional, pues desde finales de esta década, la migración a los Estados Unidos ya no sería en su mayoría de campesinos. Fueron los pobladores urbanos y las clases medias quienes la integraron. De esta forma, los años 70 en adelante socializaron en la vida urbana a los potenciales emigrantes campesinos a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo, la emigración misma como sistema de relaciones sociales en proceso de constitución influyó sobre la vida urbana, primero, y luego sobre el mundo campesino mismo, urbanizando con sus valores la vida rural. La vida del país en su conjunto comenzó a cambiar y se acercó a los patrones norteamericanos de las ciudades del Este de los EE UU.

FC: Pero ahí yo quisiera más bien hacer un pequeño paréntesis teórico acerca del significado político de los procesos descritos. Quiero puntualizar algo que es muy importante. La migración del haitiano hacia República Dominicana, las migraciones desde Puerto Rico hacia Estados Unidos especialmente a Nueva York, las migraciones internas en Centroamérica, de Nicaragua a Costa Rica, de Guatemala, El Salvador a Estados Unidos vía México y desde luego la migración mexicana a Estados Unidos.. Todo esto me coloca ante un tema político central de Centroamérica y el Caribe, lo que se plantea aquí es el tema de la identidad de los migrantes como ciudadanos y sujetos culturales. ¿Cómo pensarías ese tema estratégico para nosotros?

WL: Destacaría inicialmente dos cosas. La primera, que la migración como proceso en el curso de los últimos 30 años fue constituyendo un sistema (migratorio) que finalmente terminó auto reproduciéndose. A partir de esa capacidad

auto reproductiva de la migración internacional, una vez que se constituye como sistema, ya hay una lógica específica de la migración, que tiene un impacto político específico en la sociedad de origen y en la sociedad de recepción. Desde esta perspectiva, en el caso dominicano, para ponerlo de ejemplo, en torno a este sistema migratorio se constituye una comunidad transnacional que impacta económica, cultural y políticamente, en las sociedades de origen, porque para esa fecha (los años 80) hay migrantes con años de residencia, capacidad de articulación de sólidas redes sociales en los Estados Unidos y poder local y político en ciudades como Nueva York, Miami o Boston. Esta fuerza auto reproductiva de la migración, unida a la fuerza de las comunidades transnacionales, también dota a los migrantes de poder político en la sociedad emisora. En el caso dominicano, ese poder tiene muchas expresiones, locales y nacionales. Por lo pronto, define un importante poder político local. La inmigración de un millón de dominicanos ha generado una gran capacidad de los inmigrantes para ejercer influencia en la vida local de sus comunidades de origen. En República Dominicana hay municipios que construyen gran parte de sus obras de infraestructura por la vía de la comunidad transnacional y de la ayuda de sus miembros emigrados. Estas obras no las financia el ayuntamiento, ni el municipio, ni siquiera el gobierno central, las financian sus emigrados naturales. Este es un asunto importante, porque a partir de ahí la lógica política local repercute sobre la política nacional.

Otro caso es el financiamiento de las campañas políticas, porque los migrantes dominicanos en ciudades como Boston y Nueva York financian gran parte de las capacidades propagandísticas de los partidos políticos dominicanos al movilizar cientos de miles de dólares.

LO TRADICIONAL AMPARA LO MODERNO

FC: Eso me lleva a un tema muy importante, desde el punto de vista de la política, en el sentido de lo nacional como territorio, y de la política nacional. A su vez, esto conduce a una consideración teórica trabajada por varios autores en la actualidad. La migración en el modelo africano, respecto a Francia, significa una reproducción de las economías domésticas de origen, por lo tanto, para las sociedades en vías de desarrollo como las caribeñas, la migración tiene que ver con la reproducción social de las comunidades de origen. También puede hacerse una interpretación tipo Meillassoux en la cual lo que en realidad se constituye como sustantivo es una reproducción cultural deshistorizada, que sin embargo trasciende cualquier espacio nacional. En tercer lugar, hay una interpretación más que un modelo, que sostiene que en realidad lo que pasa es que también tenemos orígenes compartidos de condicionamiento cultural y ello obedece a gentes que no tienen territorio nacional y cultural, pero sí un espacio en la multiplicidad de las identidades postmodernas.

WL: Esta es una cuestión sumamente compleja. Una primera distinción surge a la vista, la emigración africana a la Francia de los años 80 y a la España contemporánea es distinta de la caribeña a los Estados Unidos. En primer lugar, hoy día quienes migran en el Caribe son personas socializadas en la vida urbana, aunque su pasado rural sea reciente, mientras quienes lo hacen desde el África a Europa son propiamente campesinos. Esto tiene que ver con las modalidades migratorias en cada caso, la dinámica de los sistemas migratorios, pero sobre todo con la naturaleza socioeconómica del origen: África continúa siendo un continente eminentemente campesino. En el caso de África, la aldea juega un

papel decisivo en la articulación societal del sistema migratorio, cosa que no ocurre en la América Latina. En esta última, es el poblador rural, o semi urbano, el que juega este papel. Pero lo decisivo es que este poblador está dominado, a diferencia de África, en su "lógica" reproductiva por la vida urbana. Por otro lado, las migraciones caribeñas se orientan hacia ciudades punta en la articulación de la economía mundial, como es el caso de Nueva York. Pero en ambos casos, el africano y el caribeño, es claro que estas migraciones se articulan a la reconstitución de la economía mundial, y el lugar que está pasando a desempeñar el mundo subdesarrollado en ese escenario global, sobre todo en las áreas cercanas y periféricas a las regiones (no a los países) más desarrolladas: la Cataluña, el hinterland parisino, el centro alemán, la costa este de los Estados Unidos, pongamos por caso.

Pero bueno, permíteme redondear la idea del entorno familiar y las migraciones. En el caso caribeño, la decisión de migrar se articula en un espacio familiar nuclear. Evidentemente, en esa decisión pueden intervenir e intervienen factores propios de la economía y situación económica nacional. Eso no se discute, más bien es una premisa de mi análisis.

Ahora bien, en esa decisión pueden influir elementos de la familia extensa aún cuando la decisión misma se produzca en el seno de la familia nuclear. Sin embargo, en la medida en que se articula un sistema migratorio, que funciona autorregulado, cada vez intervienen más en su sostenimiento elementos ajenos al núcleo familiar inicial y, en consecuencia, adquiere cada vez más poder la familia extensa. De ahí que para que la familia nuclear pueda sobrevivir como un agente activo de un sistema migratorio internacional, necesita apoyos que no sólo se encuentran en su núcleo familiar primario. Por ejemplo, si una familia dominicana decide enviar un miem-

bro a Estados Unidos y le financia el viaje, para sostenerlo en ese país, necesita un apoyo que no sea simplemente el que puede brindar el padre o la madre que se queda en la sociedad de origen. Se necesita por lo menos un primo o pariente cercano en el ámbito receptor. En la medida en que el sistema migratorio envejece, en que ya no simplemente supone inversiones, sino beneficios, los migrantes pasan a tener capacidad financiera mínima para enviar dinero a su país de origen destinado al ahorro o a la compra de un inmueble, y no ya sólo a apoyar económicamente a sus familiares en las tareas primarias. Para que esto se produzca, tiene que haber en el país de origen gente de confianza que puedan administrar esos bienes, y esto lo aporta la familia extensa, los abuelos, el tío viejo o el primo mayor. En consecuencia, ese momento articulador nuclear, familiar, tiene que ampliarse inevitablemente para poder sostener el sistema.

FC: La verdad es que encuentro esa hipótesis muy interesante, pero no quisiera detenerme tanto en estos procesos que nos has explicado ya en tus libros. Esto levanta un problema teórico central. Normalmente las teorías más comunes, marxistas, modernizantes, o incluso weberianas, suponen un elemento de la nacionalidad cuya figura cultural significa, en este caso, el paso de la familia extendida a la familia nuclear. Tú estás diciendo que para expandirse en la migración gracias a estos fenómenos históricos, la familia nuclear necesita reconstituir una familia extendida. Haciendo una extrapolación de todo eso, lo que estás diciendo en definitiva es que la urbanización y transnacionalización necesita apoyarse en los valores de la sociedad tradicional para afirmar la modernidad.

WL: Te soy franco, la verdad es que no lo había razonado de ese modo y tendré que pen-

sarlo con más calma, pero lo que sí puedo decirte es que asumir mecánicamente la idea del paso de lo tradicional a lo moderno como una regla universal de la historia, en lo que acontece con las instituciones sociales básicas que motorizan el cambio social, no sólo es reduccionista, sino que de nuevo nos conduce al eurocentrismo de la teoría social decimonónica. No puede suponerse que un esquema civilizatorio esté forzado a reproducir las pautas del origen en cada contexto sociohistórico en el que se reproduzca. De lo contrario, no comprenderíamos la permanencia de la familia tradicional japonesa envuelta en una profunda transformación de la sociedad y la economía de ese país o la permanencia del sistema de castas hindú en la democracia más grande del planeta. Los ejemplos sobran.

Veamos el asunto desde otro ángulo. Gran parte de la cultura popular dominicana y caribeña de hoy día se ha constituido fuera del espacio de las islas del Caribe, en Nueva York, Miami o Boston. Reconocer esto no quiere decir que entendamos que por ello se elimina lo que la teoría de la modernización llamaría valores tradicionales, o lo que el marxismo llamaría valores sociales precapitalistas. Por el contrario, muchas veces esa capacidad de articulación de un espacio societal transnacionalizado fortalece valoraciones en lógicas de relaciones sociales que en principio debiéramos, en términos teóricos, adjudicar a una lógica pre moderna o en una lógica distinta a las pautas culturales que se le atribuyen a la modernidad (pienso el Bell) o a la post modernidad, precisamente como condición misma de articulación de esa red.

FC: O sea, lo que tú me estás diciendo es que la pre modernidad tiene un gran futuro en la pos modernidad.

WL: No, lo que yo quiero decir es que la

modernidad tiene una gran capacidad de asimilación de valores que en una cierta teorización tradicional se concebían como antagónicos de la modernidad.

FC: A ver, dejemos eso ahí y coloquémonos nuevamente en el campo político. A mí me gusta más decir que lo pre moderno tiene un gran destino en lo post moderno. Veamos esto en código político. A mí me da la impresión de que esta discusión coloca como tema central de la política en el Caribe la transnacionalidad y las migraciones. Entiendo que has publicado un libro sobre cambio político en el Caribe, donde se aborda el tema de la migración, la cultura y la internacionalización de la política en países como Haití, Cuba y República Dominicana. ¿Cuál sería, entonces, a tu juicio, la importancia política del tema de la migración y la cultura en cada uno de éstos países, y cómo afectan el proceso de evolución democrático?

WL: Podemos atacar el problema por diversas rutas. La primera es que la migración simple y llana tiene un significativo peso demográfico en el Caribe: aproximadamente el 10 por ciento de la población caribeña reside en ciudades como Nueva York y Miami. A partir de este simple dato, la migración caribeña y las comunidades transnacionales que articula definen un importante problema geopolítico en el marco de la post guerra fría. De repente, pues, pero con una larga gestación histórica, la migración, que era un tema subsidiario en la guerra fría, pasa a ser un tema estratégico de la post guerra fría. La migración pasa así de ser simplemente un problema socioeconómico, poblacional, a ser un verdadero problema político en el ámbito regional, es decir, geopolítico. Pero también hay otro punto, la migración pasa a tener prioridad en la agenda de seguridad norteamericana, ya que a partir de lo

dicho, la población caribeña se constituye en una población que tiene cada vez más capacidad de presión en las políticas locales de los Estados Unidos. Hoy día, un dominicano es concejal de Nueva York, mañana los habrá entre los migrantes de origen jamaquino o haitiano. En ciudades como Los Angeles, la influencia mexicana es determinante en la vida política local. Todo esto obliga a la sociedad norteamericana a tomar en serio los problemas de la inmigración.

Esta situación, leída por el lado de la geopolítica, tiene al menos dos caras: la ya señalada respecto a sus implicaciones políticas internas para el país receptor, los Estados Unidos, y las económicas y sociales para el país emisor, y desde este punto de vista la emigración se ha convertido en uno de los ejes claves del actual modelo de inserción económica de esta región en el sistema mundial.

En segundo lugar, las redes económicas articuladas por los migrantes dominicanos (pongamos por caso) en Estados Unidos tienen una repercusión en su país de origen en niveles económicos como los inmuebles y las microempresas. Hay, pues, un poder local de la inmigración en la sociedad de origen, hay un poder financiero y societal en términos de imágenes colectivas. En los medios de comunicación, los Estados Unidos aparecen como la Meca que es la fuente del éxito y eso conlleva un reto político. De manera que la inmigración se convierte, para el Caribe por lo menos, en un elemento no sólo de la cotidianeidad, sino decisivo para el funcionamiento de su dinámica y lógica política.

FC: Me parece que hemos colocado temas que quieren zafarse más del plano de los hechos que de la teoría y en este sentido te quiero preguntar ¿qué autor, o autores te parecen más relevantes para entender ese tipo de fenómenos?

WL: Todo esto se ha trabajado más en los Estados Unidos que en el Caribe. Portes ha teorizado estos procesos, autoras como Grasmuck y Peasar, Guarnizo y Itshinon, han hecho importantes contribuciones empíricas. En fin, hay toda una amplia literatura sobre estos temas. Pero lo fundamental es preguntarse en torno a un asunto que dejé un poco inconcluso en una de mis respuestas y esto tiene que ver con la construcción de ciudadanía en nuestras sociedades transnacionalizadas. A partir del momento en que hablamos de una sociedad que ya no se agota en un solo estado o esfera nacional-estatal, la ciudadanía tiene que ser repensada a propósito de la articulación de varios estados. No tenemos reflexiones sistemáticas al respecto, pero es un asunto crucial. Si un dominicano o un haitiano común tiene un hijo en Nueva York, él vive en Miami y su madre vive en Puerto Príncipe, ¿cómo definimos a ese ciudadano?

NUEVA YORK SERÁ PETROGRADO

FC: Me parece que esto va a concluir en un tema muy interesante. Es curioso que un dominicano como tú, medio enamorado de los mexicanos, que vive en Costa Rica y al que le fascina Buenos Aires, casado con una dominicana medio japonesa, vaya a decir que el descuido de la ciudadanía es sólo un descuido universal. Es un tema político distinto al que creyeron los ámbitos de la liberación nacional.

WL: No, Fernando. En modo alguno. Yo razonaría el problema de esta manera: nuestras sociedades se están reconstituyendo a la luz de los procesos de globalización, pero también de la acelerada modernización de sus estructuras internas. No creo que hayamos apreciado todavía su alcance. Yo creo que se han verificado procesos de reconstitución societal y económica de una profundidad que quizás no evaluamos todavía con

precisión y claridad. De ahí en gran medida, la ambigüedad de las respuestas políticas que brindan nuestros dirigentes al final de la guerra fría y los nuevos problemas que esta nueva situación mundial plantea.

Sin embargo, al ver el comportamiento de los actores sociales reconocemos respuestas culturales dinámicas y bastante consecuentes con la nueva situación. Tal parece que la sociedad se le ha adelantado a sus dirigentes políticos. Ahora, si eso ocurre así, yo creo que tenemos que repensar no sólo las hipótesis con que hemos manejado nuestra interpretación de la sociedad, sino también nuestras herramientas. Me parece que quizás la teoría social occidental en sus lineamientos más clásicos y modernos tiene una serie de hoyos negros que tienen que ser cubiertos con nuevas teorizaciones que den cuenta de esos nuevos fenómenos. No basta con apelar a la vuelta a los clásicos, tenemos que producir la teoría consecuente con nuestra época, como clamaba Shakespeare en *El Rey Lear*. Europa ya no puede enseñarnos todo, tenemos la responsabilidad de aprender a redescubrimos.

Adonde voy, es a reconocer el hecho de que la transnacionalización redefine las agendas no sólo estatal-nacionales, sino que redimensiona el poder de lo local, por diferentes conductos que van desde el debilitamiento del Estado, el peso de los emigrados en sus comunidades de origen, hasta la articulación de redes o *hinterlands* económicos dominados por las empresas transnacionales donde el Estado (nacional) tiene poco poder o debe compartirlo. De esa forma se redefinen en la práctica diversas agendas: las tareas de la democratización, el tipo de ciudadanía funcional a la nueva era, y el nuevo poder de las culturas en sus dimensiones locales y nacionales.

De esta suerte, el dominicano que vive en Nueva York tiene evidentemente una realidad distinta a la que tenía cuando estaba en Repúbli-

ca Dominicana, pero no rompe su lazo emocional con ésta. Su lazo cultural con la comunidad de origen muchas veces lo fortalece en la medida en que tiene menos posibilidades de ser él mismo en la comunidad étnica donde opera y vive como migrante. De alguna manera construye una identidad propia de su condición. digamos neoyorquina, en una comunidad étnica por definición excluida. En muchos casos lejos de debilitar, esto termina fortaleciendo valores de su sociedad de origen, precisamente para poderse defender en la sociedad en la que inevitablemente se tiene que quedar y sabe que no va a abandonar. Esto representa una situación sociocultural interesante que tiene repercusiones políticas, porque está obligando a dos estados a pensar en una racionalidad política donde los sujetos concretos e individuales ya no van a obedecer sólo a una lógica que los reduzca a un espacio geopolítico nacional o estatal, determinado. Ese sujeto, como neoyorquino, tiene un interés en que determinados líderes de la ciudad alcancen el poder y al votar por ellos influye en la vida política de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, ese mismo sujeto mantiene lealtades locales y nacionales con su sociedad de origen e influye también sobre la política del país de donde procede, en el caso hipotético señalado, en la República Dominicana. En la medida en que la emigración aumenta, o el poder de la comunidad transnacional se multiplica, el poder político del emigrante se reproduce y crece. Pero hasta ahora nuestros políticos sólo piensan en la emigración como fuente de financiamiento de sus campañas y no como una nueva realidad ciudadana.

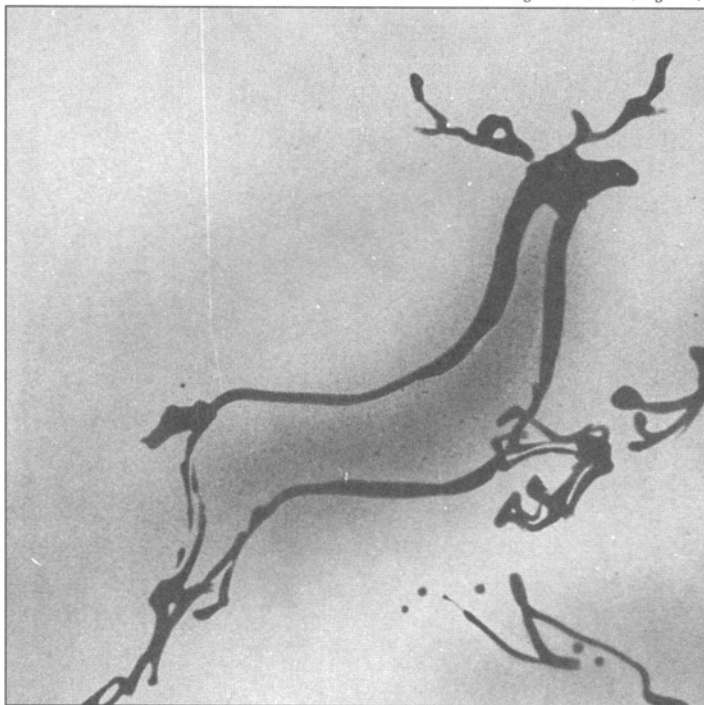
FC: Probablemente sí, pero lo que me estás diciendo es que la política moderna para el Caribe es post moderna.

WL: No me interesa mucho la adjetivación

de este proceso. Lo que sí creo es que la política caribeña es cada vez más global. Con el paso de los años asistiremos a un proceso de globalización política que obligará a los dirigentes nacionales a definir sus estrategias no sólo en función de situaciones y actores nacionales, sino de situaciones y actores regionales, locales y globales, donde lo propiamente nacional en muchos planos quedará subordinado a esas otras situaciones. En este escenario que estoy imaginando, ciudades como Nueva York constituyen algo así como el Petrogrado de la nueva clase trabajadora caribeña

en proceso de constitución. Cualquier estrategia de cambio que se diseñe en las islas caribeñas debe reconocer que lo que pase en el centro, atraviesa las estructuras internas de la periferia, afectando no sólo a sus actores económicos y políticos dirigentes y dominantes, sino configurando los procesos constitutivos y reproductivos de los actores sociales dominados y dirigidos. De aquí la importancia creciente de lo local, por encima de lo nacional. Lo que digo no es una simple posibilidad, representa un hecho en construcción. Pero la lechuza de Minerva eleva su vuelo al atardecer.

Lorgio Vaca. Guazú. (Fragmento)



Lorgio Vaca. Jinete chaqueño y perro. (Fragmento del mural de ENDE)



Planificación participativa: una experiencia ambigua

Into A. Goudsmit y James Blackburn

La Participación Popular se planteó un desafío metodológico digno de titanes: hacer que, de la noche a la mañana, cientos de localidades decidieran racionalmente qué hacer con su dinero. En muchos casos la llamada participación participativa se aplicó de manera vertical. Este es un balance crítico al respecto.

Como parte de su amplio programa de reforma estructural, en abril de 1994, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) promulgó la Ley de Participación Popular. La ley fortalece los 314 gobiernos municipales de Bolivia mediante un financiamiento transferido por la administración central y dispone que la población local participe en la planificación y gestión de proyectos sociales, productivos y de infraestructura a nivel local.

Con esta reforma no sólo se busca revertir una tendencia histórica, pues el Estado boliviano siempre estuvo asociado a una centralización excesiva y dio muy poco a las secciones municipales del país, particularmente aquellas situadas en las más remotas áreas rurales, sino también plantea un colosal reto metodológico para el gobierno mismo. Nunca antes se les había pedido a las poblaciones locales su participación de manera tan explícita en la planificación y administración de proyectos locales. La manera en que esto se va a lograr sólo puede ser pensada como una tarea altamente compleja y ambiciosa.

Este artículo tiene como objetivo central analizar la concepción y práctica de la planificación participativa (PP), propuesta por la Dirección de Planificación participativa de la Secretaría Nacional de Participación Popular (SNPP) a fin de responder al reto metodológico de institucionalizar la planificación local, en el cual todos los habitantes de las secciones municipales participen de forma plena.

Los resultados tangibles de esta planificación son los planes de desarrollo municipal (PDM), proyectos quinquenales que deben elaborarse de manera participativa y según la reglamentación de la Ley de Participación Popular. El municipio que no tenía tal plan antes del 31 de diciembre de 1998, iba a perder su financiamiento de parte del Estado nacional. La PP identifica a muchos actores que deberían participar en la elaboración del PDM. Estos son:

- El prefecto.
- El subprefecto.
- Los consejeros departamentales.

- Los representantes de las instituciones públicas sectoriales y temáticas.
- Las organizaciones no gubernamentales (ONG).
- El concejo municipal.
- Los subalcaldes.
- El comité de vigilancia.
- Las asociaciones comunitarias.

Sin embargo pone énfasis en la participación de los pobladores de las secciones. En caso del área rural, se trata de los campesinos. Es a través de la participación campesina que la metodología de la Secretaría se distingue fundamentalmente de la planificación tradicional tecnócrata. Por ende, se concentrará en aquellos aspectos de la elaboración de los PDM relacionados con la participación campesina.

Este artículo se basa en las experiencias sobre el tema del Instituto Politécnico "Tomás Katari" (IPTK), una organización no gubernamental con sede en Sucre. El IPTK es una de las instituciones que participó desde su fase inicial en los experimentos destinados a dar forma a la PP en Bolivia. En 1994, ya se adjudicó la consultoría de elaboración de cuatro PDM, licitada por el gobierno nacional.

Los resultados parciales de esta consultoría motivaron al IPTK a profundizar su análisis del proceso de PP. De manera que, en 1996, fue recontratado por el gobierno a través de la SNPP, para efectuar el ajuste de los planes de dos secciones municipales: Pocoata y Ocurí, que se encuentran en la provincia de Chayanta al norte del departamento de Potosí, una zona exclusivamente rural y una de las más pobres de Bolivia. El fruto de esta consultoría resultó en planes reformulados por completo.

Tras una breve explicación de los fundamentos de la PP, incentivada por la SNPP, se argumenta lo siguiente:

- Primero, que esta instancia gubernamental no aplica rigurosamente su propia concepción de participación campesina en los procesos de planificación que hoy en día se están llevando a cabo en varias secciones municipales del país.
- Segundo, que debería repensarse el concepto mismo de participación, a fin de mejorar la calidad de los PDM correspondientes y, por ende, del desarrollo rural en Bolivia.

La participación no es un concepto neutral. Su definición repercute sobre la metodología de la PP (Blackburn y De Toma, 1998:35-36, Lammerink et. al., 1994:14, Uphoff, 1995:557-559).

CONCEPTO DE LA PARTICIPACIÓN CAMPESINA

El primer párrafo del primer capítulo del Manual de Planificación Participativa Municipal ya menciona el lema de planificación de "abajo hacia arriba", base conceptual de la participación campesina en este proceso (SNPP, 1997:1). El ex director Nacional de Capacitación de la Secretaría Nacional de Desarrollo Rural, entidad gubernamental después fue incorporada a la SNPP, detalla el slogan de la siguiente manera:

"La planificación participativa, que incorpora la investigación participativa, es en sí un mecanismo de descentralización de las decisiones, puesto que genera un flujo 'de abajo hacia arriba', que parte de lo comunal/familiar y va ascendiendo gradualmente hacia los niveles cantonales, municipales y departamentales. Este ascenso se da, articulando y concertando intereses, estrategias y prioridades en el marco de la interlocución necesaria entre la sociedad civil y política" (Cox Aranibar, 1996:13).

En este proceso de descentralización de la toma de decisiones, se espera que la población

campesina se convierta en sujeto protagonista de su propio destino y su planificación, es decir, que el antiguo beneficiario de las intervenciones tradicionales, pase a ser actor de su propio desarrollo (UNDP, 1993:6).

Es más, la SNPP pretende profundizar los procesos de democratización en el país a través de la PP. Por eso, concibe que el ejercicio de la PP debe sobrepasar la acción comunitaria representativa y la participación esporádica, común en la mayoría de los países que cuentan con una democracia parlamentaria (cf. GTZ & Ceplan, 1996:34). Se apunta a la participación de la mayor cantidad de gente posible en la elaboración de los PDM y su subsiguiente ejecución, mediante técnicas de investigación y planificación, que incentiven la participación diferenciada por estrato socioeconómico, género, edad, pueblo indígena, etc. De esta manera, la PP incentiva a los grupos más marginados a involucrarse en un proceso político democrático continuo (cf. Bojanic et. al. 1994).

¿Cómo se traduce esta visión conceptual, por cierto muy ambiciosa, en procesos concretos, en un país donde la democracia es todavía frágil? En primer lugar, se destaca el rol que juega el facilitador comunal en la fase de diagnóstico. La metodología de la SNPP propone capacitar a facilitadores campesinos oriundos de cada comunidad, para que proporcionen la mayor parte de los datos socioeconómicos requeridos a fin de armar el PDM, mediante el autodiagnóstico que elaboran junto a su comunidad. Otra innovación es la propuesta de incluir la participación campesina en la (su) fase de definición de la visión estratégica de la sección municipal concerniente. De esa manera, la metodología de la SNPP incentiva a la población campesina a ver más allá de su comunidad, involucrándola seriamente en la definición de una estrategia de desarrollo de toda la sección.

Se supone que durante este proceso, la población campesina que participa en la PP debe terminar potenciando sus capacidades de autodeterminación y autogestión. Por eso, la PP logra directa e indirectamente una mayor sostenibilidad en los procesos de desarrollo municipal, porque las familias campesinas asumen responsabilidades cada vez mayores en la solución de sus problemas (UNDP, 1993:9).

Sin embargo, es preciso aclarar que la misma participación también puede socavar la sostenibilidad del desarrollo rural, si es que el equipo de planificación no revisa críticamente la viabilidad técnica de las aspiraciones expresadas por los campesinos. Es por eso que varios PDM elaborados en base a una metodología de planificación impulsada por la SNPP, parecen caer en un "seguidismo", tendencia que implica proponer casi ciegamente lo que la población plantea sin estudiar a fondo su viabilidad técnica (cf. de Zutter en Cox Aranibar, 1996, 12, Tuchsneider, 1996:112).

PARTICIPACIÓN CERRADA

Si se analiza, entonces, la concepción de la participación campesina en la PP promovida por el gobierno nacional, no cabe duda de su carácter progresista. Impresiona su visión, sustentada por mecanismos concretos, de incluir estructuralmente a la población campesina en el proceso de democratización que promueva la planificación participativa municipal.

Sin embargo, la PP ha sido introducida de forma tan poco participativa que obliga a cuestionar las intenciones reales del Estado. ¿No será la PP algo concebido para atraer la cooperación internacional, hoy en día abrumada por el participativismo? ¿Hasta qué punto podemos creer que Bolivia, un país que tan sólo hace 17 años estaba en manos de militares y barones de la cocaína, pueda o quiera lograr una descentraliza-

ción participativa a través de la cual las poblaciones locales incrementen su poder de decisión sobre la administración de los fondos del Estado nacional?

Si bien la Ley de Participación Popular es un hecho, no resultó de un proceso nacido en la sociedad civil, sino de la creatividad de un pequeño grupo de intelectuales que preparó los textos de la ley prácticamente a puertas cerradas (Molina Monasterios, 1997).

Con respecto a los municipios, tampoco hubo mucha concertación de parte del gobierno nacional. Éstos fueron obligados a participar en una metodología de planificación que ni conocían. En el caso de las secciones municipales de Pocoata y Ocurí, donde el IPTK realizó su trabajo de PP, los alcaldes firmaron un convenio más de tres meses antes de que la institución firmara el contrato de la consultoría con la Secretaría Departamental de Participación Popular de Potosí, en la que aprobaron las actividades de planificación a realizarse. Ni antes ni después hubo más comunicación, y mucho menos, participación. Cuando el IPTK inició la labor de ajuste a los PDM de dichas secciones, los gobiernos municipales fueron sorprendidos por las intenciones de la consultora. Nadie sabía en los municipios sobre los convenios firmados con la Secretaría departamental o pudo mostrarlos al equipo del IPTK. Fue una mezcla un tanto extraña de autoritarismo, falta de comunicación y retórica participativa, en fin, una reacción perfectamente entendible frente al reto de institucionalizar en el segundo país con más pobres de América Latina, la tradición política paternalista (Gamarra y Malloy, 1995), algo que resultaría difícil aún en países de larga trayectoria democrática como Suiza.

Este ejemplo demuestra y confirma uno de los principales obstáculos en la implementación efectiva de la PP: la falta de coordinación interinstitucional, sobre todo entre los niveles de-

partamentales y municipales, perjudica cualquier iniciativa de participación en la toma de decisiones por parte de la población local (cf. Blackburn y De Toma, 1998:35; Nicod, 1996:77).

Otro problema que ha tenido que enfrentar el equipo de planificación se relaciona con la aplicación rígida de la metodología propuesta por la SNPP. Esto ocurre a pesar del consenso que existe entre una amplia gama de expertos acerca de que la planificación (y sobre todo una que pretende ser participativa) es un proceso abierto y flexible (Anello y De Hernández, 1993:41, Chambers, 1995:6060; Franco, 1979: 32; Korten y Bagadion, 1995: 136-139; Uphoff, 1992:388-411 y 1995:536). Pese a las repetidas afirmaciones de los representantes de la SNPP, de que el Manual de planificación participativa municipal era una guía que sólo sugiere una metodología, en la práctica los empleados públicos evaluadores de los PDM lo tomaron como una receta fija, con normas de planificación estrictas, respaldadas por un sistema de monitoreo rígido, de la cual, casi no permitieron desviarse.

Esto contrasta con el principio de Robert Chambers del llamado "manual vacío" en todo trabajo de investigación y PP. De forma ideal, la población campesina, el gobierno municipal y la consulta deberían haber tenido la oportunidad de experimentar con metodologías y técnicas participativas, fortaleciendo de este modo el desarrollo rural y enriqueciendo la experiencia nacional respecto a la PP.

Otra contradicción se refleja en el hecho de que los PDM tienen que adecuarse a los planes departamentales y nacionales y responder a las políticas de los fondos gubernamentales. En otras palabras, tienen que adaptarse a planes que vienen "de arriba", diseñados con muy poca participación fuera de la burocracia estatal. Este requisito aparece y reaparece en varias fases de la metodología de la PP de la SNPP. Tomar en serio la

participación campesina implica invertir la planificación y proponer más bien que "...tomando en cuenta la descentralización del desarrollo...los planes nacionales deben formularse, en buena parte, para apoyar las iniciativas y programas sugeridos en el nivel municipal" (GTZ&Ceplan, 1996:26).

Finalmente, al obligar a una participación diferenciada (con grupos divididos por género o estrato económico), la metodología de la PP propuesta por la SNPP, no siempre respeta los mecanismos de participación comunitaria existentes. En el caso de los pobladores indígenas de los ayllus de Pocoata y Ocurí, ellos tienen sus propios mecanismos de participación interna y externa, que no coinciden con la idea de participación diferenciada. Hay indicios de que manejan un sistema relativamente balanceado de participación representativa, aunque la literatura del área andina no profundiza sobre el tema (Klemola, 1997:12).

Los cargos de autoridad en los ayllus son rotativos, lo que implica que casi cada hombre casado ocupa uno de ellos alguna vez en su vida. Los que cumplieron de manera más satisfactoria con los oficios menores y las obligaciones comunales en general, pueden ascender paulatinamente a cargos de mayor estatura y poder. Son elegidos por la propia comunidad, y se supone que deben actuar en concordancia con el interés comunal. La autoridad controla a los comunarios, que a su vez, disponen de mecanismos de contrapeso democrático, practicado, normalmente, a través de las asambleas comunales.

Además, la rotación de cargos promueve la equidad comunal y el sentido común dentro de la comunidad. Por una parte, el hecho de que los cargos sean rotativos, significa que el poder difícilmente se concentra en unas pocas familias, y por otra, la obligación de que casi todos los miembros de la comunidad tengan que desempeñar algún oficio comunal durante su vida, les

incentiva a asimilar los valores de la hegemonía comunal, y no tanto individual (Klemola, 1997:242). Por ende, las autoridades comunales del norte de Potosí parecen disponer del aval comunal y el poder moral de representar de forma equitativa a su comunidad en el proceso de PP.

Sin embargo nuestro propósito no es romantizar las estructuras de representación campesina, como si representaran un ideal de democracia comunitaria. Como bien saben los técnicos de campo de muchas ONG, la voz de la mujer se escucha poco en las asambleas y los líderes a menudo tienen opiniones contrarias a las de los grupos más pobres en las comunidades (Bojanic et. al., 1994:32).

Aún así, querer introducir modelos de participación foráneos, que no enlazan con el concepto andino de representatividad, puede obstruir antes que facilitar una participación auténtica. Asimismo, no debe olvidarse que en zonas de aguda pobreza como Chayanta, la participación se vuelve un lujo que no todos pueden permitirse, porque durante el tiempo en que uno participa en los talleres de PP, podría haberse dedicado a sus chacras, a la venta o el intercambio de productos, o a la migración temporal, ganándose dinero en Llallagua, Huanuni, La Paz, Tipuani, Cochabamba, el Chapare, Santa Cruz o Sucre.

REVISIÓN FUNDAMENTAL DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

Las observaciones fundamentales acerca de la planificación participativa municipal deben ir más allá del análisis de la coherencia entre su concepción y su ejecución. Lo que se procura, por ende, es analizar a fondo la práctica de la participación: el diálogo y la confrontación entre las familias campesinas y el equipo de planificación. Esto tiene el propósito de entender cómo repercute sobre la PP y sugerir las modificaciones correspondientes.

Esta revisión de la PP se enfoca en la fase de definición de demandas de la población campesina, porque es el momento más delicado de la planificación, pero mucho de lo que se dice sobre esta fase también tiene vigencia en las demás.

LA NEGOCIACIÓN

A través de talleres y reuniones, el equipo técnico pretende conocer las demandas campesinas. Este proceso es problemático por la naturaleza del conocimiento en general, y, en este caso, de las familias campesinas. ¿Cuántas veces se escuchan a los consultores quejándose de los campesinos que no saben formular sus demandas? Esto, no obstante, no tiene que ver tanto con la falta de capacidad analítica que les atribuyen, sino con la inestabilidad del universo de ideas de cualquier grupo humano. Nuestras opiniones y conocimientos generalmente son objeto de discusión interno dentro de nuestro propio grupo. Además no hemos contemplado ni mucho menos definido explícitamente gran parte de la realidad de la cual somos parte (cf. Fabián, 1990:6). Entonces, no debe sorprender que los talleres de definición de demandas no se acaben a la hora indicada, más aún, en el caso de la PP, cuando los campesinos son confrontados de repente con preguntas que han considerado antes sólo parcialmente.

Ahora, la tarea que le espera al equipo de planificación es iniciar e incentivar el proceso que resultará en la definición de las demandas. Normalmente de esto es más problemático que los planificadores se den cuenta. No se trata de convertir las aspiraciones de la población campesina en demandas concertadas con el equipo, ni mucho menos ofrecer a las familias campesinas técnicas que faciliten la expresión de su conocimiento. La presencia e incursión de los planificadores, que por lo general no pertenecen al grupo campesino que están visitando, implica que se cree

un nuevo diálogo en el que se están creando las aspiraciones y, finalmente, las demandas campesinas. Es decir, el equipo de planificación y la población campesina entran a una "negociación constructiva" para construir juntos la visión campesina (cf. Clifford, 1988:41).

La concepción de la participación como negociación revela también que los resultados de la PP casi siempre son temporales y parciales. Bajo ciertas circunstancias, propias de la negociación específica (espacio, tiempo, participantes o técnicas) y externas (situación socioeconómica, régimen legal o grado de organización), se llega a un compromiso sobre lo que es la problemática de la población campesina y lo que son sus demandas. Sin embargo estas circunstancias cambian, lo que fortalece o debilita el compromiso. Pueden presentarse casos donde los campesinos exigen nuevas negociaciones, animados por la formulación de nuevas respuestas a las preguntas de la primera ronda de planificación, y que recién después de los talleres hubieran podido digerir. Por ello, es imprescindible considerar las demandas como planteamientos flexibles y elaborar PDM que se ajusten fácilmente a las nuevas circunstancias que pueden surgir.

Al mismo tiempo, una negociación presupone por lo menos dos actores que se confrontan y comunican. Esto quiere decir que, aunque quisieramos, la población campesina no puede volverse el principal protagonista de la PP. Siempre existen dos protagonistas, el equipo técnico y los campesinos. Vale recalcar que el equipo de planificación siempre influye, anima, induce y manipula la negociación, verbos que apuntan básicamente a lo mismo: la co determinación del universo de ideas campesinas.

No tiene caso, entonces, insistir en que el equipo no ejerza influencia sobre la definición de demandas, simplemente no lo puede evitar. Más bien, esta noción tendría que motivar a la SNPP

a analizar más a fondo el modo en que los consultores planificadores determinan la negociación, para que esta sea, en lo posible, entre socios equitativos.

Consecuentemente, se vuelve urgente la necesidad de profundizar el estudio de los efectos de las técnicas participativas que se aplican para conseguir los datos y generar las aspiraciones y demandas campesinas. Sin querer entrar en detalle, se debe constatar que estas técnicas no pueden ser neutrales. Cada técnica genera determinadas reacciones y por ende otra información y demandas. Preocupa, entonces, que muchas veces los planificadores opten por una u otra técnica principalmente por su capacidad de generar la información en un ambiente campesino que tiende a ser defensivo y cerrado por las malas experiencias que han tenido con el Estado u otras instituciones externas.

Una solución parcial de este problema es el uso de una gama más amplia de técnicas participativas que las previstas por la SNPP en el proceso de PP. De esta manera se pueden cruzar y verificar los datos y resultados de las diferentes técnicas, estrategia de planificación cuya eficacia ha sido ampliamente documentada en contextos muy diversos, siempre y cuando los facilitadores hayan sido bien entrenados en su uso (cf. Chambers, 1997).

Considerando el autodiagnóstico, por ejemplo, uno de los primeros pasos de la PP propuesto por la SNPP, necesita indudablemente fortalecerse con un mayor uso de técnicas visuales de investigación participativa. Las boletas de recojo de información comunal actuales contemplan sólo dos técnicas de esta índole: el mapa social y el flujo de comercio. Se podría ampliar con transectos, calendarios estacionales, diagramas de actividades diarias, diagramas de Venn, líneas de tendencia, matrices de valoración y rangos de bienestar (cf. Holland y Blackburn, 1998).

Aún así, es preocupante que los facilitadores comunales capacitados en sólo uno o dos días por un equipo técnico generalmente tampoco bien capacitado, tengan que conseguir y presentar en un plazo limitado de tiempo, datos sobre temas conflictivos como la tenencia de la tierra, la producción agrícola, el tamaño del rebaño familiar y los ingresos monetarios provenientes de la comercialización de los productos campesinos. Se sugiere postergar la recopilación de este tipo de información a fin de crear primero una historia conjunta de confianza entre la población campesina y los planificadores, a través de actividades que el campesino considere menos amenazadoras que preguntas sobre su frágil situación económica (cf. Christensen, 1992:129).

Con una capacitación adecuada y el uso de un abanico más amplio de herramientas visuales, sin duda se puede mejorar el proceso actual de PP. Sin embargo es importante enfatizar que, por más útiles que sean, las técnicas nunca compensarán el mismo comportamiento del equipo técnico frente a los campesinos. Sin un profundo respeto mutuo, no sirve ni la mejor metodología (Chambers, 1995:592; Linzer s/f:20).

Cabe mencionar que esta actitud no implica que las capacidades comunicativas de los planificadores sean necesariamente más importantes que el conocimiento técnico de alternativas productivas, comerciales y organizadoras. Sólo cuando conozcan bien su profesión, los técnicos podrán establecer una negociación fructífera con la población campesina.

LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL

La formulación, es decir, la acción de escribir un PDM, es otro momento importante que vale la pena examinar a fin de entender mejor la participación campesina y, consecuentemente, el proceso de PP.

Por más que quisiéramos, la creación del Plan no es la expresión del proceso de PP que la ha precedido. Crear el texto, sus cuadros, sus mapas y su presupuesto es parte integral de la planificación y es un proceso dominado por la interpretación que le da el equipo de planificación. El planificador no se presenta los resultados de la PP, sino su interpretación de ellos. Ello, por supuesto, no quiere decir que sea incoherente con la negociación que hubo con la población campesina. Sin negociaciones no hubiera habido interpretación del Plan, pero significa, por definición, que en la fase de la formulación de los PDM, la relación entre el equipo técnico y las familias campesinas, es entre desiguales, y que la influencia que puede ejercer el campesino sobre el texto del Plan está muy reducida.

La única manera de mitigar la influencia del equipo de planificación sobre la fase de elaboración del PDM es capacitar a la población campesina y profesionalizar el Concejo municipal y al comité de vigilancia. De esta manera, las familias campesinas y sus representantes a nivel municipal tendrán las capacidades y podrán analizar y observar el texto a fin de modificarlo en cuanto consideren prudente.

Aún así no se rompe el dominio de los planificadores por ser ellos los que diseñan al final los PDM. Esta reflexión indujo al equipo de planificación del IPTK a contemplar cuidadosamente no sólo el contenido, sino también la forma de los planes.

Se concluyó, primero, que el planificador que toma en serio la participación de los campesinos en la planificación municipal, debe mostrar, de alguna manera, la voz y las ideas de la población campesina. Se sugiere que éstas sean diferenciadas claramente de la opinión del equipo técnico en el texto del PDM. Esta norma de presentación trae consigo la ventaja práctica de que, si el criterio técnico que sustenta la estrategia de desa-

rollo de la sección resulta equivocado, después de algún tiempo, se tenga a la mano el conocimiento y las aspiraciones campesinas como fuente de inspiración para ajustar el plan. También se recomienda incorporar una muestra de los trabajos visuales realizados por los propios campesinos, con resúmenes de la información y análisis participativos más relevantes (ver, por ejemplo, los planes comunales facilitados por Care en la sección municipal de Villa Serrano, en el departamento de Chuquisaca).

Segundo, la experimentación con modos de formulación de los PDM debe incluir propuestas que reemplacen el método analítico a fin de dividir la realidad en sectores. Son pocos los campesinos que conciben su verdad en esos términos. Los programas de intervención definidos por sector concuerdan poco con la racionalidad campesina, y por ende, pierden mucho de su sostenibilidad. Una metodología fácilmente aplicable que intenta recuperar la visión integral de los problemas de la población campesina, es "Sinfonía" (Denkmodell Dialog Design s/f), que forma un paso más en el largo camino hacia el entendimiento entre planificadores profesionales y familias campesinas.

Finalmente, la participación verdadera implica la flexibilidad intrínseca del plan (Anello y De Hernández, 1993:41; Uphoff, 1995:559). No puede haber planes-libro que definan las demandas campesinas para cinco años, sin la posibilidad de emprender nuevas negociaciones en que se ajusten o aumenten los programas y proyectos, como lo señala la PP municipal.

CONCLUSIÓN

La planificación participativa municipal, tal como fue elaborada por la SNPP, es considerada un gran aporte al desarrollo rural de Bolivia, porque proporciona la herramienta conceptual y metodológica para que el Estado establezca una

negociación sería con la población campesina, dado que se rompe el esquema antiguo, en el que el planificador definía autocríticamente el futuro del país detrás de su escritorio.

Aún así, se insiste en que debería repensarse la PP en Bolivia. En primer lugar, la SNPP no siempre empleó rigurosamente su propia concepción de participación campesina, porque no dejó participar a las familias campesinas, los gobiernos municipales y los consultores planificadores en la propia elaboración de la metodología de planificación. Más bien obligó a que los PDM se enmarquen en las políticas oficiales en el plano departamental y nacional y no siempre respetó los mecanismos existentes de participación comunitaria y, por ejemplo, impuso la idea de la participación diferenciada.

Es más, para fortalecer la PP, la manera en que se entiende la participación campesina tiene que redefinirse. Se propone que ésta se conciba como una negociación entre población campesina y equipo de planificación. Concebirla así implica que los planes-libro propuestos por la Secretaría sean flexibles. También significa que el campesino no es el protagonista principal de la PP, sino que hay dos protagonistas, de los cuales uno, el planificador, debe analizar a fondo su influencia sobre el proceso y reflexionar profundamente sobre las técnicas más apropiadas a ser aplicadas.

Al mismo tiempo, no existe ni puede existir, la plena participación campesina en la fase de creación del texto del PDM. Esto le entrega una gran responsabilidad al equipo técnico que experimenta en los PDM con modos de presentación de propuestas de desarrollo municipal, en las que se incorpore de manera más adecuada la visión campesina a fin de que estas sean sostenibles.

Concluyendo, puede decirse que estos son los criterios más realistas de la PP y que al final serán de mayor beneficio para el campesinado que la

retórica del populismo participativo que tanto impregna hoy los documentos oficiales del gobierno y los círculos de la cooperación al desarrollo.

BIBLIOGRAFÍA

Anello, E. y De Hernandez, J., 1993, *Participación comunitaria*, Santa Cruz, Universidad Nur, Iser.

Arciénaga, A., Arancibia, A., Barriga V., Ordoñez L. y Ramírez, M. 1997, *Plan de Desarrollo Municipal, sección Ravelo: 1997-2001*. Scure:Cipres-IPTK (manuscrito).

Blackburn, J. y De Toma, C., 1998, *Scaling-Down as the Key to Scaling-Up? The Role of Participatory Municipal Planning in Bolivia's Law of Popular Participation*, en "Who Changes? Institutionalising Participation in Development". J. Blackburn y J. Holland, eds. Londres: IT.

Bojanic, A., Canedo, M.E., Gianotten V., Morales M.A., Ranaboldo C. y Rijssenbeek W., 1994, *Demandas campesinas: Manual para un Análisis participativo*. La Paz: Embajada real de los Países Bajos.

Chambers, R., 1995, *Métodos abreviados y participativos a fin de Obtener Información social para los Proyectos*, en *Primero la Gente: Variables sociológicas en le Desarrollo rural* (original en inglés, 1985). M. Cernea, de. México: Fondo de Cultura Económica.

1997, *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Londres: IT Publications.

Christensen, G., 1992, *Sensitive information: collecting data on livestock and informal credit*, en *Fieldwork in Developing Countries*, S. Devereux

y J. Hoddinot, eds. Nueva York, Harvester Wheatsheaf, pp-124-137.

Clifford, J., 1988, *On Ethnographic Authority en The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography*, Literatura y Arte, Cambridge, Mass: Universidad de Harvard, pp. 21-54.

Cox Aranibar, R., 1996, *El Saber local: Metodologías y Técnicas participativas*, La Paz, Nogub-Cosude/CAF.

Denkmodell Dialog design, s/f, *Sinfonie, Denkmodell Dialog Design*. DGIS, 1997, Procesbenadering, La Haya, borrador.

Fabian, J., 1990, *Power and Performance: Ethnographic Explorations through Proverbial Wisdom and Theater in Shaba, Zaire*, Madison: Universidad de Wisconsin.

Franco, C., 1979, Perú: *Participación Popular*, Lima: Cedep.

Gamarra, E. y Malloy, J.M., 1995, *The Patrimonial Dynamics of Party Politics in Bolivia*, en "Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America", S. Mainwaring y T.R. Scully, eds. Standford: Standford University Press.

Goudsmit, I.A., Arancibia, A., Arciénega A., Ordoñez L., Sardinas Ch., y R. Velázquez, 1997a, *Plan de Desarrollo Municipal, sección Ocurí: 1997-2001*. Sucre: Gobierno municipal de Ocurí/ Cipres-IPTK-PDCR.

Goudsmit, I.A., Into, A., Arancibia, A., Arciénega, A., Barriga, V., Barrón, J, Michel, B. y Ordoñez L, 1997b, *Plan de Desarrollo Municipal, sección Pocoata: 1997-2001*, Sucre: Gobierno municipal de Pocoata, Cipres-IPTK-PDCR.

GTZ & Ceplan, 1996, *Manual de Planificación del Desarrollo Integral Municipal*, San Juan de Pasto: Ceplan.

Holland, J. y Blachburn, J. (eds.), 1998, *Whose Voice? Participatory Research and Policy Change*, Londres, IT Publications.

Jiggins, J. y De Zeeuw, H., 1992, *Participatory technology development in practice: process and methods*, en "Farming for the Future: An Introduction to Low-External-Input and Sustainable Agriculture". C. Reijntjes, B. Havenkort y A. Waters-Bayer, eds. Londres: Illeia, MacMillan.

Klemola, A., 1997, *The reproduction of community through communal practices in Kila Kila, Bolivia*. Tesis de Doctorado, Universidad de Liverpool, Inglaterra.

Korten, F. y Bagadion B., 1995, *Las Organizaciones para el Desarrollo del Riego. un Enfoque basado en el Proceso de Aprendizaje*, en "Primero la Gente: Variables sociológicas en el Desarrollo rural" (original en inglés, 1985), M. Cernea, de. México: Fondo de Cultura Económica.

Lammerink, M.P. y Wolffers, Y. (eds.), 1994, *Selección de algunos Ejemplos de Investigación participativa*, La Haya, DGIS.

Linzer, A.K., s/f, *El Diagnóstico rural participativo: un Método para la Planificación de Proyectos con Comunidades rurales*, Santa Cruz, CIAT, Banco Mundial.

Molina Monasterios, F., 1997, *Historia de la Participación Popular*, página institucional de Internet de la Secretaría Nacional de Participación Popular, Bolivia.

Nicod, C., 1996, *Seguimiento al Proceso de Participación Popular en los Municipios de Chuquisaca*, en "La Participación Popular: Avances y Obstáculos", G. Rojas Ortuste, de. La Paz: SNPP, Grupo DRU, Plural.

Procade, 1996, *Guía conceptual y metodológica de PP local del Desarrollo rural*, La Paz, Unitas-Procade.

Rasnake, R., 1989, *Autoridad y Poder en Los Andes: los Kuraqkuna de Yura*, La Paz, Hisbol.

Secretaría Nacional de Participación Popular, 1997, *Manual de Planificación Participativa: Lineamientos y Bases metodológicas para la Formulación de Planes de Desarrollo municipal*, La Paz, Ministerio de Desarrollo Humano.

Thevoz, L., 1999, *La Descentralización en Bolivia: un Modelo en Construcción*, en *Descen-*

tralización y Desarrollo, Cosude, ed. Berna: Cosude.

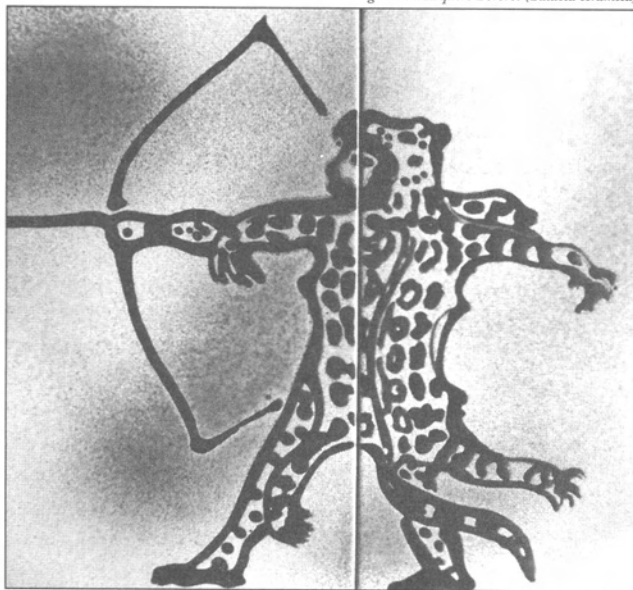
Tuchschneider, D., 1996, *Una Visión desde la Planificación Participativa municipal*, en *Participación Popular: Avances y Obstáculos*, G. Rojas Ortuste, ed. La Paz: SNPP, Grupo DRU, Plural.

UNDP, 1993, Taller regional "Construyendo nuevas Coaliciones para un Desarrollo participativo": Informe final, La Paz, UNDP.

Uphoff, N., 1992, *Learning from Gal Oya: Possibilities for Participatory Development and post-Newtonian Social Science*, Ithaca: Universidad de Cornell.

1995, *Adaptando los Proyectos a la Gente*, en "Primero la Gente: Variables sociológicas en el Desarrollo rural" (original en inglés, 1985), M. Cernea, ed. México: Fondo de Cultura Económica.

Lorgio Vaca. Arquero Bororó. (Baldosa cerámica)



Tarijeños en la Argentina, vidas fronterizas

Alfonso Hinojosa Gordonava (coord.),
Guido Cortez Franco y Liz Pérez Cautín

Otra investigación del PIEB, esta vez en tierras del sur. Este artículo resume las maneras en que los campesinos del valle central de Tarija recogen su sustento parcial de las granjas hortícolas del norte argentino. Familias completas que cabalغان entre dos mundos, dos culturas y dos países. Al final, la mayor parte regresa a los pagos natales.

*Vos vis que en mi tierra ya no tengo nada
por eso, dejando la hacienda y la casa
pa'lau la Argentina me alejo mañana
eso es nuestra suerte, paloma del alma
eso es lo que a tuitos nosotros nos pasa
pa'el lau de la Argentina me alejo mañana
ya me voy, pero antes dejo por constancia
(...) que son los gobiernos que no nos amparan,
quienes nos alejan a tierras lejanas
después se nos niega cariño a la patria (...)*

Oscar Alfaro

La intervención de múltiples factores que actúan en intensidades y periodos diferentes dentro de los movimientos poblacionales, nos permite considerarlos en "proceso continuo e histórico"; es decir, como algo que sucede de manera reiterada y frecuente en el tiempo y el espacio a lo largo de la historia de la humanidad.

En este sentido es necesario aceptar que la migración forma parte cotidiana de la vida del campo y está incorporada a las estrategias de vida de las familias (Preston:1999). Sin embargo, en Bolivia, debido a la magnitud de estos desplazamientos hacia el exterior del país, sea a países limítrofes o a EE.UU. o Israel, la migración significa una sangría de su capital humano, más aún si consideramos que dos de cada diez bolivianos viven fuera del país (Guevara, 1999).

Un elemento necesario para abordar el tema tiene que ver con la distinción entre migración temporal/estacionaria y la definitiva, esta última

entendida no de manera unilateral y caracteriza sobre todo por el desplazamiento del núcleo productivo y la adquisición de bienes (materiales o simbólicos) fuera de la comunidad de origen así como por el manejo del tiempo. Esta distinción metodológica no es rígida. Si bien la migración definitiva requiere de experiencias previas de tipo temporal, también puede darse de forma inversa, vale decir, un supuesto migrante definitivo puede volver al circuito temporal donde la comunidad de origen es asumida como núcleo.

En este sentido hablaremos de migrantes estacionales y migrantes “visitas” o de “doble domicilio”. Los primeros, de gran consenso entre los estudiosos del tema, nos remiten a las estrategias de subsistencia que tienden a paliar el subempleo estructural, dado por la estacionalidad del ciclo de producción agropecuaria del valle. Por otro lado, los migrantes de doble domicilio o “las visitas”, dado que son también una estrategia campesina con experiencias migratorias temporales previas, se orientan hacia la búsqueda de oportunidades que definan un nuevo sentido de vida para la familia, lo cual de ninguna manera supone la ruptura de lazos o relaciones con la comunidad de origen, sino más bien la mutua transformación desde el interior. Implica también el establecimiento de la capacidad reproductiva total (o en su gran mayoría) familiar o comunal en las quintas hortícolas del norte argentino. La vinculación con la comunidad de origen se da a partir de visitas durante pocas semanas al año (diciembre-enero), pero de gran influencia económica, social, cultural y política.

En el valle central tarijeño (en adelante VCT), los principales motivos que explican el constante crecimiento de los flujos migratorios desde sus zonas rurales hacia la Argentina son:

- La minifundización de la tierra.
- La caída de la productividad.

- La precariedad del mercado urbano tarijeño.

Estas razones conforman el triángulo, que impulsó decisivamente la migración temporaria en esta región. A esto debemos agregar, las graves sequías y sus repercusiones en las economías campesinas provocadas por el Fenómeno del Niño en los años 1982 y 1983 y entre 1997 y 1998 y la nueva política económica implementada en la Argentina en 1991 que fijó la paridad de la moneda con el dólar. En la práctica, esto último ha significado que los ingresos ahorrados durante el período migratorio y enviados o traídos personalmente a las comunidades de origen del valle central del departamento de Tarija tengan mayor capacidad adquisitiva.

Por otra parte, reconocemos también la existencia de factores culturales e ideológicos que influyen en la decisión migratoria, donde el acceso a bienes y experiencias novedosas ligadas a un “imaginario moderno” arraigado en la República Argentina, atraen el interés de los segmentos más jóvenes:

No se trata, entonces, de estrategias de sobrevivencia contemporáneas, sino de un “habitus”, de un saber de vida, de una práctica asociada a una cosmovisión particular que permitiría una mejor y más sostenible utilización de los recursos naturales; no ya para la “sobrevivencia” de una familia, sino para la vida y reproducción de toda una comunidad/sociedad” (Guevara, op. cit.).

MATICES DE UNA ECONOMÍA FAMILIAR CAMPESINA

El departamento de Tarija se halla en el extremo sur de Bolivia con una población de 291.407 habitantes, según el Censo Nacional de Población y Vivienda (INE, 1993). Para entonces, el 54,7% residía en centros urbanos y el 45,3% restante en las áreas rurales. En el VCT,

donde se encuentra la capital del departamento, se concentraba casi el 51,6% de la población rural de todo el departamento y el 58% del total urbano departamental.

El VCT comprende 3444,527 Has. de las cuales el 6,3% son utilizadas productivamente y el 2,1% se hallan bajo riesgo. Ese dato delimita el tipo de migración predominante, vale decir, la estacional. La tenencia de la tierra promedio en el VCT oscila entre 0,5 a 4,9 Has. que comprende el 58% de las familias, evidencia la presión sobre la tierra y el minifundio (Gutiérrez, 1989). El cultivo predominante por su rentabilidad es la papa con unas 3.71 Has. y el maíz que es destinado al consumo familiar y animal (Boada; Aramayo, 1999).

El VCT se caracteriza por su clima templado (18°C como media), presenta dos fases durante el año:

- Una húmeda por las constantes lluvias que caen desde noviembre hasta marzo.
- Otra temporada seca que va de abril a octubre.

Esos mismos periodos determinan el ciclo o año agrícola en las comunidades. Si bien se disfruta de un clima templado, se sufre también por las inclemencias de las heladas, granizadas, riadas y sequías así como de los procesos de erosión considerables que afectan a un 65% de los suelos del valle.

La lógica de la economía campesina del VCT es de reproducción de su unidad familiar, comprendida como núcleo de producción y consumo que genera ocupación a todos sus miembros. El campesino tarijeño o "chapaco" tiene a la agropecuaria como actividad principal, pero a la vez, combina con otras labores que le permiten satisfacer sus necesidades básicas. Estas estrategias se articulan con lógicas de subsistencia, de "manejo de oportunidades" y están basadas en la "multiocupación".

...El campesino (o mejor dicho la unidad familiar campesina) es a la vez productor agrícola, criador de ganado, recolector de productos naturales, productor de artesanías y además, muchas veces un trabajador asalariado, ya sea en el propio lugar donde vive o como migrante temporario en otros lugares (Reboratti, 1996).

Vive condicionado por factores externos que no controla o por lo menos no totalmente:

- Primero, su producción depende de las condiciones climáticas.
- Segundo, el tipo de técnica que utiliza (arado) está definido por la fuerza de la tradición (contexto socio-cultural).
- No controla los precios en un mercado urbano precario a la vez que adquiere productos fabricados que le ayuda a balancear un poco su dieta alimenticia.

Para la óptica mercantil, es "un productor muy poco eficiente (trabaja mucho, produce poco y de mala calidad y cobra un precio que está por debajo de los del mercado) (Ibid:130).

ANTECEDENTES MIGRATORIOS A LA ARGENTINA

La mayoría de los campesinos del VCT que migra a la Argentina, trabaja en actividades ligadas a la agricultura. Los migrantes se han especializado sobre todo en la producción hortícola y en menor grado en trabajar como cosecheros de frutas y hortalizas. Casi todos los migrantes campesinos se dirigen a las "quintas" o propiedades agrícolas dedicadas a la horticultura. En esas propiedades se cultiva principalmente tomate y en menor proporción pimentón, chaucha, berenjena o choclo.

Desde la década del 70, la horticultura es la actividad agrícola que concentra a los migrantes

rurales tarijeños en la Argentina. En las “quintas” del noroeste argentino observamos la presencia de dos modalidades de organización del trabajo. Una es la forma clásica o tradicional del esquema patrón-obreros, la otra es la mediería. En la primera, el patrón organiza la producción y contrata de forma temporal a los trabajadores agrícolas. En la segunda, se trata de una forma asociativa en la que los patrones y trabajadores comparten riesgos “a medias” parte de las ganancias.

En la actualidad, la mediería es en una de las formas de trabajo predominantes en la horticultura en varias regiones de la Argentina. En este proceso, la mano de obra boliviana habría reemplazado primero a los peones agrícolas argentinos y posteriormente a algunos arrendatarios y quinteros (Benencia, R; Karasik, G.: 1995).

Podemos diferenciar cuatro roles ocupacionales en la producción hortícola que se desarrolla a través de la mediería. Estas categorías que conforman una estructura de movilidad social vertical al que se le ha aplicado el término de “escalera boliviana”, usado en principio por Lynn Smith y retomado por Benencia (1999) y que nosotros matizamos a partir de nuestros resultados. En orden ascendente son los siguientes:

1. Los jornaleros o peones.- Son los trabajadores asalariados que realizan los trabajos de transplantado de los almácigos de tomate, envarillado o limpieza de canales de riego. Sus tareas son las más duras en la quinta y las peor pagadas. Un migrante rural generalmente comienza su experiencia laboral con peón, jornalero o diero. La remuneración oscila entre 8 y 11 pesos argentinos. Al mes, su ingreso promedio varía entre los 160 y 200 dólares. En su mayoría son adolescentes varones jóvenes, aquellos que están casados suelen viajar sin su familia. Los ingresos que consiguen apenas les alcanzan para mantener a sus familias durante la

época seca del año. Este tipo de asalariado es el más numeroso en el valle tarijeño.

2. El tantero y el embalador.- Se encargan del cuidado de las plantas de tomate durante unos dos o tres meses hasta que están listas para ser cosechadas. Al cabo del ese tiempo reciben un único pago por raya de plantas de tomate (cada raya mide unos cien metros).

En el noroeste argentino cobran aproximadamente unos nueve dólares por raya. Si toman a su cargo unas 110 rayas, cobrarían entonces 990 dólares por tres meses de trabajo. Es una tarea que requiere dedicación y experiencia.

Una categoría cercana al tantero, es la del embalador que trabaja a destajo en el embalaje y la selección del tomate. Es un empleo bastante buscado por los migrantes tarijeños, pero es necesario ganarse al confianza de los productores quinteros y capataces. Cobran 0.50 centavos por caja embalada y al día pueden obtener unos 40 dólares mientras dure la cosecha. Campesinas tarijeñas se han incorporado últimamente a este segmento ocupacional.

3. Los medieros.- El mediero es una figura laboral de asociación con un quintero en la realización de determinado cultivo. Cumple la función de reducir o compartir los riesgos de la producción agrícola con el productor hortícola o el propietario de la quinta, al encargarse directamente de la producción, en tanto que el patrón aporta las tierras, semillas e insumos. La mediería se ha expandido de manera acelerada en las últimas décadas. Varios migrantes afirman que en la década del 80 los medieros pudieron aprovechar la coyuntura favorable del mercado y con las ganancias comprar maquinaria, insumos, casas e incluso tierra, hasta convertirse en productores por cuenta propia, pero reconocieron que en la década del 90 las condiciones de

negociación con el patrón, muchas veces boliviano, les eran más adversas. Por el mismo trabajo ahora reciben entre un 25 a un 35% del total. Las plagas, el agotamiento del suelo y los riesgos climáticos en los dos últimos años han contribuido a hacer menos rentable la mediería. Migran con sus hijos y a medida que se estabilizan económicamente van llevando al resto de su familia.

4. Los “quinteros” arrendatarios y sus propietarios.-

El quintero arrendatario es el productor hortícola que trabaja en tierras alquiladas. Generalmente están acompañados por sus familias, con las que viven en los poblados más cercanos. Para producir por su cuenta, adquirir las semillas, fertilizantes y emplear maquinaria, deben disponer de un capital importante, ahorrado durante su experiencia como mediero. En Salta y Jujuy, y dependiendo de las condiciones de fertilidad, el alquiler de cada hectárea oscila entre 800 y 1.500 dólares por temporada. La cantidad de tierras que maneja un arrendatario puede variar de acuerdo al capital que dispone, entre cinco Has. con dos jornaleros y 20 Has. con mayor mano de obra.

El quintero propietario es el mayor escalón de esta escalera agrícola. Muchos de ellos han trabajado más de 20 años para llegar a ser propietarios medianos y manejar anualmente fuertes sumas de dinero. Encontramos que algunos de los propietarios tarijeños más acomodados están abandonando la mediería y recurren a contratar de nuevo a jornaleros ilegales por periodos de seis meses, a quienes les pagan un salario fijo. De esta forma no comparten los beneficios con los medieros y obtienen mayores márgenes de rentabilidad. Un quintero propietario puede llegar a producir, en tierras propias y alquiladas, 200 Has.

MIGRACIÓN ESTACIONAL Y CICLO AGRÍCOLA

Abandonadas por el Estado central y departamental, las comunidades campesinas de Tarija han subsistido en medio del olvido oficial, enfrentando los riesgos climáticos, el severo proceso de erosión, y la escasa demanda de productos de una población urbana relativamente pequeña. Ante un panorama tan poco claro en lo que se refiere a subsistir en base a un cultivo temporal de maíz o papa, los jóvenes, tanto varones como mujeres, conforman el sector más proclive a alejarse temporariamente de sus familias y comunidades.

La conformación de sus hogares en un mediano plazo los impulsa a aceptar como “natural” la idea de trabajar durante varios años en el extranjero para generar algunos ahorros. Las visitas periódicas de los contratistas o enganchadores que ofrecen transporte y trabajo seguro en el país vecino son aprovechadas sin muchas dudas por los más jóvenes. En algunas comunidades casi todos los jóvenes emigran, tal es el caso de la comunidad de Churquis, donde en 1998 sólo se quedaron dos varones. La posibilidad de ahorrar cada año determinados montos de dinero es uno de los incentivos más claros que promueve la migración.

En los últimos años, una parte significativa de las adolescentes y jóvenes campesinas tarijeñas también ha optado por migrar a la Argentina. Ahí como empleadas domésticas o trabajadoras en las quintas hortícolas perciben un ingreso mensual promedio unas seis veces superior al que recibían en la ciudad de Tarija.

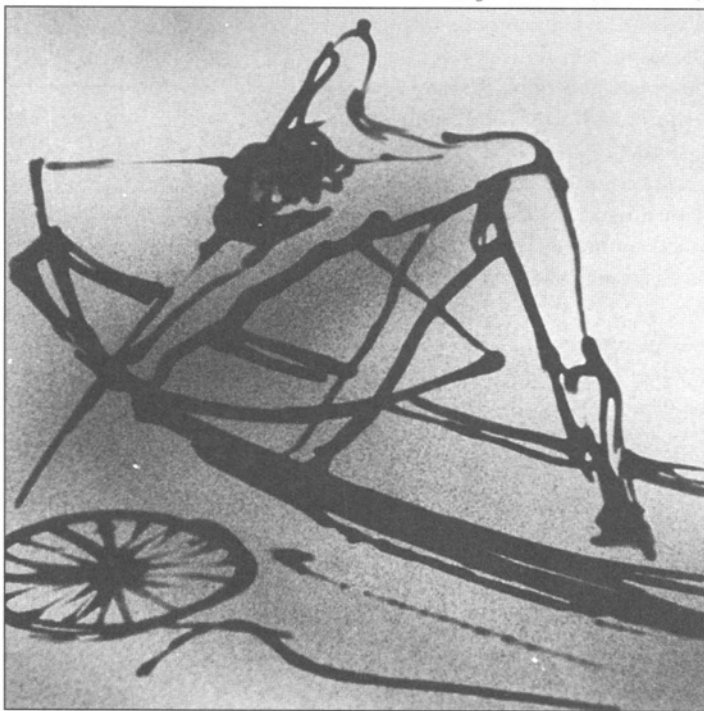
El migrante rural temporario encuentra trabajo en las quintas hortícolas de patrones argentinos o bolivianos a través de la redes de información de familiares, compadres y paisanos. El trabajo en las quintas es exigente, bajo esta modali-

dad se trabaja nueve a diez horas diarias bajo la mirada del capataz o del mediero. A principios de 1999, en las quintas del noroeste se pagaba un jornal entre 8 y 10 pesos argentinos, en el primer caso con comida y alojamiento incluido. Más hacia el sur, los salarios son mayores, por día se puede recibir entre unos 15 hasta 25 dólares, pero también los costos de los pasajes son más elevados. Algunos migrantes que trabajaron un par de meses en Santa Fe y Buenos Aires afirman que el invierno ahí es muy frío y por consiguiente trabajar en el campo es más sacrificado. Por eso prefieren quedarse en Salta y/o Jujuy. Cuando termina la época de la cosecha, deben moverse buscando nuevos empleos o retornar a sus comunidades en Tarija. De esa manera suelen recorrer amplios circuitos regionales.

LA MIGRACIÓN TEMPORAL EN ZONAS A SECANO

En las comunidades ubicadas en zonas a secano las actividades agrícolas ocupan a la mano de obra disponible entre los meses de octubre a marzo, precisamente desde el inicio de la época de lluvias. Se cultiva sobre todo el maíz y en mucha menor escala, la papa. El resto del año, también llamada la época seca del año, entre la mitad y 3/5 partes de su población no reside en su comunidad, sino en alguna localidad argentina. A diferencia de las zonas que disponen de riego y pueden cultivar dos veces al año, los ingresos familiares de los comunarios son obviamente mucho menores. Las personas que no migran, se dedican al cuidado de su ganado vacuno, ovino y

Lorgio Vaca. Pescador. (Baldosa cerámica)



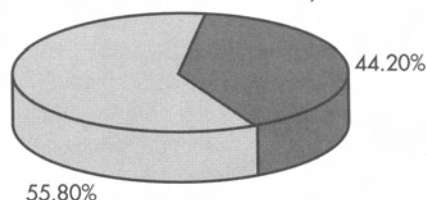
de aves de corral, el cual venden en casos de necesidad.

EL CASO PINOS SUD

Para poner un ejemplo de los problemas de la migración estacional en comunidades a secano y con elevada migración, analizaremos el caso de Pinos Sud. Es una comunidad campesina que cuenta con una población de 380 personas pertenecientes a 80 familias. Es una zona agropecuaria con cultivos temporales de maíz y papa. Está ubicada en la cabecera de la cuenca del río Tolomosa y dista a unos 30 kilómetros de la ciudad de Tarija. El camino que la vincula con Tarija es inestable en la época de lluvias. El transporte público es realizado por un camión que sale tres veces a la semana desde esa comunidad. En la escuela sólo se cuenta con cinco grados de primaria y no existe posta de salud.

Es una típica comunidad campesina donde se observa uno de los más altos niveles de migración temporal, después de Pampa Redonda (cf. infra). De acuerdo al censo que realizamos en enero de 1999, se revela que, en 61 familias de las 80 que hay en la comunidad, uno o más de sus miembros han migrado el año anterior. Según los datos que disponemos, 168 personas, es decir, el 44,2% de la población de Pinos Sud, migró en 1998.

GRÁFICO 1
MIGRACIÓN EN PINOS SUD, 1998



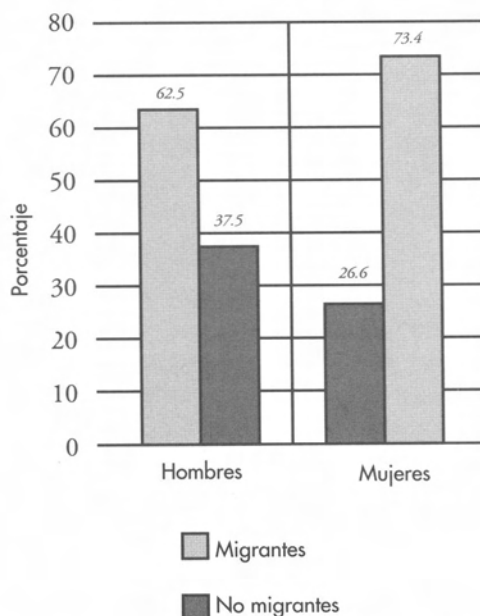
Fuente: Censo Demográfico de la comunidad de Pinos Sud. Tarija. 1999

■ Si migran
■ No migran

Desagregando la cifra de los que migran, el 42,9% de la población total se dirigió a la Argentina y apenas el 1,3% migró temporalmente para trabajar en la ciudad de Tarija. No encontramos personas que migrasen hacia otras ciudades del país durante 1998.

En el gráfico 2 podemos observar que el 62,5% de los hombres de la comunidad migraron en 1998, en tanto que sólo el 26,6% de las mujeres hizo lo mismo. Esto significa que una buena parte del año, casi 2 de cada 3 varones no se encuentra residiendo en la comunidad, sino en la Argentina, lo que conlleva por supuesto un conjunto de implicaciones en la vida cotidiana de las comunidades y de sus familias.

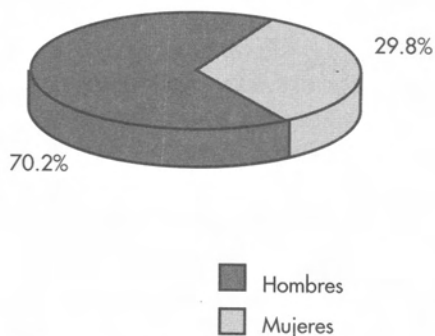
GRÁFICO 2
MIGRACIÓN POR SEXO (EN %)
PINOS SUD, 1998



Fuente: Censo Demográfico de la comunidad de Pinos Sud. Tarija. 1999. Elaboración propia

Si sólo tomamos en cuenta a los migrantes, observamos que el 70,2% son hombres y el 29,8% restante, mujeres.

GRÁFICO 3
PINOS SUD, 1998
MIGRANTES SEGÚN SEXO (EN %)



Fuente: Censo Demográfico de la comunidad de Pinos Sud. Tarija. 1999

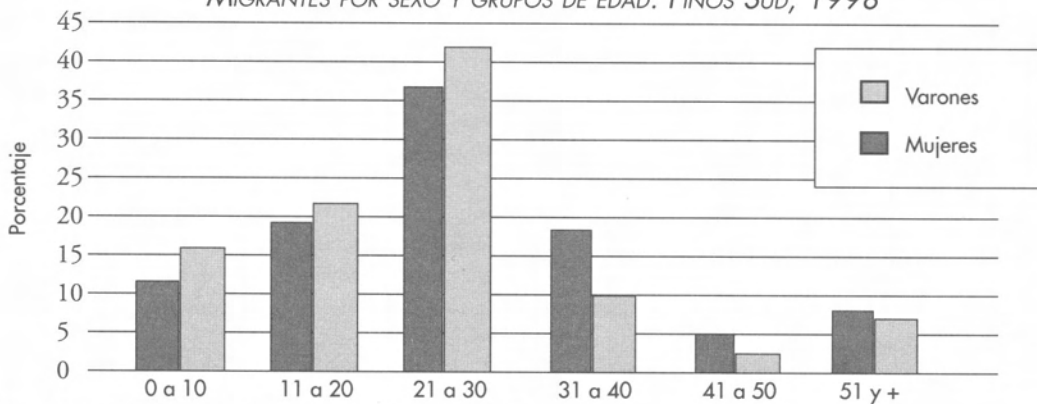
De acuerdo a algunas entrevistas, las mujeres jóvenes están incrementando su participación en la migración con más énfasis a partir de 1991.

Podemos apreciar que en ambos sexos, los jóvenes entre los 21 y 30 años conforman en promedio casi un 40% de los migrantes rurales. Si agrupamos los rangos de edades entre los 11 y 40 años vemos entre los varones que suman un 74,6%. Estamos hablando de una población económicamente activa.

Debemos destacar que no se trata generalmente de una migración familiar, sino de jóvenes solteros y hombres casados que dejan a sus esposas e hijos en su comunidad al cuidado de sus familiares. Llevar a la familia a la Argentina, si se trata de jornaleros, implica gastar más dinero en su sostenimiento. En ocasiones el padre o hermano mayor lleva consigo a uno de sus hijos o hermanos para que trabajen con ellos.

En el caso de las personas mayores, se trata de personas que viajan a ver a sus familiares con quienes permanecen un par de meses. Las pocas familias completas que migran cada año, alrededor de unas cinco no pertenecen a la categoría de migrantes estacionales precarios como la gran mayoría de los migrantes de la zona, sino que más bien son familias de medieros en ascenso que han logrado cierta estabilidad ocupacional y económica en la Argentina.

GRÁFICO 4
MIGRANTES POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD. PINOS SUD, 1998

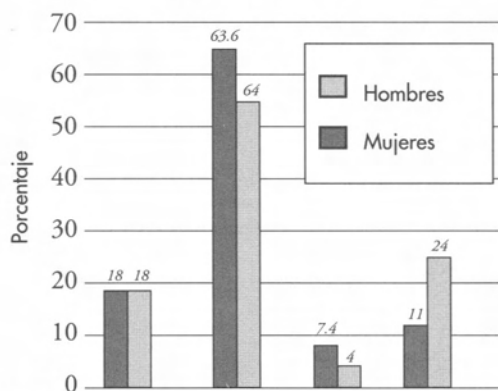


Fuente: Censo Demográfico de la comunidad de Pinos Sud. Tarija. 1999

Educación y ocupación.- En la población migrante de esta comunidad sobresale como principal preocupación la agricultura, y en segundo lugar, las labores de casa. Los que manifiestan otra ocupación conforman una cifra irrelevante, tan sólo el 2,4%. Al igual que en el resto de las otras comunidades sorprende la ausencia de ocupaciones como carpinteros, albañiles, artesanos o sastres. La cantidad de migrantes mayores de 11 años que se identifican como estudiantes es aún menor, es el 1,2% del total de migrantes.

Por otra parte, si bien la educación es percibida como un mecanismo de ascenso social, al mismo tiempo es vista como una actividad muy ajena a sus vidas cotidianas. En todo migrar temporariamente para trabajar en la agricultura parece haberse consolidado como una opción más práctica.

GRÁFICO 5
MIGRANTES SEGÚN SEXO Y ESCOLARIDAD
PINOS SUD, 1998

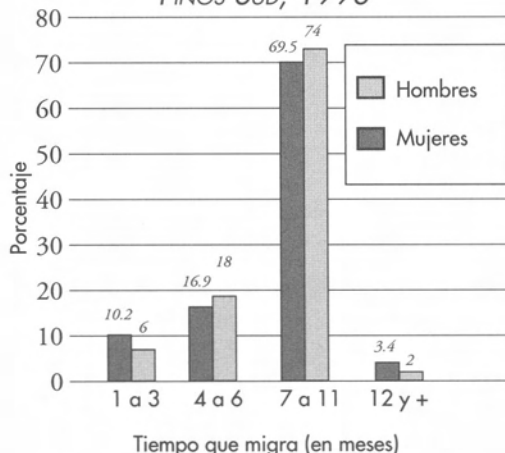


Fuente: Censo Demográfico de la comunidad de Pinos Sud. Tarija. 1999. Elaboración propia

Analizando el nivel de instrucción de los campesinos migrantes, resulta que el 63% de los hombres y el 54% de las mujeres ha cursado el cuarto y quinto curso de primaria, que es también el

último grado escolar al que se puede acceder en esta comunidad. Mientras que el 7,4% de los varones y el 4% de las mujeres ha continuado sus estudios en alguna otra comunidad, en la ciudad de Tarija y en ocasiones en la Argentina. Se quedan las personas mayores de 40 años, en su mayoría mujeres, que no asistieron a la escuela y el segmento de niños que todavía no están en edad escolar.

GRÁFICO 6
MIGRANTES POR SEXO Y TIEMPO DE
PERMANENCIA EN LA ARGENTINA
PINOS SUD, 1998



Destino y duración de la migración.- Los/as campesinos/as de Pinos Sud migran especialmente a dos zonas en el noreste argentino. En primer lugar a Fraile Pintado (Jujuy) y después a colonia Santa Rosa (Salta). en estas localidades, la primera situada a unos 17 kilómetros y la segunda a unos cien kilómetros de la población fronteriza de Bermejo, están asentados varios medieros y quinteros procedentes de la comunidad de Pampa Redonda, que ocupan principalmente mano de obra boliviana.

En los últimos años también viajan hacia Saravia (Salta) y Yuto (Jujuy), donde se estaría

expandiendo la producción hortícola. Otros destinos que atraen a menos personas son Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Tucumán. Los migrantes de Pinos Sud saben que los jornales son más elevados en estas zonas, pero tienen muy presente que los controles de gendarmería y policía son también más fuertes en las rutas y las quintas. Esto desanima a la mayoría que no tiene el documento de radicación, que les habilitaría para trabajar legalmente.

También entienden que a mayor distancia, mayores serán los costos de transporte y entonces sus escasos ahorros se reducirían. Por último y como mencionamos antes, aquellos que migraron hacia la ciudad de Tarija sólo suman el 1,3%.

Respecto al tiempo de permanencia del migrante en la Argentina, observamos que la mayor cantidad de frecuencias se da en el periodo de entre 7 y 11 meses, y en segundo lugar en el periodo entre 4 y 6 meses. La migración de las mujeres coincide en esa tendencia. Una reflexión sobre estos datos nos permite concluir que se trata de un periodo de tiempo relativamente extenso en el curso de un año.

Al mismo tiempo y de acuerdo a las entrevistas realizadas, cabe señalar la presencia de un número significativo de jefes de hogar que migran desde hace más de diez años a fin de conseguir un ingreso complementario para el sostén de su familia. Estos migrantes sólo permanecen al lado de su familia apenas un par de meses cada año. La ausencia de la figura paterna es en estos casos un elemento a tener en cuenta al analizar los impactos de la migración en el nivel familiar y comunitario.

De la misma manera, hay que hacer hincapié en las afirmaciones de los migrantes jornaleros, quienes insisten en que en que no piensan establecerse en la Argentina, "porque allá hay mucho sacrificio y trabajo y uno no se acostumbra, por-

que es otro ambiente". Sin embargo, se dan cuenta de que, al no encontrar otras alternativas, los próximos años continuarán viajando a la Argentina.

LA MIGRACIÓN TEMPORAL EN ZONAS CON RIEGO

Las comunidades que disponen de riego todo el año, muestran niveles moderados de migración, pero si analizamos el caso por edades, observamos que el cambio de lugar involucra a la mayoría de la población joven masculina y femenina y a jefes de hogar, principalmente varones. En los últimos años, las consecuencias del fenómeno de "El Niño", los bajos precios de los productos agrícolas tradicionales y la competencia de la papa introducida desde la Argentina, desincentivan mucho el trabajo agrícola.

Estas zonas productivas dedicadas a la producción de papa, haba y zanahoria comercializada en la ciudad de Tarija ocupan a gran parte de la mano de obra familiar, y se adquieren vehículos para el transporte público e incluso para costear la carrera en el magisterio rural de varios de sus miembros. En conclusión, son zonas que por el momento retienen a la mayor parte de su población. En el mediano plazo la fragmentación excesiva de la tierra y la presión demográfica van a generar una población excedentaria, la cual, al no hallar una demanda laboral en los centros urbanos de Tarija, seguramente se dirigirá de manera temporal a la Argentina.

LAS VISITAS DE DOBLE DOMICILIO

K. Paerregard utiliza ya el término "migrantes visitantes" en su investigación migratoria rural-urbana en el Perú (1992) para designar a aquellos campesinos que residen fuera de su aldea nativa, pero que viajan a ella para pasar algunos días o semanas cada año. Rescatamos la significación y utilidad del término, pero ante todo valoramos

el lenguaje local de los campesinos vallunos que consideran el retorno de sus parientes como visitas:

...Los que nos visitan son turistas que vienen a dejar un beneficio a la comunidad, gastan mucha plata cuando llegan (Don Lorenzo, Pampa Redonda).

La estadía en la comunidad por un par de meses (entre noviembre y enero) es el primer aspecto que diferencia estas emigraciones de las temporales ligadas al ciclo agrícola. Durante estos periodos cortos de tiempo, las visitas dedican la mayor parte de su tiempo a descansar y a reactivar sus vínculos sociales mediante fiestas, encuentros deportivos o ferias.

El segundo aspecto, que a la vez determina la proporción de este tipo de migrantes, tiene que ver con el trabajo específico que desarrollan en las quintas argentinas. Hablamos de medieros, arrendatarios y propietarios, que en la región se concentran de manera importante en la comunidad de Pampa Redonda.

Otros aspectos que tienen que ver con este particular tipo de migrantes son sus ingresos monetarios y su capacidad de gasto; experiencias migratorias coincidentes con periodos favorables en términos de cosecha, mercado o tipo de cambio; capacidad de previsión o manejo del riesgo en economías fuertemente mercantiles.

El manejo de espacios geográficos, económicos y culturales diferentes se manifiesta en el carácter de doble domicilio, vale decir, en la posesión de propiedades (casas, maquinaria agrícola, tierras y tinglados) tanto en la comunidad de origen como en alguna localidad del norte argentino. Manejarse óptimamente en economías de mercado produciendo tomates y pimentones con mano de obra asalariada, paquetes agroquímicos y obteniendo ganancias son aspectos que no

condicen con las características de la economía campesina de la cual proceden.

Todos estos elementos que constituyen el mediero, arrendatario o propietario (quintero), más allá de establecer peculiaridades migratorias, representan una búsqueda de oportunidades de parte de la familia, una racionalidad en el manejo de alternativas que sobrepasan los límites comunales, pero que a la vez mantienen los espacios simbólicos y afectivos como componentes de una nueva identidad, nacida en este continuo y que parece gozar de una territorialidad temporal.

EL CASO DE PAMPA REDONDA

Desde la óptica de la emigración rural tarijeña, la comunidad de Pampa Redonda se destaca por su magnitud en el valle central y en el departamento. La fama de los medieros y quinteros de Pampa Redonda cobra importancia cada año entre los meses que van de noviembre a enero, periodo en el que se visibilizan en sus camionetas Ford que regresan de la Argentina (básicamente de las localidades de Colonia Santa Rosa en Salta y Fraile Pintado en Jujuy), lo que así da notoriedad a su presencia en la ciudad de Tarija y es el eje central en la comunidad durante ese periodo.

A 25 kilómetros de Tarija, a una hora en bus, está la comunidad de Pampa Redonda. Administrativamente corresponde al cantón de Tolomosa, colinda con las comunidades de Churquis, Pantipampa, Puesto Tunal y Pinos Sud, que se distinguen por su agricultura a secano. De llegada a la comunidad, destacan las numerosas casas refaccionadas (de ladrillo, cemento o calamina) o aquellas que se hallan en fase de construcción. Alrededor de la escuela e iglesia se ha nucleado un conjunto de viviendas a lo largo de la ruta intercomunal. La escuela tiene el rango de núcleo y atendió a unos 117 niños en la gestión 1998 en los ciclos pre escolar y primario que llega hasta el octavo grado. Hace pocos años la co-

munidad logró beneficiarse con el tendido de una línea eléctrica gracias a su disponibilidad económica para cubrir los gastos de instalación, amén de gestiones personales con las principales autoridades departamentales, todo sin duda, gracias a la influencia de los migrantes exitosos del lugar.

Pampa Redonda puede definirse en términos agroecológicos como ganadera. Destina la poca producción agrícola a secano (maíz) para el autoconsumo familiar y del ganado. La mayor limitante de la zona es el riego, no sólo para la producción agrícola, sino también para los forrajes, dado que la transhumancia es el sistema bajo el cual se maneja al ganado.

El éxodo de jóvenes de Pampa Redonda a la Argentina cobra gran impulso en la década de los años 70:

Estará haciendo unos 25 años que ya han empezado a ir a la Argentina, o más capaz estará alcanzando a los 30 años, que han empezado a salir los jóvenes... mis hermanos -esos que han fallecido- ellos sabían ir, ellos eran jóvenes, sabían ir, pero era poca temporada que estaban allá, se iban el mes de mayo y volvían casi en octubre, no volvían a ir hasta mayo vuelta (Doña Inés, Pampa Redonda)

El inicio de este ciclo migratorio en la comunidad corresponde con la estacionalidad agrícola y pecuaria. Careciendo de riego, la base productiva agrícola a secano descansa en la papa, el maíz y el maní, que tienen como meses de siembra a noviembre y diciembre. Se cosecha de febrero a mayo inclusive. Al mismo tiempo el ganado es trasladado al "monte", tradicionalmente a Tariquía, entre mayo y junio y devuelto a la zona en noviembre y diciembre, luego de las primeras lluvias que garantizan los pastos.

Estos datos refuerzan la idea de que la migración es un proceso continuo, ligazón/tránsito de

la estacionalidad al cambio de eje productivo, pero no afectivo. El lugar de destino de esa generación de migrantes era las provincias de Salta, Jujuy y Corrientes, Santa Fe y Mendoza. La consolidación y ascenso social, producto de la obtención e inversión de excedentes económicos derivados del cultivo de tomate y pimentón, se da a mediados de los 80 y principios de los 90. Así empiezan a expandirse los medieros y su entorno familiar, para después pasar de la mediería al arrendamiento y en algunos casos acceder a la compra de tierras (propietarios quinteros).

Hay aquí patrones grandes (...) ellos llevan a Santa Rosa y Fraile (...) ellos alquilan tierras, como tienen sus camionetas van y vienen, tienen capataces, ya sólo van a ver qué falta en una y otra finca. Se alquilan 70-80 Has. de puro tomate en varios lugares, no está en una sala parte, ya son capos. Su patrón grande lleva 60-70 personas. (Don Cardozo, Pampa Redonda).

El tiempo de migración actual de la unidad familiar plantea un problema: los niños y la escuela. El 23% de los niños comprendidos entre los 0 y los 10 años migra entre 7 y 11 meses a la Argentina. En la perspectiva psicopedagógica de su desarrollo, si bien presentan un alto grado de adaptación, los conflictos se presentan con mayor intensidad en la construcción de nuevas identidades.

Cuando vuelven (los niños) a veces ellos se identifican con la Argentina, pero como están más cerca a los parientes, se sienten más bolivianos (Don Adolfo, Pampa Redonda).

En esta vertiente de análisis, Calderón menciona: "Entre Bolivia y Argentina ha nacido un tercer país (...) son (ciudadanos) profundamente bolivianos, pero son más que bolivianos, y sus

hijos son profundamente argentinos, pero son un poco más que argentinos ("La Razón", 21/3/99), idea que la iremos trabajando más adelante.

Inmersa en esta dinámica actual, la escuela es el caldo de cultivo de potenciales migrantes, en definitiva es un vivero de migrantes.

Desde los 16 y 17 años, terminando tercer intermedio llegan a irse a la Argentina (Profesor, Pampa Redonda).

El fuerte referente de la Argentina en la cultura y economía regional incita de manera casi natural a transitar las fronteras, no sólo de los espacios geográficos, sino también de las temporalidades. Para el adolescente campesino, ir a la Argentina es el rito de iniciación. Resulta por demás significativo el hecho de que ningún joven de hoy haya pasado por el "servicio militar", porque éste es considerado como un año económicamente perdido. La valoración de los jóvenes de 18 y 21 años, gira en torno a una lógica económica. Para alguien que a sus 15 años, migrando seis o siete veces al año, logra ahorrar mil dólares, lo cual en su comunidad o en Tarija es imposible, resulta coherente actuar bajo estos preceptos antes que obedeciendo al llamado de la patria, aunque ésta será valorada en otras dimensiones. En definitiva, la *ciudadanización* de estos jóvenes campesinos no tiene por referente el cuartel, sino la quinta hortícola del norte argentino.

Hacia la década de los 80, medieros y quinteros arrendatarios concentran sus relaciones e inversiones económicas (terrenos agrícolas, casas, maquinaria e infraestructura productiva para la agricultura) en dos zonas ya mencionadas del norte argentino: Colonia Santa Rosa y Fraile Pintado, sin que esto les niegue su presencia en otros lugares de la Argentina como Río Negro, Mar del Plata, Corrientes o Escobar.

Un modelo de quinta hortícola, en tanto empresa agrícola de propiedad de un oriundo de Pampa Redonda, puede abarcar 30 hectáreas productivas, de las cuales entre siete y nueve se hallan bajo cubierta, es decir en forma de invernaderos que aseguran y maximizan la producción, sobre todo de tomate y pimentón.

El recurso humano que involucra esta unidad productiva consta de más o menos 40 peones, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 24 años de edad. Existen también algunos mayores, de los cuales sólo dos o cuatro trabajadores provienen de Chuquisaca (de sus regiones más tarijeñas: Camargo y Culpina) y la gran mayoría son del VCT, incluido el capataz, en cambio el administrador que cumple obligaciones diversas (pagador, con los clientes o apoyo en el trabajo de campo) es argentino.

Las quintas de la zona de Santa Rosa suelen albergar a los peones en barracas de diverso grado de precariedad, sin embargo también existen en la localidad "barrios bolivianos". Algo inverso se da en Fraile, donde peones medieros y arrendatarios suelen volver luego de la jornada de trabajo al centro poblado, ya sea a los galpones o a sus cuartos.

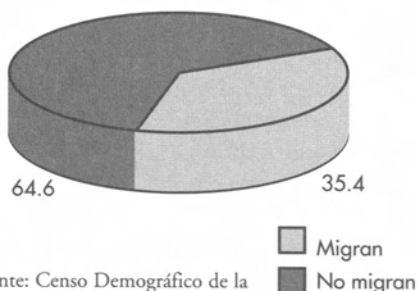
Luego de un recorrido por la zona, lo que se puede concluir sobre las quintas hortícolas, ligadas a mercados sólidos del norte argentino, es:

- La empresa hortícola ligada a mercados sólidos del norte alberga a todos los migrantes, sobre todo chapacos.
- En la zona de Santa Rosa y Fraile la emergencia de medieros y quinteros es muy significativa, lo cual incide en la productividad regional, mediante la dotación de la mano de obra, tecnología, insumos y la expansión de la frontera agrícola.
- Las relaciones de parentesco (a nivel familiar y comunal) estructuran un sistema económico

transterritorial basado en la producción de tomate y pimentón, donde la “performance” de los Pampa Redondeños es singular.

Datos migratorios.- En diciembre de 1998, en un censo demográfico, registramos en Pampa Redonda 1.001 habitantes pertenecientes a 206 familias, de las cuales 647 (el 64,6%) migraron a la Argentina ese año, tal como podemos ver en el cuadro siguiente:

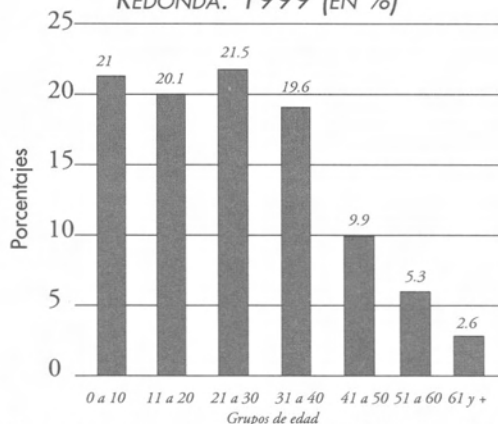
GRÁFICO 7
MIGRACIÓN EN PAMPA REDONDA
1998 (EN %)



Fuente: Censo Demográfico de la comunidad de Pinos Sud. Tarija. 1998. Elaboración propia

Analizando el sexo de los migrantes, nos encontramos con que el 70,1% de los hombres migraron en 1998, mientras eso sucedió sólo con el 58,8% de las mujeres. Como veremos en el gráfico siguiente, la mayoría de los migrantes convertidos en medieros y productores arrendatarios y unos cuantos propietarios, viajan con toda su familia para trabajar en la Argentina. Algunas de sus casas son dejadas bajo el cuidado de vecinos o “caseros” provenientes de las zonas altas y son ocupadas apenas durante dos o tres meses al año. Los que permanecen en la comunidad son los familiares de mayor edad, y parte de las mujeres encargadas del cuidado de sus hijos menores.

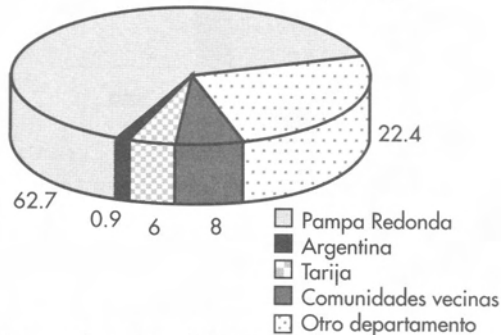
GRÁFICO 8
MIGRACIÓN POR EDAD. PAMPA
REDONDA. 1999 (EN %)



Fuente: Censo Demográfico de la comunidad de Pinos Sud. Tarija. 1999. Elaboración propia

Los grupos de edad entre 1 y 10, y 1 y 40 concentran más del 80% de los migrantes. Los primeros medieros y productores arrendatarios tienen hoy más de 40 años. Sus hijos continúan organizando la producción en las quintas. Los abuelos y algunos padres suelen viajar por un periodo de dos o tres meses para visitar a sus hijos y nietos, pero no desarrollan una actividad laboral.

GRÁFICO 9
LUGAR DE NACIMIENTO. PAMPA
REDONDA. 1998 (EN %)

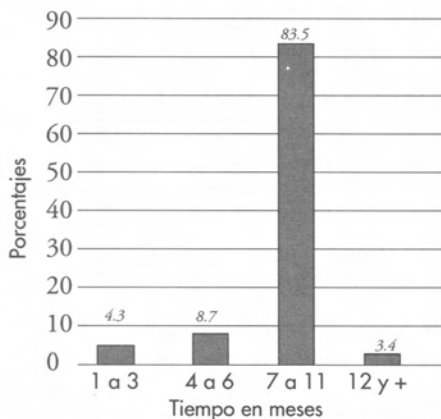


Fuente: Censo Dem. de la comunidad Pampa Redonda.

Pampa Redonda es una de las comunidades del VCT que tiene la mayor cantidad de habitantes nacidos en la Argentina. El 22,4% nació en ese país, pero comparte la característica de ser joven. Los mayores no sobrepasan los 25 años. El nacimiento de sus hijos en el país vecino con frecuencia facilitó a sus padres la posibilidad de obtener el permiso de residencia para ellos y el resto de sus familiares.

Según el gráfico 10, el 83,5% de los migrantes permanecen entre 7 y 11 meses en la Argentina. Su regreso, más que con las labores culturales, coincide con la época de fiestas y la temporada de descanso para aquellos que trabajan en Fraile Pintado (Jujuy) y Colonia Santa Rosa (Salta). Según sus comentarios, el verano tarijeño es más agradable que el demasiado cálido vivido en el noroeste argentino.

GRÁFICO 10
DURACIÓN DE LA MIGRACIÓN.
PAMPA REDONDA. 1998 (EN %)



IMPACTOS SOCIO-CULTURALES

La migración campesina del VCT con destino a la Argentina tiende a incrementarse. Las mujeres jóvenes se están incorporando en los flujos migratorios para trabajar en las quintas

hortícolas y como empleadas domésticas en las ciudades más grandes. La caída de la productividad de los cultivos tradicionales (maíz y papa), la parcelación de la tierra, y precariedad del mercado tarijeño, desincentivan en los campesinos más jóvenes la idea de continuar el trabajo agrícola. Los migrantes campesinos abandonan sus comunidades desde los 12 años para trabajar como jornaleros en las quintas, la ausencia de oportunidades de estudio y ocupación en Tarija influye en una migración más temprana.

Los familiares que residen en las comunidades de origen reciben un importante flujo monetario de parte de los migrantes en la Argentina, dinero que es utilizado en la compra de alimentos, muebles y vestimenta y en el pago de los servicios básicos instalados en los dos últimos años (agua potable y luz eléctrica) o la adquisición de vehículos para el transporte público. Muchas familias no podrían subsistir la mayor parte del año si no recibieran estas remesas. Al mismo tiempo, jefes de hogares que migran desde hace 10 o 15 años viven alejados de sus familias durante ocho o 10 meses al año, lo que implica una cierta desarticulación familiar y comunitaria cuando la migración es masiva.

Los jornaleros gastan sus ahorros en el mantenimiento de sus familias. Su consumo está dado por la compra de comestibles (aceite, azúcar, fideo, arroz y algunas verduras), la adquisición de muebles y electrodomésticos, vestimenta así como en la participación en festividades comunales. El consumo de bebidas alcohólicas es notable, en especial de cerveza, que es un producto relativamente caro para el área rural. Se consumen cada vez más productos elaborados fuera de la comunidad (vino, cerveza, incluso verduras y el pan son a menudo traídos desde la ciudad de Tarija). Algunos migrantes exitosos esperan poder invertir parte de sus ahorros en alguna actividad comercial o productiva en la ciudad de Tarija o sus

alrededores, pero no en sus propias comunidades. Los migrantes de mayor edad son los que consideran la posibilidad de un retorno definitivo a sus comunidades. Todos los jornaleros migrantes que entrevistamos en Salta y Jujuy afirmaron que no tienen la intención de quedarse a vivir en la Argentina. La precariedad de su inserción laboral, la separación de sus familias, la falta de documentos de radicación y su no integración con el resto de la sociedad argentina, los hace sentirse ajenos al lugar donde trabajan. Varios manifestaron que una de las intenciones por las cuales viajaron a Argentina fue para conocer ese país, pero no para quedarse a vivir ahí.

Los medieros atraviesan un periodo de fuerte inestabilidad como resultado de los riesgos climáticos, la fluctuación de los precios y su escasa participación en las ganancias. Varios de ellos nos informaron que las condiciones de negociación con los patrones han empeorado en la última década. Actualmente reciben entre el 20 y el 30% del producto comercializado. Los medieros que fracasan durante un ciclo agrícola a menudo deben conseguir empleo como embaladores o tanteros a fin de pagar sus deudas y comenzar a ahorrar de nuevo.

Se constata la presencia de un creciente número de migrantes con niveles importantes de ahorro. Los montos varían entre los centenares y los centenares de miles de dólares. Los quinteros que están en posibilidades de ahorrar mayor cantidad de dinero, lo invierten en la Argentina en la compra de camionetas, maquinaria agrícola, semillas y fertilizantes. Los más acomodados han comprado casas donde residen la mayor parte del año con su núcleo familiar. Este segmento "exitoso", cuya característica migratoria la hemos definido como de "búsqueda de oportunidades", está constituido por productores "arrendatarios" y propietarios se han consolidado económicamente y administran sus quintas con una visión "em-

presarial" y ya no campesina. Ocupan una cantidad importante de mano de obra tarijeña y chuquisaqueña. Los más acomodados invierten fuertes sumas de dinero en la incorporación de adelantos técnicos (riego por goteo, invernáculos, semillas híbridas, etc.) y expansión de la frontera agrícola. El dinero que gastan en sus comunidades es muy pequeño en comparación con el que invierten en la Argentina y lo destinan sobre todo a apadrinar fiestas sociales, clubes de fútbol, comprar cantidades importantes de alimentos para sus padres así como a vincularse con el centro urbano de Tarija.

El futuro a mediano plazo de los migrantes tarijeños, jornaleros y medieros insertados en la producción hortícola en el norte argentino es una incógnita, porque están inmersos en un proceso no consolidado, por el momento viven y trabajan entre dos mundos cultural y económicamente diferentes.

BIBLIOGRAFÍA

Antezana, Fernando, 1966, *Braceros bolivianos: Drama humano y Sangría nacional*, ed. Ichthus, La Paz.

Albó, Xavier, Sandóval Godofredo y Greaves, 1981, *Chuquiyawu: La Cara aymara de La Paz*, vol. 4, Cipca, La Paz.

Balán, Jorge, 1980, *Migraciones temporarias y Mercado de Trabajo rural en América Latina*, Cedes, Buenos Aires.

1992, *The role of migration and social networks in the development of migration system in the southern cone*, en Kritz, Mary, Lin, J.; Zilkotnik Hania e.d. International migrations system. A global approach, Nueva York, Oxford.

Blanes, José et. al., *Bolivia: Agricultura, Pauperización, Proletarización y Diferenciación campesina: una Reflexión teórica en torno al Problema de las Migraciones y Colonización en Bolivia*, de. Ceres, La Paz.

Benencia, Roberto y Karasik, Gabriela, 1995, *Inmigración limítrofe: los Bolivianos en Buenos Aires*. Centro Editor de América Latina, colección Biblioteca Política Argentina, N° 482.

Benencia, Roberto, 1999, *Migrantes bolivianos en el Mercado de Trabajo rural bonaerense: Estrategias de Movilidad social*.

Carrillo de Bono, Ivone, 1995, *Aproximaciones al Estudio de la Corriente migratoria de Origen boliviano en las Provincias de Salta y Jujuy*. Período 1895-1960. UNJU Universidad Nacional de Jujuy.

Codetar, 1992, *Diagnóstico social de la Zona del Valle de Tarija*, Gerencia de Desarrollo Agropecuario, Tarija.

1995, *Diagnóstico agropecuario de la Cuenca del Río Tolomosa*, Cepsa, Tarija.

1996, *Control de Sedimentos en la Cuenca del Río Tolomosa*, Tarija.

Corrado, fray Alejandro, 1990, *El Colegio franciscano de Tarija y sus Misiones*, Tomo I y II, De. Franciscana, Tarija.

Cortés, Geneviève, 1998, *La Emigración, estrategia vital del Campesinado*, Revista Tinkazos # 1, PIEB, La Paz.

Dandler, Jorge y Medeiros, Carmen, 1991, *Migración temporal de Cochabamba, Bolivia a la Argentina: Patrones e Impactos en las Áreas de En-*

vío, en Patricia Pessar (comp.). *Fronteras permeables*. Planeta, Buenos Aires.

Gutiérrez, José Félix, 1989, *Tenencia y Uso de la Tierra en el Departamento de Tarija*, Cedla, Tarija.

Giannechini, fray Doroteo, 1996, *Historia natural, etnográfica, geográfica, lingüística del Chaco boliviano*, Ed. Tupac Katari, Sucre.

Guevara, Jean Paul, 1999, *Migraciones: Agenda boliviana para el Siglo XXI a partir del Caso tarijeño*, La Paz, mimeo.

INE, 1993, *Censo Nacional de Población y Vivienda 1992*, Tarija, Resultados finales, vol. 6, mayo, s/l.

Meillassoux, Claude, 1971, *Mujeres, Graneros y Capitales*, Ed. Siglo XXI, México.

Mingo de la Concepción, fray Manuel, 1996, *Historia de las Misiones franciscanas de Tarija entre Chiriguano*, tomos I y II (2° edición), Ed. Universitaria, Tarija.

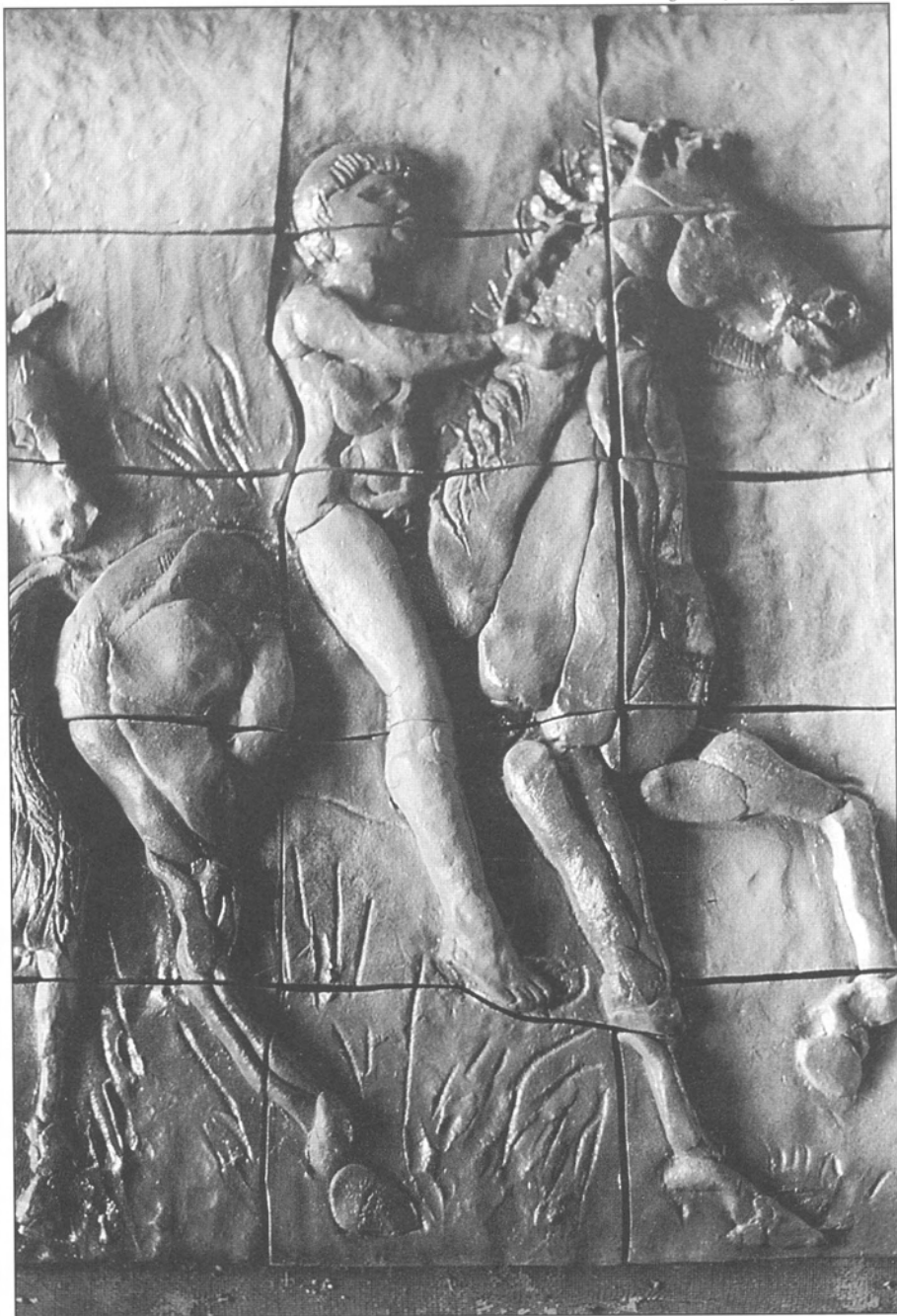
Paerregard, Karsten, 1992, *Imaginando un Lugar en Los Andes: en la Frontera de lo vivido, inventado y Culturas analizadas*, s/l.

Preston, David, et. al., 1995, *Documentos de Trabajo* (investigaciones realizadas en la Cuenca del Río Camacho, 1993-1995, Tarija.

La Emigración dentro de las Estrategias de Vida en el Valle del Río Camacho: la Transnacionalización de los Campesinos posmodernos, Leeds UK, mimeo.

Reboratti, Carlos, 1996, *Sociedad, Ambiente y Desarrollo regional en la alta Cuenca el Río Bermejo*, Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires.

Lorgio Vaca. Jinete Chaqueño. (Detalle)



Ser “chango” en El Alto: entre el rock y los sikuris

Rafael Archondo

Estos chicos y chicas están hechos de flexibilidades enloquecedoras. Por la mañana ensayan con música autóctona, en la tarde manipulan computadoras y por la noche se besan en una esquina, minutos antes de correr a la discoteca, donde bailan tecno con acrobacia de vértigo. Entre un ritmo y otro preguntan dónde se arriendan los mejores trajes para la morenada, mientras compran el último disco de Luis Miguel. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones en El Alto?

Adrián Ticona es un típico “rockalla”¹. Sus padres llegaron a esta ciudad hace diez años, cuando él apenas cumplía siete y sólo quería olvidarse de la provincia Pacajes, lugar adonde a veces va a visitar a sus abuelos, que lo contemplan como si fuera un extraterrestre. Y es que a Adrián le cuelgan del cinturón unas cadenas plateadas. No sueñan tanto como uno podría imaginarse, porque el pantalón le queda ancho...anchísimo. Cuando su “vieja” lo vio así, con los botapiés hechos hilachas de tanto arrastre al ras del suelo, pensó que el “chango” se había equivocado de talla y que por tímido no había podido devolvérselo a la vendedora. Nada de eso, Adrián quiere lucirse así por todo lado. Lo atestiguan sus dos aretes, el tatuaje en el hombro y los últimos “kits” reebok

“truchos” que se compró ayer por el mercado de la riel.

En los enormes bolsillos le cabe bien la lata de pintura de aerosol, esa que agita por las noches cuando quiere escribir su nombre y el de sus “cuates” en las paredes. La “gran BU” al centro y las firmas de todos, cual rayos de un sol excéntrico. Adrián está en la mejor pandilla urbana de todos los tiempos. Ah...me olvidaba, ayer logró sacar en zampoña el último éxito de los “Azul Azul”. Cuando lo sepan en su grupo de “khantus”, fija que lo felicitan. En una semana más tienen que ir a tocar al preste de sus “viejos”. Ahí la pasan tan bien como en la discoteca más heavy de la zona 16 de Julio. Y es que no hay lugar donde no haya una ñata buena, que se anime a relajear.

1. Si usted no entiende alguna palabra, no se angustie, acuda al “breve diccionario para los viejos” que publicamos en las siguientes páginas.

De esa manera parecen pronunciarse las existencias juveniles en El Alto, esa ciudad nueva e ignorada, una especie de gigantesco patio trasero de La Paz y una gran pista migracional de aterrizaje para las provincias del altiplano y el sur del país.

Y quizás “rockalla” sea la palabra ideal, algo de rock y llockalla a la vez, una vida estrujada por dos fuerzas equivalentes en seducción: el mundo de los padres, poblado de polleras, sombreros, aymara, cerveza, mixtura y abrazo comunitario y el de la globalización, lleno de consumos caros, blue jeans, simulacros, comidas rápidas, ropa estafalaria, sexo libre, música en inglés y discursos como rascacielos.

Los jóvenes alteños están cruzados por dos fuegos y de ambos extraen el calor que los funde como únicos. ¿Son estos “changos” la cabeza de playa de la extinción final de la cultura paterna? o ¿no serán acaso la única forma realista de mantener viva la herencia cultural aymara en contextos urbanos cada vez más internacionalizados?

Las ciencias sociales ya atisban sobre este mundo complejo y cuentan con algunas respuestas para tales inquietudes. El siguiente coloquio es parte de ello. Han llegado hasta nosotros Germán Guaygua, Máximo Quisbert, Alfredo Balboa y Mario Rodríguez. Todos ellos tienen algo en común: su interés académico y vivencial por la existencia creativa de estas nuevas generaciones. Los dos primeros compartieron un proyecto de análisis financiado por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), el tercero escribió sobre el concepto de “chojcho” y el último trabaja con el movimiento juvenil alteño, el llamado *underground* rockero congregado en torno al Wayna Tambo, un boliche cultural situado sobre esas alturas.

Los cuatro nos llevaron de la mano por las casas, zaguanes, calles, discotecas y escenarios públicos de los muchos «Adrián Ticona» con que

empezamos esta historia.

LA LUCHA ENTRE PADRES E HIJOS

Máximo Quisbert es bueno para describir situaciones cotidianas, aquellas vividas con intensidad dentro de las casas de adobe y ladrillo, cortinas de nylon, puertas de hojalata y patio interior con olor a ropa lavada.

Todos los padres son muy parecidos en los hogares migrantes de El Alto. Hay un retrato retocado de ambos en la sala, ella con su mejor manta celeste, el topo de oro, el sombrero ladeado y la mirada triste; él, con la sonrisa discreta, el terno gris con chaleco interior y la escarapela tricolor sobre la solapa. Se casaron muy jóvenes y trabajaron de sol a sol para financiarse el prestigio otorgado por la posibilidad de organizar las fiestas más sonadas de la zona, portaron a la Virgen en andas y no hay vecino que no los salude con una venia. Pero Máximo se interesa por sus hijos. Los imagina en la calle o la plaza, junto a sus amigos y pares, refugiados allí donde los brazos de la autoridad no alcanzan a llegar. En esos sitios pueden hablar con una libertad siempre negada en domicilio. “Allí expresan lo que piensan, hablan de sus chicas o si alguien les gusta. En la familia eso no puede hacerse, porque el papá o la mamá tienen la percepción cultural de que el hijo debe ser obediente y disciplinado. Por eso en la familia, por ejemplo, no se habla de la sexualidad”, advierte Máximo. Así es. Entre las familias migrantes asentadas en El Alto y lógicamente en las que les dieron origen y se quedaron en el campo, el joven está hecho para acatar órdenes sin chistar. No es raro entonces que a la primera oportunidad, salga a buscar un poco de oxígeno a la calle.

Máximo prosigue con su descripción. Si un padre o una madre ven a su hija hablando muy seguido con un chico de su misma edad, no sólo suponen de inmediato que es su novio, sino que

es el hombre que regirá lo mucho que le resta de vida. “Eso pasa, porque ellos nunca han tenido varios novios, a la primera o segunda ya se han casado, pero en la generación de sus hijos, ellos empiezan a enamorarse a los 12 o 14 años y pueden tener varias relaciones sentimentales antes del matrimonio”, agrega nuestro coloquiante.

No hay duda, es un vuelco fundamental. La manera de entender el amor ha cambiado radicalmente de padres a hijos. Para los primeros, el énfasis estaba puesto en el matrimonio como una alianza pragmática para enfrentar los desafíos de la existencia material, mientras para los segundos es más importante el cimiento sentimental y el ingrediente romántico.

Este desencuentro produce una lluvia de palizas, llantos y desgarramientos internos. La brecha entre generaciones engendra dolor y resentimientos. Máximo cuenta por ejemplo que “los papás no conciben que sus hijos vayan a las discotecas”. Entienden que en ellas sus herederos pueden desviarse de la senda recta, toparse con malas amistades, perder el juicio en medio de la farra y extraviar por ahí los valores del trabajo y el estudio. ¿Cómo podrían entender lo que sucede en esas pistas de baile mal iluminadas si nunca fueron por allí cuando tenían esa edad? Son consumos que los padres no comparten y que obligan a arduas negociaciones entre ellos y los chicos. Cuando éstas fracasan, vienen en auxilio las mentiras más convencionales. “Papá, estoy yendo a escuchar misa”, “mamá, tengo que

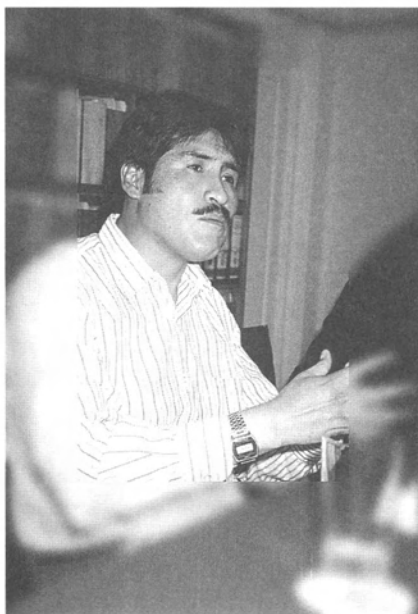
ir a hacer tareas a la casa de la Julia”..., son los “papos” que les “clavan” a los “viejos” o, dicho en difícil, estrategias de libertad en contra de una rigidez exagerada y recelosa.

Mario Rodríguez encuentra la ocasión propicia para intervenir. Sobre esas negociaciones intergeneracionales tiene una idea sólida en mente y la plantea sin demora. Está de acuerdo en que hay un conflicto constante entre padres e hijos, pero no cree que el paisaje esté completo si sólo nos quedamos con aquello. Y es que Mario también detecta negociaciones silenciosas entre partes, espacios de complicidad nunca confesados.

Por ejemplo, en las familias campesinas de origen, aquellas que quedaron atrás después de la migración a la ciudad, los chicos y chicas se enamoran a escondidas bajo un manto similar de disimulos. La mayoría de las parejas en el campo se construyen a hurtadillas y en esquivada nocturnidad. Lo curioso es que los padres lo saben, pero prefieren fingir ignorancia a fin de preservar el brillo de su autoridad.

Según Mario, aquel «hacerse de la vista gorda» de los mayores ante las

discretas travesuras de los jóvenes es una costumbre muy arraigada en el mundo andino y lo único que ha hecho es mudarse a la ciudad. Lo importante es que los besos se den a escondidas, pues si más gente de la necesaria se entera, entonces se habrá manchado la reputación del mundo adulto. «Mientras no sea público ni les reste autoridad, los padres se ha-



Alfredo Balboa

cen a los locos. El problema es si se llega a saber, recién entonces se les ha faltado al respeto», añade Mario. Similares ejemplos podrían encontrarse en El Alto, donde nuestro coloquiante está seguro de que los padres conocen el paradero de sus hijos, pero prefieren guardar sus armas represivas para ocasiones más apremiantes. Esas son las negociaciones amparadas por los supuestos y las sospechas, esas que están vigentes mientras no salgan a la superficie.

Este mecanismo tiene una clara razón de ser. Dado que en El Alto la brecha entre padres e hijos es tan profunda, estas mudas tratativas permiten acortarla y hacer que la vida familiar sea más soportable.

CONSUMOS QUE NO SE COMPARTEN

Como muchas otras, en diversos sitios del mundo, la juventud alteña es una máquina de distinciones. Mientras más se compara con sus padres y congéneres, más pugna por diferenciarse de ellos. Alfredo Balboa toma la palabra para hacernos notar que la ropa distinta, los ritmos musicales estridentes y los accesorios estafalarios son la receta precisa para no confundirse ni con sus progenitores ni con los otros jóvenes de barrios, clases sociales o gustos distintos. La meta más añorada aquí es el ascenso social simbólico, escalar lo más alto posible para mirar desde arriba a sus similares.

En este tren, en el que arrecia la sed juvenil por adquirir avalorios que acrediten diferencia, los medios de comunicación son el mejor de los

manantiales. Balboa recuerda que de allí, los «changos» extraen códigos, modas, posturas y formas de pronunciarse en público. Es cuando más abiertos están a las influencias provenientes de mundo exterior a la familia. En este contexto, se cotizan muy alto valores como la sensualidad entre las mujeres o beber tragos y pelear a puñetes entre los varones.

Y surge aquí un detalle interesante. Mario Rodríguez advierte que la juventud se congrega o separa por lo que compra y exhibe. El consumo es el emblema que aproxima o distancia a los jóvenes de todos los sitios. Y

resulta que de pronto «changos» de distintas clases sociales aparecen consumiendo los mismos productos en medio de un marasmo de idénticos gustos y subculturas juveniles. Así, sin importar mucho el grosor de las billeteras o la pulcritud del barrio en el que se habita, chicos y chicas de la misma afición y predilección se juntan con menos reparos que sus pares clasistas adultos.

Mario registra varios ejemplos de estos desplazamientos interclasistas. Sucede que si alguien quiere entrar de lleno en la onda tecno, está obligado a visitar una gran discoteca de referencia,

situada en la zona 16 de Julio de El Alto y aquí no importa si uno toma el minibús desde el respingado Calacoto o el aseado La Florida. De igual manera, los muchachos de la zona oeste paceña tienen una especial debilidad por los locales de baile de la Ceja de El Alto, mientras los pandilleros de las poderosas «la gran BU» o «Car-



Germán Guaygua

tel Central» pugnan por copar el territorio en el que destella la discoteca «Espaguetti» de Alto Cementerio. Y como si estas acciones nómadas no bastaran, los hijos de embajadores y acaudalados señores de La Paz suben a tocar rock en los boliches más *underground* de las alturas alteñas. «La estratificación social se mantiene, pero los consumos similares han llevado a reposicionar y recomponer la ciudad acercando clases sociales diferentes», teoriza Mario.

Pero ¿por qué los jóvenes hacen más poroso el muro que divide a ricos y pobres? La respuesta es simplemente fascinante. Mario pide no olvidar que uno de los emblemas de la juventud es esa loca gana de romper las cristalerías de lo sagrado. Mientras más rebelde el gesto de la muchachada, más sólida su afiliación generacional. Transgredir, desbaratar, irritar y subvertir son los verbos predilectos de los «changos» en cualquier latitud. Si vemos así las

cosas, queda clarísimo el valor de la discoteca de suburbio, del boliche destartado o de la huida hacia los arrabales. Los jóvenes se sienten más leales con su época cuando transgreden las normas y excursionan por los linderos de lo nefasto y riesgoso. «Siempre se mira como inferior lo que está cada vez más arriba, así, la transgresión se transforma en un articulador juvenil muy fuerte», refuerza Mario. Por todo eso, hay que ver el poder magnético que posee un concierto de rock interpretado dentro de un tambo alteño y lo con-

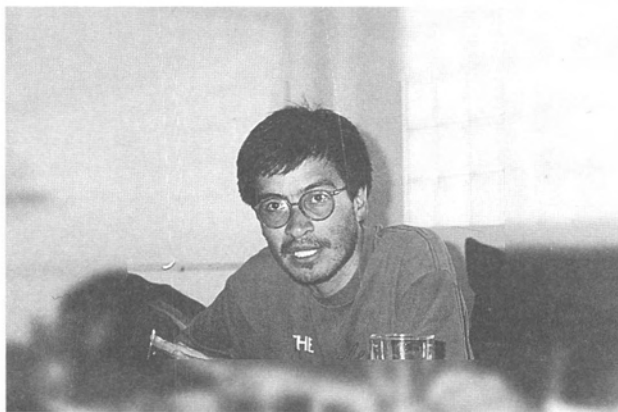
vencional e inofensivo de uno similar realizado bajo los controles adultos en el centro de La Paz. En ese sentido, lo desarrapado, marginal, enigmático y cruel se torna en un auténtico imán generacional. En esta estamentaria sociedad colonial, quizás sólo los jóvenes sean capaces de diluir, aunque sea por breves momentos, las demarcaciones de la piel y los billetes, y de poner a lo socialmente inferior como una meta deseable en la perspectiva de irritar a la maquinaria adulta habituada a la segregación.

Pero las cosas en este caso tampoco son tan sencillas. Si pensamos que lo único válido son estos puentes entre clases sociales, estaríamos vién-

dolo todo con un solo ojo. El propio Mario se encarga de hacernos notar que, aunque debilitadas, las diferencias sociales interjuveniles se mantienen. Para percibirlo basta con presenciar los ya mencionados conciertos de los chicos de barrios residenciales en El Alto. Mario informa que si bien los «chan-

gos» de la «high» son bien recibidos en las alturas, el público plebeyo no termina de integrarse a su espectáculo, y no es que no les guste la música, es que las murallas sociales no alcanzan a desplegarse del todo pese al socavamiento generacional.

Una muestra de ello es lo que sucede con el movimiento rapero alteño. La mayor parte de los jóvenes adscritos a esta subcultura de la agilidad acrobática viven en Ciudad Satélite, el barrio más próspero de la ciudad altiplánica. Esto se explica,



Mario Rodríguez

cuenta Mario, porque los consumos signados por el rap demandan mucho dinero. Así, un pantalón original de esta tendencia se cotiza en unos cien dólares, lo cual excluye de cajón a los jóvenes de los demás conglomerados barriales de El Alto. Es por eso que los raperos de «Satélite» se identifican más con La Paz que con sus vecinos próximos. Vemos aquí la faz contraria de hace un momento, un trasvase de identidades al margen del territorio pero, esta vez, dentro de una clase social en común.

NO SEAS COMO YO

Pero he aquí que quienes más alientan el ascenso social simbólico de los «changos» son los que más tarde lo lamentan, nos referimos nada menos que a los padres. En efecto, ningún migrante adulto quiere que sus hijos sigan sus pasos, pero cuando los ven en exceso distintos y apartados de las tradiciones familiares, entonces se arrepienten y le ponen freno a sus deseos de ascenso por encargo.

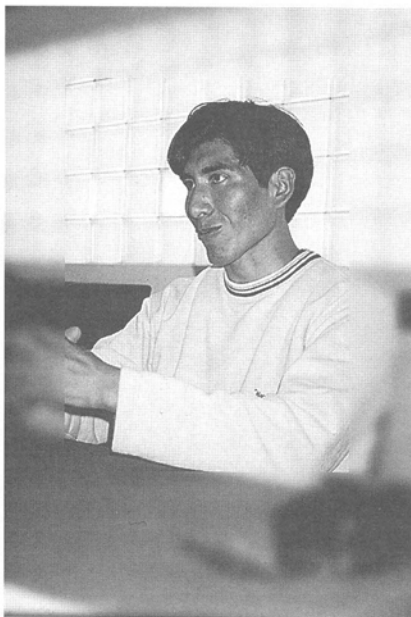
Máximo Quisbert le llama a eso el «doble discurso paternal». En labios adultos, la recomendación reza «no seas como yo, porque sino vas a sufrir y ser marginado». Es la manera pragmática y prospectiva de eludir una herencia que consideren perjudicial. Así, los padres son los primeros en negar sus propios valores e impulsar a sus vástagos a que sean diferentes, se olviden del aymara, acudan a los colegios más caros, aprendan inglés y se adhieran a los cultos de consumo occidentales. Pero el entusiasmo paternal se extingue cuan-

do los «changos» se consagran de cuerpo entero al baile, al ocio, a los amores fugaces e intensos, a la moda subvertora y hasta a la estética «chicana». En ese instante se redoblan las incomprendiones, los controles y las riñas.

Germán Guaygua agrega que detrás del conocido «no seas como yo», anida la exigencia de que el hijo tenga el mayor acceso posible a un capital escolar más alto que el de los padres. Sin

embargo, cuando el cumplimiento de esta meta pone a sus herederos en «peligro» de convertirse en eternos estudiantes y potenciales «vagos», entonces llega la hora de ponerle una valla a tanta libertad con los libros. Guaygua cuenta que los padres saben detectar con claridad cuando un título académico se ha devaluado lo suficiente al extremo de ser inútil en el hallazgo de empleo. En vez de ver a su hijo convertido en uno de los cientos de bachilleres alteños, muchos mayores prefieren engancharlos en un taller de mecánica o como ayudantes de una fábrica a fin de que aprendan habilidades mucho más prácticas y lucrativas que

un conocimiento formalizado, pero sin rumbo cierto en el contexto suburbano. En esos casos, la frase «quiero que mi hijo aprenda a trabajar» es capaz de sobreponerse a la negadora y originaria «no seas como yo». De esa forma, la ética del trabajo, un valor muy profundo en el mundo andino es capaz de moderar las ansias irracionales de ascenso social.



Máximo Quisbert

EL RETORNO A LA CUNA

Hasta aquí hemos descrito los conflictos y forcejeos entre padres e hijos en El Alto. También hemos pasado revista a ese afán juvenil por la diferencia, alentado y más tarde lamentado por sus mayores. Germán Guaygua no está dispuesto a dejar las cosas en ese estado. Por eso lanza a bocajarro la primera conclusión del trabajo de investigación compartido con Máximo Quisbert y un equipo de respaldo. Adelanta que a pesar de esos signos irrefutables de «alienación» cultural prevalecientes entre los jóvenes aymaras de El Alto, las actitudes de estos «changos», de la A a la Z, siguen siendo ordenadas y estructuradas por la tradición familiar de sus mayores. Lo que asegura es que todas las identidades juveniles, incluso las más rebeldes, mantienen su conexión con la cultura aymara urbana que las prohió. En sus palabras, la hipótesis suena así: «Al principio nosotros también veíamos que las brechas entre padres e hijos parecían ser muy dicotómicas, pero luego nos dimos cuenta de que el eje que ordena la vida de estos jóvenes es justamente la tradición de sus padres. No estamos diciendo que nada cambia, hay transformaciones, pero siempre en función de ese eje ordenador».

Dicho de otra manera, tanta cadena, tatuaje, pantalón ancho, melenas o aretes sólo forma parte de una etapa, la de los 13 a los 17 años de edad, en la que la nueva generación necesita trazar fronteras con sus padres. Una vez que la línea está cavada, la distinción deja de ser tan imprescindible, y se produce un retorno gradual hacia las redes familiares con las que se había operado la ruptura.

Alfredo Balboa secunda la conjetura. No es que los jóvenes entierren su identidad original, sólo la archivan hasta nuevo aviso, porque la pelea intergeneracional los obliga a empuñar esas armas foráneas. Pero una vez que se casan, por ejemplo, y lo hacen temprano (a los 18 o 20 años), desempolvan sus anteriores destrezas y vuelven al

redil de origen.

«Cuando adoptan nuevos roles, esa etapa transitoria termina y se reintegran a la cultura aymara urbana. El desarraigo es pasajero», puntualiza Alfredo.

Para este y otros casos, rinde mucho el concepto de *habitus*, popularizado por el sociólogo Pierre Bourdieu. Se trata de algo parecido a la tradición, aunque la idea del francés cala más hondo. *Habitus* es mucho de lo que aprendemos en la infancia y que deviene tan natural que ya ni pensamos en ello. Está ahí y nadie lo pone en cuestión, porque está escondido en el sentido común, las actitudes corporales y la mentalidad de los individuos. Hemos entrado en el terreno de las pre-disposiciones.

De retorno a El Alto, comprobamos que a pesar de sus innumerables transgresiones, los jóvenes no consiguen escapar del *habitus* dictado por los padres. Germán Guaygua lo demuestra con ejemplos. Uno de ellos es el valor de la masculinidad reinante entre los chicos. Para los jóvenes, una de las medallas más preciadas es saber pelear y en eso no están muy distantes de sus padres, propensos a los puñetes cuando la rabia calienta la sangre.

Sucede algo parecido con respecto a la ética del trabajo. Padres e hijos miran con buenos ojos la capacidad de ganarse el pan de cualquier manera y a toda edad. Esta idea dominante se hace aún más patente cuando los muchachos se ven impelidos a alimentar a una familia. Es el instante de la reconciliación intergeneracional.

Máximo Quisbert advierte que la presión familiar de los mayores para cristalizar ese retorno a la cultura de origen es muy fuerte y va acompañada por variados premios y castigos. Sin embargo es obvio que los jóvenes no regresan al hogar como salieron, vuelven con las alforjas llenas de experiencias vividas, que más adelante reinsertan en la matriz cultural familiar. Máximo habla, por ejemplo, de que traen una visión más amplia de

la ciudad, el mundo y sus protagonistas.

Para Mario, el análisis del regreso puede corroborarse incluso en la actual generación de los padres. Resulta que ellos también tuvieron su huida pasajera en las décadas del 60 y 70. En ese entonces irrumpieron en la Entrada del Gran Poder convertidos en los «extraños rebeldes del pelo largo», un grupo de kullaguada bastante «nuevaolero», compuesto exclusivamente por jóvenes, a quienes se distinguía por tener en la espalda, bordado, al cantante argentino Sandro.

Esa misma generación que combinó el folklore con su cultura juvenil, también tuvo la osadía de introducir la batería, los instrumentos electrónicos y el juego de luces en las fiestas populares. Desde entonces, por las pistas de baile suburbanas campea la cumbia, el teclado, la amplificación y, por supuesto, el tinku «Celia», sometido a los acordes metálicos. Ahí están, según Mario, las huellas de ese paso generacional que modificó el folklore y no así las matrices culturales que lo acunaron.

De manera que el regreso de los jóvenes alteños al eje ordenador de su cultura madre trae vientos de cambio sobre ella, aunque, al parecer, no le desordena el «disco duro». En uso de la amnistía eterna que le otorgan sus mayores, los «changos» se acogen al mundo cultural de origen para enriquecerlo con las nuevas marcas de distinción que han adquirido en su breve escape del hogar.

Mario está de acuerdo con Germán, aunque más que de *habitus* prefiere hablar de matriz cultural. Es ella la que sigue imperando y ordenando los nuevos aportes. Es una lógica aymara urbana que pone en vereda a los elementos invasores, los digiere y reestructura bajo nuevas reglas.

¿Cómo lo logra? Mario Rodríguez saca otro ejemplo de su arsenal de vivencias. Cuenta que el tecno es una danza individual por definición. Quien se mete en esa onda, sabe que ni siquiera

la pareja cuenta en el asunto y que lo fundamental es más bien el «disk jockey», enfrascado en las mezclas musicales más alucinantes. Sin embargo cuando el tecno se afianza en una ciudad como El Alto, los «changos» se organizan de inmediato en tropa, ensayan pasos uniformes, sincronizan atuendos y ademanes. Para reír un poco se podría decir que hacen del tecno un tinku o una morenada. «Si tú miras el grupo de ensayo de tinku, tecno o cumbia, a pesar de sus grandes diferencias, ves elementos comunes. A veces suele ser incluso el mismo grupo que pasa por los tres tipos de música y participa así de concurso en concurso», relata Mario. Son esos caminitos secretos del *habitus* los que conectan la renovación con la tradición, lo que llega deslumbrando con lo que yace sedimentado por siglos.

Pero aún hay más. Cuando se les pregunta a los jóvenes, en tono de encuesta, si les gusta la música nacional, la mayor parte asegura preferir ritmos internacionales. Sin embargo casi en cada colegio de El Alto hay un conjunto de «khantus». Máximo Quisbert cuenta que en las fiestas patronales se percibe una creciente participación juvenil bajo la modalidad de tropas de baile. Los jóvenes alteños alimentan generosamente la corriente folklórica y lo hacen en grupos claramente generacionales, a prudente distancia de sus padres. La flexibilidad llega a tal extremo que en el 40 aniversario del Colegio «La Paz» de Villa Adela había música de la amplificación, una procesión con Virgen entronizada y varias fraternidades al ritmo de caporales. Esa es la vida cotidiana atravesada por influencias culturales variopintas, que nadie tiene problemas para asimilar en simultáneo.

Mario Rodríguez dice que ni el movimiento rockero underground alteño se libra de este enredo. «Tú encuentras un 'chango', que se viste de negro, es seguidor de Iron Maiden, toca batería en una banda llamada 'Los Peores', pero al mis-

mo tiempo toca bombo en un grupo folklórico y también se mete con la cumbia», retrata Mario. Pasa y seguramente son las convivencias más insólitas.

Por su lado, Germán Guaygua cuenta que en muchos segmentos juveniles reina la cultura «chicana», impulsada por otros migrantes, esta vez los hispanos en los Estados Unidos. Ocurre con las pandillas «Cartel Central» o «la Gran BU», las más grandes. Esta subcultura tiene como sólido cimiento la película «Sangre por Sangre» («Blood in, blood out») y se expresa localmente de forma masiva entre los concursantes de tecno del programa televisivo «Sábados Populares». Cuando usted vea en las paredes una «B» junto a una «U» o dos letras «C» que se dan la espalda, ya sabe a que se refieren. Pero ¿por qué sentirse «chicano» en El Alto?

Quizás los cultores de «la raza» sean la mejor identidad disponible para quienes se sienten extranjeros en su propio suelo altiplánico, sacudidos al mismo tiempo y con igual rigor, por la discriminación dominante y las reprimendas familiares. Quizás...

LO CHO'JCHO

Alfredo Balboa ha estudiado la identidad de lo «chojcho» y parece pertinente mencionarla aquí. A primer oído, la palabra nos remite a algo ordinario, tosco o feo. Su conocedor dice que «chojcho» es una persona que proviniendo de la cultura aymara, ha decidido «refinarse», es decir, ensayar un ascenso social simbólico, escalar. Con un sentido claramente peyorativo, el término es aplicado con frecuencia a los jóvenes, a su andar desarrapado y cuestionador, a sus ganas de fastidiar con una estética rebelde. A pesar de tener un sentido negativo cargado de reproches de traición a la raíz fundante, lo chojcho atrae al mundo juvenil más que la política o la religión, y por eso mismo, es parte de una identidad estigmatizada,

pero identidad al fin. Alfredo vuelve a repetir que la fiebre chojcha es pasajera y que se diluye o asimila con la conversión en adulto.

Germán Guaygua se apunta para hablar sobre el término. Afirma que lo chojcho es un nítido estigma antes que una identidad, que pueda exhibirse con orgullo. «El de San Pedro le dice chojcho al del Cementerio, los de allí le dicen lo mismo a los de la Ceja y ellos, a los que están en la 16 de Julio. Son cadenas de segmentación muy vinculadas con la discriminación», comenta. Es un mecanismo clásico de la sociedad colonial boliviana, en la que escapar de los desprecios definidos por el color de la piel siempre parece ser una ilusión.

VIVA EL ALTO

Pero volvamos a las preguntas motivadoras de este coloquio. Repito: ¿son estos «changos» la cabeza de playa de la extinción final de la cultura paterna? o ¿no serán acaso la única forma realista de mantener viva la herencia cultural aymara en contextos urbanos cada vez más internacionalizados? A estas alturas, Máximo, Mario, Alfredo y Germán parecen haber resuelto el dilema. Al no poder escapar del *habitus* dominante de los padres o de la matriz cultural aymara urbana, los jóvenes alteños están lejos de convertirse en los extinguidores de la tradición familiar. Vuelven y lo hacen con elementos nuevos, recogidos a su paso por el tecno, el rock, el rap, la cumbia o la salsa. En ese sentido, el cambio generacional transformaría década tras década la cultura madre, pero sin cuestionar su lógica más íntima. Hasta ahí las respuestas obtenidas.

Mario desea añadir algo más: «Si bien el abandono de la pollera, el cambio del apellido, los nombres en inglés, el peinado con base o los lentes rayban conforman una tendencia fuerte y vigente, no es la única».

Él cree que cada día la conducta

autoafirmativa se abre más espacio, es decir, el orgullo por lo propio: «soy alteño». Antes era muy común decir «voy a la ciudad» para referirse a La Paz, como si El Alto careciera de ese rango. Ahora, poco a poco, más jóvenes buscan su centro en la altura de su urbe natal.

Germán está de acuerdo. Recuerda que la cantidad de jóvenes que empuñan la zampoña, se ponen un poncho, participan de una Entrada folklórica o amenizan un preste ha crecido bastante en los últimos años. Incluso se ha puesto de moda tocar cumbias con instrumentos autóctonos, una manera de reinsertar accesorios culturales extraños bajo las pautas andinas y otra senda juvenil para reemprender la trayectoria social de los padres.

En el caso de las mujeres, las chicas reivindican la pollera cuando integran los grupos de «maripositas», segmento juvenil femenino obligado de cada fraternidad. «Están participando de

la misma expresión de sus padres y van por los mismos caminos», asegura Germán. Aunque las jóvenes se pintan y visten polleras más cortas y sensuales, se muestran, a su manera, con el mismo telón de fondo de sus mayores.

¿Lo hacen conscientes del proceso que capitanean? Nuestros entrevistados coinciden en que no, se trata más bien de algo espontáneo y poco meditado, nace del *habitus*. Es curioso, en Bourdieu la vigencia del *habitus* tienen frecuentes connotaciones lastimeras, pues es la plataforma de reproducción de la dominación y el capitalismo. En El Alto, el *habitus* parece actuar a favor de una cultura oprimida, día y noche cercada por el bombardeo de los medios de comunicación, la industria de cantantes, los alaridos de los clanes religiosos y políticos y el férreo cabalgar de la globalización.

La joda sí se detiene, con la madurez

Historias de «changos». Eso es lo que queremos contar en este recuadro. Mario Rodríguez nos proporciona algunas. Cierta primero de noviembre, día de Todos Santos, él, junto a algunos amigos, recorrió en tropa juvenil las riberas del lago Titicaca. La idea era acompañar a los dolientes y devotos con una ejemplar sikuriada. Se fueron casa por casa, soplando a más no poder para que la música resplandezca en ese su entorno natural de la pampa. Lo que Mario presenció durante esas horas fue la irreverencia hecha tojpa. Los «changos» no paraban de reír, ya sea porque se burlaban de los silenciosos rezadores o porque se ponían a contar chistes macabros sobre la muerte. En síntesis, a estos jóvenes su cultura parecía importarles «un carajo». ¿Significa eso que querían darle la espalda a lo venerado por sus padres? Mario cree que no. El que hayan ido a jugar y divertirse en Todos Santos no es lo importante, el hecho vital es que así, en chacota, «se estaban socializando en su esfera cultural».

Claro está, ahora que han crecido, que alguien importante se les ha muerto y que otros ocupan su lugar en la «joda», se han reconciliado con esos rituales, ahora acuden a ellos, probablemente rezan y se acuerdan de vez en cuando cómo fregaban.

SIKURIS JUVENILES

Otra historia más. Mario cuenta que desde hace un par de décadas los prestes son dominio casi exclusivo de los conjuntos electrónicos. De sus parlantes salen las cumbias y los ritmos folklóricos preferidos. Sin embargo, en los últimos años no hay fiesta, bautizo o matrimonio que se respete, que a su vez no incluya un grupo de "khantus" o de sikuriada. ¿Y quiénes son los impulsores de esta antigua moda renovada? Los jóvenes, esos a quienes se les reprocha «alienación cultural», han recuperado el espacio para la música autóctona.

ROCK ON AYMARA

El centro del rock alteño se llama Wayna Tambo. Allí tocan las bandas de las dos ciudades adyacentes. Las hay con canciones en aymara en sus variantes punk o hardcore. Si uno echa un vistazo a los fanzines de los alrededores, va a encontrar más palabras en aymara que en cualquier revista de movimiento cultural o político reivindicativo. Mario Rodríguez asegura que bajo parámetros andinos, ellos reconvierten y resignifican otras expresiones culturales, que aportan a la construcción de una nueva simbólica o estética propia.

- Desde la psiquiatría alguien podría acusarlos de esquizofrénicos, porque combinan locamente cosas que no tienen relación entre sí. Germán Guaygua rechaza la idea. Transitar del rock al tecno, pasar por el rap y terminar en un preste no produce angustia alguna entre los jóvenes alteños. Lo que pasa es que para darle coherencia a semejante ensalada tienen en sus manos el eje cultural ordenador de sus padres. Mario agrega: «Se transita de un lado a otro con mucha naturalidad, porque se tiene una matriz que está influyendo en todos esos espacios. Los híbridos no siempre eliminan las matrices». Al final la cosa es simple, el árbol tiene raíces y suelo nutriente en común, pero las hojas y frutos son de una diversidad inagotable.

TODO «CASCO»

Germán Guaygua menciona otro detalle. Cuando los jóvenes alteños no tienen dinero para parecerse a los muchachos de Los Ángeles o Nueva York, acuden a los productos de imitación. Los hay en abundancia en los recovecos de la feria de la zona 16 de Julio. A falta de importados directamente de Miami, buenos son los zapatos nike o reeboock considerados como truchos o cascos. Son las palabras usadas para pronunciar la impostura, que auxilia en esos momentos de urgencia de pertenecer al mundo, incluso con poco quivo.

Breve diccionario para los «viejos»

He aquí una breve lista de palabras necesarias para entender el coloquio de T'inkazos y los artículos que lo secundan. Son algunos pilares de la jerga juvenil paceña probablemente ajenas para el lector de mayor edad o del extranjero.

Azul Azul: Grupo musical cruceño de cumbias.

Clavar un papo: Contar una mentira.

Chango: Joven.

Cho'jcho: Feo u ordinario. Alude a quien teniendo un origen indígena, trata de enfatizar su adscripción repentina a la cultura occidental.

El tinku Celia: «El juramento que hice, Celia, amarte toda la vida, Celia...». Canción de moda en ritmo de tinku, cuya versión en instrumentos electrónicos tiene muchos seguidores.

Fanzines: Palabra que mezcla los términos fan (fanático de algún grupo) y magazines (revistas). Son publicaciones normalmente dedicadas a la música y sus intérpretes.

Heavy (jebi): Pesado en inglés. Da a entender que se trata de algo duro o denso.

Khantus: Grupo de música autóctona compuesto por instrumentos de viento y percusión.

Kits: Zapatos deportivos.

La gran BU y Cartel Central: Dos de las pandillas más poderosas de La Paz. BU significa Brown Union (unión morena).

NUEVAOLERO: Forma antigua de nombrar a lo juvenil o moderno.

Nata: Chica o enamorada.

Preste: Fiesta sujeta a las normas de la reciprocidad andina.

Quivo: Dinero.

Relajear: Tener intimidad corporal con alguien, es propio de enamorados y «agarrones» (parejas pasajeras)

Rockalla: Palabra inventada por algún pícaro sociólogo. Es una mezcla de llockalla (chico o joven varón en aymara) y rock. Alude a un muchacho aymara consagrado a la cultura del norte (de América).

Ser de la high (jai): Ser rico, de quivos.

Sikuriada: Música autóctona.

Tojpa: grupo de gente.

Trucho y casco: Objetos o productos industriales simulados. Son imitaciones de sus homólogos de marca fina.

Underground: Subterráneo en inglés. Se refiere a las subculturas escondidas o marginales de una sociedad.

Viejo/a: Padre o madre.

Wayna Tambo: Local alteño de encuentro cultural. Allí se reúne el movimiento rockero de la ciudad.

Urbanización, estructura productiva y empleo en Bolivia

Carmen Ledo G.¹

La historia de Bolivia muestra distintos tipos de desarrollo económico, donde el capital humano y el capital social jugaron roles diferentes. Sus resultados son las profundas brechas económicas, sociales, políticas, ambientales, espaciales y culturales y sobre todo, la generada entre el occidente y el oriente. En los últimos años, la inestabilidad social ha crecido y se han profundizado los problemas estructurales que existían desde antes. Este es un acercamiento completo a esa realidad.

En muchos estudios sobre la urbanización se ha buscado asociar la «marginalidad urbana» con el éxodo rural producido en casi todos los países. Sin embargo, las evidencias empíricas muestran una variada gama de movimientos espaciales de la población, donde la corriente migratoria “rural-urbana” es sólo una forma de movilidad espacial y no resulta extraña su colaboración en los distintos procesos de urbanización constatados a lo largo y ancho del mundo urbanizado. Lo que resulta extraño es asociar la migración con los efectos negativos del desempleo, los déficits habitacionales, los crecientes procesos de insatisfacción de necesidades bá-

sicas en agua potable, alcantarillado y electricidad, la insuficiencia de transportes y el deterioro de la calidad de vida urbana entre otros.

En consecuencia no todos los inmigrantes provienen del proletariado periurbano, rural o del campesinado. Las evidencias empíricas acumuladas hasta hoy han demostrado que la migración es un hecho selectivo, es una respuesta a los cambios operados en la estructura productiva y funciona como principal mecanismo de relocalización espacial de la población y a su vez de reorganización espacial de las actividades económicas en las zonas rurales y urbanas.

1. Docente - Investigadora Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Cochabamba - Bolivia. Actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad Tecnológica de Delft - Holanda (Delft University of Technology) Berlageweg 1, 2628 CR Delft - Netherlands. E. mail: c.ledo@bk.tudelft.nl

Las medidas de política económica aplicadas en el presente siglo han producido transformaciones profundas en el ámbito espacial y la estructura productiva. Su resultado es un mayor predominio urbano y el incremento de las ocupaciones del sector informal, porque los cesantes y los nuevos miembros del mercado de trabajo se vieron obligados a recurrir a este sector, como la única forma de garantizar ingresos de subsistencia, debido a la contracción del empleo en la empresa privada como una forma de ajustarse a la recesión y al cierre de un gran número de empresas públicas condicionadas por las reformas estructurales aplicadas en la década de los 90. En consecuencia, la inestabilidad laboral, la condición restringida de ingreso monetario y el incremento en las tasas participación económica de los diversos integrantes de la familia en el mercado de trabajo, se enmarcan dentro de estrategias de vida, que involucran efectos deteriorantes de la existencia de la población y en especial de los menores.

Por una parte, el hogar tiende a dispersarse en múltiples tareas que motivan la reproducción cotidiana de subsistencia de su contexto familiar y que éste se realice fuera de la vivienda, o en condiciones en las que se combina con la actividad productiva.

Las desigualdades económicas regionales y la diferenciación social son también el resultado de las políticas económicas, caracterizadas por tener un carácter concentrador del ingreso, sin un impacto positivo apreciable en el mercado interno ni en la redistribución del ingreso. El resultado de esta modalidad de desarrollo se ha traducido en un marcado deterioro de las condiciones materiales de vida de la mayor parte de la población y en un incremento de la pobreza crítica, mayor

contracción laboral, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, alta inestabilidad social y política en el campo y las ciudades.

Es evidente que existe un nuevo tipo de organización del espacio, caracterizado por la presencia de nuevos procesos sociales. Se espera en definitiva una nueva forma de estructuración de lo "rural", así como inéditas formas de articulación con lo "urbano" y viceversa. La falta de conocimiento de estas modalidades de distribución y redistribución espacial de la población son un serio impedimento para el diseño de planes, programas y proyectos, y para la mejor comprensión de los determinantes y las consecuencias del proceso de urbanización.

EL PROCESO URBANO ECONOMÍA DE ENCLAVE MINERO Y PRIMACÍA URBANA

Se podría decir que Bolivia nació política y espacialmente fragmentada. Mientras las republiquetas eran la expresión del carácter centrífugo del poder, la desarticulación del espacio se reflejaba en la existencia de acentuados desequilibrios económicos regionales. Por lo menos hasta 1870, el espacio económico heredado de la colonia, aunque desarticulado de la metrópoli, se mantendría².

Durante el período colonial se advierte la conformación de todas las ciudades del país, cuya función básica era ser centros administrativos de la minería ubicada en Potosí. La Paz, conformada inicialmente como una pequeña explotación aurífera, se convirtió más tarde en un importante nexo comercial entre Potosí y Lima, centro de comerciantes y artesanos. Santa Cruz fue también de alguna manera el resultado del dinamismo del auge de la plata, porque la agricultura re-

2. Zavaleta, René, «Consideraciones Generales sobre la Historia de Bolivia (1832-1971)», en varios autores, América Latina Historia de Medio Siglo, (México, siglo XXI, 1977) p. 77

gional dinamizó un circuito de comercio de productos tropicales para abastecer a las minas. Cochabamba fue el asiento de la casta feudal terrateniente encargada de abastecer de alimentos a las explotaciones potosinas y a todo el circuito de su influencia.

A partir del siglo XVI, la explotación de los metales preciosos, especialmente la plata, fue el elemento fundamental de la organización territorial de una vasta zona del virreinato del Perú. En efecto como, la producción argentífera tuvo lugar en la sección central y sur del altiplano, con un centro como Potosí, donde las condiciones ecológicas inhibían la producción de los alimentos requeridos para el sustento de una abundante población trabajadora, fue necesario importar aquellos bienes desde otras áreas. Así, entonces, el noroeste argentino (provincias de Jujuy, Salta y Tucumán), el sur del Perú (departamentos de Puno, Cusco, Arequipa y Apurímac) y el norte chileno (regiones de Atacama y Coquimbo), conformaron un territorio abastecedor de Potosí. Dentro de Bolivia, los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija se incorporaron a estos circuitos interregionales. Desde aquel entonces quedaba definido el papel de Cochabamba como productora de alimentos para satisfacer las necesidades de la población altiplánica³.

A fines del siglo XVIII, el agotamiento de los yacimientos más ricos condujo al fin del ciclo de la plata, lo que motivó una recesión de la econo-

mía del Alto Perú. Esta contracción se manifestó en una declinación de los circuitos mercantiles en los que participaba Cochabamba. En rigor, el intercambio con el altiplano se redujo casi exclusivamente a remesas de alimentos para las ciudades mayores y al envío de lana para la manufactura establecida en los obrajes (La Paz). Por otro lado, la clausura de las minas ocasionó un retorno a la tierra que, sumado al efecto del crecimiento vegetativo durante el último siglo colonial, presionó sobre las grandes propiedades mantenidas indivisas en virtud de la institución del mayorazgo.

En los valles de Cochabamba se percibieron dos tipos de respuesta a la crisis. La primera fue un mayor «ensimismamiento» de la hacienda hasta convertirse en una economía semi autárquica, combinando la producción agrícola con la de los obrajes para atender los requerimientos de la reproducción de la fuerza de trabajo. Una segunda respuesta fue el fraccionamiento de varias haciendas, proceso que ocurrió «especialmente en las tierras del valle bajo y en las mejores tierras agrícolas del valle alto».⁴ La crisis de la minería de la plata convirtió a los primeros 50 años de vida independiente del país en una subsistencia agraria: declinó Potosí como emporio productor de plata, Sucre como núcleo articulador de las clases dominantes criollas y Cochabamba como centro urbano de la oligarquía terrateniente.

3. La abolición del monopolio fiscal de pastas y minerales y la paralización de la acuñación de moneda feble entre 1872 y 1873 fueron determinantes para la desarticulación del mercado interno heredado de la colonia, que abarcaba, además de la franja occidental minera de Bolivia, partes del norte argentino y del sur peruano- (Assadourian et al, 1980: Minería y Espacio Económico en los Andes, Siglos XVI-XX. IEP p. 97; tb. Mitre 1981: Los Patriarcas de la Plata. IEP, Lima). Estos hechos y las políticas liberales aplicadas después, al tiempo que tuvieron un impacto negativo sobre el proceso de beneficio de minerales y sobre un importante sector artesanal, ligaron fuertemente el espacio minero con el mercado internacional. La construcción de los ferrocarriles juegan un rol central en este proceso.
4. Sin perjuicio de lo anterior, Cochabamba suministraba también fuerza de trabajo (mitayos) para la actividad minera. V., al respecto, René-Moreno, Gabriel, *La Mita en Potosí en 1795*, Potosí Universidad Tomás Frías, 1959, y Larson, Brooke, *Explotación Agraria y Resistencia Campesina: Cinco Ensayos Históricos sobre Cochabamba, siglos XVI - XIX* (La Paz, CERES, 1981).

Finalizada la crisis de la minería de la plata se dio origen a un predominio en la producción minera del estaño. Esta situación también contribuyó a modificar la preeminencia de las ciudades. La Paz⁵ se convierte en el primer centro administrativo y político luego de la Revolución Federal de 1899, y se produce un crecimiento moderado de las ciudades vinculadas al enclave. A partir de las reformas liberales de Melgarejo (1866) y hasta el segundo decenio del siglo XX, se reforzó el latifundio, activado por el restablecimiento de los circuitos mercantiles entre los valles y el altiplano a raíz del inicio de un nuevo ciclo minero, basado especialmente en el estaño. Ahora bien, la conformación de la oligarquía minera y su intromisión en el manejo de la «cosa pública» involucró una serie de transformaciones favorables a la libre circulación de factores. Esto implicó no sólo la abolición de trabas a la exportación, sino también la destrucción parcial de los obrajes rurales y la sustitución de la producción artesanal urbana por una incipiente industria manufacturera. De este modo se constituyó una alianza de intereses entre mineros, terratenientes mercantiles y capital foráneo, fuertemente imbuida por la ideología librecambista⁶.

Ya en 1879 se había mostrado la debilidad de una economía centrada en la minería y la pro-

ducción agromercantil, cuando el aparato del Estado se reveló incapaz para afrontar la arremetida del capital británico-chileno que ocasionaría el cercenamiento del litoral. En los años 30 del siglo XX, esa incapacidad volvió a evidenciarse a raíz del conflicto chaqueño. Ambos ejemplos, distanciados por medio siglo de «enclave» minero, son testimonios claros de las reducidas dimensiones del mercado interno y de la vulnerabilidad externa, así como de la existencia de un anémico Estado nacional que ejercía una soberanía formal sobre un territorio precariamente articulado y socialmente atomizado. «Al final, lo que había de Estado nacional era el Estado correspondiente al mercado interno generado en el área capitalista minera. En este sentido no era un Estado nacional, porque no existía una nación en su definición moderna, o sólo lo era con relación a las áreas vinculadas al mercado externo»⁷. En rigor, el estaño configuró un típico caso de «islo-te» de capitalismo monopólico en medio de un ámbito esencialmente precapitalista.

En 1900, un año después del traslado de la capital política desde Sucre a la ciudad de La Paz⁸ luego de la Guerra Federal, destacó la primacía poblacional de esta última ciudad, pues concentraba al 34,8% de la población urbana nacional, mientras Sucre, con el 13,3%, se ubicaba

5. Dandler, Jorge, *El Sindicalismo campesino en Bolivia: Los Cambios Estructurales en Ucureña* (México, Instituto Indigenista Interamericano, 1969), pp 46-47.
6. Se estimaba que alrededor del 70% de la jerarquía urbana en 1825 era ocupada sólo por las ciudades de La Paz y Cochabamba. En aquel momento la ciudad de Santa Cruz ocupaba el quinto lugar, para mayores detalles véase: Arce Cuadros Eduardo, 1976 *La Economía de Bolivia*, Los Amigos del Libro, Cochabamba.
7. Murra, John, *Formaciones económicas y políticas del Mundo andino* (Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1975).
8. Zabaleta, René, «Consideraciones Generales sobre la Historia de Bolivia (1832-1971)», en varios autores, *América Latina Historia de Medio Siglo*, (México, siglo XXI, 1977) p. 89, «Desde Europa, durante muchos años, alzó y derribó a los presidentes y a los ministros de Bolivia, planificó el hambre de sus obreros y organizó las matanzas, ramificó y extendió su fortuna personal: Bolivia era un país que existía para él, a su servicio». Se llamaba Simón Patiño, Barón del estaño, «bourgeois conquérant», y jefe supremo de la rosca. Galeano, Eduardo, *Las Venas Abiertas de América Latina*, (México, ed. Siglo XXI, 1971), pp. 227-228. «...» Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez ...» (frase extraída del texto de la proclama de la Junta Tuitiva de la Paz, 16 de julio de 1809).

después de Cochabamba y Potosí (13,9% y 13,3%, respectivamente)⁹. Su tamaño distaba dos veces más que la segunda ciudad (Cochabamba) y más de tres que la quinta ciudad (Santa Cruz). La importancia de la ciudad de La Paz ubicada en el altiplano boliviano (occidente) podría atribuirse al fortalecimiento del circuito mina/puerto de exportación acaecido luego del triunfo liberal alrededor de 1870¹⁰, y la creciente comunicación con los puertos peru-

nos luego de la pérdida del Litoral en 1879. Las exigencias del patrón de acumulación de capital durante la época de los barones del estaño, al acentuar aún más los desequilibrios regionales, favorecieron el proceso de concentración de la población urbana en el altiplano. Así, mientras en 1900 un 57% de la población urbana nacional residía en la región occidental del país, en 1950 este porcentaje había subido al 63%.

CUADRO 1
Bolivia: Distribución de la Población según Regiones ecológicas,
Área y Ciudad de Residencia, 1900 - 1992.

REGIONES	1900	1950	1976	1992	1900	1950	1976	1992
ALTIPLANO	51.3	57.5	52.7	45.0	798.135	1.554.895	2.431.307	2.889.356
ALTIPLANO-URBANO	57.0	63.3	54.2	44.2	128.604	437.906	1.045.852	1.6326.74
Ciudad de La Paz	34.8	38.6	32.930.3	54513	267.000	635.283	1.118.870	
VALLES	36.2	30.2	27.5	28.9	563.206	816.658	1.268.709	
VALLES - URBANO	30.5	25.1	21.9	24.0	68.814	173.519	422.355	887.027
Ciudad de Cbba	13.9	10.8	10.6	11.0	27.886	74.819	204.684	407.825
LLANOS	12.5	12.3	19.8	26.1	194.477	332.612	913.470	1.675.827
LLANOS URBANO	12.5	11.6	23.9	31.8	28.203	80.552	459.922	1.175.146
Ciudad de Sta. Cruz	7.0	6.1	13.2	18.9	15.874	42.461	254.682	697.278
Corredor Económico*	43.6	55.5	56.8	60.2	98.273	384.280	1.094.649	2.223.973
(La Paz-Cbba-Sta. Cruz)								
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	1.555.818	2.704.165	4.613.486	6.420.792
Población Urbana	14.5	25.6	41.8	57.5	225.621	691.977	1.928.129	3.694.847
Población Rural	85.5	74.4	58.2	42.5	1.330.197	2.012.188	2.685.357	2.725.945

ALTIPLANO: LA PAZ, ORURO, POTOSÍ; **VALLES:** COCHABAMBA, CHUQUISACA, TARIJA; **LLANOS:** SANTA CRUZ, BENI, PANDO.

* Ciudades principales

Fuente: Elaboración propia a partir del año 1900: Se refiere a la «población censada»; el informe del Censo estima una omisión del 5% y añade, a los totales, la «población no censada» y a la «no sometida». Año 1950, 1976 y 1992: Censos Nacionales de Población y Vivienda Vol.2, 3 y 7; resultados finales, mayo 1993, INE. Se considera población urbana a los centros de 2000 y más habitantes.

9. La configuración física espacial de la ciudad de La Paz, fue diseñada en 1549 y obedeció al clásico damero español de acuerdo a las Leyes de Indias. Se había producido un cierto ordenamiento espacial que reflejaba la jerarquía social de sus moradores y el impacto de las funciones primigenias. Es así que en torno a la plaza mayor se localizaban la Catedral, las construcciones representativas del gobierno, el Cabildo y las residencias de los «principales».

10. Ormachea, Enrique, 1988: *Migración y Empleo en Bolivia: Los casos de las ciudades de La Paz y Santa Cruz*. PREALC/OIT, Santiago. Chile, p. 2.

Durante la primera mitad del siglo XX, La Paz ratificó con toda fuerza su primacía urbana. Entre los años 1928-1935 se produjo un notable incremento demográfico del orden del 6.8% anual. La ciudad aumentó de 135.762 habitantes a 215.700. Se trata del crecimiento más alto de su historia. De la misma forma la superficie ocupada creció de 532.8 Has. en 1935, a 2.430 Has. en 1946.

Son varios los factores que explican este fenómeno, entre los que se debe resaltar:

- La masiva migración de mineros como respuesta a la crisis de 1929.
- La Guerra del Chaco, que movilizó a pobladores de diversos confines del país, muchos de los cuales no regresaron a su lugar de origen después de la guerra y se instalaron en la ciudad de La Paz.
- La migración de campesinos en razón de la crisis del latifundio.

Este crecimiento implicó el incremento de la masa «marginalizada» que si bien no expresó una crisis estructural fue una contradicción importante del sistema que luego se desarrolló y adquirió nuevas formas¹¹.

En síntesis, la etapa inicial del proceso de urbanización boliviano estuvo caracterizado por la concentración demográfica sólo en la ciudad capital, La Paz (primacía urbana). La distribución de la población en la región del altiplano no fue uniforme. Por el contrario, la pérdida de importancia relativa de la región minera y el rol cada vez más importante de la ciudad de La Paz redundaron en fuertes desequilibrios económicos dentro de esta región. Entre 1900 y 1950, la población urbana residente en la ciudad de La Paz pasó de representar el 35% del total de habi-

tantes urbanos residentes en el territorio boliviano, al 39%. En tanto, en este mismo período, la importancia de la población urbana dentro del total poblacional nacional creció del 14% al 26%. Si bien desde su constitución, la historia de Bolivia se enmarca en procesos de cambio demográfico y espacial, sin embargo, la redistribución de la población en el territorio boliviano se vio duramente afectada por las medidas de política económica implementadas en la segunda mitad del siglo XX. Como se verá a continuación, el factor que explica este nuevo patrón de organización del territorio fue la migración.

REDISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN Y MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

En Bolivia, la apropiación social del espacio geográfico fue desde siempre un problema no resuelto. El país ha enfrentado el problema de la dispersión demográfica de gran parte de su territorio a lo largo de su historia. Hasta 1952, el modelo de acumulación privado minero-exportador, el desarrollo de la agricultura tradicional y la estrecha visión del territorio como componente central del Estado por la clase política, determinaron que la población tienda a concentrarse en la zona del altiplano, sobre todo en el área rural. El grado de urbanización era bajo, pero existía la tendencia a la concentración de la población urbana en la ciudad de La Paz.

Las reformas estructurales, económicas, sociales y políticas, introducidas en 1952, incrementaron las migraciones internas y en consecuencia, la redistribución espacial de la población. Las consecuencias de dichos cambios se hacen claramente perceptibles recién durante la década de los 70. De ahí que la inmigración hacia la zona de los llanos considerada reciente en

11. Assadourian et. al., 1980: op. Cit. Pag. 98-99.

1976, es consecuencia del gran impulso que recibe la economía de Santa Cruz durante el primer quinquenio de los 70, a través del:

- Trasiego de excedentes estatales producido en las zonas mineras del altiplano.
- El incremento de las regalías petroleras resultado del aumento de la producción de hidrocarburos.
- El aumento de precios a raíz de la crisis energética internacional.
- El flujo del grueso de los recursos obtenidos a través del endeudamiento externo.
- El desarrollo agroindustrial de Santa Cruz impulsado por el gobierno de Banzer.
- La favorable coyuntura internacional de precios del algodón.

Todos esos fueron factores que determinaron una gran movilización de población ya sea en for-

ma definitiva a través de procesos de colonización¹², y también de la migración temporal de importantes contingentes de fuerza de trabajo campesina en las épocas de zafra. Las migraciones temporales fueron muy importantes durante la primera mitad del decenio de los 70¹³.

En 1976, la población boliviana de más de cinco años de edad que había cambiado alguna vez de residencia alcanzaba a un millón de personas (28,6% de la población mayor a 5 años). En 1992, el número de inmigrantes casi se duplicó y alrededor de dos millones de personas declararon tener experiencia inmigratoria, con lo que pasaron a representar a más de una tercera parte de los bolivianos mayores de 5 años (cuadro 2).

Hacia 1992, se advierte una mayor presencia relativa de inmigrantes antiguos. El 67% de los inmigrantes tenía más de 5 años viviendo en los lugares donde fueron censados (1.309.431 personas), sin embargo, el peso de los inmigrantes

CUADRO 2
Bolivia: Población Inmigrante según Grado de Urbanización por Condición migratoria
y Tasa de Crecimiento intercensal, 1976 - 1992

Grado de Urbanización	MIGRANTE RECIENTE			MIGRANTE ANTIGUO			TOTAL MIGRANTES		
	1976	1992	TASA 76-92	1976	1992	TASA 76-92	1976	1992	TASA 76-92
CIUDADES PRINCIPALES	39%	37%	3.9%	42%	41%	3.9%	41%	40%	3.9%
CIUDADES SECUNDARIAS	12%	21%	7.5%	12%	18%	7.1%	12%	19%	7.2%
RESTO URBANO	13%	12%	3.4%	13%	9%	1.9%	13%	10%	2.5%
RURAL	36%	31%	3.1%	34%	32%	3.9%	34%	32%	3.6%
Total	100%	100%	4.2%	100%	100%	4.2%	100%	100%	4.2%
Casos	337.594	638.442	690.528	1.309.431		1.028.122	1.947.873		

Fuente: Elaboración Propia utilizando Censos nacionales de Población y Vivienda de 1976 y 1992.

12. Véase Calderón, Fernando, 1983, *La Política en las Calles*, CERES, Cochabamba - Bolivia. p. 26

13. Hasta 1980, aproximadamente 22.580 familias (cerca a 90.000 personas) se habrían asentado en el área rural del departamento de Santa Cruz (Casanovas, Roberto, 1981: *Migración interna en Bolivia. Origen, Magnitud y principales Características*. Proy. Bol 78/P03, OIT-UNFPA-MTDL, La Paz (mimeo). p.33).

recientes en términos absolutos es elocuente (638 mil inmigrantes recientes en 1992 versus los 337 mil registrados en 1976 en la misma condición).

La concentración del flujo migratorio dirigido hacia las ciudades principales es fuerte. Cuatro de cada diez inmigrantes se fue a vivir a alguna de las ciudades del eje económico nacional. Una tercera parte fijó residencia en alguna zona rural y algo menos de una quinta parte se trasladó a alguna ciudad intermedia. En relación al crecimiento demográfico de los inmigrantes, también se demuestra con nitidez que dicho fenómeno es diferencial según el tamaño de la ciudad. El mayor impacto del flujo inmigratorio se produjo en las ciudades de tamaño intermedio, así como en las de mayor tamaño del eje económico nacional.

El altiplano que fue históricamente el principal receptor de inmigrantes hasta los años 70, ha sido desplazado por los llanos y los valles que se convirtieron en los principales receptores del flujo inmigratorio. Durante la década de los años 70 y parte de los 80, la movilidad espacial de la

población del altiplano y los valles se dirigió hacia la zona de los llanos. El dinamismo de la economía cruceña determinó el traslado de importantes contingentes migratorios desde el altiplano y los valles hacia esta zona.

La crisis del modelo de acumulación, la recesión económica urbana, las orientaciones de las políticas económicas, y las sequías prolongadas en la zona central del país, determinaron que en la segunda mitad del decenio de los 80 los flujos migratorios se intensifiquen y se modifique nuevamente el patrón migratorio: El flujo de inmigrantes del altiplano se desplazó con mayor fuerza a los valles y la población inmigrante de los valles y de los llanos presentaron una mayor movilidad inter e intra ecológica¹⁴.

En términos generales, dentro del altiplano hay un mayor movimiento de población. Esto se debería sobre todo a los acentuados desequilibrios económicos existentes en esta zona, donde la ciudad de La Paz concentra gran parte del excedente, no sólo del producido en su zona ecológica, sino en el país. Es una zona receptora de grandes con-

CUADRO 3

Bolivia: Población Inmigrante Distribuida según Grado de Urbanización por Índice de Masculinidad y Contextos ecológicos de Residencia Habitual, 1992

GRADO DE URBANIZACION	INDICE DE MASCULINIDAD (#Hombres/#Mujeres*100)				LUGAR DE RESIDENCIA HABITUAL			
	ALTIPLANO	VALLES	LLANOS	TOTAL	ALTIPLANO	VALLES	LLANOS	TOTAL
CIUDADES PRINCIPALES	91	89	92	91	359.598	160.446	280.336	800.380
CIUDADES SECUNDARIAS	89	90	95	91	137.891	161.441	84.179	383.511
RESTO URBANO	98	97	104	101	65.499	35.920	104.381	205.800
RURAL	87	105	128	105	233.672	210.106	234.676	678.454
TOTAL	90	95	105	96	796.660	567.913	703.572	2.068.145

Fuente: Elaboración propia obtenida a partir del procesamiento la base de datos del Censo nacional de Población y Vivienda 1992, INE, La Paz, Bolivia.

14. Para mayores detalles véase Casanovas, Roberto, 1981. En este período el gobierno desarrollaría un plan para la «salvación de la cosecha del algodón», el cual buscó movilizar importantes contingentes de fuerza de trabajo a esta región. Lo particular de este caso está que la movilización fue compulsiva, el grueso de la población que fue a «salvar» la cosecha estaba constituida por conscriptos de las Fuerzas Armadas.

tingentes de población inmigrante de su propio contexto departamental y de población nacida en los departamentos de Oruro y Potosí. Esta alta movilidad interna en el altiplano se ha visto favorecida por la existencia de una red vial muy amplia, que articula todo el espacio minero occidental y una importante red de interconexión comercial de las zonas fronterizas¹⁵.

En consecuencia, la ciudad de La Paz juega una doble función: es una ciudad que atrae a muchos inmigrantes de su propio contexto ecológico y por otra parte, también reexpulsa población particularmente hacia los valles y llanos.

Es interesante observar que el proceso migratorio es más femenino mientras más urbanizado es el destino de la migración, lo que podría ser explicado por las posibilidades de inserción laboral de las mujeres en las ciudades de tamaño grande e intermedio, aspecto asociado a la inserción femenina en la intermediación y los servicios. En cambio, a mayor ruralidad, más pronunciada es la corriente migratoria masculina, a excepción de la residente en el altiplano que presenta una mayor predominancia femenina al margen del grado de urbanización del lugar de residencia de sus inmigrantes.

La redistribución espacial de la población según contextos espaciales no es uniforme. De los 797 mil inmigrantes dirigidos al altiplano, 360

mil (45%) se fue a la ciudad de La Paz y un 17% a las ciudades secundarias. En la región de los llanos, la concentración de inmigrantes hacia Santa Cruz es del 40% y del 33% de los dirigidos hacia algún poblado rural. En los valles, cobra importancia la direccionalidad migratoria hacia tres contextos: Una tercera parte de los inmigrantes fijo su residencia en el área rural, algo más de una cuarta parte se dirigió a la ciudad capital y en similar proporción (28%) fijo su residencia en algún centro de tamaño intermedio (cuadro 3).

Nótese que cerca del millón de inmigrantes nacidos en el altiplano (cuadro 4), un 66% se movió sólo dentro de esa región y es alta la concentración migratoria en la ciudad de La Paz, aunque es interesante advertir que las ciudades de tamaño intermedio del altiplano absorbieron medio millón de inmigrantes. El restante 34% de los nacidos en el altiplano se fue a vivir a los valles, particularmente a la ciudad de Cochabamba y la región de los llanos.

Entre los nacidos en los valles, alrededor del 57% se movió dentro de su región ecológica, un 31% fija nueva residencia en los llanos y sólo un 12% se fue alguna región del altiplano. En los llanos se advierte una mayor movilidad interna, el 87% de los inmigrantes nacidos en alguna región de los llanos se movió sólo en dicho territorio (cuadro 4).

15. Con base a los datos de las federaciones campesinas de esta zona, se calcula que la población en el trópico cochabambino oscila se encuentra alrededor de los 200.000 habitantes (Cf. CIDRE 1989: 212) No existe información cuantitativa al respecto, pero existen claras evidencias de que en la zona del trópico cochabambino los colonos representan sólo una fracción de la población total. La otra parte estaría constituida por un gran número de comerciantes y transportistas de toda índole, un proletariado rural en formación, las cada vez más numerosas fuerzas de represión al narcotráfico y, obviamente, los narcotraficantes. La importancia de la producción de coca para la economía de esta zona puede verse considerando dos indicadores: la superficie cultivada y el valor de la producción. En el primer caso, se tiene que, mientras entre 1970 y 1980 la superficie cultivada se estima pasó de 2.650 Has. a 9.393 Has., entre 1980 y 1983 ésta pasó de 9.393 a 22.355 Has.; entre 1983 y 1988, con un crecimiento menos explosivo, la superficie pasó de 22.355 Has. a 33.850 Has. En cuanto al valor de la producción de coca, se estima que este alcanzó en 1988 a 114.997,48 miles de \$us. (un 79,9% del total de la producción agropecuaria de la zona, estimada en 143.846,71 miles de \$Us.). El valor de la producción de cocaína se estima alcanza a 150 millones de dólares (cf. Doria Medina)

Se debe resaltar el origen urbano de los inmigrantes dirigidos a las ciudades de mayor tamaño en Bolivia. Aproximadamente el 75% de los inmigrantes declaró provenir de algún centro urbano. Sin embargo, al desagregar la información según ciudades, La Paz tiene mayor presencia rural entre sus inmigrantes, aspecto que se explica por el flujo de personas de origen altiplánico encaminado a la ciudad de El Alto, donde el 48% de los inmigrantes proceden de una zona rural, lo que refleja un perfil migratorio muy peculiar. Se trata de inmigrantes provenientes de zonas deprimidas del occidente de Bolivia (corriente migratoria rural intraecológica).

Es interesante ver que en la ciudad de Cochabamba, el 70% de los inmigrantes tiene un origen altiplánico, lo que hace suponer que

poblacionalmente hablando, Cochabamba se altiplanizó. En cambio en Santa Cruz el mayor peso urbano de sus inmigrantes procede de alguna región de los llanos, lo que explica la importante redistribución intraecológica de su población. Sólo un 25% de los inmigrantes en Santa Cruz declaró proceder de alguna región del altiplano, mientras una tercera parte del flujo llegó de los valles.

Aunque este modelo de desarrollo iniciado en 1952 ha finalizado su ciclo, las posibilidades de ampliación de la frontera agrícola, el desarrollo de la actividad pecuaria, la disponibilidad de recursos naturales, la crisis de la economía minera de occidente, el estancamiento urbano-industrial, las actividades relacionadas con la producción y comercialización de cocaína, la apertura de las

CUADRO 4
Bolivia: Distribución de los Migrantes según Residencia habitual
y condición migratoria por región ecológica de Nacimiento, 1992

REGION RHA COND. MIGRATORIA	REGIÓN ECOLÓGICA DE NACIMIENTO			TOTAL INMIGRANTES
	ALTIPLANO	VALLES	LLANOS	
ALTIPLANO	658.368	58.769	19.621	736.758
ANTIGUO	446.733	42.608	118.43	501.184
RECIENTE	211.635	16.161	7.778	235.574
VALLES	215.567	271.135	33.452	520.154
ANTIGUO	142.523	181.631	20.056	344.210
RECIENTE	73.044	89.504	13.396	175.944
LLANOS	118.458	147.573	366.641	632.672
ANTIGUO	75.897	104.063	246.685	426.645
RECIENTE	42.561	43.510	119.956	206.027
EMIGRANTES	992.393	477.477	419.714	1.889.584
ANTIGUO	665.153	328.302	278.584	1.272.039
RECIENTE	327.240	149.175	141.130	617.545

Fuente: Elaboración propia obtenida a partir del procesamiento de la base de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 1992, INE, La Paz, Bolivia.

CUADRO 5
Corredor Económico Nacional: Corriente migratoria reciente y
área de origen de la migración, 1992

CIUDADES PRINCIPALES	CORRIENTE MIGRATORIA RECIENTE			AREA DE ORIGEN	
	INMIGRANTES	EMIGRANTE	SALDO NETO	RURAL	URBANA
A. IBAÑEZ-STA CRUZ	68.634	35.582	33.052	22%	78%
CERCADO-CBBA	47.068	32.578	14.490	25%	75%
EL ALTO - LA PAZ	43.937	3.570	40.367	48%	52%
MURILLO - LA PAZ	42.942	56.944	-14.002	37%	63%
TOTAL	202.581	128.674	73.907		

Fuente: Elaboración propia a partir del procesamiento de la base de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 1992, INE, La Paz, Bolivia.

carreteras Santa Cruz-Beni, Puerto Villaroel-Yapacaní y la construcción de la carretera que une el trópico cochabambino con el departamento del Beni, así como la concreción de proyectos de integración energética con el Brasil¹⁶, hacen prever una intensificación de los flujos migratorios hacia la zona central y tropical del país en el corto y mediano plazo.

Este proceso heterogéneo de ocupación del territorio boliviano y el impacto que ha tenido la urbanización en la modificación del patrón migratorio nacional puede resumirse en:

- Un primer momento está relacionado con la primacía urbana de una sola ciudad, la capital

La Paz, ciudad que recibió importantes contingentes poblacionales de todos los confines del país.

- Un segundo momento es la colonización dirigida, iniciada durante los primeros años del decenio de los 60. Con estas medidas se produce una modificación del patrón migratorio de corrientes dirigidas hacia las extensas zonas de colonización.
- Una tercera modificación se presenta con el fuerte desarrollo de empresas agropecuarias medianas y grandes de tipo comercial, orientadas a la producción para la agroindustria (maíz amarillo, sorgo, soya, y en años anteriores, algodón). Esta actividad generó una importante deman-

16. Existe un proceso de migración, aparentemente temporal, hacia los puestos fronterizos y zonas comerciales altioplánicas como ser Villazón (Potosí), la zona del Desaguadero (La Paz), Uyuni (Potosí), y otras de menor importancia. Este movimiento comercial y poblacional adquiere cada vez mayor importancia debido a la creciente vitalidad del mercado interno nacional de los productos extranjeros. Una particularidad fácilmente verificable es que los migrantes son principalmente población de origen altioplánico, que se moviliza dentro su misma zona ecológica. Por su parte, el desarrollo de las actividades comerciales fronterizas en la zona tropical -Puerto Suárez (Santa Cruz), Yacuíba y, en menor medida, Bermejo (Tarija), es, paradójicamente, también desarrollado en su mayor parte por comerciantes de origen altioplánico.

da de mano de obra lo que atrajo mano de obra a la agricultura comercial. Además de la propia agricultura, el desarrollo agrícola del oriente trajo aparejado el crecimiento de la agroindustria en las ciudades de la zona. La industria avícola, la elaboración de alimentos balanceados, el procesamiento de la caña de azúcar y del algodón, han jugado un rol fundamental en ese proceso. En una primera etapa fueron importantes flujos inmigratorios de las regiones de los valles y el altiplano, pero luego de los 80 inclusive se podía observar a trabajadores llegados desde el Perú.

- La cuarta modificación de la direccionalidad migratoria se da a través de la existencia de una fuerte corriente de movilización internacional dirigida hacia países limítrofes como la Argentina.
- La última modificación se produce en los años 80, sobre todo en el segundo quinquenio, debido a la conflictividad que asume el proceso de colonización espontánea por la expansión de las actividades del complejo coca/cocaína. Los gobiernos tratan de detener la colonización mediante acciones que van desde la represión directa y el amedrentamiento. Paralelamente, se pretende frenar las migraciones desde las zonas agrícolas tradicionales mediante obras de infraestructura, sobre todo de riego, que debieron realizarse hace muchos años. Aún no se conocen las consecuencias de estas acciones sobre los flujos migratorios, sin embargo es posible que fortifiquen el flujo urbano-rural, rural-rural y rural-urbano.

En síntesis el resultado de este proceso es substancialmente diferente al observado antes de

1952, porque cambió de modelo de primacía urbana a uno de macrocefalia urbana, donde las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, experimentan un acelerado crecimiento demográfico. Sin embargo, aunque el ritmo de crecimiento de la ciudad de La Paz es menor, serán las tres ciudades las que cuenten con una mayor población urbana nacional. La ruptura parcial del enclave minero y la conformación de un nuevo eje espacial nacional, que incorporaría en forma definitiva la zona oriental, es el nuevo patrón de uso del suelo en el territorio boliviano.

HACIA LA CONCENTRACIÓN URBANA MACROCEFÁLICA

En la segunda mitad del siglo XX, se formó en Bolivia un corredor económico espacial, que concentra a la mayor parte de la población y la actividad económica¹⁷. Una de las particularidades de la conformación del corredor económico es su carácter predominantemente urbano, fuertemente articulado por intensos flujos entre las ciudades que lo componen, y entre éstas y sus entornos regionales.

El proceso histórico de dicha constitución proviene de las medidas de política económica implementadas en 1952. En aquel momento, el Estado, como garante de los intereses de la oligarquía minera terrateniente mercantil, intentaba suprimir el conflicto sin alterar las condiciones objetivas básicas que permitirían la transferencia de la renta de la tierra hacia el sector minero. Esto se manifestaba, por ejemplo, en el suministro de alimentos a precios bajos para asegurar el sustento de la población de las minas y las ciudades, lo que permitía mantener una reducida inversión en capital variable. Los gobiernos mili-

17. La construcción de una planta termoelectrica en la localidad fronteriza de Quijarro (Santa Cruz) y la construcción del gasoducto, permitirá incrementar su abastecimiento energético y aumentará los ingresos por regalías en el departamento de Santa Cruz, trabajos que se vienen ejecutando en la actualidad.

tares de la postguerra chaqueña dieron cuerpo a la consigna de «nacionalizar el gobierno», la que comprendía ideas sobre el «deber estatal» «llevadas a la práctica con una gran timidez»¹⁸. Paulatinamente, fue cobrando fuerza la ideología desarrollista propiciada por un grupo de intelectuales que integraban el naciente Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y que propugnaba una trilogía:

- Nacionalización de las minas.
- Reforma Agraria.
- Democracia formal incorporando al campesinado.

En esencia, se trataba de derribar los obstáculos que se interponían en el camino de un modelo capitalista de desarrollo. Por otro lado, el proletariado minero organizado aceleró sus presiones reivindicativas con el apoyo del movimiento campesino. Mientras tanto, el desastre del Chaco, el endeudamiento progresivo y el deterioro de los términos de intercambio, por una parte, los impuestos desmedidos y la creciente incompetencia de la administración gubernamental, por la otra, agudizaban la ya precaria situación económica y sociopolítica¹⁹.

Ahora bien, la rápida redistribución de tierras en favor de los campesinos originó nuevas relaciones sociales, definidas en un contexto de desarrollo mercantil, que trajo aparejadas tendencias de descampesinización y diferenciación campesina. Si bien el campesino tenía abierta la posibilidad de capitalizar su renta, la acentuada fragmentación predial condicionada por la Ley de Reforma Agraria, impidió muchas veces su ma-

terialización y durante varios años disminuyó la producción agrícola para el mercado. «Lo que constituía la renta mercantilizada por el patrón, bien podría decirse que es puesta en un primer momento en la mesa del campesino»²⁰.

En otros términos, con la Reforma Agraria se consolidó una unidad de producción de base familiar que disponía de precarios medios de producción y que, careciendo de insumos de capital, originó magros niveles de productividad, por lo que tendió a hacer predominar la producción para el autoconsumo. Con tales condiciones se produjo una drástica reestructuración de los canales de comercialización. Se generalizaron los mercados rurales y surgió un estrato de intermediarios que, paulatinamente, fortalecieron el rol de las ciudades como centros de acopio de producción agropecuaria de su *hinterland* campesino. Se inició un proceso lento de diferenciación de la producción campesina bajo el efecto de este nuevo modelo mercantil, que adquirió especial importancia en las zonas próximas a la ciudad de Cochabamba. Mientras tanto, esta tendencia se mostró débil en el altiplano y los valles más alejados, donde la pobreza de la tierra o la falta de acceso al mercado motivaron un predominio del autoconsumo. Así, entonces, fue delineándose una modalidad desigual de desarrollo caracterizada por el hecho de que la esfera mercantil se consolidó sólo donde las condiciones anteriores de articulación con las minas y ciudades ya existían. De un modo u otro, se fue reproduciendo la modalidad de transferencia del valor de la producción derivada del trabajo familiar a los grupos de intermediación establecidos en el medio urbano. «El campesino pobre no sólo se enfrenta

18 Ledo, Carmen, 1999, *Urbanisation and the Process of Spatial Redistribution of the Bolivian population*, Faculty of Architecture, Delft University of Technology, Delft.

19 Zavaleta, op. cit., p. 90.

20 Healy, Kevin, *Caciques y Patronos*, (Cochabamba, Ediciones El Buitre, 1982), p. 37.

a un mercado que le es hostil y ajeno, sino en la mayor parte de los casos no puede relacionarse con él directamente y se ve obligado a vender su producción a acaparadores e intermediarios»²¹.

Ante la desigualdad inherente a los mecanismos de intercambio, con la explotación del capital mercantil y de la usura, por un lado, y las limitaciones de la unidad económica del predio, por el otro, la crisis campesina se materializó en una creciente incapacidad para reproducir la fuerza de trabajo familiar sólo a partir de la producción agropecuaria. Como una respuesta a tal situación, se despliegan estrategias de sobrevivencia que motivan una descampesinización. Los campesinos ya no pueden depender de su tierra y buscan refugio en las ciudades desempeñando una variada gama de oficios de dudosa significación productiva, que si bien le deparan un ingreso básico para permitirle sobrevivir, no le sirven para superar el estado de pauperización. Así, dado el escaso grado de desarrollo de las fuerzas productivas, puesto de relieve por la carencia de una base industrial, las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba reciben contingentes de esos campesinos que se insertan en el comercio ambulante o en la provisión de servicios personales de la más variada estirpe y contribuyen a otorgarle significado al contenido social de la población urbana. Otra opción a la que pueden optar los campesinos «expulsados» de su tierra es la de migrar hacia el oriente boliviano o al noroeste argentino, sea en forma permanente o mediante desplazamientos estacionales, donde asumen la calidad de asalariados rurales (es decir, una descampesinización que conduce a la

proletarización rural). Una tercera vía es incorporarse a las actividades de colonización, en sus múltiples formas que van desde la de tipo oficial a la «espontánea», lo que suele traer aparejado una recampesinización y diferenciación en un medio en el que se experimentan los rigores de la distancia, el aislamiento y las circunstancias ecológicas diversas de las conocidas en el ámbito de procedencia.

Ahora bien, la ambivalencia del proceso reformista del agro no se ha reducido a la operación de procesos de descampesinización, de diferenciación agudizada por la intermediación mercantil o de migración (rural-urbana, rural-rural o urbana-rural), sino que abarca un vasto plano de desigualdad en el modelo de desarrollo. En efecto, a pesar de las marchas y contramarchas propias de una sucesión de gobiernos imbuidos por orientaciones ideológicas diferentes, pero situadas en un contexto post-revolucionario en el que la institución armada se ha reconstituido como factor de poder, las políticas económicas aplicadas durante la segunda mitad del siglo XX han tenido un trato privilegiado a la zona oriental del país, básicamente al departamento de Santa Cruz. Allí donde la Reforma Agraria no condujo a transformaciones efectivas en los patrones de tenencia de los recursos básicos, se ha ido consolidando la empresa agroexportadora, de orientación capitalista. También allí ha adquirido especial importancia la explotación de hidrocarburos.

El afán desarrollista y modernizante de las corrientes nacionalistas²², que se apropiaron de los dogmas del progreso y el desarrollo, organizaron la marcha hacia el oriente, impulsada por el

21. Ibid., p 75. Ver también, Healy, op. cit., esp. pp.35-89

22. Bartra, Roger, *Estructura agraria y Clases sociales en México* (México, Editorial Era, 1978), p.84. «Este intermediario, vecino del pueblo, residente de la ciudad... se convierte en el nuevo explotador del campesino. No basta poseer la tierra si no se tiene control sobre los precios de los productos», Albó, Xavier, *Bodas de Plata o Réquiem por una Reforma Agraria*, en Revista Paraguaya de Sociología, número 13 (enero-abril, 1976), pp.25-58.

mito del “país rico sentado en una silla de oro”, una verdadera epopeya para el pueblo boliviano. La ampliación de las exportaciones en rubros como el petróleo, el gas, el algodón, la carne, la maderas, entre otros, y la sustitución de algunas importaciones de bienes alimenticios como el arroz y el azúcar fue el resultado de una persistente orientación de los recursos financieros del Estado a los llanos orientales, lo que modificó, de esta manera, el eje articulador prevaleciente hasta ese momento (La Paz-Oruro-Cochabamba) ubicándolo entre La Paz-Cochabamba²³-Santa Cruz. De modo específico, la Ley de Reforma Urbana, aplicada por el gobierno del MNR, provocó un relativo abaratamiento de las tierras urbanas al obligar a la venta o por lo menos al fraccionamiento de los latifundios urbanos. Este proceso fue más importante en la ciudad de Santa Cruz, donde durante la década del 50 se libró una verdadera guerra por el espacio urbano.

El impulso más importante a la urbanización fue el crecimiento del Estado. Las reformas sociales ocurridas a partir de 1952²⁴, la creciente participación estatal en la economía derivada del modelo de acumulación, la aplicación del prebendalismo y también la implantación de re-

gímenes totalitarios, hicieron crecer el aparato productivo estatal, el aparato represivo y la burocracia. Aunque el centralismo político nacional determinó que la mayor parte de las actividades del gobierno central se concentraran en la ciudad de La Paz, la creación, entre otros, de las corporaciones de desarrollo y otras instituciones de fomento, el crecimiento acelerado aunque insuficiente de la matrícula escolar, la expansión de la educación superior, la creación de los sistemas de seguridad social y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas²⁵, hicieron que la presencia estatal tome importancia en las ciudades del eje central.

El impacto de las reformas sociales implementadas en el período de la Revolución Nacional contribuyeron a modificar la urbanización y redistribución espacial de la población en el territorio boliviano. El proceso se agudizó con la crisis de la minería y del modelo de 1952 que fue testigo de una masiva expulsión demográfica de las áreas de la economía minera. Una de las manifestaciones de la crisis se presenta con mayor dureza a partir de 1980, período en el que la economía y la sociedad boliviana enfrentaron la más aguda crisis de su historia en el plano económico,

23. Se puede decir que todos los gobiernos posteriores al 52, tanto de derecha, centro e izquierda, estuvieron impregnados por la ideología del nacionalismo revolucionario. Cf. Antezana, Luis H., *Sistemas y Procesos ideológicos en Bolivia*, en Zavaleta (1983).

24. Laserna, Roberto, 1983. En Cochabamba no se localizó un núcleo exportador; la región mantuvo una estrecha relación con todos los auges exportadores de la economía boliviana, mediante el abastecimiento de alimentos y de mano de obra. Como la orientación predominante de su economía era el mercado interior, los ciclos económicos nacionales afectaron a la región, pero en forma relativamente más atenuada, por la sencilla razón de que su vinculación con el mercado internacional estaba amortiguada por lo que sucedía en las regiones propiamente exportadoras y tenía, por su ubicación central, la posibilidad de reorientar sus flujos económicos de una a otra región consumidora (Potosí, Oruro, La Paz, Beni, Santa Cruz).

25. Durante la primera mitad del presente siglo, el Estado boliviano tenía un desarrollo incipiente, y su presencia geográfica en el territorio boliviano era muy incompleta. Servicios básicos como la salud, la educación, la seguridad pública, la administración de justicia, estaban escasamente desarrollados y sólo tenían presencia en las ciudades más importantes. No había prácticamente empresas públicas. A partir de 1952, se da inicio a la reedificación del Estado nacional que, con variantes introducidas por intervenciones castrenses, cambios en las articulaciones sociales predominantes y solicitudes externas (propias de una sociedad dependiente), ha optado por un estilo de desarrollo esencialmente capitalista, pero que reconoce en su práctica política el indiscutible peso de las formas precapitalistas que operan en el campo y la ciudad.

social y político. La acelerada caída de los índices de crecimiento de las principales actividades productivas configuraron, progresivamente, una situación generalizada de estancamiento de su economía. Este proceso fue el resultado, entre otros, de factores externos e internos, como la recesión internacional, la caída de precios de las materias primas, la deuda externa y la hiperinflación.

La agudización de la crisis y las medidas de política implementadas para enfrentarla, han profundizado las desigualdades económicas regionales y se ha incrementado la redistribución espacial de la población²⁶. Sumado a lo anterior, a partir de 1983, se produjeron desastres naturales y sequías prolongadas, situación que ha reducido la superficie cultivable y ha provocado una fuerte dependencia de la economía campesina del mercado, hecho que se ha traducido en un abandono paulatino de las prácticas tradicionales de rotación, asociación de cultivos, abonamiento y descanso de los suelos. Se ha producido también una caída en la disponibilidad de productos tradicionales (particularmente papa y maíz), y de los ingresos rurales y la muerte de mucho ganado. Todos estos factores, ayudaron a que más familias rurales encuentren en la migración la única respuesta para su supervivencia.

Los factores que explican la urbanización en la segunda mitad del siglo XX son una serie de medidas de política como la marcha al oriente, la Reforma Agraria, el desarrollo del aparato estatal, los intentos de industrialización, la crisis del modelo del 1952 y las reformas estructurales implementadas en Bolivia desde la ejecución de la Nueva Política Económica (NPE) en agosto de 1985 en el denominado Programa de Ajuste

Estructural. Dichas medidas provocaron profundos procesos de permutación entre occidente y oriente.

Como ya se ha señalado, en términos ecológico-demográficos, todo esto ha significado un rápido crecimiento de centros urbanos y la concentración de población y oferta de bienes y servicios en sólo tres ciudades mayores. A la vez es interesante resaltar que dentro de cada contexto ecológico se ha reproducido una primacía urbana. La ciudad de La Paz acoge a dos terceras partes de los habitantes urbanos del altiplano; en los valles, la ciudad de Cochabamba alberga a la mitad de sus habitantes ciudadanos y la ciudad de Santa Cruz concentra al 59% de la población urbana de la región oriental del país.

El crecimiento demográfico de las ciudades del oriente boliviano continúa en una tendencia ascendente. En cambio muchas urbes situadas en torno a las vías de intercomunicación de la red occidental han desaparecido y han surgido nuevas vinculadas a las nuevas rutas carreteras, vinculadas a nuevos roles que acrecientan la heterogeneidad socio-estructural vigente en el territorio boliviano. Destaca el cambio numérico de los centros urbanos (ciudades) según región ecológica: En el occidente de Bolivia, en 1950, se localizaban 17 de las 41 ciudades del país, y en los llanos sólo había nueve ciudades. Nótese que en 1976, cuando en el país había alrededor de un centenar de ciudades, en el altiplano se localizaban 42, más de la mitad (60 ciudades) en los valles y en los llanos. En 1992, el cambio es drástico, porque de las 123 ciudades bolivianas, 55 están en el oriente de Bolivia, 30 en los valles y sólo 38 en el altiplano.

26. En la medida en que este potenciamiento se realiza dentro del marco del control político de la población, impulsado por la doctrina de la seguridad nacional, el asentamiento de las unidades militares se da en los centros urbanos de mayor importancia y conflictividad política y no en los espacios fronterizos.

La década de los 90 ha dejado pendientes algunas nuevas interrogantes sobre el carácter de las transformaciones urbanas y/o rurales. Estos cambios expresan el deterioro de las condiciones de vida y reproducción social de la mayor parte de la población boliviana en el campo y en las ciudades. Entre 1950 y 1992, la población urbana ha disminuido su importancia relativa en el altiplano en 20 puntos porcentuales, porque pasó del 63% al 44% respectivamente. En los valles, la proporción de habitantes urbanos se ha mantenido relativamente constante con una representación de alrededor del 25%; y en el caso de los habitantes urbanos de los llanos se advierte un fuerte incremento de 20 puntos porcentuales, que va desde un 12% en 1950 a un 32% en 1992.

La alta vulnerabilidad de las ciudades bolivianas a los procesos económicos y políticos queda claramente reflejada en el accionar en materia de política pública. Las obras de infraestructura vial jugaron un papel preponderante en la desaparición y aparición de nuevos centros urbanos, aspecto claramente observable en el oriente boliviano asociado a las políticas de colonización dirigida donde la apertura de nuevos caminos como: la carretera Cochabamba-Santa Cruz, Cochabamba-Villa Tunari y La Paz-Caranavi, iniciadas

luego de 1952. A ello se suma la ampliación de esta red hacia el norte de Santa Cruz, Puerto Villarroel y Alto Beni, lo que permitió la movilización de un número importante de familias desde y hacia estas y otras regiones del país²⁶. Debido a la conflictividad que asume la colonización espontánea debido a la expansión de las actividades del complejo coca/cocaína, en la década del 80, pero sobre todo en el segundo quinquenio, los gobiernos tratan de detener la colonización a través de acciones que van desde la represión directa y el amedrentamiento (caso de las «marchas» de relocalizados mineros hacia las zonas productoras de coca, 1987-1988), a la destrucción de vías camineras, constantemente denunciadas por los agricultores del trópico cochabambino (1985-1990), y la paralización de los trabajos de infraestructura de importancia fundamental como la del camino Cochabamba-Beni en 1990.

Otro factor importante en la redistribución demográfica fue la pulverización parcelaria en los valles, la agricultura de subsistencia y los altos niveles de pobreza del campesinado luego de la Reforma Agraria de 1952. Al actuar como factores estructurales de expulsión poblacional, favorecieron la colonización de la tierras agrícolas tropicales y la urbanización de la población. Al ce-

CUADRO 6

Bolivia: Población total distribuida según grado de urbanización, por número de ciudades, Tasa de crecimiento demográfico y regiones ecológicas, 1976 - 1992

Grado de Urbanización	Número Ciudades		Tasa de Crec. Demográfico 76-92				Población	
	1976	1992	Altiplano	Valles	Llanos	Total	1976	1992
CIUDADES PRINCIPALES(1)	3	3	3,83	4,69	6,81	4,79	1.068.387	2.223.973
CIUDADES INTERMEDIAS	7	16	2,42	9,93	9,12	6,26	370.267	958.156
RESTO URBANO	92	104	0,39	-0,86	3,07	1,06	434.545	512.717
RURAL			-0,85	0,65	0,77	0,25	2.620.350	2.725.946
TOTAL	102	123	1,65	1,95	4,04	2,30	4.495.525	6.422.784

(1) Altiplano: La Paz, Valles : Cochabamba y Llanos: Santa Cruz.

Fuente: Elaboración propia a partir del reprocesamiento de la base de los Censos Nacional de Población y Vivienda 1976 y 1992.

rrarse las fuentes de empleo no agrícolas por el ajuste estructural producido por la crisis de la minería, gracias a una mayor apertura a la importación que quita posibilidades a la industria nacional, es posible que en el futuro se asista a una acelerada pulverización parcelaria y al surgimiento de un número creciente de microfundios.

Los distintos aspectos que se han presentado hasta aquí han ido explicando los cambios en la distribución espacial de la población boliviana. El modelo de primacía urbana vigente hasta los años 50, fue reemplazado por el de «eje central de desarrollo» occidente-oriente, que es el que actualmente se viene profundizando en la formación social boliviana. Dicho modelo está reflejado por una fuerte concentración económica, política, social e incluso demográfica en las ciudades del denominado corredor económico nacional, frente a una gran dispersión y un agudo proceso de inequidad y ausencia de oportunidades en el resto del territorio boliviano. Estos aspectos serán explicados a continuación con más detalle.

PUEBLOS Y CIUDADES PEQUEÑAS

Hacia 1992, un millón y medio de bolivianos vivía en 123 ciudades pequeñas y más de dos y medio millones de personas, en las zonas rurales. Resulta ilustrativo indicar que alrededor de un centenar de pequeñas ciudades habían en Bolivia en 1976, de las cuales sólo 7 tenían tamaño intermedio y en 1992 habían pasado a ser 16 ciudades de dicho rango²⁷, fue en éstas áreas donde se produjo el incremento más notable de la po-

blación, aspecto explicado por la inclusión en ésta tipología a 5 capitales de departamento (Oruro, Potosí, Sucre, Tarija y Trinidad), así como a ciudades de gran dinamismo de los valles y llanos, tales como Quillacollo y Sacaba, ambas pertenecientes a la gran metrópoli de la ciudad de Cochabamba; Montero y Camiri en Santa Cruz; Riberalta y Guayaramerín en el Beni; Yacuiba y Bermejo en Tarija; Tupiza, Villazón y Llallagua en Potosí. Todas estas ciudades desempeñan funciones de importancia en diversos planos. La mayor parte de ellas se ubica en los espacios circundantes de las capitales de departamento y/o provincia. Una manera adicional de evidenciar la pérdida de importancia de las ciudades del occidente de Bolivia y el predominio de la región oriental se encuentra en observar que sólo tres de éstas ciudades pertenecen al altiplano²⁸, siete se ubican en la zona de los valles y seis en la región de los llanos bolivianos.

En las ciudades de tamaño intermedio en sólo 15 años se ha triplicado el número de sus habitantes. Han pasado a hospedar al 30% de los habitantes urbanos de Bolivia. Al inspeccionar el desempeño de cada ciudad, resaltan algunos aspectos como el peso que tienen Quillacollo y Sacaba, ciudades próximas a la ciudad de Cochabamba, que entre 1976 y 1992 han crecido a un ritmo superior al 8% anual. De ahí que su crecimiento demográfico en la región de los valles fue mayor, en sólo 15 años se ha quintuplicado el número de sus habitantes. Similar situación sucedió en los valles y en las ciu-

27. La hiperinflación vivida en Bolivia entre 1983 y 1985 y las medidas de política implementadas por el gobierno de la UDP, estimularon la especulación comercial y financiera en desmedro de las actividades productivas, mientras que la Nueva Política Económica vigente desde agosto de 1985, a pesar de haber logrado la estabilidad del sistema monetario, no creó las condiciones necesarias para la reactivación del aparato productivo del país. Para mayores detalles sobre la materia véase Larrazábal Hernando; *Políticas y Sector informal urbano*, en Revista Programa de Ajuste Estructural, Serie: Documentos de trabajo N1 1, CEDLA, La Paz, 1992.

28. Paz, Danilo, 1983: *Estructura agraria boliviana*. Ed. Popular, La Paz, 1983, p. 91-100

dades intermedias de la región ecológica de los llanos, que aumentaron sus efectivos en casi cuatro veces.

Los centros poblados pequeños con dos mil a 20 mil residentes denominados en este estudio "Resto urbano", incluyen a 104 localidades de bajo grado de urbanización. El perfil de su crecimiento es bajo y negativo en las zonas de los valles y en el altiplano, sólo en la región de los llanos crecieron a un ritmo superior a la media nacional. La explicación de la declinación demográfica del "Resto urbano" se explica porque en dicha tipología se incluyen muchas de las antiguas ciudades prósperas ubicadas en torno a la pujante actividad minera, como Colquiri, Quime, Viloco, Santa Bárbara y Atocha que se han convertido en pueblos fantasma luego del cierre de las empresas mineras del Estado. En esta área también están las zonas deprimidas de los valles altos de Cochabamba, que han sufrido un duro golpe por el traslado de la vía troncal dirigida hacia Santa Cruz a la nueva carretera hacia la zona del Chapare.

En las zonas rurales del altiplano boliviano y en el "Resto urbano" de los valles, se ha producido un descenso demográfico del orden del -1%. Este fenómeno está indisolublemente asociado a la redefinición de los circuitos mercantiles de corta distancia durante el período post-revolucionario²⁹. El círculo vicioso de la pobreza se refleja con relativa claridad cuando se observa que los menores niveles de Desarrollo Humano se encuentran

espacialmente localizados en estas áreas. Por otra parte diversos estudios han demostrado que también allí se encuentra localizada la mayor proporción de hogares en situación de extrema pobreza. La mayor parte de sus habitantes son poblaciones indígenas y esto demuestra una vez más que las acciones del poder central producen una aguda segregación cultural lo que incrementa la miseria y la exclusión de una importante fracción de los bolivianos³⁰. De manera sintomática, las regiones del oriente boliviano se ubican en un nivel medio de desarrollo humano y las regiones situadas en el occidente de Bolivia presentan niveles bajos en su desempeño en materia de Desarrollo Humano. Por eso se indica con mucho acierto que un pie de Bolivia está en el África (el occidente) y otro en América (el oriente).

LAS CIUDADES DEL CORREDOR ECONÓMICO BOLIVIANO

Las ciudades del corredor económico boliviano representan al nuevo modelo de primacía urbana³¹. La única diferencia con el modelo anterior es que involucra tres grandes regiones estratégicas, donde se concentran los esfuerzos del desarrollo:

- Santa Cruz, ciudad moderna y preparada para constituirse en una urbe del futuro, con una pujante agroindustria y fluidas relaciones comerciales con los puertos del Atlántico y el Pacífico.

29. El tamaño de estos centros fluctúa entre las 20 mil y las 200 mil personas.

30. En sólo 2 de las 16 ciudades intermedias se encontraron tasas de crecimiento demográfico inferior a la media nacional (Llallagua y Camiri). Se trataba de ciudades fuertemente ligadas a la actividad minera y por ende su declinación es explicada por el cierre de la mayor parte de las minas estatales de su entorno, aspecto que se hizo evidente una vez iniciado el programa de ajuste estructural vigente en Bolivia a partir de 1985.

31. V. al respecto, Katherine Barnes de Marschal, *La Formación de los nuevos Pueblos en Bolivia: Proceso e Implicaciones*, en Estudios Andinos, Vol. 1, número 3 (1970), pp. 23-37; Preston, David, *New Towns: A Major Change in the Rural Settlement Pattern in Highland Bolivia*, en *Journal of Latin American Studies*, número 2 (mayo de 1970), pp. 1-27.

- La Paz mantiene su condición de primer centro industrial del país y desarrolla acciones para explotar su rico territorio con gran diversidad ecológica.
- Cochabamba vendría a ser un espacio intermedio, de integración, de articulación y encuentro del conjunto nacional, y es también un espacio promedio en el que los contrastes del país también se ponen de manifiesto. En muchos sentidos, Cochabamba es una síntesis de Bolivia.

En el nuevo modelo de jerarquía urbana se encuentran dos terceras partes de los habitantes urbanos de Bolivia, cuatro de cada cinco económicamente activos, que cuentan con los más altos indicadores de desarrollo. Hasta donde los datos permiten observar, existe una relación positiva directa entre el grado de urbanización alcanzado y los niveles de desarrollo humano.

En estas ciudades es donde se están produciendo las mayores desigualdades sociales y económicas. Existe una gran brecha de inequidades socio-espaciales expresada en la forma del uso y apropiación altamente segregada del suelo urbano, altamente excluyente en la provisión de los servicios básicos a los sectores más pobres de sus espacios periurbanos. Se trata de ciudades cuyo tamaño demográfico es superior al medio millón de habitantes. Todas ellas crecen a un ritmo demográfico del orden del 5% anual y en sólo 15 años, han ido más allá de su duplicación (cuadro 6).

Las características de organización de la estructura urbana interna de estas ciudades son propias de una desigualdad social acentuada, con manifestaciones concretas de segregación y «marginalidad» física. Los más pobres viven en los espacios menos consolidados, carentes de mínimas condiciones de habitabilidad, en las zonas más deprimidas y con una situación crítica por la

insatisfacción de necesidades básicas. A la pobreza de vastos sectores de la población se suman las carencias y deficiencias del ambiente habitable. No obstante los esfuerzos desplegados por las agrupaciones sociales de base, la acción del Estado, principalmente a través de la gestión local (alcaldía), no sólo ha desatendido los requerimientos de los grupos vecindarios en las áreas más deprimidas, sino que se ha concentrado en aquellas otras donde habitan los estratos de mayores ingresos o donde se localiza el complejo de servicios de rango superior.

A manera de síntesis se puede indicar que la organización territorial del Estado boliviano en el siglo XX atravesó las siguientes fases:

- La que corresponde al Estado minero feudal (1900-1953), o sea al modelo de primacía urbana, con la ciudad de La Paz como el centro de poder y dominación.
- La que corresponde a la difícil construcción del Estado y la sociedad capitalista moderna (1952 al presente) y cuya expresión territorial es el eje altiplano-oriente que ha permitido la emergencia de tres procesos de metropolización singulares en los conurbados de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

A fin del presente siglo, el proceso urbano resultante en la formación social boliviana refleja de manera directa las acciones que se han ido implementando a lo largo del tiempo. La Reforma Agraria, la marcha hacia el oriente y la crisis de la minería han condicionado la formación de una estructura urbana fuertemente concentrada en sólo tres ciudades del eje central. Sumado a lo anterior, en dicha concentración se presentan altos procesos de diferenciación espacial y social de sus estructuras urbanas internas, lo que no hace otra cosa que profundizar el modelo de ordenamiento territorial estimulado por el desarrollo del Estado erigido en 1952.

El crecimiento de la población urbana guarda estrecha relación con el dinamismo económico y social de cada región, de tal manera que los patrones regionales de desarrollo son los que en última instancia permiten entender el ritmo de su crecimiento. En Bolivia, la urbanización heterogénea, relativamente lenta, es el fruto del desarrollo desigual del capital y de la naturaleza extrovertida de la acumulación. La presencia histórica y estructural de los modos de producción capitalistas ha originado un patrón concentrado de urbanización en las tres ciudades mayores y ha contribuido a otorgar especificidad a cada uno de ellas.

La población se desplaza en búsqueda de mejores condiciones de vida y trabajo. De ahí que el destino de la migración esté concentrando en aquellas regiones que ofrecen directa o indirectamente algunas oportunidades de empleo autogenerado y/o donde exista mayor impacto de las políticas públicas, que también son una condicionante al escoger el nuevo lugar de residencia.

Las pautas de redistribución de población en Bolivia, expresan la pérdida de importancia relativa del sector agrícola y la expansión del sector terciario de base esencialmente urbana. El panorama descrito nos permite imaginar, que bajo cualquier modelo de crecimiento, el escenario social boliviano va a estar caracterizado por muchos años por la presencia masiva de la pobreza rural y peri-urbana, caracterizada por una aguda segregación socio-espacial y un crecimiento urbano carente de normativas debido a la ausencia de planificación urbana desde una perspectiva de construcción de ciudades social, económica, cultural y políticamente sostenibles.

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La estructura productiva urbana en Bolivia es heterogénea. En los mismos espacios del mer-

cado coexisten distintas formas de organización productiva: unidades económicas intensivas en capital y de alta productividad; junto a otras de menor dotación de capital por hombre ocupado y de mediana o baja productividad, con predominio cuantitativo de pequeñas unidades económicas organizadas de manera autónoma, en condiciones de atraso tecnológico, lo que genera una predominancia de condiciones de subempleo de la mano de obra, expresado en las bajas remuneraciones y las condiciones inadecuadas del trabajo.

El escaso desarrollo de las fuerzas productivas y la creciente heterogeneidad de las unidades económicas son las que configuran una estructura productiva eminentemente terciarizada y dentro de ella con particular importancia en las actividades ligadas a la intermediación y a los servicios personales. Incertidumbre e insatisfacción laboral son dos maneras de sintetizar los efectos más palpables del funcionamiento reciente del mercado laboral, frente a la pérdida de la calidad del empleo que afecta a una fracción abrumadora de la población ocupada. La precarización del empleo y la persistencia de ingresos bajos y fluctuantes obligó a las familias a buscar una variada gama de estrategias de vida para cubrir los siempre crecientes requerimientos del presupuesto familiar y el simultáneo deterioro de sus ingresos reales.

PERFIL ECONÓMICO DE LAS CIUDADES

La crisis del modelo de acumulación iniciado en 1952 puso al país al borde del abismo, y dio lugar a un ajuste estructural que cambió el perfil de la economía boliviana. La primera generación de reformas fue dictada en agosto de 1985 y estuvo constituida por las medidas de la «Nueva Política Económica», que tenía un doble objetivo: la estabilización y la flexibilización macroeconómica.

La primera fue de shock y combinó de manera muy restrictiva las políticas monetarias y fiscales del país con la alineación del tipo de cambio oficial al paralelo (dolarización de la economía). Por otra parte, la flexibilización se dio junto a la liberalización de los precios entre 1985 y 1989 (primera generación de reformas), con el objeto de reducir el déficit fiscal y la hiperinflación. Es evidente que se controló el ritmo inflacionario de la economía, pero al costo de una mayor vulnerabilidad de los sectores más empobrecidos de la sociedad boliviana. Entre 1989 y 1993 se profundizaron las reformas implementadas en 1989 y se liberalizaron aún más las entradas para la inversión extranjera. Finalmente entre 1993 y 1997, la segunda generación de reformas destruye la imagen del país de manera muy dura, por lo que la Bolivia del 2000 es absolutamente distinta de la de los 90, dado que se transfirieron las empresas públicas al sector privado, particularmente en los rubros de hidrocarburos o energía eléctrica, que serán motivo de un mayor análisis en adelante.

El ajuste estructural cambió las reglas del juego de los actores económicos e introdujo reformas que determinaron el abandono del Estado de la actividad productiva, debido a la venta de más del 50% de las acciones de las empresas estatales a socios extranjeros. De ahí que el núcleo central de la economía nacional esté ahora en manos del dinero internacional, al que lamentablemente se adhieren las empresas nacionales como socios marginales y secundarios. El capital privado extranjero es ahora el líder en la formación bruta de capital.

El efecto del ajuste estructural iniciado en 1985, estableció una mayor apertura de la eco-

nomía, y rebajó considerablemente la protección arancelaria para la producción nacional. Desde 1986, las importaciones bolivianas tienen un arancel generalizado de 20%, a lo cual se agrega la protección natural que deriva de los altos costos de transporte. Sin embargo ello no es óbice para que una gran cantidad de productos que podrían producirse en el país, y que de hecho llegaron a producirse, sean sustituidos por productos importados. Este proceso generó un mayor crecimiento del sector informal y se redujo el espacio para el sector industrial en Bolivia, que así ha disminuido en empleo y en producción durante los últimos años. Al presente, no se visualizan los resultados de cerca de 15 años de ajuste³², puesto que la economía no ha superado los niveles alcanzados antes de la crisis del 82 y se han profundizado las brechas en distintos planos.

De la misma manera en que se observó una fuerte concentración demográfica en el corredor económico nacional, se produce el mismo fenómeno en los indicadores del comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB), que representa alrededor del 75% en las ciudades del eje, aspecto que refleja su hegemonía también en el orden de las actividades económicas. Más dramática es la situación en términos del PIB *per cápita*. El primer lugar lo ocupa Santa Cruz con \$us. 1.306, que está por encima del promedio nacional y la región con más bajo ingreso es Potosí, con un equivalente al 34% del ingreso de Santa Cruz (cuadro 7).

Cabe recordar que la visión del desarrollo económico asumida luego de la Revolución Nacional de 1952, estuvo basada en el patrón de acumulación minero-estatal³³, que no sólo impulsó el desarrollo de la agricultura tropical, sino tam-

32. Véase PIEB - Tinkazos: *Coloquio de Tinkazos, Ronda de Criterios sobre Pobreza y Desarrollo*, Albó, Xavier, Calderón, Fernando y Gutiérrez, Vladimir, pag. 46. 1999, La Paz.

33. Véase Arze, Cuadros 1979. Prado, Fernando 1993. Ambos autores indican que por primera vez quedó sistematizada en 1970 el

CUADRO 7
BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL - 1992

DEPARTAMENTO	PIB Miles de Bs. Corrientes	POBLACION 31.12.92	PIB Percapita en Bs. Corrientes	PIB en miles de \$us. Corrientes	PIB percapita En \$us. Corrientes
Santa Cruz	7,249,845	1,421,239	5,101	1,856,269	1,306
Beni	1,145,785	289,248	3,961	293,370	1,014
La Paz	7,128,358	2,044,735	3,486	1,82,163	893
Tarija	1,105,583	314,152	3,519	283,076	901
Pando	156,990	41,709	3,764	40,196	964
Cochabamba	4,483,849	1,236,997	3,625	1,148,056	928
Oruro	1,152,114	370,414	3,110	294,691	796
Chuquisaca	1,429,385	479,455	2,981	365,983	763
Potosí	1,179,767	689,610	1,711	302,071	438
TOTAL	25,031,676	6,887,559	3,634	6,408,877	931

Fuente: Laserna Roberto y otros, *Sostenibilidad y Desarrollo Humano en Cochabamba*, cuadro 3,1a, 195.
Tipo de Cambio promedio 1992 Bs. 3.9056 por dólar americano.

bién de una industria orientada hacia la sustitución de importaciones de bienes de consumo directo. Para garantizar dicho cometido, se elevaron los aranceles y se impusieron otras barreras a la importación, todo a fin de proteger la incipiente industria local³⁴. Gracias a este impulso,

la industria emergente se asentó sobre todo en las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Dentro de esta misma tarea, Bolivia ingresó en 1969 al Pacto Andino, con la esperanza de que se establezca un mercado común entre los países de la subregión. Sin embargo esas políticas

sistema de ciudades en la «Estrategia Nacional de desarrollo». Las regiones polarizadas (inspirada sin duda en las corrientes de la planificación en boga en aquel momento), establecían los siguientes «polos»: La Paz - Polo Dominante, Cochabamba - Polo de Servicios, Santa Cruz - Polo de Desarrollo, Oruro - Polo de Desarrollo, Chuquisaca - Polo Agroindustrial y Tarija - Polo Agroindustrial. También señalan que en aquel momento algunos intelectuales de la planificación presentaron algunas propuestas de modificaciones a la estrategia. Se había sugerido la sustitución del concepto de polos de desarrollo, por el de «ejes de desarrollo», esto debido a que consideraban que era un hecho la existencia de un eje central de desarrollo que une La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se indicó que dicho eje presenta potenciales evoluciones desde La Paz hacia el norte, desde Santa Cruz hacia el este, por los proyectos de la zona de Yacuses y el Mutún, y otro eje secundario que se desprende hacia el sur. Se planteó definir a Santa Cruz como verdadero polo de desarrollo dominante, por su capacidad productiva, sus tendencias demográficas, la abundancia de recursos naturales y la dinámica económica. La Paz como polo de desarrollo de servicios y Cochabamba, polo de desarrollo de integración.

34. Véase Loza, Gabriel (1997) *Competitividad, Educación y Desarrollo Humano*, PNUD. Loza indica que Bolivia ha teniendo como resultado una de las economías más estables de América Latina con inflación de un dígito desde 1992 (a excepción de un año). Sin embargo, si se compara con los 48 países del estudio, Bolivia ocupa el puesto 32, similar al de Chile, lo que muestra que a nivel internacional la tasa de inflación boliviana no está entre las más bajas en comparación con Suiza (0.9%) o Malasia (3.8%).

tuvieron un éxito corto y limitado, debido a que el mercado interno era muy pequeño y con escasas posibilidades de exportación. Su situación de país mediterráneo contribuyó a incrementar los costos de transporte, lo que repercutió negativamente en las posibilidades de ofrecer sus productos a precios competitivos con el mercado internacional. A pesar de los aspectos negativos, se puede observar que de dicho periodo quedaron desarrollados algunos sectores industriales como la agroindustria, los textiles y ciertas líneas de industria metálica ligera. El sector industrial llegó a absorber un 16% del empleo total.

A partir de los años 70 y con mayor fuerza en los 80 y 90, se ha producido un crecimiento de las importaciones legales e ilegales financiadas fundamentalmente con los ingresos de la exportación ilegal de derivados de la coca, y favorecidas temporalmente por tipos de cambio oficiales poco realistas. La inundación del mercado boliviano con productos de importación, incluyendo ali-

mentos, vestimenta y muchos otros, que se comercializaron en gran parte a través del sector informal, reducen las posibilidades de desarrollo industrial. Mucho más dramática es la situación cuando entre 1970 y 1985 se produjo el fin del modelo de la economía del Estado y se dio paso a la economía de mercado que abre las puertas al capital privado internacional y genera un clima de incertidumbre e insatisfacción en la mayor parte de la población boliviana, particularmente entre los trabajadores que son los que están soportando estos desaciertos.

En 1970, Santa Cruz y Cochabamba compartían valores similares en la producción del PIB nacional (17%), La Paz en cambio tenía un dinamismo ostensiblemente mayor. En Cochabamba, esta proporción se mantuvo más o menos constante durante los últimos 30 años, en cambio la tendencia fue creciente en Santa Cruz y relativamente decreciente en La Paz (cuadro 8). La composición del PIB departamental en las últimas

CUADRO 8
PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL POR ACTIVIDAD ECONOMICA, 1988 - 1995

PRODUCTO INTERNO BRUTO S. ACT. ECONOMICA	LA PAZ		COCHABAMBA		SANTA CRUZ	
	1998	1995	1988	1995	1988	1995
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca	10%	8%	20%	17%	18%	23%
Industrias Manufactureras	18%	16%	27%	25%	21%	21%
Electricidad, Gas y Agua	1%	5%	2%	3%	2%	4%
Construcción y Obras Públicas	4%	4%	4%	4%	3%	3%
Comercio	11%	11%	9%	9%	9%	10%
Transporte y Comunicaciones	11%	14%	9%	12%	10%	13%
Establecimiento Financieros	17%	14%	11%	10%	13%	12%
Servicios Social y Personales	5%	5%	5%	5%	5%	4%
Restaurantes y Hoteles	4%	3%	3%	3%	4%	3%
Servicios Bancarios Imputados	-2%	-4%	-1%	-3%	-2%	-5%
B. Servicios de la Administración Pública	15%	18%	9%	11%	7%	8%
C. Servicio Doméstico	1%	1%	1%	0%	1%	1%
VALORES BASICOS (Precios Corrientes)	2,625,377	7,785,616	1,875,192	5,285,090	2,517,588	7,780,517

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el INE- Departamento de Cuenta Nacionales, 1988, 1995, La Paz, Bolivia

décadas muestra que aún la actividad agrícola es de relativa importancia, hay un precario desarrollo de las actividades de transformación y un crecimiento sostenido de las actividades terciarias, principalmente de servicios.

En 1995, Cochabamba alcanzó un PIB de 5,285 millones de bolivianos y aportó con cerca del 19% del PIB nacional. Santa Cruz y La Paz tuvieron un aporte similar en alrededor de 7.785 millones de bolivianos. Cada una aportó con el 29 y 26% respectivamente al PIB nacional de acuerdo a la estructura departamental del producto nacional según el cuadro 9.

Santa Cruz tiene las posibilidades de visualizar un futuro sostenible en su desarrollo, porque ha

logrado edificar una amplia y sólida base productiva. Se ubica en el primer lugar del PIB manufacturero, agropecuario y de hidrocarburos. Sus fuentes de su financiamiento se concentran en las colocaciones de recursos de la banca privada, incluidos los créditos de desarrollo provenientes del Banco Central de Bolivia. Tiene una clase política y empresarial con espíritu emprendedor y el nivel más alto de productividad. También generó los pilares básicos para atraer las inversiones privadas y edificar una excelente infraestructura caminera, de ferrocarriles y aeroportuaria junto con la hidrografía. Esos son los factores de atracción y por eso ocupa el primer lugar en el nivel de desarrollo humano con el índice más alto

CUADRO 9
Producto Interno Bruto a precios corrientes según actividad económica, 1995
(En miles de bolivianos)

ACTIVIDAD	LA PAZ	COCHABAMBA	SANTA CRUZ	PIB EJE	PIB 5 nal
A. Industrias	6,320,175	4,679,403	7,095,059	18,094,637	24,599,190
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca	648,800	876,885	1,819,377	3,345,062	4,789,906
Extracción de Minas y Canteras	419,197	185,772	212,302	817,271	1,944,879
Industrias Manufactureras	1,253,760	1,337,731	1,646,231	4,237,832	5,392,740
Electricidad, Gaz y Agua	393,593	176,317	331,136	901,046	1,101,563
Construcción y Obras Públicas	293,509	199,006	202,251	694,766	955,007
Comercio	821,205	469,253	765,137	2,055,595	2,713,548
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones	1,055,709	616,753	973,933	2,646,395	3,250,500
Servicios Financieros	346,405	150,567	438,444	935,416	977,029
Servicios a las empresas	281,328	145,354	202,126	628,808	787,128
Propiedad de vivienda	484,440	226,497	331,027	1,041,964	1,412,936
Servicios Comunales, Sociales y Personales	376,448	257,176	326,656	960,280	1,22,278
Restaurantes y Hoteles	256,956	173,346	240,181	670,483	929,337
Servicios Bancarios Imputados	-311,175	-135,254	-393,854	-840,283	-877,663
B. Servicios De Las Administraciones Públicas	1,411,932	583,567	613,399	2,608,898	3,585,607
C. Servicio Domestico	53,509	22,121	72,059	147,689	185,352
Total A Valores Básicos	7,785,616	5,285,090	7,780,517	20,851,223	28,370,147

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el INE-Departamento de Cuentas Nacionales, 1995, La Paz, Bolivia

del país (0,620), que es el doble que el de Potosí. Todo ello hace de Santa Cruz una región competitiva y con grandes chances para ingresar al nuevo milenio bajo las exigencias y demandas del mercado mundial.

La ubicación física del poder central en la ciudad de La Paz explica en parte el perfil de su base económica, que tiene más incidencia en el sector no productivo, por lo que los servicios de la administración pública, los establecimientos financieros, el transporte, las comunicaciones y el comercio ocupan un lugar importante, que representa las dos terceras partes de su PIB regional. Su ubicación estratégica coadyuvó a que pueda ingresar en el mercado internacional mediante las exportaciones de confecciones y joyería de oro, lo que le permitió ubicarse en el segundo puesto de las exportaciones totales y no tradicionales. Se beneficia de una buena parte del la inversión extranjera en la industria manufacturera (30%) y casi la mitad (49%) de aquella destinada al comercio y los servicios. Las tendencias de su desarrollo son poco claras, pues ocupa el primer lugar en la generación de impuestos, pero el segundo en la inversión pública (promedio del periodo 1988-1996), el tercer puesto en el gasto público *per cápita* y en créditos de desarrollo. Potencialmente, las posibilidades de desarrollo de La Paz están centradas en un mejor uso de su localización geográfica respecto al nuevo espacio económico ampliado constituido por el norte de Chile y el sur del Perú. Los esfuerzos en los corredores de exportación hacia Arica y el Desaguadero podrían traducirse en aumentos de la producción de bienes y de servicios ligados a la demanda internacional³⁵.

La estructura productiva de Cochabamba es esencialmente terciaria, ocupa un lugar destacado de las actividades de comercio, transporte y

servicios financieros (casi el 40% en conjunto). La actividad comercial en Cochabamba es una expresión del grado de mercantilización de las relaciones económicas y de la dinámica y diversidad de las formas de generación de riqueza, que si bien está orientada a su mercado interno, también ha sido favorecida por su ubicación geográfica y su rol integrador y articulador de los mercados del oriente y occidente boliviano. La inversión extranjera directa se orienta en un 50% al comercio y servicios aunque también se está dirigiendo en un 27% a hidrocarburos y en un 21% a la industria, lo que ayuda a mantener un cierto equilibrio en el desarrollo de su aparato productivo.

Una cuarta parte del PIB es concentrado por la industria manufacturera, caracterizada por la mayor concentración en la producción de bienes de consumo directo (alimentos y bebidas), textiles y prendas de vestir, metal mecánica, muebles, cueros y calzados, e imprentas. La presencia de migrantes con espíritu innovador ha incrementado las actividades artesanales en el rubro de las confecciones de ropa. Se han conformado talleres de *blue jeans* en los barrios periféricos de Cochabamba. También se expande la producción de artesanías diversas para la producción de objetos de cuero, lana, madera y metal. Sus productos son distribuidos internamente mediante las ferias semanales de la Cancha y la Pampa. Las mujeres son las responsables de su comercialización. También están las exportaciones dirigidas hacia el norte argentino por la zona de Yacuiba, o al Perú por la zona del Desaguadero. Cochabamba, el histórico "granero" del Alto Perú, denominado así porque estuvo caracterizada por su predominio en la producción agrícola, se convirtió en los años 90 en el segundo productor agropecuario. Hace poco ingresó en la

35. Cfr. Grebe, Horst, *Excedente sin acumulación. Génesis de la Crisis actual*, en Zavaleta (1983).

explotación de sus recursos energéticos y es posible suponer que en un mediano plazo, su principal fuente de ingresos provenga del sector petrolero, ya en los 90 pasó a ocupar el segundo lugar en la producción de petróleo y condensado y el cuarto lugar en la de gas natural. Cochabamba tiene un perfil productivo intermedio entre La Paz y Santa Cruz por lo que puede ser la expresión de un modelo basado en recursos naturales y en la industria manufacturera³⁶.

Uno de los problemas más importantes para el desarrollo cochabambino es su crecimiento caótico y carente de una visión estratégica de largo plazo en cuanto a los bajos niveles de consumo colectivo generados hasta el presente. Su mayor déficit es la deficiente infraestructura en los servicios básicos de agua potable y alcantarillado, situación que se torna más aguda luego del contrato de concesión del servicio público de agua y alcantarillado de Cochabamba por un período de 40 años. Lamentablemente la nueva concesionaria no ingresó a solucionar los problemas estructurales.

Una vez finalizadas las reformas de la segunda generación en Bolivia y el corto plazo transcurrido desde su aplicación, sólo se vislumbra un futuro incierto. Se capitalizaron una serie de empresas públicas en áreas tales como: telecomunicaciones, hidrocarburos, minería y transporte. Si bien uno de los objetivos de la capitalización eran crear fuentes de trabajo, acelerar el ritmo de la economía, la transformación de la tecnología, entre otros, lamentablemente algunos de los resultados reflejan que el empleo en el sector público experimentó una fuerte contracción. Del 6.1% de mano de obra ocupada en 1985, bajó al 1% en 1996. Esto determinó una mayor salida de mano de obra en busca de ingresos de subsistencia y por ende una menor disponibilidad de capital por trabajador y mayor informalización de la economía³⁷.

ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN

La «población económicamente activa» (PEA) incluye como activos a aquellas personas que en el tiempo de referencia usado en la encuesta (la

CUADRO 10
Estructura Económica de la Población - 1992 (En Valores absolutos)

CONDICION ACTIVIDAD	LA PAZ			COCHABAMBA			SANTA CRUZ			TOTAL
	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	EJE
MENORES	98.241	95.424	193.665	35.974	35.045	71.019	71.774	68.910	140.684	405.368
PET	443.257	478.193	921.450	159.119	177.481	335.600	265.690	288.838	554.528	1.811.578
PEA	249.285	1.155.796	405.081	87.055	64.913	151.968	161.315	103.165	264.480	821.529
OCUPADOS	229.709	149.636	379.345	81.916	62.559	144.475	153.901	100.006	253.907	777.727
CESANTES	10.546	2.627	13.173	3.282	1.206	4.488	4.470	1.495	5.965	23.626
ASPIRANTES	9.030	3.533	12.563	1.857	1.148	3.005	2.944	1.664	4.608	20.176
INACTIVOS	193.972	322.397	516.369	71.064	112.568	183.632	104.375	185.673	290.048	990.049
TOTALES	541.498	573.617	1.115.115	194.093	212.526	406.619	337.464	357.748	695.212	2.216.946
TRAE	56.2	32.6	44	55.1	36.6	45.3	60.7	35.7	47.7	45.3

PET= Población en edad de trabajar, PEA = Población económicamente activa; TRAE = TASA REFINADA DE ACTIVIDAD ECONOMICA (PEA/PE)*100

Fuente: Elaboración Propia. Censo Nacional de Población y Vivienda, Resultados definitivos, INE 1992

36. Consecuentemente con las pautas de urbanización, la mayor parte de la incipiente industria existente antes de 1952 se encontraba en la ciudad de La Paz. En este período cobró importancia el asentamiento industrial en Cochabamba; se crearían la Manaco y otras industrias de menor importancia.

37. Véase Loza, Gabriel (1998) *Desarrollo Humano en Bolivia*, PNUD, Pag. 88.

semana previa al empadronamiento) estaban ocupadas en una actividad económica y también a las que, teniendo empleo, no trabajaron en dicho período por estar enfermos o de vacaciones. Son también parte de la PEA los que se encontraban sin empleo por haber sido despedidos (cesantes) y los que buscan trabajo por primera vez (aspirantes).

En junio de 1992, la población en edad de trabajar, de 7 años y más, alcanzaba alrededor de dos millones de personas en las ciudades del eje. De todas ellas, más de 800 mil se hallaban incorporadas a la población económicamente activa (PEA). De estas últimas, 778 mil estaban ocupadas, mientras 44.802 personas se hallaban sin empleo, ya sea por haber perdido su trabajo o por buscar ocupación por primera vez sin encontrarla aún (cuadro 10).

La población potencialmente activa alcanzaba al 82%. Dentro de este grupo de personas potencialmente laboral, alrededor de la mitad, el 45%, estaba dispuesta a desarrollar actividades económicas (tasa refinada de participación). Los diferencias por ciudad son más elocuentes. En Santa Cruz se advierte una mayor tasa refinada de participación económica del 48% contra el 45% prevaleciente en las ciudades de Cochabamba y La Paz. Independientemente del área de residencia, se constata que la participación económica es mayor para los varones que para las mujeres: más de la mitad de los hombres en edad de trabajar lo hace o desea hacerlo, entre las mujeres sólo una tercera parte se encuentra en esta situación a pesar de la creciente incorporación femenina a la población económicamente activa.

APROXIMACIÓN A PARTIR DE LA RAMA DE ACTIVIDAD

Con el objeto de aproximarse a la situación particular de las ciudades del eje, los datos de la PEA han sido inspeccionados detalladamente y se los ha reagrupado en los tres grandes sectores clásicos. Se ha dividido el rubro secundario y de servicios en subcategorías, algunas de las cuales son motivo de una mayor especificación (cuadro 11).

La distribución de la población económicamente activa (PEA) entre las diferentes ramas no es más que el resultado de la evolución y de las transformaciones de la estructura productiva. Los cambios acaecidos a lo largo del tiempo han implicado adaptaciones y reajustes de las actividades, de modo tal que los sectores prevalecientes operan como agentes de articulación. Ahora bien, en el contexto de una sociedad urbana donde predominan las relaciones sociales de producción precapitalistas, la inserción de la población en el mercado de trabajo no se rige necesariamente por criterios de eficiencia productiva ni por la lógica de la acumulación capitalista y, por lo mismo, el fuerte impacto ejercido por la economía doméstica se trasunta en un nutrido sector terciario.

Dicho de otro modo, la expansión y el dominio de la organización capitalista en la economía global de las ciudades no ha implicado una declinación real de las formas preexistentes, sino su subordinación y adaptación. Así, la distribución de la PEA según grandes ramas de actividad es un reflejo parcial de la estructura productiva que se ha constituido históricamente, a la vez que representa un panorama de las funciones que cumple la población dentro del proceso social de producción³⁸.

LIBRO / DOCUMENTO DE:

PEA

38. Op. cit. pg. 89.

FECHA DE INGRESO:

210612000

Se concibe al proceso social de producción como un conjunto de actividades que no sólo comprenden la esfera estrictamente económica, sino que también los planos político y social. De estas diversas fuentes extrae la población los medios para su sustento y su reproducción. Luego, toda la PEA, por definición, está inserta en el proceso productivo. También debería estarlo el conjunto de mujeres dedicadas a las labores realizadas en el seno del hogar y cuyo objetivo es la satisfacción de necesidades inmediatas de sus miembros, pero las prácticas estadísticas convencionales las excluyen del concepto de actividad y, por ende, se las ha omitido en el cuadro 11 (esto no significa que se haga abstracción del servicio doméstico que forma parte de la PEA)³⁹. Otra

fracción de la población que ha sido excluida es la de los menores de 15 años, debido a que la información disponible sobre ella es imprecisa **40**

Como se desprende de la exposición precedente, puede apreciarse que el sector terciario abarca más de dos tercios de la PEA, situación que se torna especialmente evidente entre las mujeres. Algo más del 85% de ellas está trabajando en este sector (aunque entre los hombres supera de lejos el 50 por ciento). Este proceso de terciarización es el producto histórico de la modalidad de desarrollo de las ciudades de Bolivia.

En efecto, tal predominio de los servicios expresa la secular oposición entre el lento y precario desenvolvimiento de las fuerzas productivas de estas ciudades y el crecimiento demográfico

CUADRO 11
DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
SEGUN GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD Y SEXO, 1992

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA	LA PAZ			COCHABAMBA			SANTA CRUZ		
	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Primario	4.2	3	3.7	5.4	3	4.4	7.4	2.4	5.6
Secundario	36.8	11.5	27.6	37.2	11.8	26.6	36.3	11.3	27.2
Manufactura	22.3	10.7	18.1	20.8	11.2	16.8	18.2	10.7	15.5
Electricidad - Gas - Agua	0.5	0.1	0.4	1	0.2	0.6	0.6	0.1	0.4
Construcción	13.9	0.7	9.1	15.4	0.4	9.1	17.6	0.5	11.3
Terciario	59.1	85.5	68.7	57.4	85.3	69.1	56.3	86.3	67.3
Serv. Ligados a la Distribución	26.7	22.7	25.3	26.3	16.1	22.1	35.2	26.7	32.1
Comercio al por mayor	6.1	1.5	4.4	6.7	1.2	4.4	8.4	1.4	5.9
Comercio al por menor	8.0	19.7	12.2	5.9	13.5	9.0	11.7	24	16.2
Transporte y comunicaciones	12.7	1.5	8.6	13.7	1.5	8.6	15.1	1.3	10.1
Serv. Ligados a la producción	7.6	6	7.1	6.8	5.1	6.1	6.5	5.2	6
Serv. Sociales y comunales	22.1	31.8	25.6	22.5	40.3	30	11.6	21.1	15.1
Servicios Personales	2.6	24.9	10.7	1.8	23.8	11	2.9	33.4	14.1
Hoteles y Restaurantes	1.9	3.3	2.4	1	2.1	1.5	1.8	3.5	2.4
Servicio Domestico	0.7	21.6	8.3	0.7	21.6	9.5	1.1	29.9	11.6
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Casos	213062	121858	334920	79943	57291	137234	146314	84155	230469

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, Resultados definitivos, INE, 1992

39. Véase para mayores detalles: Notas de la CEPAL # 9, *Reformas Estructurales, Inversiones y Empleo: El Caso boliviano*, p. 1 y 6, Marzo del 2000, Santiago - Chile.

40. En la acepción más restringida de este concepto.

estimulado por quienes han inmigrado en busca de mejores condiciones de empleo. Sin duda, este incremento de la población, bajo condiciones de generalizada pobreza, ha estado asociada a una demanda plurisocial por el aumento del consumo colectivo, a la vez que se han mantenido las características de un consumo privado más que austero, lo que ha afectado esencialmente a los bienes no industriales de menor costo. Esto no excluye el hecho de que los estratos de más altos ingresos y la mesocracia burocrática e intelectual tengan patrones de consumo que, a la luz de los «pobres de la ciudad», pudieran connotar una fisonomía conspicua. Lo indudable es justamente el contenido social específico de la urbanización, lo que ha permitido una retroalimentación continua de la terciarización, pues los servicios no sólo son la principal fuente de trabajo, sino también la esencia de la reproducción de la creciente población urbana⁴¹.

Se ha enfatizado que la terciarización de la economía va acompañada por el crecimiento del

sector «informal» urbano, caracterizado por el desarrollo de actividades de pequeña escala, baja productividad y por la pobreza de quienes las practican. Si se aplica este término en su valor exacto, en la economía de las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, la mayoría de sus trabajadores participan de tal «informalidad» (cuadro 12).

En todo caso, cabe reconocer la fuerte heterogeneidad del sector terciario, particularmente asociado con las múltiples formas que comporta la modalidad mercantil. Así, la existencia de una continuidad en los patrones de intercambio entre los distintos niveles de desarrollo del capital comercial pareciera asumir un sello peculiar en estas ciudades. Tal fenómeno no hace sino poner en evidencia los rasgos del funcionamiento desigual del capitalismo mercantil, sobre el que se levanta un sistema orgánico de intermediación y clientelismo⁴².

Ahora bien, la interacción recíproca entre esta modalidad de terciarización y el crecimiento demográfico lleva a un aumento de la desigualdad

CUADRO 12
Estructura del empleo por forma de organización del trabajo, 1996

Región	Formal		Informal		Doméstico		Total
	1992	1995	1992	1995	1992	1995	
Eje	36.1	31.3	58.0	63.9	5.9	4.8	100.0
Resto	38.8	31.9	56.3	61.6	5.0	6.5	100.0
Total	3.6	31.6	57.7	62.9	5.8	5.5	100.0

Fuente: Informe Social Bolivia, Cedla pag. 59, 1996

41. Dada la estrecha asociación entre producción y reproducción en las economías familiares que distinguen el sector de producción simple de mercancías. Tal omisión significa una subestimación de la verdadera magnitud de la fuerza de trabajo.

42. El trabajo infantil y juvenil temprano es de importancia en Cochabamba. Habida cuenta del predominio demográfico de las economías familiares, los niños, desde pequeños son socializados en el mundo del trabajo, adaptándose a la diferenciación productiva ya mencionada. Por lo demás, en las ferias y el comercio callejero es común observar la participación de menores, a veces en calidad de «asalariados»; todavía más, en las ladrillerías de Jaihuayco, las familias viven junto al lugar de trabajo. Si bien es innegable que a partir de los años 50 se ha producido un aumento del grado de escolarización como lo señala Albó, Xavier, *Lengua y Sociedad en Bolivia* (La Paz, INE, 1980), ello no obsta para que los niños trabajen.

social, en términos de inserción laboral y de las condiciones materiales de vida. Como ya se ha sugerido, las necesidades vitales del consumo colectivo de la gran mayoría de la población se encuentran por debajo del nivel mínimo de sobrevivencia de las familias e inciden poderosamente en los riesgos de muerte, particularmente de los niños. Si a los bajos niveles de ingreso se añaden las miserables características de la vivienda y las intensas jornadas de trabajo, no es extraño que estas familias se vean sometidas a un acelerado proceso de pauperización social, donde las estrategias para preservar la vida entrelazan la diversificación, la solidaridad y el conflicto.

La información del cuadro 11 presenta al sector terciario diferenciado en cuatro categorías de servicios. En el caso de aquellos vinculados directamente con la distribución, es claro del predominio del comercio minorista, donde a la mujer le corresponde un papel fundamental (en efecto, el 63 por ciento de los activos de este rubro lo son). Una situación inversa en cuanto a la división sexual del trabajo puede percibirse en el área del transporte. A su vez, es notable la presencia masculina en el comercio mayorista, segmento más propiamente capitalista, que es un reflejo claro de los bajos niveles de demanda de bienes elaborados y de insumos en la economía nacional⁴³. Una gran parte del comercio al detalle es practicado en las ferias, los mercados de abasto o en la vía pública. El transporte no sólo se orienta a satisfacer las necesidades de desplazamiento de las personas (dentro y entre las ciudades, su periferia y otras regiones del país), sino principalmente a la recolección de productos agropecuarios, para los cuales las ciudades son su principal centro de

acopio. Como conjunto, la categoría de distribución absorbe a un cuarto de la fuerza de trabajo urbano en La Paz y Cochabamba, en cambio en Santa Cruz es alrededor de un tercio (32%).

Un indicador de la debilidad del aparato productivo de transformación de bienes es el bajo peso en la inserción laboral de trabajadores que cumplen tareas en los servicios ligados a la producción. Este tipo de actividades sólo absorbía alrededor del 6% de la PEA en 1992 y son impulsadas básicamente por los establecimientos financieros (bancos, casas de cambio, oficinas de contabilidad, seguros), que son un soporte fundamental de los mecanismos de valorización del capital, y sirven como agentes de la producción material.

El empleo en los servicios sociales y comunales estuvo formado sobre todo por las actividades del Estado nacional y de las instituciones de desarrollo regional y local. Sin perjuicio del clientelismo que caracteriza el funcionamiento del aparato burocrático, bastante prolífico en la experiencia post revolución nacionalista, se trataba de un tipo de empleo estable en ocupaciones no manuales que cumplía un estamento medio dentro de la estructura social⁴⁴. La producción estatal está integrada por los servicios de consumo colectivo como la educación, la salud, la asistencia social, la gestión administrativa de las empresas públicas y los servicios de orden y seguridad. Comprende casi a un 30% de la PEA cochabambina, un 25% en La Paz y el 15% en Santa Cruz. Son trabajadores que percibían salarios con bastante regularidad. Es probable que este panorama se haya modificado en los últimos años. Lamentablemente el impacto más duro de

43. De este modo, se consideran de dudosa aplicabilidad ciertos términos ideológicos como «sobreurbanización» o «hiperurbanización».

44. Calderón, Fernando, *La Política en las Calles* (Cochabamba, CERES, 1983) p. 294.

dichos cambios llegará a la población femenina, pues hacia 1992, bastante más de la tercera parte (40 por ciento) del empleo público era desempeñado por ellas (el 30 por ciento de la PEA femenina), situación explicada por su participación en las actividades de docencia.

Es evidente que una parte importante del empleo estatal involucra a entidades altamente jerarquizadas de la esfera de la violencia (policía, Fuerzas Armadas, penitenciaria, juzgados, prefectura), la economía (Banco Central, Aduana, Oficina de Recaudación de Impuestos y del Tesoro Público), la gestión central (estadísticas, representaciones ministeriales, planificación regional), las comunicaciones y el transporte (Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ENTEL, correos, telégrafos, Servicio Municipal de Teléfonos Automáticos, ENFE, Empresa Nacional de Ferrocarriles, LAB, Lloyd Aéreo Boliviano). Pero su labor directa en los ámbitos de consumo colectivo es también de significación (educación en todos sus niveles, servicios médicos y sanitarios, seguridad social), como lo es, además, su intervención en algunos sectores productivos (ENDE - Empresa Nacional de Electricidad S.A., YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Planta Industrializadora de Leche, Corporación Boliviana de Cemento, Fábrica Boliviana de Cerámica, Empresa Nacional de Fundición). Sin llegar a ser decisivo como fuente de trabajo, el crecimiento del empleo público contribuyó a crear en las ciudades un mercado de trabajo más amplio, que durante los años 70 y principios de los

80 explicó una parte considerable del incremento del empleo urbano, alrededor del 6% y que cayó al 1% en 1996 ⁴⁵.

Nótese que entre 1993 y 1997 ya se habían privatizado alrededor de 68 empresas públicas. También se produjeron transformaciones que cambiaron la relación del Estado con la sociedad boliviana a partir de la implementación de las leyes de descentralización administrativa y la Participación Popular⁴⁶.

Hasta fines de 1996 se capitalizaron cinco empresas públicas: ENDE, ENTEL, LAB, ENFE y YPFB. En realidad se trataba de las empresas públicas dependientes de las corporaciones de desarrollo y de las prefecturas departamentales. A partir de 1997 se procedió a privatizar la Empresa Metalúrgica de Vinto, las empresas de servicios de agua potable y alcantarillado y las oficinas de transmisión de electricidad. Ahora muy pocas actividades productivas quedan en manos del Estado.

Finalmente a partir de 1998 se inicia un nuevo periodo de profundización de las reformas cuando se busca privatizar hasta la última de las empresas remanentes. Al mismo tiempo se produjo un shock externo producido por la crisis asiática que deterioró los precios de exportación de los principales productos bolivianos. Los más afectados fueron los minerales y los productos derivados de la soya. La caída de los precios del petróleo y la sobreproducción de café brasileño provocaron un impacto negativo en la balanza de cuenta corriente. Es probable que los aspectos

45. No se descarta, sin embargo, la existencia de circuitos de retroalimentación entre los dos niveles del comercio. Una parte de la oferta proporcionada por el comercio detallista es suministrada por su contraparte al por mayor que, de esta forma, tiende a apropiarse de los excedentes generados por el primero.

46. Dependiendo de las fluctuaciones en la orientación ideológica de los gobiernos, en virtud de las seculares alianzas de fracciones de clases en el control del poder político, que se han movido entre la experiencia socializante de Torres y la reactivación neoliberal de Banzer, el Estado ha operado como agente redistribuidor de ingresos, con sesgos paternalistas en sus políticas de empleo directo.

antes presentados hayan hecho que los trabajadores sea hagan más vulnerables, pues ha crecido la masa de desempleados y es de esperar que el horizonte futuro se vea ensombrecido por más pobreza, analfabetismo, inequidad y desigualdad.

Finalmente, en la cuarta categoría de servicios (cuadro 11), el predominio femenino es ostensible y corresponde a los servicios personales o de consumo individual. Algo más del 12 por ciento de la PEA total y cerca del 30 por ciento de la masa laboral femenina se inserta en este tipo de actividades. Un papel predominante es ocupado por el llamado servicio doméstico, un testimonio adicional de la heterogeneidad estructural de la economía y la sociedad de las ciudades que conforman el eje económico boliviano. Dada la abundancia de mano de obra, en la mayor parte de los casos se trata de empleos que suponen duras faenas, a cambio de los cuales normalmente se percibe una retribución en especie (vestuario, comida y, en los casos más favorables acceso a la educación). Habitualmente estas ocupaciones adoptan una condición semi-servil en el sentido de que quienes las desempeñan deben residir en los hogares de las personas a quienes atienden (básicamente los estratos de asalariados no manuales, profesionales, directivos y gerentes).

En lo que concierne al sector secundario es preciso tener en cuenta que, además de las actividades propiamente manufactureras, esta gran rama incluye a la construcción (que, por su tecnología rudimentaria, es intensiva en mano de obra) y a las actividades de infraestructura física.

Desde su constitución, el sector industrial asentado en Bolivia se caracterizó por su debilidad, aspecto que cobra nitidez al evidenciar una mayor producción de bienes destinados, sobre todo, al consumo inmediato, en la predominancia

de técnicas productivas manuales y, en general, en la primacía de los pequeños establecimientos sobre los grandes. El segundo censo nacional de establecimientos económicos realizado en agosto de 1992, se estableció un total de 10.583 unidades económicas que representan al 4% y emplean al 10% de la PEA nacional. Es interesante observar que en 1998, la industria manufacturera boliviana ha crecido a un ritmo del 4%, logro estimulado sobre todo por el desempeño de los rubros de papel, bebidas, productos de minerales no metálicos, textiles, prendas de vestir y productos de cuero.

Las actividades productivas de bienes materiales absorben al 28% de la PEA. Independientemente de la ciudad, los trabajadores de las unidades manufactureras son en su mayoría hombres (37 por ciento de los hombres y sólo un 11 por ciento de las mujeres cumplen estas funciones). Gran parte de la actividad artesanal y de los establecimientos industriales pequeños, que son los que absorben al grueso de la PEA del sector secundario, se orientan a la elaboración de las materias primas locales para obtener productos de consumo directo. Así la producción textil se apoya en la abundante ganadería lanar (ovinos y auquénidos), la cerámica se asocia con la disponibilidad de arcilla y la agroindustria está ligada a la fruticultura de la zona. No obstante su condición relativamente intensiva en mano de obra, la artesanía juega un papel marginal dentro la estructura productiva prevaleciente. Por otra parte, algunos rubros tradicionales de la artesanía cochabambina han sufrido los mortíferos efectos de la competencia del mercado internacional que, por vía legal o «subterránea», ha incorporado productos de la misma índole a precios más reducidos⁴⁷. Así, entonces, las microempresas artesanales no cubren más que reducidos sectores de la demanda interna, incapaz

47. Véase para mayores detalles: Notas de la CEPAL # 9, *Reformas Estructurales, Inversiones y Empleo: El Caso boliviano*, Pág. 1 y 6, Marzo del 2000, Santiago - Chile.

citadas como están para acceder a mercados más amplios. En Cochabamba, el predominio terciario en el empleo y la debilidad del sector industrial caracterizan un ambiente en el que la autogeneración de puestos de trabajo y la solidez de los lazos familiares parecerían ser las dimensiones más notables.

En La Paz, las más importantes unidades productivas del sector «moderno» están representadas por los rubros de fármacos, químicos, plásticos, textiles, cerveza y bebidas gaseosas. Existen también algunas importantes mueblerías, una fábrica de papel, imprentas y casas de grabación. El comercio de este sector está ubicado en el centro de la ciudad y en los barrios del sur, donde existen supermercados y superficies de comercio tipo americano. El sector informal desarrolla una actividad febril en los campos de la artesanía, los muebles, los textiles, la confección, los alimentos y las bebidas de consumo popular. En el comercio al por menor también tiene una participación muy importante. En los barrios del noroeste de la ciudad un gran mercado conformado por miles de comerciantes, la mayor parte mujeres, funciona las 24 horas del día. Allí se ofrece a la población variados productos: ropa, alimentos y bebidas, electrodomésticos, bicicletas y motocicletas, computadoras y accesorios.

A diferencia de las ciudades de La Paz y Cochabamba, una de las razones del proceso acelerado de urbanización de Santa Cruz fue el paso de una economía agraria a una agroindustrial. Aunque al presente, es evidente que su base económica está marcada por el crecimiento del sector terciario, a pesar de los cambios económicos ocurridos en la región, esta característica fundamental no ha sufrido cambios en los últimos 20 años.

LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES

Ahora bien, son estas condiciones de escaso desarrollo de las fuerzas productivas, austeridad

en el consumo, alta incidencia de la pobreza, inestabilidad laboral, restricciones en materia de ingresos, limitaciones en cuanto a las condiciones materiales de vida, pautas peculiares de división del trabajo (técnica, social, sexual y espacial), las que sirven de base para entender el contenido social del fenómeno urbano concreto de las ciudades del eje económico boliviano. Los grupos sociales y el aparato del Estado se interrelacionan, además, para crear las bases de la estructura urbana interna de una ciudad que crece en población, se expande en territorio y se segrega debido a una acentuación de las desiguales pautas de reproducción social y organización de la producción.

Los ingresos de los hogares pobres fueron insuficientes para contribuir adecuadamente a la canasta familiar. De ahí que el incremento del porcentaje de la población ocupada con déficits de ingresos laborales se debió a la interdependencia que existe entre las transformaciones de la estructura ocupacional de las familias y la creciente pobreza. En efecto, por lo general el vínculo entre ambos elementos se inició con la caída del poder de compra de los ingresos laborales y su repercusión en las condiciones de vida de los hogares. Esto puso en marcha un mecanismo compensatorio en el que las familias incrementaron su participación en el mercado de trabajo mediante la inserción ocupacional de sus miembros con menos formación y capacitación laboral. Las remuneraciones que percibió esta nueva población ocupada se ubicaron, por lo general, en los niveles más bajos, lo que incrementó así el porcentaje de los asalariados y no asalariados con remuneraciones deficitarias.

Los niveles más bajos de ingreso son percibidos por los asalariados de servicios personales. Esta población no dispone de una jornada de trabajo limitada y no goza de los beneficios sociales que, por derecho, le corresponden a todo

trabajador. Se trata de un estrato deprimido en términos de calidad de vida, especialmente por las irregularidades inherentes a sus estilos de contratación. Con bastante frecuencia, tal como ocurre con el estrato de los cuentapropistas, las actividades de servicio doméstico involucran diversas formas de trabajo familiar, donde toda o una parte importante de la familia cumple una función específica (el padre limpia y encera o cuida lotes, la mujer asea, lava y cocina, y los niños cuidan de los menores). La inequidad se manifiesta con toda nitidez con relación a las brechas existentes en los ingresos de la población ocupada, entre los sexos y entre los trabajadores de los servicios que se ubican, por lo general, en los niveles más bajos (cuadro 13).

El deterioro en la calidad del empleo y la persistencia de ingresos bajos y fluctuantes obligó a las familias a buscar una variada gama de estrategias de vida para cubrir los siempre crecientes requerimientos del presupuesto familiar y el simultáneo deterioro de sus ingresos reales. Una de las formas en que las familias respondieron al deterioro de su presupuesto fue incrementando el número de sus miembros participantes del mercado laboral. De esta manera, se buscó compensar la caída de los ingresos laborales individuales con el aporte proveniente del trabajo de otros miembros del hogar.

Por lo general, esta dinámica implicó una mayor inserción de mujeres en el mercado de trabajo en condiciones de desventaja notable, pues

CUADRO 13
Ingreso monetario promedio por ciudad de residencia según rama de actividad económica, 197. (En Bolivianos)

DESCRIPCION	LA PAZ	CBBA	STA CRUZ
TOTAL	1,371	1,332	1,559
Agricultura, Silvicultura, Pesca	653	2,703	6,153
Minería	4,461	3,459	2,223
Industria Manufacturera	872	1,078	1,253
Electricidad, Gas y Agua	3,223	1,850	5,100
Construcción	1,825	1,078	1,434
Comercio	1,015	1,228	1,484
Hoteles y Restaurantes	879	1,128	1,066
Transporte, Almacenamiento	1,732	2,205	1,724
Finanzas	2,447	2,809	2,776
Actividades Empresariales	1,961	1,787	1,996
Administración Pública	2,294	1,426	1,876
Servicios Sociales	1,655	1,434	1,734
Actividades Comunitarias	1,636	1,699	1,652
Hogar Privado	354	292	491

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Noviembre 1997

los ingresos que perciben siempre son dos veces menores que los que perciben los varones en igualdad de responsabilidades. El ingreso temprano de jóvenes y niños en tareas laborales, quienes, por insertarse prematuramente al mercado laboral, realizaron contribuciones pequeñas al presupuesto familiar y pusieron en riesgo las posibilidades de movilidad social familiar basada en mejores niveles de formación profesional. En otros términos, la compensación a los deterioros de los ingresos de los trabajadores, mediante el incremento de los miembros activos de cada hogar, contribuyó a crear las condiciones para la reproducción de la transmisión intergeneracional de la pobreza.

PERFIL EDUCATIVO

Cabe destacar primero, que el acceso a la educación formal es discriminado por las condiciones económicas y sociales, que permiten que determinados grupos alcancen cierto nivel de escolaridad, mientras a otros se les niega dicha opción. Por otra parte, en lo que respecta al logro educativo, debemos recordar que la calidad y la pertinencia de la enseñanza varía mucho en el país, en correspondencia con la desigual distribución de recursos y servicios a los que tiene acceso la población. De ahí que la variable educación por sí sola no desentraña las profundas complejidades que oculta dicha variable en función del tipo, área y estrato social a los que pertenezcan los individuos.

La competitividad sostenible “está basada en el talento a nivel empresarial y nacional, para incorporar y difundir progreso técnico en el sistema productivo de bienes y servicios». La formación de recursos humanos es además la condi-

ción indispensable para elevar la competitividad y alcanzar la equidad⁴⁸.

En las ciudades más grandes de Bolivia, se advierte un incremento en la cobertura educacional que se traduce en un aumento en el acceso al sistema de educación formal: el 83% de la población está en condición de alfabeto y sólo un 17% declaró no serlo. El grado de alfabetización alcanza su máximo nivel entre la población cruceña (95%), donde el 97% entre los varones y del 92% entre las mujeres ha declarado que sabía leer y escribir en el último censo del 92 (cuadro 14).

El grado de alfabetización alcanza su máxi-

CUADRO 14

Tasa de Alfabetismo de la Población de 15 y más años de edad por sexo, 1992

CIUDADES	Hombre	Mujer	TOTAL
SANTA CRUZ	97,2	92,3	94,7
COCHABAMBA	97,6	89,6	93,3
LA PAZ	96,6	85,8	91,0

Fuente: Elaboración propia, INE, CNPV 1992

mo nivel entre la población masculina y el analfabetismo es particularmente fuerte entre la población femenina. Nótese que la mayor inequidad se da en ciudad de La Paz, donde la brecha es de 10 puntos entre varones y mujeres. Algo menor es la diferenciación que se encuentra entre los habitantes de la ciudad de Cochabamba.

En Bolivia la población de jóvenes de entre 6 y 24 años de edad, llega a los dos millones 700 mil personas. De ellos un 30% declaró que en 1992 (momento del censo) ya había dejado la educación formal y un 6% nunca participó en ella. Existe una relación inversa entre los contextos espaciales. Sólo el 3% de los jóvenes en edad

48. Para mayores detalles véase Gover Barja Daza, Ph.D. *Las Reformas estructurales bolivianas y su Impacto sobre las Inversiones*, Serie de Reformas Económicas # 42, noviembre de 1999, trabajo preparado en el marco del Proyecto «Crecimiento, Empleo y Equidad: América Latina en los años 90» (HOL/97/6034).

CUADRO 15
Eje Económico Nacional: Población de 15
y más años de edad

Según asistencia escolar por sexo, 1992

ASISTENCIA ESCOLAR	TOTAL	Hombre	Mujer
ASISTE	22,7	24,9	20,8
ASISTIO	68,6	70,0	67,3
NUNCA ASISTIO	8,7	5,1	11,9
TOTAL	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración propia, INE, CNPV 1992.

escolar jamás asistió a las aulas en las ciudades principales, frente al 14% de mujeres, que a pesar de estar en edad escolar, nunca asistió a la escuela en las zonas rurales. Nótese que más de la tercera parte de las mujeres en edad escolar ya no asistía a los establecimientos educativos en el momento del censo, es decir, ya contribuía a la deserción escolar. Los menores de edad que viven en las tres ciudades del eje se encuentran en situación favorable, pues sólo el 3% de los jóvenes en edad escolar declaró nunca haber asistido a la escuela. Estos resultados reflejan que las oportunidades de acudir a la escuela también son motivo de diferenciación y exclusión no sólo en el ámbito de las desigualdades socio-económicas, sino también en las socio-espaciales.

El 29% de la población total que no participa del sistema educativo, tampoco llegó a cursar ninguno de los niveles. El porcentaje más alto dentro de este promedio es el de la población femenina (65%) de la región de alta ruralidad de los valles. Ocurre lo mismo con el 63% en los llanos y el 62% en el altiplano, donde se observa una situación de exclusión e injusticia social para más de 300 mil mujeres. Observará el lector que la masculinidad en este tramo de instrucción es dramático: hay sólo 47 hombres sin instrucción por cada 100 mujeres en la misma situación. A medida que aumentan los años de estudio, la razón de masculinidad es favorable para los varones y llega a su nivel máximo entre los que culminaron la enseñanza media y superior (139 y 124 hombres con niveles medio y superior, por cada 100 mujeres respectivamente).

El contingente humano de 18 a 22 años que se había insertado en los sistemas de educación superior ascendía en 1992 a un total de 70 mil jóvenes (37 mil hombres y 33 mil mujeres). Se trata de una cuarta parte del total de universitarios registrados en el censo y representa alrededor del 5% de los jóvenes en edad escolar, es un grupo humano reducido. Una educación de calidad, orientada al mundo del trabajo sólo es accesible a un grupo reducido de bolivianos. Lo que existen en el país son muchas privaciones, insatisfacciones y carencias que han contribuido

CUADRO 16
Población en Edad Escolar Según Condición de Asistencia Escolar, 1992

GRADO DE URBANIZACION	ASISTE	ASISTIÓ	NUNCA ASISTIÓ	TOTAL	ASISTE	ASISTIÓ	NUNCA	TOTAL
C. URBANOS MAYORES	665.490	245.029	31.987	942.506	70,6	26,0	3,4	100,0
HOMBRE	337.479	106.085	13.559	457.123	73,8	23,2	3,0	100,0
MUJER	328.011	138.944	18.428	485.383	67,6	28,6	3,8	100,0
TOTAL NACIONAL	1.713.293	799.221	162.318	2.674.832	64,1	29,9	6,1	100,0

Fuente: Elaboración propia, INE, CNPV 1992.

a la ampliación de las brechas existentes y han generado la exclusión de cerca de la mitad de los pobladores bolivianos. En este grupo se hallan los pobladores rurales y las mujeres.

Según estimaciones, se espera que hacia el año 2002 habrá 115 mil personas en edad de insertarse en la educación superior, y como se advierte en la cuadro 16, la tendencia de su crecimiento es ascendente⁴⁹

CUADRO 17

Bolivia: Proyección de la Población en Edad de Ingreso a la Universidad de 18 a 22 años de edad y sexo

PERIODO	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
1992	70.391	37.024	33.367
1997	88.000	46.286	41.714
2002	115.000	58.650	56.350

Fuente: INE-CELADE-UNFPA, La Paz, 1997.

A diferencia de la tendencia decreciente de los nuevos entrantes a la enseñanza básica (cuadro 17). En los últimos 15 años es en la educación superior, donde se han producido los cambios más notables, el peso de la matrícula universitaria se ha incrementado en un 155%, en cambio la educación media apenas alcanzó al 89% de incremento intercensal. Similar ha sido el desempeño de la mayor parte de los países latinoamericanos.

CUADRO 18

Bolivia: Evolución Media Anual De la Población En Edad Escolar (6 a 24 Años) en el Periodo 1995-2010

NACIONAL	1995 a 2000	2000 a 2005	2005 a 2010
BASICO	24,4	16,8	10,2
INTERMEDIO	12,4	15	8,2
MEDIO	13,2	17,2	18,6
SUPERIOR	13,2	17,6	22,8

Fuente: INE-CELADE-UNFPA, La Paz, 1997.

En Bolivia, sólo un 2% de sus pobladores declaró en 1976 estar y/o haber pasado por la universidad. En el último censo de 1992 la distribución porcentual fue superior al 5%. Como ha sucedido en otros países de América Latina, este crecimiento de la participación de jóvenes en los sistemas de educación superior ha sido acompañado de un incremento notable de la participación femenina. Si en 1976, las mujeres representaban el 24% de la matrícula universitaria, esa cifra era del 37% en 1992. Pese al considerable aumento de la participación femenina en la educación universitaria, apenas se ha modificado su segmentación por sexo, aspecto que refleja una clara división de género en el momento de elegir carrera y especialidad. Se advierte que ellas todavía continúan teniendo una alta presencia en carreras de la educación y humanidades y una muy baja en carreras como ingeniería y agricultura.

En los últimos años, en Bolivia, el gasto público continuó concentrándose en la educación

49. Competencia que, se evidencia con nitidez en Jaihuayco, donde los «gamboteros» (unas 900 personas) que trabajan a escala familiar, con procedimientos rudimentarios, deben enfrentar a empresas «modernas» más capitalizadas (unos 100 obreros) que disponen de mecanismos de comercialización propios, lo que limita la apropiación de su excedente por parte de distribuidores externos

primaria. Si bien se esgrimen argumentos basados en criterios de equidad y eficiencia que apoyan la asignación de una mayor proporción relativa de recursos a la educación primaria, la evidencia empírica pone de manifiesto que, según los mismos criterios, es preciso asignar al nivel secundario y terciario igual importancia que al primario en las decisiones de gasto, de modo que el objetivo sea garantizar que la población complete ambos niveles.

El universo de población estudiantil en el sistema de la universidad boliviana ascendía hacia 1995 a un total de 134.374 alumnos, que con relación a la gestión 1985 conformada por 88.175 alumnos, registra un incremento relativo de 152%. El crecimiento de la población estudiantil en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, alcanza desde 1985 hasta 1995 un 173%, lo que significa una tasa de crecimiento promedio del orden del 6%. Allí se alberga alrededor de uno de cada cinco estudiantes universitarios del sistema de la universidad boliviana.

En síntesis se puede afirmar, que los diversos niveles educativos alcanzados por la población, como resultado de su paso por el sistema educativo, expresan las posibilidades diferenciales que aquella tuvo para ingresar y permanecer en el mismo. El grado de escolaridad alcanzado por la población está condicionado por las posibilidades económicas que tienen los individuos y las familias de apoyar a sus miembros en la permanencia en los sistemas educativos formales. La alta proporción de mujeres con bajos niveles de escolaridad, es una evidencia de que existe una situación de «marginación», a través de restricciones de tipo sociocultural, que se impone a la mujer para impedir su acceso a la educación y por tanto conseguir niveles de competitividad mayor en el mercado de trabajo de bienes y servicios.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La historia de Bolivia muestra la presencia de distintas fases o tipos del desarrollo económico, en la cual, el capital humano y el capital social jugaron roles diferentes. Una primera etapa centrada en una competitividad basada en la explotación de minerales y de la fuerza de trabajo, donde la densidad del capital social fue muy débil, y donde el capital humano sólo fue requerido como «fuerza de trabajo». En la época de la plata primero, y del estaño después, Bolivia llegó a tener un crecimiento económico alto, sobre la base del trabajo de personal con escaso nivel de educación y precarias condiciones de salud y de vida.

El resultado de esta modalidad de desarrollo generó profundas brechas entre el occidente y el oriente boliviano, caracterizadas por una alta concentración de los ingresos en los grupos de poder y bajos niveles de desarrollo humano particularmente en el occidente. De hecho existe en dicha región un paisaje de despojo. A cada paso se ubican poblaciones fantasmas o en proceso de serlo, maquinarias, instalaciones y equipos obsoletos y un ejército de hombres y mujeres que deambulan por el país buscando mejores oportunidades para la sobrevivencia. Las huellas del daño ambiental no reparado son claramente visibles, y su impacto es patente en los resultados productivos de las tierras bajas.

En Bolivia, los procesos de cambio demográfico se han producido en el marco de la heterogeneidad socio-espacial vigente en el país. Debería promoverse un proceso de urbanización espacialmente desconcentrada, con fortalecimiento de ciudades intermedias y centros urbanos menores articulados entre sí, lo que, junto con crear mejores condiciones para el desarrollo humano de la población radicada en las ciudades, facilitaría el acceso de la población rural a los mercados y servicios urbanos, con lo que de esa manera se dinamizaría el desarrollo rural.

La heterogeneidad socio-espacial ha afectado los procesos de cambio demográfico y la dinámica demográfica diferencial ha contribuido a modificar la estructuración socio-espacial del país. Es ilustrativo observar que en lo que va del presente siglo, las zonas urbanas han incrementado su importancia demográfica en más de 17 veces, mientras las zonas rurales apenas si se duplicaron. Se espera que a fines de siglo, la tendencia de crecimiento de las zonas urbanas no sólo continuará, sino que se profundizará. El año 2010 se estima que la población boliviana habrá llegado a los 10 millones de habitantes, de los cuales 7 millones vivirán en las zonas urbanas y sólo alrededor de una tercera parte de los bolivianos habitará el campo.

Las migraciones internas han contribuido a otorgar una imagen de diferenciaciones profundas, se ha producido un desplazamiento de personas y familias desde contextos de reducidas oportunidades para su desarrollo humano hacia otros con mayores oportunidades y donde la satisfacción de necesidades básicas mediante políticas públicas es menos costosa. En consecuencia, las desigualdades económicas regionales y los procesos de diferenciación social, produjeron cambios en la distribución espacial de la población y en la estructura productiva prevaleciente en las ciudades bolivianas. Estos cambios tienden a expresar el profundo deterioro de las condiciones de vida y reproducción social de la mayor parte de la población boliviana en el campo y las ciudades.

Las diferencias demográficas prevalecientes obedecen a desigualdades sociales, económicas y ambientales que, a su vez, se derivan de la posición que tienen los individuos con relación a los medios de producción. Ahora bien, se supone que la desigualdad de los grupos sociales, debida a los factores de la estructura productiva, es lo que conduce a diferentes pautas de comporta-

miento entre las que se cuentan, las relativas a los patrones de fecundidad, a la exposición al riesgo de muerte y la calidad de vida de los individuos.

Las medidas que se aplican desde mediados de los años 80, como la reducción drástica del empleo público y del gasto público, la "relocalización" de los mineros de las empresas nacionalizadas y otras empresas estatales privatizadas, la estabilización monetaria sobre la base del congelamiento salarial, la privatización-capitalización de los sectores estratégicos de la economía, el estímulo a la participación popular en la gestión local en el marco de la municipalización del territorio nacional, la reforma al régimen de pensiones, la ejecución de políticas de descentralización del Estado y la creación de los gobiernos departamentales se dirigen indudablemente a apuntalar un nuevo modelo de Estado y de sociedad, que sustituya la relación paternalista que ejercía el modelo anterior sobre el país. El resultado del ajuste estructural se advierte al constatar que la inestabilidad social ha crecido, se han profundizado los problemas que existían desde antes y cuyo origen son de índole estructural. Dicha situación ha puesto en evidencia que el costo de los programas de ajuste estructural implementados a lo largo de los últimos 15 años fueron duramente cargados a las espaldas de los sectores más pobres, que ahora viven en las zonas urbano-marginales de las grandes ciudades y las zonas rurales, lo que pone de manifiesto la ausencia de justicia social y equidad.

BIBLIOGRAFÍA

Albó, Xavier, 1976, *Bodas de Plata o Réquiem por una Reforma Agraria*, en Revista Paraguaya de Sociología, Número 13, Pp.25-58.

Albó, Xavier, 1980, *Lengua y Sociedad en Bolivia* (La Paz, INE)

- Antezana**, Luis H., 1983: *Sistemas y Procesos ideológicos en Bolivia*, en Zavaleta (1983).
- Arce Cuadros**, Eduardo, 1976 *La Economía de Bolivia*, Los Amigos del Libro, Cochabamba.
- Assadourian**, C. S. Et Al, 1980: *Minería y Espacio económico en Los Andes*, Siglos XVI-XX. IEP, Lima.
- Bartra**, Roger, 1978: *Estructura Agraria y Clases sociales en México* (México, Editorial Era), P.84.
- Calderón**, Fernando, 1983, *La Política en las Calles*, CERES, Cochabamba - Bolivia. Pág. 26
- Calderón**, F. y R. Laserna, 1997, *La Fuerza de la Equidad: El Desarrollo Humano en Bolivia*. Los Amigos del Libro. La Paz.
- Casanovas**, Roberto, 1981: *Migración Interna en Bolivia. Origen, Magnitud y principales Características*. Proy. Bol 78/P03, OIT-UNFPA-MTDL, La Paz (mimeo).
- CIDRE**, 1989: *Monografía del Trópico*. Departamento de Cochabamba.
- CIDRE**, Serie *Estudios Regionales*, Cochabamba.
- Dandler**, Jorge, 1960: *El Sindicalismo campesino en Bolivia: los Cambios estructurales en Ucureña* (México, Instituto Indigenista Interamericano), P 46-47.
- Escobar de Pabón**, Silvia, **Ledo** García María del Carmen, 1988: *Urbanización, Migraciones y Empleo en La ciudad de Cochabamba*; Ed. CEDLA, La Paz.
- Gover**, Barja Daza, Ph.D. 1999: *Las Reformas estructurales bolivianas y su Impacto sobre las Inversiones*, Serie # 42, (HOL/97/6034).
- CEPAL**, 1991, *Educación y Conocimiento: eje de la Transformación Productiva con Equidad*, p.32.
- Rosenthal**, Gert 1997, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, *Algunas Dimensiones de la Educación para la Democracia en el Pensamiento de la CEPAL*, Montevideo-Uruguay.
- Grebe**, Horst, 1983: *Excedente sin Acumulación. Génesis de la Crisis actual*, en Zavaleta (1983).
- Healy**, Kevin, 1982: *Caciques y Patronos*, (Cochabamba, Ediciones El Buitre), P. 37.
- De Marschal**, Katerine Barnes, 1970: *La Formación de los Nuevos Pueblos en Bolivia: Proceso e Implicaciones*, en Estudios Andinos, Vol. 1, Número 3, P.23-37;
- Larson**, Brooke, 1981: *Explotación agraria y Resistencia campesina: Cinco Ensayos históricos sobre Cochabamba*, Siglos XVI - XIX. (La Paz, CERES).
- Larrazábal**, Hernando; 1992: *Políticas y Sector informal urbano*, en Revista Programa De Ajuste Estructural, Serie: Documentos De Trabajo N1 1, CEDLA, La Paz.
- Laserna**, Roberto, 1984: *Espacio y Sociedad regional*, Ed. El Buitre, Cochabamba.
- Ledo**, Carmen, 1999: *Urbanisation and The Process of Spatial Redistribution of the Bolivian Population*, Faculty Of Architecture, Delft University Of Technology, Delft.
- Ledo**, Carmen, **Zegada** C., Oscar, 1989: *Población, Migración y Empleo En Cochabamba* UNFPA-PREALC/OIT-CEP/UMSS, Cochabamba.

Loza, Gabriel, 1997, *Competitividad, Educación y Desarrollo Humano*, PNUD.

Mitre, Antonio, 1983: *Los Patriarcas de La Plata*. IEP, Lima.

Murra, John, 1975: *Formaciones económicas y políticas del Mundo andino* (Lima, Instituto de Estudios Peruanos).

Notas de la CEPAL # 9, 2000: *Reformas Estructurales, Inversiones Y Empleo: El Caso Boliviano*, p. 1 y 6, Santiago - Chile.

Ormachea, Enrique, 1984: *Migración y empleo en Bolivia: los casos de las Ciudades de La Paz y Santa Cruz*. PREALC/OIT, Santiago.

Paz, Danilo, 1983: *Estructura agraria boliviana*. Ed. Popular, La Paz.

Preston, David, 1970: New Towns: *A Major Change In The Rural Settlement Pattern In Highland Bolivia*, en *Journal Of Latin American Studies*, No. 2.

Proyecto Políticas de Población, *Salto al Futuro*. Ministerio De Planeamiento-UNFPA, La Paz. 1984a.

PIEB - 1999: Tinkazos: Coloquio de Tinkazos, *Ronda de Criterios sobre Pobreza Y Desarrollo*, Albó, Xavier, Calderón Fernando Y Gutiérrez Vladimir, p. 46, La Paz.

PNUD, 1998, *Desarrollo Humano en Bolivia*, PNUD

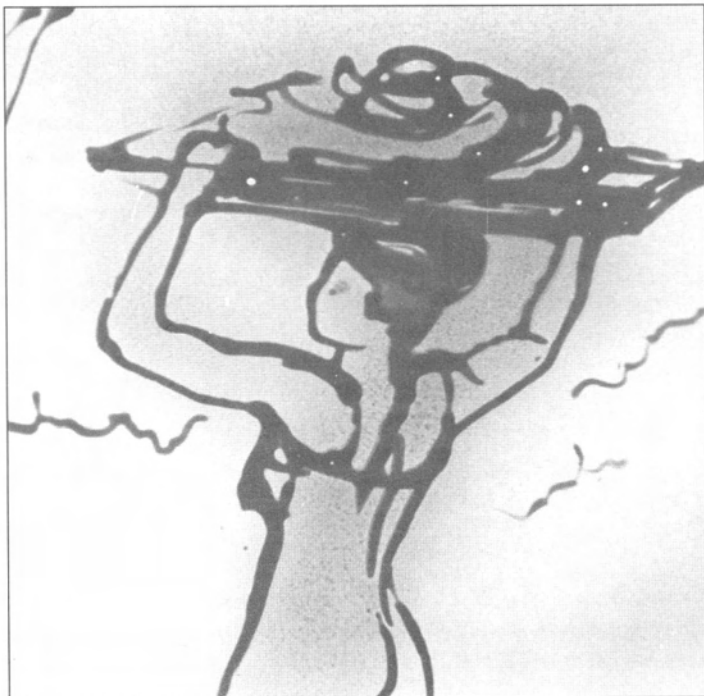
René-Moreno, Gabriel, 1959: *La Mita en Potosí en 1795*, Potosí Universidad Tomas Frías.

Singer, Paul, 1980: *Consideraciones teóricas para el Estudio de las Migraciones internas*. Siglo XXI Editores, México.

Sudhir Anand y Amartya K. Sen, 1994, *Sustainable Human Development: Concepts And Priorities*, UNDP, Nueva York.

Zavaleta, René, 1977: «Consideraciones Generales Sobre La Historia de Bolivia (1832-1971)», en varios autores, *América Latina Historia de Medio Siglo*, México, Siglo XXI, p. 89

Lorgio Vaca. Lavandera. (Baldosa cerámica)



Cómo las políticas sociales se someten al ajuste liberal ¹

Franco Gamboa Rocabado ²

Una revisión completa de las maneras en que los gobiernos de casi dos décadas trataron de honrar la deuda social

La década económicamente perdida comienza en Bolivia con la recuperación de nuestra institucionalidad democrática en octubre de 1982. Pese al apoyo masivo de todos los sectores sociales, el gobierno del entonces presidente Hernán Siles Zuazo y la Unidad Democrática y Popular (UDP), fracasó pronto acosado por la ingobernabilidad económica y política. La crisis hiperinflacionaria estuvo a punto de estrangular a las recién plantadas raíces democráticas. Ante esta situación, el camino a tomar fue recortar en un año el gobierno de Siles y rearticular los partidos políticos grandes como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN), y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) para que, junto a representantes de la empresa privada, convocaran a elecciones generales para junio de 1985.

El presidente electo fue Víctor Paz Estenssoro, quien ejecutó acciones drásticas de control económico mediante reformas estructurales, que habían llegado a Bolivia, a través del voto (el pueblo optó por solucionar la hecatombe provocada por la UDP, exigiendo estabilidad y control) y por intermedio de programas monetarios con la participación de técnicos internacionales. Así nació el programa de ajuste estructural (PAE), cuya característica central fue su integralidad.

En una primera fase, el PAE tuvo como meta frenar la hiperinflación, pues la posibilidad de recuperación del crecimiento económico dependía de dos componentes centrales: la reforma estructural y la estabilización ³.

El desenlace al que llegó el desastre del gobierno de Siles fueron las elecciones y la ejecución del decreto 21060. Si se hace una

1. Este trabajo fue presentado en el seminario sobre "Sociología Latinoamericana" dirigido por Santiago Castro Gómez. Departamento de Lenguas Románicas de la Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte, primer semestre de 1999.
2. Franco Gamboa es sociólogo, miembro de la Fundación para la Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). El autor agradece la colaboración de Manuel E. Contreras C. por sus valiosas observaciones y la entrega de material bibliográfico muy importante.
3. Cfr. Aguirre, Alvaro; Arze, Carlos, et. al.. La intencionalidad del ajuste en Bolivia, CEDLA No. 3, La Paz, 1993. El CEDLA publicó una serie denominada: Programa de Ajuste Estructural en más de diez tomos, entre los cuales figuran: Dorado, Hugo; Grebe, Horst y Villegas, Carlos. Economía mundial y organismos multilaterales, CEDLA, No. 1, La Paz, 1992; Lazarte, Jorge y Pacheco, Mario Napoleón. Bolivia: economía y sociedad 1982-1985, CEDLA, No.2, La Paz, 1992; Montañón O., Gary y Villegas, Carlos. Industria boliviana, entre los resabios del pasado y la lógica del mercado, CEDLA, No. 4, La Paz, 1993; Arze, Carlos, et. al. Empleo y salarios, el círculo de la pobreza, CEDLA, No. 5, La Paz, 1994. Consultar también: Bedregal, Guillermo. Dialéctica de la hiperinflación en Bolivia, Juventud, La Paz, 1987.

periodización del PAE en Bolivia, pueden reconocerse las siguientes fases:

- 1: Estabilización, de 1985 a 1986.
- 2: Posible reactivación económica y prosecución de la estabilidad, de 1987 a 1989.
- 3: Promulgación del decreto 22407 durante el gobierno de Paz Zamora y permanencia de una estabilidad sin crecimiento económico.
- 4: Reformas socio-políticas ambiciosas con Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), capitalización de empresas estatales estratégicas y difusión masiva del discurso sobre el desarrollo humano y sostenible.
- 5: Incertidumbre sobre el desarrollo económico y estancamiento propositivo para las reformas sociales, 1998.

El siguiente análisis versará sobre los rumbos que tomaron las políticas sociales para enfrentar a la pobreza y el cauce que recorrió la teoría sobre el desarrollo humano. En ese sentido considera que todos los esfuerzos emprendidos por los ajustes económicos para atenuar la deuda social son una bien montada estrategia de legitimación de gobiernos y del sistema democrático. Ésta tiene que ver con una creencia claramente arraigada en temas de opinión pública, es decir, se trata de una forma muy particular de consentimiento que la sociedad civil dio y está dando a las políticas sociales en condiciones de libre mercado, con la esperanza de que en algún momento el Estado pueda recuperar su papel protagónico para otorgar subsidios, seguridad social y otras prestaciones que reduzcan la pobreza.

Con esta intención de legitimar y proteger el régimen democrático, diferentes gobiernos instauraron un aparato de asistencia social como

el Fondo Social de Emergencia (FSE), vigente entre 1986 y 1989, o el actual Fondo de Inversión Social (FIS). El objetivo era convencer a la sociedad civil de que la privatización de las empresas estatales y las medidas rigurosas de adaptación a una economía de mercado, pueden poner en marcha tareas precautorias de alivio a la pobreza. Sólo así se podría explicar que a pesar del enorme costo social traído por el PAE, todavía subsista la democracia en Bolivia.

PRIMERA FASE: LA ESTABILIZACIÓN

Durante esta fase, la aplicación del decreto 21060 frenó el ritmo hiperinflacionario provocado por el déficit fiscal del sector público. Las medidas fiscales, monetarias, cambiarias y de ajustes administrativos en el sector estatal, no sólo reordenaron la economía nacional, sino que fueron imprescindibles para devolver el poder al Estado y cierta eficacia al gobierno.

De acuerdo a investigaciones del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que publicó una colección sobre el PAE en Bolivia, a partir de 1985 la reducción del gasto público estuvo instrumentada mediante la eliminación de los subsidios promovidos por el Estado desde la década de los años 50, la “relocalización” de trabajadores mineros y el congelamiento temporal de las remuneraciones. Los ingresos se incrementaron a través de la elevación de los precios y las tarifas públicas, así como de las transferencias financieras de las empresas públicas, sobre todo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La política de contracción monetaria se asoció con las medidas de restricción fiscal puestas en marcha mediante el control de los coeficientes de liquidez ⁴.

4. Cfr. Aguirre, Alvaro, et. al., ob. cit., p. 11, 1993.

El reordenamiento político y económico producido por el 21060 arrojó resultados satisfactorios. La hiperinflación fue controlada, el Estado dejó de ser acosado por presiones sociales que amenazaban con destruir su institucionalidad y en 1985 se inauguró un estilo de consenso político entre los dos partidos con un mayor número de parlamentarios: MNR y ADN. Ambos viabilizaron un acuerdo de gobernabilidad ("Pacto por la Democracia"), que permitió proseguir con eficiencia con el ajuste. A su vez, ambas organizaciones políticas se autoatribuyeron la paternidad legítima en el diseño y ejecución del 21060. De esa forma mostraron que el PAE no sólo estaba conformado por acciones reformadoras, sino sobre todo, por una especie de nueva etapa histórica de transformación nacional.

Desde 1985, el discurso económico presente en diferentes medios de comunicación estuvo cargado de tecnicismos y mucha especialización. Su objetivo era, justamente, impresionar a la sociedad a fin de no tener que explicar mucho los detalles. De ahí que, durante el gobierno de Paz Estenssoro proliferaran los foros económicos y las declaraciones de analistas, entre los que aparecían dos posiciones extremas: un polo de franco rechazo al 21060 y otro de apoyo ciego e incondicional.

Finalmente se impuso el discurso económico especializado a favor de los ajustes a fin de adoptar medidas políticas carentes de una justificación exhaustiva. Esto evitó que el PAE fuera negociado con sectores sindicales politizados como la Central Obrera Boliviana (COB). Desde este momento se construyó una espiral de opiniones, en la que las explicaciones económicas tienden a reducir cada vez más las obligaciones del Estado

con respecto a la sociedad y también su papel como dinamizador de la economía. El discurso económico neoliberal busca destruir cualquier compromiso para que el Estado vuelva a subvencionar prestaciones sociales⁵.

Los tecnócratas económicos llegaron acorazados por un discurso especializado que el ciudadano común no alcanzaba a comprender. El abanico de explicaciones tecnocráticas giró alrededor del control de los índices de inflación, la indexación de precios, el déficit del sector público, los coeficientes de liquidez, la tasa Libor, la capitalización, la reconversión de los fondos de pensiones y fideicomisos o los sistemas de regulación por sectores. Pero, ¿cómo salieron de este callejón sin salida del lenguaje alambicado y especializado que buscaba atemorizar cualquier oposición? Se elaboró un discurso compensatorio: la teoría del desarrollo con rostro social para aminorar la pobreza.

El nuevo discurso compensatorio justificaba acciones que sí eran más comprensibles: el mejoramiento de la calidad de vida, la satisfacción de necesidades básicas, el respeto a la dignidad de los seres humanos, la equidad, la justicia social y la protección del medio ambiente. Sin embargo, también se difundió la idea de un desarrollo humano sostenible para superar la pobreza, sin ir en contra de los moldes de mercado porque, en todo caso, las reformas sociales debían exigir más de los mercados. Por ejemplo, que sigan brindando sus ventajas, pero de una forma más equilibrada, combinando la eficiencia con equidad y sostenibilidad, ya que después de todo, "(...) los mercados libres constituyen el mecanismo más eficiente ideado hasta ahora para el intercambio de bienes y servicios"⁶.

5. Cfr. Cariaga, Juan L.. Estabilización y desarrollo. Importantes lecciones sobre el programa económico de Bolivia, Fondo de Cultura Económica, Economía Latinoamericana, Los Amigos del Libro, La Paz, 1989.

6. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Centro de Comunicación, Investigación y Documentación entre

En materia de reordenamiento institucional, se prestó especial atención a la desburocratización del Estado, la reducción del tamaño del sector público en la economía y «(...) al propósito de canalizar las acciones para el tratamiento de los problemas de la deuda y el crédito externos, así como para atender los asuntos sociales. Respecto a esta cuestión, fue importante la decisión [política] de crear el Fondo Social de Emergencia (FSE), en noviembre de 1985 (...) y el Consejo Nacional del Empleo»⁷.

Como lo expresa apropiadamente el economista Juan Antonio Morales, la Nueva Política Económica (NPE) del 21060 trajo consigo las reformas más radicales del Estado y la sociedad boliviana, prácticamente desde la Revolución Nacional de 1952, « (...) sin exageraciones se puede afirmar que la NPE es la gran revolución liberal, que ha sacudido completamente el patrón de desarrollo, fuertemente centrado en la inversión pública y con un sistema de reciprocidades, no intermediadas por el mercado, entre el sector público y el sector privado (...). Con la NPE se produce también una reducción muy significativa del tamaño del gobierno central en la economía. Éste, en el área de producción de bienes, se reserva para su administración directa sólo YPFB y las minas rentables, o con potencial comprobado, de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol)»⁸.

Una visión global sobre los efectos del PAE en el empleo, permite afirmar que la intención fue cambiar de forma radical el mercado laboral a fin de sembrar las mejores condiciones para la

llegada de inversiones privadas. Por lo tanto, de acuerdo con parámetros competitivos, la estructura del empleo prevé introducir nuevos procesos de trabajo y relaciones contractuales que sustituyan los antiguos procesos productivos intensivos en el uso de la fuerza de trabajo, por otros nuevos intensivos en capital, con lo que se estimula la innovación tecnológica como una medida central para elevar la productividad y minimizar costos. Dentro de este panorama, el PAE dio lugar a las siguientes consecuencias:

- Inestabilidad laboral.
- Movilidad de la fuerza de trabajo.
- Preeminencia del trabajo eventual y a destajo.
- Subcontratación.
- Trabajo a domicilio.
- Proliferación de la informalidad y de las estrategias autogestionarias de los trabajadores independientes, sobre todo en los ámbitos del comercio y las pequeñas empresas.

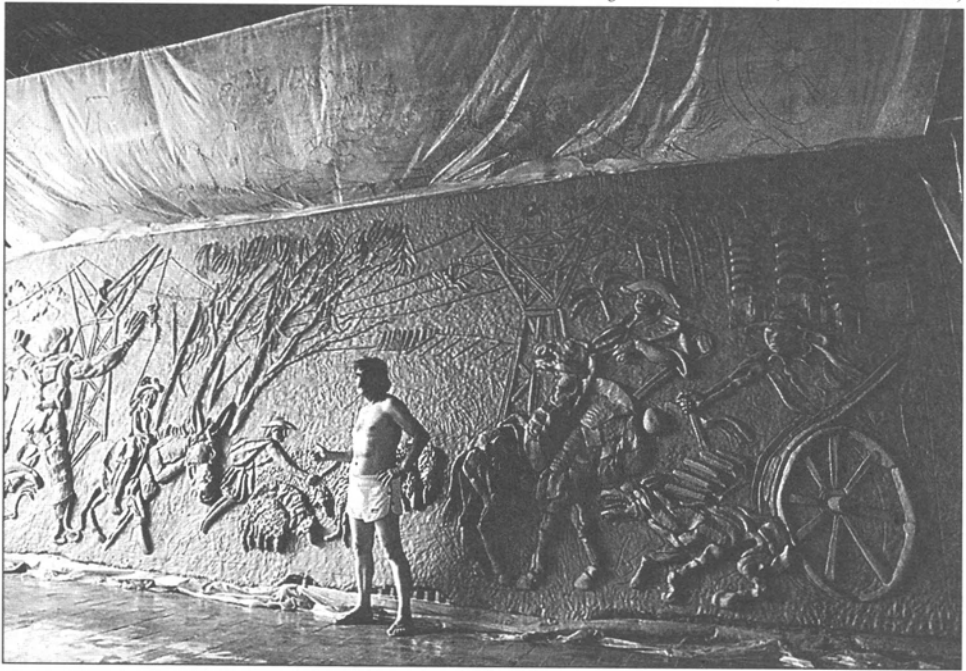
Antes de que se ejecutara la NPE, el peso del sector público en la inversión y empleo era el rasgo más preponderante de la economía boliviana, puesto que existía una enorme fracción de la Población Económicamente Activa (PEA) urbana en el sector público. Durante el primer año de la NPE (1985-1986), el empleo público se redujo en más del 10%, pasó de 246.000 en 1985 a 221.000 en 1986. El empleo del sector público representaba la elevada cifra de 47% en 1985, mientras cuatro años más tarde, en 1989, el porcentaje había declinado drásticamente a

Europa, España y América Latina (CIDEAL). "El público y los mercados"; en: Informe sobre desarrollo humano 1993, PNUD-CIDEAL, Madrid, 1993, p. 36.

7. Aguirre, Alvaro, et. al., ob. cit., p. 12, 1993.

8. Morales, Juan Antonio. "Nueva política económica y modernización del Estado"; en Mayorga, René Antonio (coord.). Democracia y gobernabilidad, América Latina, CEBEM-ILDIS-Nueva Sociedad, Caracas, 1992, pp. 99-100.

Lorgio Vaca. Mural de ENDE. (Modelando la Arcilla húmeda)



39,7% 9. Las medidas de hecho asumidas por el gobierno de Paz Estenssoro fueron los despidos o la llamada "relocalización", sobre todo en Comibol. Posteriores gobiernos, como el de Paz Zamora y Sánchez de Lozada, continuaron realizando esfuerzos para reducir el sector público. Así, los trabajadores fueron abandonando sus empleos, fruto de las bajas remuneraciones. Ello dio cabida a los siguientes resultados:

- Un proceso de presión indirecta para expulsar empleados.
- Procesos de autoselección negativa, a través de los cuales los funcionarios más competentes en el mercado laboral abandonan una carrera de servicio en el sector público.
- Mayor informalización del empleo público. Se recurre a personal calificado, pero con contratos de corta duración y elevados salarios, financiados a través de la cooperación internacional.

Después de 13 años de ajustes estructurales, los trabajadores en Bolivia todavía consideran que los riesgos para sus empleos crecen y se complejizan. Sin embargo, también se dan cuenta de que movilizaciones y presiones políticas con viejas demandas planteadas a través de la COB, ya no responden a sus exigencias. En algunos casos, existe el peligro de que los trabajadores pierdan sus empleos o empeoren sus condiciones de vida, a causa de la competencia internacional y la libre circulación del capital.

Los trabajadores reconocen también que la influencia liberal es hegemónica y, hoy día, temen quedar excluidos de los mercados internacionales en permanente expansión. Los trabajadores informales, como los comerciantes mayoristas y minoristas, quieren gozar de un buen col-

chón económico con créditos necesarios que efectivicen su diversificación, incorporándose en nuevos espacios dentro del mercado.

Ya no es posible pensar sólo en que el Estado sea el principal proveedor de empleo. Al mismo tiempo, la flexibilización laboral y la desregulación del mercado de trabajo exigen también una cualificación de la fuerza de trabajo para responder a los retos de una economía globalizada. Ésta necesita que los trabajadores estén preparados para hacer frente al cambio, desechando viejas costumbres como la comodidad de esperar sentados todo tipo de prestaciones sociales, subvenciones y asistencia social gratuita desde el Estado filantrópico o una economía centralizada.

La COB y los sindicatos de todo tipo necesitan discutir a profundidad y sin prejuicios, ¿cuál será su papel para aprovechar algunas ventajas del mercado? Sus estrategias de presión y reclamo de pliegos petitorios con los que se enfrentan a diferentes gobiernos, no son más que piedras en sus mismos zapatos, pues siempre acaban desgastando la fuerza de los trabajadores con una larga lista de derrotados.

Por eso es importante que el viejo pliego petitorio se convierta en un programa nacional para la cualificación del empleo, ligado a diferentes tácticas de pacto y concertación entre el Estado y los empresarios privados, entre los trabajadores y las nuevas condiciones de competitividad que requiere una economía dependiente como la boliviana. La COB debería convertirse en el eje de una cultura de la eficiencia y en la supervisora de una reforma del Estado boliviano orientada a su reconversión productiva.

Las condiciones globales para mejorar el trabajo en nuestra economía dependiente, pero fi-

9. Cfr. Morales, Juan Antonio, ob. cit., 1993.

nalmente conectada al mercado mundial, requieren de lo siguiente:

- Inversiones en infraestructura, transferencia de tecnología y mejoramiento en la calidad de la gestión, que contribuyan a aumentar la productividad de los trabajadores.
- Consolidar algunos resultados ventajosos que Bolivia alcanzó respecto a los hidrocarburos, la agricultura y la minería.
- Producir bienes de nivel tecnológico más alto.

Al mismo tiempo, es fundamental que los mercados laborales en el país sean adaptables a los siguientes objetivos:

- Facilitar la movilidad de la mano de obra.
- Aumentar la flexibilidad de los salarios relativos.
- Romper el vínculo entre los servicios sociales y los contratos laborales.
- Aumentar la adaptabilidad del mercado de trabajo.
- Reducir los desincentivos para cambiar de empleo.
- Preparar a los trabajadores para hacer frente a los cambios, a fin de reaccionar de inmediato a las modificaciones sorpresivas que surgen en las economías de mercado.
- Fomentar políticas públicas específicas en la búsqueda de empleo.
- Fomentar el readiestramiento.

De forma paralela al establecimiento de nuevas características económicas del trabajo, adquirieron importancia las condiciones subjetivas que podrían producir crecimiento. Nos referimos a la generación de confianza y de pactos sociales de largo plazo entre:

- El capital y los trabajadores.

- El Estado y la sociedad civil.
- Los partidos políticos y los empresarios.
- Los sindicatos y los responsables de las políticas públicas.

Los ajustes estructurales en Bolivia demandan que el mundo del trabajo produzca más confianza para que, en conjunto, el capital y los asalariados puedan aumentar la productividad y la eficiencia, y exijan al Estado la ampliación de la ciudadanía política y una igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos laborales.

En otros escenarios productivos como el área rural, el PAE provocó la concentración de recursos, incluida la tierra, que terminaron en manos de grandes empresas agroindustriales con aptitudes para adaptarse al modelo de mercado. Los efectos de este fenómeno en el plano de las relaciones y procesos de trabajo, son semejantes a los que suceden en la industria capitalista de las ciudades: empleos eventuales y a destajo. Otra de las características fue la creciente migración de pequeños productores hacia ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

Economistas rurales como Miguel Urioste afirman que las consecuencias de las políticas de ajuste en el campesinado fueron extremadamente negativas, porque produjeron los siguientes efectos:

- Disminución de la inversión pública en el sector agropecuario campesino.
- Reconcentración latifundaria improductiva de la tierra.
- Reducción de la oferta crediticia para los pequeños productores agropecuarios. En este último punto radica quizás uno de los obstáculos más grandes para orientar los procesos productivos en condiciones de mercado, porque el campesino no es visto como actor económico o buen sujeto de crédito, sino como grupo de

riesgo dependiente, ya sea de las organizaciones no gubernamentales (ONG) o del Estado. Por ello se piensa que tiene que ser asistido debido a sus condiciones de miseria.

- Apertura indiscriminada al comercio de importación de productos agropecuarios alimenticios provenientes de otros países.
- Disminución relativa de los presupuestos de educación y salud en el sector rural en comparación con los asignados a otros sectores.
- Desconocimiento de la legislación laboral para los trabajadores agrícolas asalariados.
- Nuevas formas de tributación para los campesinos incorporándolos al régimen del impuesto al valor agregado.
- Políticas arancelarias uniformes que encarecen insumos, equipos y herramientas para el sector agropecuario.
- Aumento substancial de los programas de asistencia alimentaria, especialmente por la vía del PL-480 de Estados Unidos, en sus diferentes proyectos.
- Promoción de políticas agropecuarias de exportación exclusivamente basadas en empresas intensivas en capital.

Urioste considera que los campesinos se convirtieron en compradores netos de alimentos, pues se estima que en 1992 no produjeron ni siquiera el 50% de lo que consumieron ¹⁰. A esto debe agregarse que la situación del área rural está muy ligada al deterioro de los bosques y al conflicto surgido entre el desarrollo económico para el campesinado y la ecología, porque las posibilidades

de superar la pobreza mediante un aumento de los niveles de productividad agrícola podrían atender contra un medio ambiente seguro ¹¹.

Respecto a los ingresos, donde el ajuste tuvo características inequitativas, es importante destacar que "(...) el PAE no contempla el uso de políticas destinadas a modificar la distribución primaria o factorial del ingreso, dejando al mecanismo del mercado la determinación de la remuneración para el trabajo y los demás factores productivos" ¹². Con el objetivo de motivar el despliegue del sector privado, el PAE tendió a concentrar el ingreso y a excluir a amplios sectores laborales de los posibles beneficios de las políticas económicas y sociales.

Cabe recordar que los análisis realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el Banco Mundial (BM) sobre la pobreza a partir de los efectos del PAE, señalan que las "(...) áreas geográficas pobres están, hoy en día, peor que en 1976, en relación con el promedio nacional (...). Si bien entre 1976 y 1992, la población que vive en extrema pobreza habría disminuido en términos relativos, en términos absolutos habría alcanzado a un millón de habitantes (...), [asimismo] la tesis que postula que la pobreza se ha incrementado casi exclusivamente como consecuencia de la aplicación de la política de ajuste estructural, muy divulgada por sectores de la izquierda tradicional, no tiene suficientes evidencias. En todo caso, parece ser más correcta la afirmación utilizada por funcionarios del BM sobre que las causas estructurales de la pobreza en Bolivia tienen un origen anterior"¹³.

10. Cfr. Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 1995. El mundo del trabajo en una economía integrada, Washington D.C., Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, junio de 1995.

11. Cfr. Urioste F. De C., Miguel. Fortalecer las comunidades. Una utopía subversiva, democrática y posible, AIPE-PROCOM-TIERRA. La Paz, 1992.

12. Cfr. Gudynas, Eduardo. Ecología, desarrollo y neoliberalismo, Documentos de Investigación No. 1, CEBEM, La Paz, 1995.

13. Aguirre, Alvaro, et. al., ob. cit., p. 66.

Inclusive el propio Estado benefactor del 52 ya era débil para solucionar la pobreza estructural. El PAE se acomodó a exigencias económicas de urgencia en Bolivia y a ciertos parámetros internacionales, pero aprovechó también la debilidad del Estado del 52, razón por la cual los ajustes se aplicaron con rapidez, aunque agudizaron sus efectos negativos en los sectores más pobres, que recibieron al PAE de súbito y sin mayor capacidad de adaptación.

SEGUNDA FASE: ESTABILIDAD SIN CRECIMIENTO E INCERTIDUMBRE

Las consecuencias sociales de los ajustes estructurales no tardaron en aparecer. El desempleo se incrementó de forma considerable y la economía informal se fue reproduciendo como una estrategia de los sectores depauperados para autoasignarse un salario a través del comercio ambulante o la inversión en pequeñas empresas. La economía informal estalló debido a un desarrollo más acelerado de todo el sector económico frente a la incapacidad del Estado para extender su control sobre diferentes agentes económicos que transgredieron los límites fijados por el Estado y automáticamente pasaron a convertirse en actividades al margen de su control ¹⁴.

Sin embargo el 21060 llevaba implícita una nueva estrategia de desarrollo, pues planteó también una reconversión productiva, encaminada a fortalecer nuevas áreas como el sector exportador, «(...) cuestión que se remarca insistiendo en que se debe reconstruir la estructura productiva del país, priorizando el crecimiento y la diversificación del comercio externo» ¹⁵.

Es importante agregar que la reconversión productiva estaba pensada, en este primer momento, como un impulso afincado en la inversión pública, antes que en la fuerza estratégica de la inversión privada, cuyo papel fue central entre 1993 y 1997 con la capitalización de empresas estatales. Al mismo tiempo, la cooperación internacional cobró una importancia crucial a partir de esta segunda fase, pues a lo largo del ajuste, «(...) la política que se asumió en torno a la inversión pública fue que ésta sea financiada con créditos externos y que los recursos así obtenidos, se destinen a obras de infraestructura, en menor medida a programas de desarrollo en los sectores agropecuario, minero e hidrocarburos y en los procesos de reforma estructural del sector financiero y de administración pública» ¹⁶. Además aparecieron donaciones para atender la demanda de alimentos y una serie de programas de cooperación técnica. Sin embargo, los ajustes trajeron consigo una fuerte dosis de incertidumbre, una vez que se alcanzaron las metas de control sobre la hiperinflación y estabilidad económica. Resultó muy difícil imaginar alternativas reales y efectivas para una reactivación económica sostenida en el largo plazo.

La cooperación externa resultó un tanto ambigua, porque no contribuyó a dilucidar escenarios posibles para ir más allá de la estabilización. En muchos casos, varios cooperantes europeos establecieron su residencia permanente en el país, instauraron una red de ONG, se convirtieron en intermediarios para capturar financiamiento externo o, simplemente, fundaron sus propios negocios como hoteles y otros servicios. Las condi-

14. Van Niekerk, Nico. "La economía va cada vez mejor, pero ¿qué pasa con la gente? ¿deuda o beneficio social?: en: CID-COTESU-MCTH. Políticas sociales y ajuste estructural, Bolivia 1985.93, CID-COTESU-MCTH, La Paz, 1993, p. 13 y ss.

15. Cfr. Doria Medina, Samuel. La economía informal en Bolivia, EDOBOL, La Paz, 1986.

16. Aguirre, Alvaro, et. al.: p. 15.

ciones de pobreza del país tiñeron de depresión a muchos hogares, pero en otras situaciones, resultaron brindando un espacio apto para que muchos cooperantes pudieran pescar en río revuelto.

Los donantes internacionales mostraron, y todavía lo hacen, un gran entusiasmo por trabajar con las ONG, sobre todo en programas de alivio a la pobreza, sin embargo, "(...) no está claro si en este campo las ONG tienen más éxito que las agencias del Estado. Aún más, hay evidencias de que la combinación entre la reorganización del Estado y el surgimiento de las ONG como implementadoras de la ayuda para el desarrollo ha contribuido a minar las organizaciones populares que representan los intereses de los pobres" ¹⁷.

De la estabilización, se pasó a una desesperada discusión sobre las posibilidades que tenía el país para lograr una reactivación económica que permitiera recuperar cierta prosperidad, similar a la que habíamos tenido en la década de los 70. No sucedió tal cosa, la segunda fase se caracterizó por el mantenimiento de la estabilidad sin crecimiento. Si en algún momento éste apareció, fue lento e insuficiente para estimular la formación de capital humano y reducir drásticamente la pobreza.

Las reformas estructurales exigieron, al mismo tiempo, la necesidad de un despliegue gradual, cuya continuidad debía estar garantizada. Todos los esfuerzos se orientaron a la atracción de inversiones extranjeras como una posibilidad para abrirse hacia el mercado mundial y hacer que éste estimule el desarrollo económico.

El cambio de gobierno en 1989 dio paso a la administración de Jaime Paz Zamora, quien durante toda su campaña electoral expresó su in-

tención de suspender los ajustes estructurales del 21060. Sin embargo, una vez en el poder, sólo dio continuidad a los ajustes con el decreto 22407, que en sus disposiciones más relevantes intentaba alentar la expansión de la inversión extranjera para relacionarse, en particular, con las políticas de los sectores de minería e hidrocarburos. Así diseñó la aparición de condiciones favorables para la privatización de empresas públicas. Como parte de su estrategia política con miras a legitimar su gobierno, difundió una contradictoria consigna: "Bolivia, país de ganadores". Sin embargo eran claros los indicios de que la década de los 80 estaba realmente perdida.

En la orientación del supuesto "país de ganadores", se crearon el Fondo de Inversión Social (FIS), que reemplazó al FSE, los fondos de desarrollo como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Fondo de Desarrollo Campestre (FDC) ¹⁸.

El sector sindical se opuso (todavía lo hace) al PAE, sin embargo, también estaba consciente de que éste era irreversible. Sus expectativas giraban en torno a la estabilidad y, al mismo tiempo, exigía que los costos sociales sean atendidos con un mínimo de seguridad humana. En consecuencia, las élites políticas, sindicales y empresariales asumieron que el modelo económico de mercado sepultó para siempre al Estado de bienestar y el patrón de acumulación reinante entre 1952, después de la Revolución nacional, y 1985.

En Bolivia, las consecuencias más importantes del PAE son:

- Un aumento del desempleo, el cual ya no es sólo cíclico, sino que asume formas de exclusión y crea barreras crecientes a la movilidad y

17. Ibidem., p. 17

18. Arellano-López, Sonia y Petras, James. "La ambigua ayuda de la ONGs en Bolivia", Nueva Sociedad, No. 131, mayo-junio de 1994, p. 72 y ss.

al ascenso social. Este es uno de los núcleos que más descontento causa en la población, expresado bajo la forma de criterios pesimistas en la mayor parte de encuestas de opinión política realizadas.

- Una concentración del patrimonio y del ingreso, traducida en una profundización de la inequidad, porque sólo un 30% de la población puede ser considerada rica o con necesidades satisfechas, mientras el otro 70% está atrapado en la supervivencia o la indigencia, sobre todo el campesinado y los pueblos originarios.
- Una adicción prácticamente moribunda al financiamiento externo, en la medida en que el ahorro interno se considera insuficiente para financiar la reconversión productiva y la reactivación económica.
- Una intervención y regulación directa de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM, para viabilizar créditos y avales que el país necesita si pretende acceder al mercado internacional de capitales, previo cumplimiento de condiciones o metas específicas que acompañan a todas las políticas económicas desde 1985.

La meta de los organismos internacionales se orienta más hacia la posibilidad de ayudar a que los países pobres se inserten, competitivamente en el mercado mundial, antes que a promover la equidad social dentro de cada país o a fortalecer reformas sociales mediante políticas redistributivas de riqueza y excedentes económicos. Aquí radica una de las principales contradicciones para hacer coincidir elementos como:

- Democracia política
- Ajustes estructurales
- Justicia social
- Equidad.

Con estas características, resultan muy pertinentes las siguientes interrogantes:

- ¿Por qué la estabilidad no basta para dinamizar la economía?
- ¿Cómo se explica una estabilidad tan prolongada, desde 1985 a la fecha, pero que carece de autosustentación?
- ¿Bajo qué condiciones se lograría elevar substancialmente el coeficiente de inversiones?
- ¿Cuáles son las condiciones imprescindibles para la concertación de un pacto social que haga sostenibles el desarrollo humano y la reforma social en Bolivia? ¹⁹.

Al mismo tiempo, el economista Horst Grebe López afirmó que si se hace un análisis económico e histórico respecto a las tasas de crecimiento en el país, pueden advertirse cuatro fases coincidentes con ciclos de crisis y expansión:

- Una primera de crisis entre 1951 y 1958.
- Una segunda de expansión entre 1960 y 1978 con tasas de crecimiento ascendentes que alcanzaron su máximo desarrollo en el período de 1972 a 1978.
- Una tercera fase de 1978 a 1987 con una caída en la tendencia del crecimiento.
- Una última fase hasta 1997, donde la tasa de crecimiento experimenta una tendencia ascendente, lenta e incierta.

19. En medio de la discusión sobre el alivio a la pobreza campesina, al final de la gestión presidencial de Jaime Paz, se desató un escándalo por la denuncia que hiciera el diputado del MBL, Miguel Urioste, al revelar una estafa de 600.000 dólares perpetrada por el entonces director del Fondo de Desarrollo Campesino, Hugo Lozano Simons, actual diputado por el MIR.

A partir de la aplicación de los ajustes estructurales, pueden destacarse variables motrices como un crecimiento de la inversión privada y un papel importante de la inversión extranjera. La primera cayó en la ponderación total y se contrajo, mientras la inversión extranjera aumentó. Entre 1987 y 1991, la economía creció lentamente, la curva inflacionaria demostró una baja, pero la economía no se dinamizó y fue frenada por los términos de intercambio. Por lo tanto, si bien la estabilidad financiera y monetaria son necesarias, no son suficientes para lograr un crecimiento mayor. Finalmente, Grebe también considera que el aumento desenfrenado de la inversión privada extranjera puede provocar un excesivo grado de extranjerización de la economía nacional, peligroso para el ámbito de las decisiones políticas internas ²⁰.

El ex ministro de Finanzas durante el gobierno de Jaime Paz Zamora y actual vicepresidente de la República, Jorge Quiroga, afirmó en diversas ocasiones que si se busca obtener buenos resultados en materia de alivio a la pobreza y una respuesta eficaz para los costos sociales del ajuste, la economía nacional debería crecer entre 4 y 5%. Para llegar a un crecimiento de entre 5 y 6%, es imprescindible una inversión que alcance a, por lo menos, 18 o 20% del Producto Interno Bruto (PIB) lo cual, en términos absolutos, significa alrededor de 1.300 millones de dólares anuales en forma sostenida para despegar de manera clara y notable. Al mismo tiempo, esto también implica una inversión pública de casi 8% en infraestructura y desarrollo humano y 12% de inversión privada concentrada en servicios y producción.

Sin embargo, hoy la inversión total del PIB no supera los 800 millones de dólares, razón por la cual nuestra tasa de crecimiento anual fluctúa entre el 3,6 y el 3,8% ²¹.

La desregulación de los mercados para apoyar el dinamismo empresarial produjo la reducción de las funciones del Estado como productor de bienes y servicios, y abonó el terreno económico para la privatización. En consecuencia, en la visión liberal, las acciones dirigidas a enfrentar la pobreza no dependen de una intervención estatal en la distribución del ingreso, sino del efecto rebalse que, supuestamente, debería ocurrir cuando se reestructuró el aparato productivo y se ejecutó un crecimiento económico sostenido. Al mismo tiempo, las políticas sociales, fruto del ajuste, son entendidas como acciones focalizadas de la inversión social entre los sectores más vulnerables que, además, arrastran necesidades básicas insatisfechas.

DEJANDO ATRÁS LA FUNCIÓN ASISTENCIALISTA Y BENEFACTORA DEL ESTADO

Luego de la victoria económica y política del 21060, se ejecutaron acciones destinadas a templar los impactos sociales provenientes de las medidas de estabilización. De esta manera, el gobierno de Paz Estenssoro difundió el convencimiento de que el nuevo rol estatal en el ámbito social había cambiado radicalmente, pues dejaba de responsabilizarse por el financiamiento de pulperías mineras, sistemas de seguridad social, cuyos costos eran pagados por el Estado a como dé lugar o medidas filantrópicas para sobrevivir o trabajar.

20. Cfr. Grebe López, Horst. "La estabilidad sin crecimiento económico ni desarrollo humano"; en: Fundación Milenio, PNUD, Vicepresidencia de la República, ILDIS. Buen gobierno para el desarrollo humano, ILDIS, Vicepresidencia de la República, La Paz, 1994.

21. Cfr. Fundación Milenio. Diálogos de Milenio No. 66, "Análisis del crecimiento económico y de las perspectivas de la economía nacional en 1998", La Paz, 22 de diciembre de 1997, mimeo.

Desde 1985 se establece que las políticas sociales de compensación deben estar focalizadas, es decir, apuntar su atención sólo a los grupos más pobres de la población a través de programas funcionales al PAE. Por lo tanto, el Estado sólo prestaría asistencia en las áreas de salud y educación para que la población beneficiaria se incorpore productivamente en la economía de mercado. Si se lograba esta meta, la supervivencia correría, después, por cuenta y riesgo de cada persona, considerada como individuo conectado al mercado en igualdad de condiciones y oportunidades.

La realidad fue muy diferente. De acuerdo a estimaciones realizadas por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el 97% de la población campesina en Bolivia está sumida en la pobreza absoluta. Nuestra pobreza es un fenómeno sobre todo rural ²². A su vez, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) afirma que el 70% de la población nacional no está ni siquiera en condiciones de adaptarse al mercado de trabajo flexibilizado y competitivo ni posee igualdad de oportunidades, sobre todo cuando se habla de encontrar alternativas para la cualificación profesional o técnica.

El precio social que debió pagar nuestro país para viabilizar y hacer exitosos los ajustes económicos, fue asumir, reforzar y presenciar de forma cotidiana que la economía de mercado tiende a reproducir una ciudadanía desechable ²³. Para Bolivia fue importante recuperar la democracia y establecer condiciones de participación o ciudadanía políticas, pero los hechos demostraron que los ajustes estructurales podían pasar fácilmente por alto tales condiciones políticas para subordinarlo todo a las premisas del mercado.

Como parte de sus políticas sociales, Paz Estenssoro creó el FSE, cuyo carácter compensatorio consistió en que los programas de alivio, financiados mediante donaciones y créditos externos concesionales, debían cumplir un período de ejecución no mayor a tres años. Así contribuían a paliar la pobreza de las regiones más afectadas. En consecuencia, el FSE se planteó una acción asistencial focalizada, discrecional y funcional a la NPE.

A partir de la experiencia institucional del FSE y al calor del decreto 22407, en 1989 se creó el FIS a fin de continuar financiando proyectos de infraestructura y servicio en áreas como la atención primaria de salud, el saneamiento básico y la educación primaria. Se fundaron también el Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO), como la instancia encargada de programar los recursos para que el Estado invierta en el área social, y la Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO) como el brazo técnico y especializado para el diagnóstico y la formulación de políticas de intervención.

Muchos analistas, como Nico van Niekerk, experto en cooperación internacional para el desarrollo, criticaron la falta de agilidad, la excesiva burocratización y los elevados gastos administrativos del FIS. "Si bien los montos de los proyectos aprobados [fueron] mucho mayores, los montos totales desembolsados llegaron a 12 millones de dólares (hasta octubre de 1992). Uno de los principales problemas, que explica esta diferencia [fue] el lapso que [transcurrió] entre el momento de aprobación de un proyecto y el desembolso efectivo". Al mismo tiempo llama la atención que durante los tres primeros años del gobierno de Jaime Paz (1989-1993), la capacidad

22. Declaraciones a Presencia, La Paz, 27 de septiembre de 1995.

23. Presencia, La Paz, 18 de noviembre de 1992. Consultar también: Calderón, Fernando y Laserna, Roberto. La fuerza de la equidad. El desarrollo humano en Bolivia, Colección CERES de Ciencias Sociales, Los Amigos del Libro, La Paz, 1997.

de gasto en el sector social representó menos del 50% programado ²⁴.

En la gestión de Paz Zamora surgieron los primeros problemas relacionados con las políticas sociales focalizadas. A partir de tal focalización, la inversión social sólo se concentró en aspectos específicos y después se evaporó. Por ejemplo, cuando se adoptaron acciones en la educación primaria, es posible que cuando la población vulnerable, en este caso los niños, ingrese a otra fase de su ciclo vital, deje de contar con las facilidades para proseguir con su educación, y quede igualmente incapacitada para incorporarse de forma adecuada al mercado laboral, cada vez más competitivo. Por lo tanto, "(...) la inversión social en capital humano generaría una potencialidad que puede o no efectivizarse en el futuro" ²⁵. La incertidumbre carcome el núcleo de las políticas sociales focalizadas, porque no existe continuidad ni acompañamiento hasta verificar que la inversión social realizada en un sector pobre haya cumplido las expectativas en el largo plazo.

Además, dicha focalización exige decidir si debe privilegiarse la lucha contra la pobreza relativa o, por el contrario, el alivio a la pobreza absoluta. En última instancia, todo depende de una decisión política o técnica y, finalmente de la coyuntura. Por lo tanto, las estrategias de reforma social representan, una vez más, sólo iniciativas precautorias para contrarrestar descontentos y estabilizar gobiernos ²⁶.

De acuerdo con los principios doctrinarios liberales en materia de políticas sociales, la inversión social debería capitalizarse en el tiempo mediante el surgimiento de mayores y mejores ca-

pacidades productivas para la población. De otro modo, sólo se estaría incurriendo en meros gastos sociales. Justamente esto es lo que pasó. Las medidas bolivianas de alivio a la pobreza con carácter focalizado, aún en rígidas condiciones liberales, se tradujeron en el fomento de un mayor consumo, como por ejemplo, el gasto en subsidios o simplemente en saneamiento básico. Por otra parte, dicho gasto social también buscaba satisfacer necesidades sólo en cierto momento y de acuerdo a consideraciones subordinadas a las políticas económicas.

Desde 1989, los efectos de las políticas sociales focalizadas muestran una manifiesta incapacidad para capitalizarse de manera efectiva. Además, la mayor cantidad de recursos provenientes de la inversión social fue orientada hacia el saneamiento básico, mientras un porcentaje ínfimo se destinó a la educación, ámbito donde debería proyectarse la formación de nuevo capital humano que enriquezca a la sociedad y a la economía.

Entre 1987 y 1990, la inversión social *per cápita* en Bolivia fue de 12,14 \$us. y para 1991, había caído a 8,27 \$us. En el período que va de 1987 a 1991, definido por algunos economistas como el intervalo de estabilidad económica con estancamiento e inseguridad sobre el futuro, la inversión social representó el 18,3% de la inversión pública total. Durante 1992, subió relativamente a 21%. Este mismo año, del total del presupuesto ejecutado en la inversión social, el 44% se canalizó hacia el saneamiento básico; el 25% se trasladó a salud y seguridad social; el 21% fue destinado a urbanismo y vivienda, mientras sólo

24. Cfr. Chomsky, Noam. "Ciudadanos desechables. La pauperización en América, segunda parte", El Viejo Topo, No. 89, octubre de 1995.

25. Van Niekerk, Nico, ob. cit., p. 23.

26. Eguino, Huáscar. "Notas sobre la inversión social en el marco de la aplicación del Programa de Ajuste Estructural"; Serie Avances de Investigación, CEDLA, La Paz, septiembre de 1993 (mimeo.), p.5.

el 9,8% se orientó a la educación 27. Al mismo tiempo, debe resaltarse que en el lapso de 1987 a 1992, existe un bajo nivel de ejecución presupuestaria en la inversión pública, debido a la enorme incapacidad gerencial y al retraso en algunos planes de privatización programados por el gobierno, lo cual dio lugar a que la administración de Paz Zamora incumpliera con varios compromisos para atenuar la deuda social del Estado boliviano.

En su participación en la Conferencia Internacional sobre Desarrollo Social, Democracia y Crecimiento Económico, Samuel Doria Medina, ex ministro de Planeamiento y Coordinación de Paz Zamora, defendió de forma tajante los ajustes y la economía de mercado porque, en su opinión, "(...) es un miopía pensar que el modelo de libre mercado genere pobreza, [pues ésta] se ha acumulado desde hace muchos años (...). Se precisa de una política decidida del Estado para atacar y así reducir los niveles de extrema pobreza. Esta política debe dedicarse a levantar las barreras que impiden a sectores importantes de la población a que puedan incorporarse a la economía de mercado" 28.

En consecuencia, toda acción de alivio se convierte, en el fondo, en una táctica política de consolidación de la cultura liberal en el plano económico, social y político. La trayectoria que siguieron las políticas sociales desde agosto de 1985 hasta las acciones desarrolladas en el marco de la estrategia social durante el gobierno de Paz Zamora, muestran dos fases:

- La primera estuvo claramente caracterizada por los esfuerzos para reducir el impacto sorpresivo

y rígido de la NPE, a través de programas compensatorios.

- La segunda fase estuvo determinada por la concentración del gasto social en los sectores identificados como más necesitados y por el apuntalamiento de la estabilización.

Desde el punto de vista social, el resultado inmediato, y buscado conscientemente, fue lograr que la sociedad civil asuma para sí todos los costos y sacrificios del ajuste. Las reformas sociales estimularon que la población se ocupe de su propia reconversión laboral y encuentre sus propias opciones de manera autónoma. Más allá de los indicadores económicos, es en las políticas sociales donde más se aprecia el contenido liberal del PAE en Bolivia. Los pilares de aquellas se asientan de forma esquemática en lo siguiente:

- La liberalización de la economía y el abandono estatal de las viejas prestaciones sociales de hace tres décadas es algo irrefutable.
- En el largo plazo, las políticas de focalización y alivio a la pobreza tienden a construir una cultura individualista donde los mismos actores sociales pobres y los grupos con desventajas asumen de forma directa los problemas de supervivencia, inserción y adaptación a las condiciones competitivas del mercado.
- Debe contribuirse a una reforma del Estado y a una reforma laboral, cuyas acciones tiendan a evitar que el sindicalismo articule políticamente a sectores sociales radicales.
- Todos los individuos, no sólo los pobres, son actores de su propio desarrollo sin otro deseo que el de llevar adelante sus capacidades. En

27. Cfr. Dos Santos, Mario R. "Las políticas sociales en el ajuste. Perspectiva sociopolítica"; Pobreza urbana y Desarrollo, FI-CONG, No. 4, Año 2, Buenos Aires, abril de 1993. Ver también: Garde Roca, Juan Antonio. "Crisis fiscal y límites del Estado de bienestar"; Claves de Razón práctica, marzo de 1995.

28. Cfr. Eguino, Huáscar, ob. cit. P. 6 y ss.

ello se elimina la intervención de fuerzas extrañas e ineficientes como las del Estado benefactor, para producir no sólo riqueza, sino crear normas, criterios de justicia y una gran variedad de formas de cooperación.

De esta manera, las políticas sociales de alivio a la pobreza, funcionales a las estrategias económicas y a las políticas de gobernabilidad, terminaron por justificar la idea de que el viejo Estado del 52 ya era definitivamente inútil.

EL BALANCE POLÍTICO

Existen palpables indicios para afirmar que en Bolivia, el PAE sustituyó la política por el mercado como instancia máxima de regulación social. De hecho, el actual avance del mercado implica fortalecer la coordinación entre privados, con el consiguiente recorte del espacio público²⁹. Esto hace que el Estado se desligue de cualquier compromiso social y que la política también abdique de sus responsabilidades en beneficio del interés colectivo o de una mayor equidad generalizada.

La gran mayoría de las decisiones políticas en materia de desarrollo humano o reforma social están delimitadas por los equilibrios macroeconómicos, convertidos en verdaderos principios normativos orientados a fijar límites estrictos a la intervención política³⁰.

Por otra parte, la política trata de equipararse y confundirse, cada vez más, con la gestión pública. De ahí nace la importancia y el prestigio social o político que adquieren los técnicos en políticas sociales durante estos últimos diez años. Vale decir que la política estatal terminó convirtiéndose en una gestión competitiva similar a la

de una gran empresa de cara a los desafíos imprevisibles y donde importa más el corto plazo que los objetivos de largo alcance.

El inmediatezismo en la política social y económica es el nuevo tatuaje para las gestiones de gobierno en circunstancias neoliberales, y de aquí viene la imposibilidad de pensar en un nuevo orden social al margen de, o contra de, las estructuras de mercado.

Cuando se trata de discutir problemas de reforma social o seguridad humana, los asesores del ex ministerio de Desarrollo Humano o de las secretarías de Inversión Social y Pública, tienden a percibirse a sí mismos como administradores (managers) que negocian sus ofertas con los mejores postores sociales a fin de legitimar gobiernos y controlar los conflictos provenientes de las situaciones de pobreza, a cambio de recibir más cuotas de poder en el Estado.

Estas concepciones se clavan como dardos en la agenda de los gestores de política social, sin embargo, todavía está pendiente la pregunta de cómo es posible compatibilizar la integración a la economía mundial, generadora de persistentes desigualdades sociales, con la equidad y una seguridad humana armónica e integral.

Las políticas sociales quedan sometidas a decisiones económicas, pero a su vez, fomentan la percepción de que los gobiernos están haciendo «algo» para que la aplicación del PAE sea menos doloroso entre los grupos pobres. De otro modo no se explica cómo algunos efectos de las políticas macroeconómicas orientadas hacia el mercado como la dependencia, la precariedad, el desempleo, la inequidad y la impotencia de grupos sociales marginales convivan, bajo una relativa tranquilidad, con la lógica de expectativas cre-

29. Doria Medina, Samuel, citado en Van Niekerk, ob. cit., p. 18, el subrayado es mío.

30. Cfr. Lechner, Norbert. «Los nuevos perfiles de la política, un bosquejo»; en Nueva Sociedad, No. 130, 1994, p. 37 y ss.

cientes del desarrollo humano y la reforma social, cuyos objetivos buscan la justicia social, la seguridad familiar, personal, educacional, alimentaria y laboral, es decir, bienes que son el núcleo de la política social actual 31.

Los conflictos que ocasionan pobreza e inequidades sociales, promueven intensos debates sobre cómo evitar que el régimen político democrático se resquebraje. En democracia, la pobreza cuestiona los alcances e insuficiencias que el Estado tiene respecto a la ampliación o profundización de la ciudadanía, entendida como los derechos civiles, políticos y éticos para formar parte de una comunidad donde se respeta la humanidad de hombres y mujeres, reconociéndoles un estatus de seres dignos, capaces de tener satisfechas sus necesidades materiales y con un apreciable margen de igualdad de oportunidades y derecho a la participación política para decidir sobre su destino como individuos y parte de una sociedad.

La pobreza no sólo plantea problemas al estilo de desarrollo liberal, sino también al tipo de democracia que se está construyendo en la práctica, donde las carestías y privaciones se convierten en deficiencias de ciudadanía. El descontento político con la democracia boliviana se expresa en varias encuestas de opinión y cultura política realizadas desde 1990, donde se detecta una creciente interpelación de la sociedad al sistema político y a la pobreza que sufre el país.

Por ejemplo, una encuesta sobre opinión política realizada en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto durante 1990 32,

mostró que el 55% de los entrevistados no estaba de acuerdo con la democracia en Bolivia, aunque asumía también, en un 79%, que sólo ésta resolverá los principales problemas del país. Además, el 78% de los encuestados opinó que la democracia con justicia social es posible.

De manera que la percepción civil de la democracia se mueve en dos planos:

- Uno, el del deseo, “la democracia sí puede ser mejor”.
- Otro, el evaluativo donde la democracia es calificada de acuerdo a los logros alcanzados o a los problemas no resueltos, sobre todo en materia de pobreza y crisis económica.

Esta misma tendencia se mantuvo en la encuesta sobre coyuntura nacional, llevada a cabo en 1992 por el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) en las ciudades de La Paz y El Alto 33, donde el 47% de la población asumía que Bolivia marchaba por mal camino en contraste con un 35% que declaraba lo mismo en 1991. En 1992, el 38% pensaba que viviría peor en los próximos dos años en comparación a como estaba ahora (en 1991 sólo era el 17%). Además, son los grupos de menor nivel socio-económico, educacional y ocupacional quienes evalúan la situación de manera más pesimista y arrastran a un buen grupo de clases medias hacia posiciones más críticas. Finalmente, el 54% de los encuestados en 1992 afirmaba no estar satisfecho con la democracia que vivía.

31. Cfr. **Calderón**, Fernando (comp.). Ahora sí que sí, o si no porque, CEDLA, La Paz, 1995.

32. Cfr. **Pachano**, Simón. “Condiciones e instrumentos de las políticas sociales”; en Pobreza urbana y Desarrollo, FICONG, No. 4 año 2, Buenos Aires, 1993.

33. Encuesta de Opinión política sobre Democracia, Partidos y Reforma del Sistema político, encargada por la Subcomisión de Reforma Política del Honorable Congreso Nacional, La Paz, 1990. Ver también interpretaciones adicionales de la encuesta en: Lazarte, Jorge. Bolivia: certezas e incertidumbres de la democracia. Problemas de representación y reforma política, ILDIS, Los Amigos del Libro, La Paz, 1993.

Después el Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB), dependiente de la Vicepresidencia de la República, junto con el PNUD y el ILDIS realizaron otra consulta nacional sobre la seguridad humana en Bolivia entre junio y agosto de 1995³⁴. Dicha encuesta mostraba que el 79% de la gente percibía que después de 10 años de ajuste estructural, el país estaba igual o peor. Dentro de ese grupo, un elevado porcentaje, el 44%, declaraba incluso que Bolivia estaba mucho peor. Cuando se pidió a los entrevistados que comparen la situación actual con la de 1985, el 75% entendía que el gobierno (de Sánchez de Lozada, 1996) era igual o peor que el del año 85. "Es posible que, al remitirse a 1985, la gente no [pensaba] en la UDP, sino sólo en la implementación de la NPE. A su vez, también [fue] perceptible que las respuestas de las personas [tomaban] en consideración fundamentalmente la situación económica"³⁵. Otro elevado porcentaje juzgaba de manera crítica el modelo económico y afirmaba, en un 89%, que la situación respecto a los empleos y los ingresos era igual o peor en los últimos 10 años de democracia.

Los redactores del análisis estadístico señalaron que "una primera conclusión plantea, por un lado, el reconocimiento de los límites y frustraciones que del país, de sus instituciones y sus personas tiene la población. Y, por otro, dadas estas tendencias, una suerte de sentimiento arraigado de fatalismo acerca de las posibilidades del país"³⁶. Así pues, la «democracia» es y fue valorada en términos objetivos.

Todos estos datos contradicen aquellas afirmaciones por las que todavía no sería posible tener claridad sobre el impacto de la NPE en los grupos pobres, no sólo por falta de información científica y eficaz, sino también por la pugna entre diferentes tendencias ideológicas e intereses políticos vigentes dentro de la sociedad boliviana³⁷. Al contrario, las encuestas dan lugar a pensar que en democracia, la pobreza y el desarrollo plantean serios problemas de ciudadanía, dignidad, integración social y equidad, puesto que, junto al pesimismo con que los bolivianos juzgan la democracia, también se considera que las estructuras políticas son excluyentes. Después de 15 años de ajuste estructural y del ensayo de políticas sociales compensatorias con raíz liberal, el sistema democrático está enfrentado una insostenible convivencia entre democracia y mercado, entre seguridad humana y ajustes económicos.

También es importante aclarar que cuando se realiza el cálculo de la pobreza, surgen miradas críticas respecto a los procedimientos metodológicos. "Un primer problema se refiere al cálculo del ingreso o del consumo en términos monetarios, lo cual tiende a excluir múltiples elementos no monetarios en el bienestar individual o familiar. En la medida en que millones de personas (...) participan en una economía no monetaria (campesinos de subsistencia) o en el sector informal de la economía urbana en donde resulta difícil fijar ingresos monetarios en forma sistemática, los cálculos de la pobreza en términos de

34. ILDIS. Encuesta de coyuntura nacional, informe final, La Paz, 25 de mayo de 1992.

35. PRONAGOB-PNUD-ILDIS. La seguridad humana en Bolivia. Percepciones políticas, sociales y económicas de los bolivianos de hoy, PRONAGOB-PNUD-ILDIS, La Paz, 1996.

36. Ibidem., ob. cit., p. 43.

37. Ibidem., ob. cit., p. 44.

un cantidad X de ingreso mensual o su equivalente se reducen con frecuencia a juegos estadísticos alejados de la realidad social”³⁸.

Estos problemas metodológicos no son sólo un obstáculo para los responsables de las cuentas nacionales o para los expertos en estadística, se convierten en problemas políticos, porque los pobres carecen de posibilidades reales para mejorar su calidad de vida y, al mismo tiempo, tampoco tienen representación y poder político. De ahí surge el malestar y el profundo fatalismo manifestado en las encuestas. Por lo tanto, la pobreza puede definirse como una condición de discriminación que las estadísticas, muestreos o matrices de cálculo no exhiben. En muchos casos, sobre todo entre el campesinado y los pueblos originarios, la exclusión es económica y política, y existe una ausencia plena de ciudadanía democrática con derechos equitativos.

LOS CONFLICTOS Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL: LA SOCIEDAD DEPENDIENTE

Dentro de los esfuerzos por llevar adelante las reformas sociales de alivio a la pobreza, desde 1985 los diferentes gobiernos recurrieron a la cooperación internacional como una fuente de ingresos para equilibrar la balanza de pagos y cubrir otros déficits en la inversión pública. Sin embargo, estas medidas no sólo aumentaron la dependencia hacia países amigos y organismos internacionales, sino que socavaron la eficiencia para superar efectivamente la pobreza. Muchas organizaciones estatales y no gubernamentales, se valen de la cooperación extranjera para engrosar

las filas de una burocracia que tejió sus propios intereses alrededor de la deuda social.

Gerardo Berthin, quien fuera director de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Católica Boliviana (UCB), hace una crítica muy precisa sobre la adicción del país a la cooperación internacional. En su opinión, Bolivia no puede superar su deuda social para vencer a la pobreza, porque se estaría convirtiendo en una sociedad asistida y dependiente, caracterizada por una excesiva pobreza estructural, desnutrición alimentaria y de conocimientos, bajos niveles de cobertura de elementos indispensables para la supervivencia y bajo acceso a necesidades estratégicas como la educación, el crédito, el ingreso y las tierras.

En una sociedad asistida, el Estado incide de forma negativa y regresiva en la capacidad de distribución de la riqueza y crea una falsa dependencia en exportaciones primarias con poco valor agregado y tecnológico para un mundo competitivo. “Finalmente, las sociedades asistidas tienden a crear una dependencia viciosa hacia recursos externos o ayuda internacional; la cual (...) debilita y atrofia las fortalezas de una sociedad y acentúa sus debilidades”³⁹. La cooperación internacional se convierte, entonces, en un arma de doble filo: por un lado, busca poner en práctica programas orientados a las reformas sociales pero, por otro, evita que el país pueda salir adelante por sí mismo.

Según Berthin, Bolivia es el segundo país en toda América Latina en recibir el monto más alto en Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). Basándonos en el monto *per cápita*, nuestro país

38. Por ejemplo, las afirmaciones de van Niekerk: “(...) no hay claridad sobre el impacto de la nueva política económica en los sectores más pobres (...)”, ob. cit., p. 14.

39. Stavenhagen, Rodolfo, ob. cit., p. 2.

ocupa el tercer lugar en el continente después de Haití y Nicaragua en esta materia; “(...) el monto de AOD que recibe Bolivia, representa aproximadamente entre el 11 y el 16% del PIB boliviano; [por lo tanto], la AOD se ha convertido en la principal industria boliviana de los últimos tiempos, superando inclusive en valor a las principales exportaciones del país y a la producción sectorial (...)”⁴⁰. Así se logró generar una estabilidad macroeconómica para cubrir dos brechas importantes: la existente entre inversión y ahorro interno, y la brecha comercial de la balanza de pagos. Además, esto permitió cubrir el déficit del presupuesto en el sector público y generó algunas fuentes de empleo.

Sin embargo es importante aclarar que la ayuda internacional está compuesta en su mayoría por préstamos que el país adquiere a mediano y largo plazo. Así apuesta a que en un futuro próximo se tendrá la capacidad económica para saldar dichos compromisos financieros. Sólo un porcentaje ínfimo corresponde a donaciones no reembolsables, porque el grueso de los montos por cooperación se acumula en nuestro portafolio en calidad de deuda externa.

Berthin señala que el resultado inmediato de estas influencias es el siguiente: “(...) la AOD por sí misma no necesariamente contribuye a erradicar la pobreza y a promover el desarrollo. La evidencia también muestra que son las sociedades las que generan sus propias agendas de políticas públicas sobre la base de la demanda local, y no aquellas sociedades que ajustan sus políticas públicas a las demandas de la cooperación internacional [como

sucede hasta ahora], las que eventualmente pueden salir del circuito de la pobreza”⁴¹.

Por lo tanto, la cooperación internacional, que vino al país con mayor convicción a partir de los efectos sociales del ajuste en 1985, jugó un papel importante para dinamizar el crecimiento económico pero, paralelamente, el Estado demostró no tener fortalecidos sus mecanismos institucionales para mejorar la distribución de recursos provenientes de la ayuda externa. Sin muchas vueltas, Berthin asegura que “(...) cada año, millones de ayuda oficial para el desarrollo se insertan en un vacío institucional, que muestra muy poca capacidad y agilidad para utilizar estos recursos de una manera más óptima y efectiva. Sólo cabe preguntarse si efectivamente la AOD llega a los que más necesitan o se queda en calidad de fondos extra presupuestarios en niveles burocráticos y centralizados del Estado. Las tendencias estadísticas nos muestran que la mayoría de los recursos de la AOD, se destinan a actividades operativas y no productivas”⁴².

La situación de pobreza terminó conformando un entramado burocrático con conexiones importantes con la cooperación internacional. Al mismo tiempo desarrolló intereses que viven de la asistencia a los pobres. Estos intereses instrumentalizan las políticas sociales y de desarrollo humano, buscan exagerar la situación de crisis y recortan la capacidad del Estado y de los propios actores sociales a fin de no superar sus limitaciones.

Una de las principales diferencias entre los países desarrollados y los pobres es su capacidad

40. Berthin Siles, Gerardo. “Repensando y reflexionando sobre el desarrollo de Bolivia a 18 meses del siglo XXI”, artículo inédito, p. 1. Una versión resumida se publicó en un artículo del mismo autor: “La industria de hacer dinero”, Ventana, La Razón, La Paz, 5 de julio de 1998.

41. Ibidem., art. cit., p. 2.

42. Ibidem., p. 2.

desigual para generar ahorro, transformarlo en inversión y convertirse en una sociedad autosuficiente o, por lo menos, no subordinada a la ayuda internacional en las magnitudes de hoy día en Bolivia. Otra de las diferencias entre sociedades asistidas y autosuficientes parece descansar en los gastos destinados a la capacitación y educación de la gente. Desde este punto de vista, la ayuda oficial para el desarrollo que el país recibe cuenta con importantes montos orientados hacia la reforma educativa pero, comparativamente, éstos son mucho menores que lo utilizado para contrarrestar el déficit fiscal y las brechas económicas que se generan de gobierno a gobierno ⁴³.

LA LLEGADA DEL DESARROLLO HUMANO

Las políticas sociales y cualquier discusión sobre la pobreza, adquirieron una nueva identidad propositiva durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) quien mantuvo la orientación de libre mercado en la economía y ensayó un mecanismo novedoso de inversión extranjera, por medio de la capitalización de las empresas estatales.

Al asumir el mando, reestructuró el Poder Ejecutivo en el que, al margen de los despachos que apoyaban tradicionalmente la conducción política del gobierno, modificó los sectores económico y social para crear tres “superministerios”: de Desarrollo Económico, Desarrollo Sostenible y Desarrollo Humano.

El 12 de octubre de 1993 fue creado el Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de nueve secretarías nacionales responsables de educa-

ción, salud, asuntos urbanos, desarrollo provincial y rural, asuntos étnicos, de género y generacionales, cultura y deporte, inversión social y, finalmente, instituciones ejecutoras. Tenía, a su vez, una secretaría general y una asesoría, responsable de formular, coordinar y controlar las estrategias y políticas de desarrollo humano.

Este armazón institucional fue presentado ante el grupo consultivo del Banco Mundial en noviembre de 1993. El objetivo central del nuevo ministerio fue lograr que las personas amplíen sus oportunidades y opciones para alcanzar una vida larga y saludable, acceder a los conocimientos y códigos de la modernidad y disponer de un ingreso estable que garantice una vida digna, libre de carestías reñidas con los derechos humanos más elementales.

Horst Grebe López, su primer asesor general, afirmaba que “la gestión del desarrollo humano fue concebida desde sus inicios en términos de descentralización (...)”, porque así se buscaba vincular los asuntos de política social, con las prefecturas, la planificación regional y la ejecución de obras de infraestructura⁴⁴. A partir de 1993, el núcleo doctrinario de las políticas de desarrollo humano, consideraba que la economía debía estar al servicio del bienestar social y la seguridad humana⁴⁵.

Sin embargo, la administración de Sánchez de Lozada también fue fiel a un enfoque liberal al proponer alternativas sobre políticas sociales, cuando definía que “(...) el desarrollo humano requiere de un modelo de desarrollo económico que rompa el sistema paternalista y altamente centralizado donde el Estado asume la responsa-

43. Ibidem., p. 3., subrayado mío.

44. Sobre el desarrollo de las deficiencias económicas a partir de 1989, ver el estudio: Chávez Alvarez, Gonzalo y Toranzo Roca, Carlos. Claves y problemas de la economía boliviana, ILDIS, La Paz, 1993.

45. Grebe López, Horst. La propuesta del desarrollo humano en Bolivia, Fundación Milenio, Serie: Estudios de Milenio No. 7, La Paz, 1997, p. 16 y ss.

Lorgio Vaca. Niña escribiendo a la luz de un foco. (Detalle mural de ENDE)



bilidad total para resolver los problemas del individuo⁴⁶.

Como lo atestiguan los documentos oficiales del Ministerio de Capitalización y Desarrollo Económico del gobierno de Sánchez de Lozada, en este enfoque existe una correlación entre la meta de integrarse al sistema de libre comercio y mercado con el deseo de compatibilizar dichos esfuerzos con aquellos donde el único camino para salir de la pobreza es el que pasa por el trabajo, la familia y la fe. Al mismo tiempo, las instancias públicas debían dejar el paso libre a las agencias privadas y a la responsabilidad directa de los propios actores sociales respecto a sus condiciones de vida⁴⁷.

La Secretaría Nacional de Política e Inversión Social expresaba también que "(...) el desarrollo humano considera al individuo como el objetivo central del desarrollo y busca su perfeccionamiento como persona (...). El desarrollo humano reconoce al individuo como principal actor en este proceso. Esto implica incidir en el despliegue de sus capacidades potenciales, brindarle la posibilidad de participar activamente en las decisiones que afectan directamente su vida, facilitarle el acceso equitativo a las oportunidades y demostrarle la necesidad de que asuma la responsabilidad sobre su propio destino"⁴⁸.

Las cinco áreas operativas sobre las que iba a funcionar el nuevo ministerio eran:

- La participación e intervención en los ámbitos político, social y económico.
- El acceso a servicios básicos.
- La gestión social, en la que se reconocía la necesidad de instituciones eficientes para aplicar las políticas sociales.
- La eliminación de sesgos; es decir, de toda discriminación.
- El acceso a los mercados de todo tipo, donde se reivindicaba claramente un enfoque liberal.

De esta manera, se intentó transitar de las políticas compensatorias al desarrollo a escala humana con fuertes argumentos de corte ético que intentaban minimizar el impacto de los ajustes estructurales en su etapa ampliada (ESAF)⁴⁹.

Si bien se incorporaba una perspectiva más integral que articula diferentes niveles, en criterio de Fernando Illanes, ex ministro de Desarrollo Económico del MNR entre 1993 y 1995, también se trataba de devolver los recursos del desarrollo al mercado para evitar el despilfarro administrativo que creaba dependencia en los beneficiarios. Aunque el desarrollo humano tenía en cuenta valores morales, durante el gobierno

46. Cfr. PNUD-CESU/UMSS. Cátedra de desarrollo humano. Desarrollo humano, problemas y perspectivas, CID, La Paz, 1996. Este libro reúne las conferencias de Fernando Calderón, Walter Franco, Roberto Guimaraes, Armando Di Filippo y Eugenio Lahera.

47. Secretaría Nacional de Política e Inversión social, Ministerio de Desarrollo Humano. Bolivia en el camino del desarrollo humano, (s.d.t.), p. 8. Subrayado mío.

48. Cfr. Declaraciones de Gonzalo Sánchez de Lozada comentando la creación del Ministerio de Desarrollo Humano con Fernando Romero a la cabeza. "La funcionalidad de la administración pública al modelo de libre mercado", La Razón, La Paz, 15 de agosto de 1993.

Un análisis crítico sobre el contenido liberal en las políticas de desarrollo humano a nivel mundial, puede encontrarse en dos artículos bien argumentados: Kapuscinski, Ryszard. "La cultura de la pobreza en el mundo" y Alvarez-Uria, Fernando. "Retórica neoliberal. La gran ofensiva de los científicos sociales contra las políticas sociales en EEUU"; ambos en: Claves de Razón práctica, No. 80, marzo de 1998.

49. Secretaría Nacional de Política e Inversión social, Ministerio de Desarrollo Humano, ob. cit., p. 8. Subrayado mío.

Sánchez de Lozada el peso de toda la estrategia tendía a dar prioridad a un espíritu de empresa que hiciera eficientes las inversiones en cualquier rubro. El discurso sobre desarrollo humano era más proclive a otorgar una primacía de la sociedad civil y de sus derechos civiles por encima del Estado, en una posición liberal donde si bien la lógica del mercado es incuestionable, se llama la atención sobre sus efectos perversos.

El Ministerio de Desarrollo Humano descubrió que todas las instituciones que lucharon contra la pobreza en Bolivia entre 1989 y 1993 (el FIS, el FNDR o el FDC) habían ingresado en una crisis de efectividad. Si bien se suponía que actuaban como instrumentos de canalización de recursos, mientras los ministerios sólo formulaban las políticas de cada sector, al contar con más recursos que éstos últimos, estaban usurpándoles una serie de funciones normativas y políticas. De esa manera generaban conflictos con los ministerios y los debilitaban. La falta de coordinación conducía a una dispersión de objetivos y reducía el impacto de sus acciones. Fue muy notoria la ineficiencia del FNDR, que llegó a ejecutar dos o más proyectos de igual o similar naturaleza.

Al incursionar en campos de diversa índole, las instituciones ejecutoras habían ampliado su estructura administrativa a punto de inflar una burocracia y un costo de administración excesivamente alto⁵⁰. Así, había nacido un estrato de técnicos y profesionales que administraba la pobreza a partir de restringidos intereses burocráticos.

El Ministerio de Desarrollo Humano trató de solucionar estos problemas, porque asumía un

estilo de desarrollo que, en teoría, no sólo iba a generar crecimiento económico, sino, además, iba a intentar una distribución más equitativa de los beneficios del modelo, regenerar el medio ambiente y capacitar a las personas en lugar de marginarlas. Sin embargo, quienes hicieron una evaluación de las políticas sociales al final de la gestión de Sánchez de Lozada (1997), consideraron que no se pudo lograr un equilibrio entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el área económico-financiera del gobierno, lo que representaba uno de los requisitos básicos para su desempeño como una auténtica instancia de coordinación del desarrollo y seguridad humana⁵¹.

A consecuencia de la renovación de ministros y demás funcionarios de jerarquía, fruto de la entrega de cuotas de poder o el clientelismo estatal, se fueron transfiriendo competencias y funciones dentro del propio Ministerio de Desarrollo Humano, que debilitaron el enfoque integral original de una entidad centralizada para la gestión de las políticas sociales. Por ejemplo, se suprimieron las secretarías encargadas de la planificación y la gestión integrada del gasto e inversión sociales. Al concluir el gobierno de Sánchez de Lozada incluso se hizo desaparecer la Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO). Durante todo el gobierno, hizo falta una coordinación global de las políticas económico-sociales. Por otra parte, si bien un rasgo político del desarrollo humano es la redistribución del ingreso, en la práctica fue también algo difícil de conseguir por la preeminencia de las políticas económicas de mercado⁵².

50. Cfr. Por ejemplo las declaraciones de Fernando Illanes, ex Ministro de Hacienda y Desarrollo Económico de Sánchez de Lozada: "El FMI amplió por un año el programa de ajuste estructural para Bolivia", *La Razón*, La Paz, 18 de septiembre de 1993; "Misión del FMI evaluará nuevo apoyo financiero a Bolivia", *La Razón*, La Paz, 10 de octubre de 1993; "El FMI desembolsará \$us 20 millones para Ajuste Estructural", *La Razón*, La Paz, 21 de noviembre de 1993.

51. Cfr. Grebe López, Horst. La propuesta del desarrollo humano en Bolivia, ob. cit.

52. Ibidem., ob. cit., p. 24 y ss.

De forma paralela, el gobierno puso en marcha otro tipo de reformas socio-políticas como la Ley 1565 de Reforma Educativa a fin de construir un capital humano que, a mediano y largo plazo, incremente la productividad y la renovación tecnológica de Bolivia. Así, el desarrollo humano trataba de vincular los cambios en la estructura educativa, sobre todo primaria, con un impulso a la participación política a través de la Ley 1551 de Participación Popular, sancionada el 20 de abril de 1994.

La Participación Popular establecía las bases para "(...) una distritación racional y coordinada, que permita la gestión unificada de las políticas sociales, determinando la distribución *per cápita* de los recursos de coparticipación con miras a corregir la gran desigualdad en la asignación pasada de recursos de gasto e inversión"⁵³.

Finalmente, las políticas de desarrollo humano fueron colocadas en un segundo plano por la decisión gubernamental de involucrar a la inversión privada extranjera en el proceso por intermedio de la Ley 1544 de Capitalización, del 21 de mayo de 1994. Este fue el núcleo de una posible reconversión productiva, porque se ponían a la venta las principales empresas estatales estratégicas. El Estado gozaba, entonces, de un mecanismo novedoso que consistía en aportar, a manera de capital inicial, con los activos actuales de dichas empresas, a fin de invitar a socios estratégicos privados para que entreguen otro monto fresco de capital. A su vez, la parte correspondiente al Estado boliviano debía distribuirse bajo la forma de acciones a toda la población boliviana mayor de 21 años, utilizando un armazón específico: los Fondos de Pensiones, administrados también por empresas privadas.

UNA EVALUACIÓN CRÍTICA

Una vez más, a pesar de que la administración de Sánchez de Lozada buscó conjugar políticas económicas, deuda social y apoyo al desarrollo humano, pudo constatar que ninguna política social es ajena a la constitución de una sociedad, de manera que el desarrollo humano en Bolivia tuvo que enfrentarse con la pobreza estructural del país. Al mismo tiempo, las políticas sociales tampoco fueron ajenas a la idea que buscaba, con un sentido liberal, otorgar más capacidad a los actores sociales para ser agentes de su propio desarrollo. Esto significa que llegó un momento en que la gestión de las reformas sociales debían armonizar con una cultura liberal que reconociera la autonomía de los individuos y fortaleciera sus facultades para contrarrestar su pobreza, dejando atrás, sin embargo, la intervención estatal en materia de compensaciones y subsidios.

Al mismo tiempo, la fuerza con que se robusteció la discusión sobre las políticas sociales a partir del desarrollo humano, no pudo combatir los efectos negativos y disgregadores del ajuste estructural, y tampoco plantear la posibilidad de construir otra sociedad que rompa con las visiones liberales en la gestión económica. En todo caso, el desarrollo humano volvió a demandar un sentido sacrificial en los sectores pobres.

De acuerdo con una encuesta sobre percepciones respecto a la educación y el desarrollo humano realizada por el PNUD entre junio y julio de 1997 en 311 secciones municipales de Bolivia, "(...) un tercio de los municipios indicaron que los pobres no se están beneficiando económicamente de sus municipios [a pesar de los alcances de la Participación Popular]; en este caso

53. "Gobierno reconoce que subsiste la pobreza y la deuda social a pesar del desarrollo humano", Presencia, La Paz, 13 de junio de 1996.

los pobres son por lo general gente con poca educación, campesinos de comunidades alejadas que no son propietarios de tierras, sectores indígenas que se encuentran aislados y los migrantes y jornaleros”⁵⁴.

Cuando se preguntó, en la misma encuesta, qué sectores sociales se estarían beneficiando económicamente fuera del municipio, estos fueron los resultados:

- El 75% afirmó que las élites son las más que se benefician. En este grupo se incluían a políticos, grandes empresarios, agroindustriales, banqueros e industriales exportadores.
- El 9% mencionó a la clase emergente, los comerciantes y transportistas.
- Un 7% nombró a la clase media, es decir, a los profesionales, maestros y empleados públicos.
- El 3% dijo que las tres ciudades del eje son las principales beneficiarias en lo económico ⁵⁵.

A pesar de que los municipios encuestados tenían una percepción positiva de las leyes de Participación Popular y Descentralización, reconocieron que las instituciones municipales todavía no tienen la capacidad suficiente para resolver con eficiencia las demandas de la pobla-

ción. Los resultados de la encuesta del PNUD mostraban “(...) que existe una gran duda sobre la capacidad de los municipios para promover actividades productivas y ayudar a los más necesitados”⁵⁶.

Por otro lado, cuando sólo se consultó a los alcaldes municipales qué porcentaje del presupuesto municipal destinaron a las actividades productivas entre 1996 y 1997, los resultados señalaron que en 1996, dos tercios de los municipios no emplearon en ello más del 20% de su dinero; mientras el 18% directamente no invirtió nada en tareas productivas. Para 1997, las cifras habían mejorado un poco, dado que sólo el 4% de los encuestados aseguraba no haber invertido nada en la producción, mientras que 46% afirmó haber destinado en ello entre el uno y el 20% del presupuesto. Sólo un 8% de los alcaldes dijo que más del 51% del presupuesto municipal se invertía en la producción⁵⁷.

Esta situación obliga a pensar que una cosa fue postular el desarrollo humano ligado a otras reformas sociopolíticas importantes como la Participación Popular o la Descentralización administrativa en Bolivia y otra muy distinta poner en marcha el desarrollo humano en beneficio de los más pobres. ¿Se quiso hacer desarrollo humano

54. Grebe López, Horst. La propuesta de desarrollo humano en Bolivia, ob. cit., p. 18. Sobre una evaluación de la participación popular en Bolivia después de cuatro años, consultar: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Participación popular. Una evaluación-aprendizaje de la Ley 1994-1997, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Participación Popular y Fortalecimiento Municipal, La Paz, 1998. Sobre los problemas de la Reforma Educativa como política de Estado sin consenso, consultar: Gamboa, Franco. Contra viento y marea, tras las huellas de la Reforma Educativa en Bolivia, CEDOIN, La Paz, 1998.

55. Berthin Siles, Gerardo y Calderón, Fernando. “Primer informe DELPHI para el informe nacional de desarrollo humano BOL/97/005 (borrador). El sistema político local boliviano: percepciones sobre la educación y el desarrollo humano”, PNUD, La Paz, 16 de julio de 1997, p. 11 y ss.

56. Cfr. Ibidem., ob. cit.

57. Ibidem., ob. cit., p. 21. La misma encuesta expresa que los municipios dan mucha importancia a la educación y el conocimiento, más allá de aprender a leer y escribir; “(...) en los municipios parece haber una importante y potencial conciencia sobre el rol multiplicador de la educación en los procesos de desarrollo”, p. 10.

en Bolivia? o ¿qué se quiso hacer con el desarrollo humano?

Lo mismo podría decirse del mercado. ¿Realmente se buscó impulsar su expansión liberal? o ¿con su defensa se trató de fortalecer la vieja estructura clientelar de siglos que todavía impera en el Estado boliviano, donde sólo una élite se hace más rica, aprovechando sus fuertes conexiones en la economía transnacional, y dos cuartas partes de la población se hacen más pobres y se marginan de los cambios socio-políticos mundiales?

Hoy día nuestros indicadores sociales se alejan en 30 años de los de Chile. “Según el Informe de Desarrollo Humano más reciente, Bolivia ocupa el puesto 111 de un total de 174 países. Con un índice de desarrollo humano (IDH) de 0,584, el país está catalogado en un nivel medio inestable, (...) cinco de los nueve departamentos tienen un IDH superior al promedio nacional. Ellos son Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y La Paz, en ese orden. De los otros cuatro departamentos, tres tienen un nivel inferior al promedio nacional, pero superior a 0,500, que es el umbral que separa el desarrollo humano medio del bajo. Esos departamentos son Cochabamba, Oruro y Chuquisaca. El IDH de Potosí no solamente lo coloca en el último lugar, sino que lo ubica como el único de desarrollo humano bajo en el país. Todos los demás se clasificarían en el nivel de desarrollo humano medio”⁵⁸.

En el país existe una heterogeneidad profunda. Bolivia tiene indicadores preocupantes que se acercan a los niveles dramáticos del África, como los del norte de Potosí, mientras, en otro

contexto, los indicadores sobre desarrollo humano en Santa Cruz se aproximan a los de América Latina. Es más, dentro de las mismas ciudades y en sectores urbanos más delimitados, podemos encontrar indicadores que varían mucho y se mueven en el péndulo que va de lo aceptable a lo degradante.

Una cosa es clara de entrada, la población marginada posee una potencialidad: su capacidad para seguir demandando la satisfacción de sus necesidades.

Parece ser que las políticas sociales produjeron dos efectos en Bolivia:

- Por un lado, la legitimación de los gobiernos para que puedan aplicar los ajustes económicos de forma regular y sin distorsiones.
- Por otro, un escenario donde los grupos que podrían acceder a mayores beneficios, también tendrían que convertirse en los actores de su propio desarrollo, exigiendo más oportunidades al mercado y al sistema democrático⁵⁹.

Sin embargo esto tiene limitaciones muy fuertes en la estructura de poder y en las posibilidades reales del país. Nuestra estructura de poder limita la acción de los pobres y, al mismo tiempo, las circunstancias objetivas, como la estabilidad sin crecimiento económico suficiente, son serios obstáculos para que los pobres puedan revertir, por sí mismos, la inequidad estructural que cae sobre sus espaldas. A su vez, un punto positivo en la teoría del desarrollo humano, que escapó a la influencia liberal, fue haber alentado un sistema de valores, que reivindicó la disminución

58. El tercer taller realizado por el PNUD el 26 de junio de 1997, con miras a la preparación del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, señalaba en su relatoría: “El gran desafío [boliviano] es acelerar el crecimiento con productividad y empleo, para lo cual el motor debe centrarse en actividades intensivas en mano de obra y orientadas a las exportaciones o a sustituir importaciones”, p. 60.

59. Ver también: PNUD. Desarrollo humano en Bolivia 1998, La Paz, 1998.

radical de la pobreza en Bolivia, mediante la búsqueda de justicia social y equidad.

LA POBREZA ESTRUCTURAL Y EL DESARROLLO HUMANO

También es importante hacer notar que la pobreza no se entiende sin los patrones de exclusión social ni la débil integración social en Bolivia. A estas alturas del siglo, la pobreza es un problema de relaciones sociales, es decir, nos cuestiona sobre cómo se han estructurado éstas históricamente y cómo tal estructuración produjo exclusión. Desde este punto de vista, la pobreza no es ajena ni a la política ni al proceso histórico o económico ni a las relaciones sociales. Es un producto histórico que responde a las circunstancias en que se desarrollaron los estilos de desarrollo en el país en la Revolución nacional del 52, la estabilización económica de 1985 o el presente.

Ahora bien, ¿será posible imaginar una estrategia de desarrollo humano en un escenario que otorgue diversas alternativas de poder a los pobres? O ¿sólo debemos entender a la pobreza como un fenómeno al que hay que responder mediante una compensación? A partir de estas interrogantes es posible esbozar cuatro factores que habrían marcado la evolución de las políticas sociales y de desarrollo humano en Bolivia para enfrentar la pobreza estructural.

En primer lugar, las políticas sociales originadas en los ajustes estructurales transformaron las mentalidades y convencieron a la sociedad de que los pobres debían hacerse cargo de su pobreza, es decir, de que no la rehuyan ni la asuman como una fatalidad inalterable. Este es el sustrato que orienta el criterio para transformar a los pobres

en actores responsables de su propio destino sin contar con el Estado.

Por lo tanto, desde 1985 no existe en Bolivia nada que pueda llamarse reforma social que esté más allá de lo que quieren los individuos. Éstos tendrían que asumir por sí mismos la responsabilidad de superar sus carestías y limitaciones, desechando la posibilidad de una intervención estatal y tratando de ganarse un lugar en el mercado.

Al mismo tiempo, las estrategias de reforma social lograron convertir las necesidades de los sectores desposeídos en demandas capaces de expresarse en el sistema político institucional. En este sentido, el gobierno de Sánchez de Lozada ejecutó también otras medidas como la Participación Popular para responder a esas demandas de manera descentralizada, lo que facilitó la estabilidad de su régimen y del sistema democrático.

En cierto sentido, durante el régimen del MNR (1993-1997), a través de las políticas compensatorias de alivio y del discurso sobre el desarrollo humano, la pobreza se politizó dentro de una lógica democrática que hizo gobernables los conflictos producidos por las desigualdades provocadas por las estrategias económicas.

En el marco de la Participación Popular, el desarrollo humano sostenible quiso abrir "(...) la posibilidad de impulsar un programa de incentivos para que la propia población transforme sus necesidades en demandas a fin de que puedan hacerse presentes en los sistemas institucionales de toma de decisiones, tanto a escala municipal como regional y nacional"⁶⁰. Con esta orientación, algunos consultores en desarrollo humano y gobernabilidad, como Fernando Calderón y

60. Esta misma tendencia se expresa a nivel continental y bajo el cobijo de importantes organismos financieros internacionales; por ejemplo, consultar: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Reforma social y pobreza. Hacia un agenda integrada del desarrollo, BID-PNUD, Washington D.C., 1993.

Roberto Laserna, recomendaron introducir en los programas sociales, políticas que estimularan la participación ciudadana y los sistemas de micro concertación entre los diferentes agentes de la participación local en los municipios. Sin embargo, toda esta estrategia deberá funcionar dentro de estructuras liberales de mercado.

En segundo lugar, para convertir a los pobres en actores de su propio desarrollo, fue importante que esta concepción se transformara en un tema nacional estratégico. La pobreza se convirtió en un eje de la gobernabilidad política y, al mismo tiempo, en un elemento constitutivo para la negociación de créditos ante organismos internacionales.

En tercer lugar, las políticas sociales y de desarrollo humano identificaron actores privilegiados que debían ser los núcleos claves de intervención, como sucedió con el fortalecimiento femenino. Se difundió la necesidad de poner mayor énfasis en la mujer, porque sus roles en la organización y reproducción de la familia son fundamentales en el país. Lo mismo podría decirse de los pueblos originarios, otro núcleo donde había que ejecutar acciones.

En cuarto lugar, sobre todo con la llegada del desarrollo humano desde 1993, el fortalecimiento de las políticas sociales dio lugar al cruce de dos dinámicas: la económica y la política. Se mantuvo intocable el carácter liberal de la estructura económica, combinándola con una apertura hacia la participación de la población, sobre todo en los municipios rurales para acceder a la toma de decisiones a través de la Participación Popular. El desarrollo humano evidenció que no era suficiente la satisfacción de necesidades materiales, sino también simbólicas, como la representación política, la participación y la auto-organización. Durante el gobierno de Sánchez de Lozada y en el marco del desarrollo humano, la Participación Popular tendió a integrar a los excluidos,

a pesar de que subsistían las inequidades estructurales.

Finalmente, el debate actual sobre la deuda social y el alivio a la pobreza, obliga a que el país se decida, de una vez, por redefinir su perfil productivo y económico para poder enfrentar la globalización, la modernización económica y cultural o para mejorar la calidad de vida en todo el país. Es importante determinar cuál va a ser la calidad del nuevo perfil económico a partir de los dividendos de la capitalización en sectores estratégicos, junto a la incorporación de patrones de integración social.

GOBIERNO DE BANZER: INSUFICIENCIA PROPOSITIVA E INCERTIDUMBRE

Hugo Banzer Suárez es el primer presidente latinoamericano que, después de haber sido dictador militar en la década de los 70, llega nuevamente al poder a través de elecciones constitucionales en agosto de 1997. Su gobierno está fuertemente marcado por tres influencias decisivas:

- La administración política de una coalición de gobierno demasiado heterogénea.
- El diagnóstico que Banzer hizo de las condiciones en que recibió la administración gubernamental del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
- La lógica de su estilo de liderazgo para tomar de decisiones, donde se aprecia una insuficiencia propositiva y mucha incertidumbre sobre el rumbo de las reformas sociales.

La articulación política de su coalición entre ADN, MIR, Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Conciencia de Patria (CONDEPA) (este partido fue invitado a abandonar el gobierno después del primer año), todavía no permitió que Banzer alcanzara un consenso político sobre la dirección

de las principales metas en el plan de gobierno. Como es una coalición tan grande, existen muchos problemas para controlar el reparto de cuotas de poder. La pugna por acomodar a los militantes de uno y otro partido en la administración pública consumió buena parte del tiempo de la agenda política del primer año.

Para contrarrestar estos conflictos, Banzer quiso impresionar a la sociedad con la publicación de un decálogo ético tras su primera sesión de gabinete. Este documento buscaba dar legitimidad a la imagen de Banzer como hombre público con una meta de servicio cívico y el claro ánimo de disolver su pasado autoritario. La ética transmitida por Banzer no fue otra que una nueva señal para hacer ver que será fiel al Estado de Derecho y al imperio de las normas constitucionales que rigen nuestra democracia.

Al mismo tiempo, durante los primeros seis meses, se habló bastante de un decreto para luchar contra la pobreza. Éste jamás se hizo realidad. Disolvió el Ministerio de Desarrollo Humano, con lo que las políticas sociales aplicadas en la gestión de Sánchez de Lozada quedaron en *statu quo* y carentes de un impulso hacia una nueva concertación nacional para superar la pobreza.

La segunda característica es el diagnóstico de Banzer sobre las condiciones en que recibió la presidencia de manos del ex mandatario Sánchez de Lozada. En su primer mensaje presidencial del 7 de septiembre de 1997, Banzer no hizo sino descartar, de golpe, la anterior administración con adjetivos que descalificaban lo realizado por su antecesor. "Yo no edifico sobre basura", había declarado al ser consultado insistentemente por los medios de comunicación sobre el rumbo de las reformas. Desde entonces, Banzer no cesa de calificar a Sánchez de Lozada como el origen de todo problema social y económico. Para él, el MNR es la expresión de aquello que siempre debe menospreciarse.

En su primer año de gobierno, la gestión de Banzer estuvo encandilada por el rencor hacia la imagen de Sánchez de Lozada, convertido en un obstáculo perverso, cuya destrucción aparece como una prioridad. Por lo tanto, las reformas sociales quedaron atrapadas en medio de intereses políticos que priorizan la necesidad de neutralizar la oposición del MNR, en detrimento de un programa de gobierno con capacidad propositiva y concertadora, como lo exige una reforma social de alivio a la pobreza.

Banzer y su coalición se unieron para desconocer los aportes del anterior gobierno. De esa manera evitaron presentar un plan estratégico con planteamientos claros sobre la reorientación o, en su caso, el mejoramiento de las principales reformas ejecutadas por Sánchez de Lozada. Este es un hecho importante, porque refleja dos elementos: primero, hasta ahora no se ha definido cómo orientará el gobierno la elaboración de políticas públicas de desarrollo humano ni cómo regirá su implementación a fin de equilibrar las acciones económicas con las reformas sociales efectivas.

Juan Cariaga, uno de los directores del Banco Mundial, anunció que dicho organismo internacional desembolsará 400 millones de dólares para luchar contra la pobreza en los próximos cinco años. Sin embargo esta posibilidad dependerá de que Banzer continúe lo ya realizado en la Reforma Educativa y en la Participación Popular, lo que implica que los municipios presenten sus planes anuales operativos y realicen esfuerzos para incrementar la productividad y la distribución de recursos a los grupos sociales más pobres. Cuando el Presidente rediseñó el Poder Ejecutivo, no justificó por qué decidió clausurar el Ministerio de Desarrollo Humano ni supo explicar cómo el aparato público fue víctima de una fragmentación, fruto de las cuotas de poder entre los partidos socios del gobierno.

El tercer aspecto que marcó, y va a marcar, buena parte de la gestión gubernamental de Banzer, es la forma en que se toman decisiones en democracia para así evitar los conflictos sociales causados por la inequidad y las medidas económicas. No está claro cómo convertirá su estrategia presidencial de control de los procesos políticos, en instituciones democráticas con capacidad de gestión y gobierno, ni cómo generará consensos con los principales actores de la sociedad civil: sindicatos obreros, campesinos, etnias, empresarios, maestros o universitarios para ejecutar políticas específicas sobre reforma social.

Sin embargo, a partir de estas interrogantes, fue importante que en octubre de 1997, Banzer convocara al llamado "Diálogo Nacional: Bolivia hacia el Siglo XXI", donde se reunieron intelectuales, expertos internacionales y las principales fuerzas políticas. Esto permitió clarificar una agenda pública para el mediano y largo plazo, y discutir temas relacionados con la pobreza, la equidad, las fuerzas armadas, la seguridad laboral y el desarrollo económico a partir de múltiples perspectivas. Si bien muchas de las conclusiones no fueron ninguna novedad, pues se repitió mucho de lo ya conocido, el esfuerzo fue positivo, porque se aglutinó lo disperso y se presentaron análisis y propuestas integrales a toda la sociedad boliviana.

En consecuencia, Banzer estuvo cara a cara con uno de los problemas más punzantes para la democracia representativa: el difícil paso a un proceso donde la eficacia en la administración de gobierno y en la toma de decisiones, no sólo exige elementos técnicos y conocimiento, sino mucha discusión y consensos públicos. La pobreza es justamente un tema crucial, donde la concertación entre diferentes sectores de la sociedad y el Estado, reclama discusión y participación.

Hasta ahora todavía no está claro qué propondrá Banzer en materia de reformas sociales,

que a su vez rindan frutos en el largo plazo, tomando en cuenta también la concertación político-social entre empresarios privados, sindicatos, partidos políticos, poderes locales municipales y etnias, todos ellos relacionados con lo sustantivo de las políticas sociales y económicas en ejecución, que representan, a su vez, una base de apoyo durable y sólido para las decisiones tomadas.

En medio de esta carencia propositiva e incertidumbre sobre las reformas sociales, un aspecto importante a destacar fue la decisión del Presidente Banzer de suspender el pago del Bono Solidaridad (Bonosol), aprobado durante la gestión del MNR. Al mismo tiempo disolvió la Superintendencia de Pensiones y planteó otro esquema para extraer beneficios del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), a través del llamado "Bolivida" y de la Ley de Crédito Popular.

Las discusiones gubernamentales para llevar adelante el "Bolivida" y anular el "Bonosol", dejaron abierto un enorme boquete de dudas sobre las intenciones reales del gobierno respecto a las inversiones sociales para superar la pobreza. El gobierno de Banzer liquidó también el Fondo de Vivienda (FONVI) y está acosado por 54 juicios que enfrenta el Estado boliviano, por más de 90 millones de dólares, lo cual parece hacer peligrar muchos proyectos regionales o los destinados a la inversión pública. El Presidente enfrentó procesos laborales interpuestos por ex y actuales trabajadores de las empresas capitalizadas como el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas nacionales de ferrocarriles (ENFE) y telecomunicaciones (ENTEL). En el primer caso, los juicios vencieron al Estado y, por lo tanto, las alternativas de éste para financiar el pago a dichos trabajadores produjeron un déficit que afectó seriamente a las reformas sociales, porque el dinero para pagar los procesos salió del Tesoro General de la Nación (TGN), y postergó una serie de des-

embolsos para proyectos regionales o los destinados a la inversión pública. A su vez, la actual crisis económica latinoamericana genera recortes en la partida de gastos corrientes del sector público y la posible amenaza del aumento de la deuda pública⁶¹.

CONCLUSIONES

El alivio a la pobreza en Bolivia, no sólo demanda el diseño de políticas y reformas sociales viables y efectivas, también exige un nuevo esfuerzo por plantear acuerdos socioculturales y políticos entre diferentes sectores: gobierno, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, empresarios, sindicatos, pueblos originarios, iglesia y especialistas en políticas públicas. Sin un proceso de diálogo para producir consensos, articular demandas y estimular la solidaridad, no será posible alcanzar resultados que favorezcan a los más necesitados.

La convivencia de políticas sociales y de desarrollo humano, con medidas económicas liberales, si bien permitieron frenar los descontentos que hubieran surgido por la rigidez del modelo económico, también demostró que las insuficiencias de la estructura económica en Bolivia impiden responder a las demandas por equidad y seguridad humana. A pesar de la estabilidad, la estructura económica es débil y no consigue retener y orientar productivamente el excedente económico generado. Se postergan así las reformas sociales que requieren ser introducidas en los ajustes estructurales.

Después de 13 años de ajuste estructural, las reformas sociales en Bolivia no pueden reducir la pobreza, porque todavía tienen las siguientes características:

- Una creciente desigualdad social amplificada, dado que no puede lograrse un crecimiento económico sostenido.
- El papel del Estado, como eje de las prestaciones sociales, decayó de manera notable, y se contrajo el gasto social al máximo.
- Las medidas de fomento a la equidad social se ejecutaron en medio de intentos por combinar una cultura de libre mercado, donde el individuo pobre asume para sí los costos de su supervivencia, y políticas sociales dispares y focalizadas, que no se enmarcan en estrategias orgánicas de largo plazo. El Desarrollo Humano intentó corregir estas falencias, pero pronto se fue opacado en la nueva gestión gubernamental de Banzer.
- El apoyo tímido a la reconversión productiva, debido a la falta de dinamismo de nuestra economía y a la precaria situación fiscal, hizo que los recursos de hidrocarburos y minería aún se utilicen para financiar gastos corrientes del Estado, lo que no permitió inversiones productivas de gran escala.
- La economía boliviana presenta una enorme insuficiencia dinámica en sus exportaciones, lo que nos hace depender mucho del financiamiento externo. Se dejan para el final las acciones eficaces en materia de desarrollo humano.

Todo este marco de influencias se desarrolla dentro de una lógica inflexible en cuanto a la política económica: la economía de mercado.

Con este panorama, todo indica que las brechas sociales persistirán durante el siglo XXI. Al mismo tiempo, hay argumentos para repensar diferentes formas donde sea el Estado quien asuma no sólo la posibilidad de regular, sino tam-

61. Calderón, Fernando y Laserna, Roberto. *La fuerza de la equidad. El desarrollo humano en Bolivia*, CERES-Los Amigos del Libro, La Paz, 1997, p. 85.

bién de superar la contradicción entre democracia y mercado, entre políticas de ajuste estructural y equidad social, entre deuda social, surgida a raíz de las políticas económicas liberales, y el hecho de afrontar una obligación humana y ética: reconocerle a los pobres el estatus de individuos dignos con derecho a la seguridad humana.

El estilo de desarrollo abierto hacia el mercado demanda también que el Estado se convierta en garante de la seguridad para toda persona frente a la autoridad política, en garante de la seguridad frente a cualquier forma de opresión, arbitrariedad y desigualdades que atentan contra la expectativa de todo ser humano para llegar a ser digno. Paralelamente, las dificultades de los procesos de modernización y reforma están demostrando que se necesita de gobiernos fuertes y sólidos, es decir, la misma modernización parece requerir más y no menos gobierno; un Estado eficiente y justo, no uno atrofiado por el mercado.

Un Estado eficaz sin miedo al mercado deberá cumplir con algunas funciones elementales como asegurar la eficacia de la ley y los esfuerzos por ganar credibilidad ante la sociedad civil, para hacer ver que sus decisiones están cargadas de una concepción del bien común y una preocupación por los sectores depauperados, víctimas de la pobreza estructural ⁶².

Con la persistencia de la deuda social la democracia puede tam-

balear. Sin embargo, también es esencial que la democracia se corrija a sí misma de manera constante, teniendo siempre abierta la posibilidad de cuestionar de distintas maneras sus tareas pendientes, entre las que destaca nuestra pobreza, hasta ahora, sempiterno motivo de nuestra frustración.

Lorgio Vaca. Jinetes. Grabado



Lorgio Vaca P.d.A

Jinetes

62. Cfr. "El Estado enfrenta juicios por más de \$us 90 millones", *La Razón*, La Paz, 2 de agosto de 1998. Revisar también el enorme conjunto de declaraciones para justificar la subida de carburantes y de impuestos durante 1999.

Un viejo sueño cambia de nombre: Escuela Andina de Cine

Nadya Gutiérrez Aldayuz

La idea nació hace 39 años. Sólo ahora pudo concretarse como un plan a largo plazo, destinado a cubrir el área andina de Perú, Argentina, Bolivia y Ecuador. Grandes figuras del cine latinoamericano le han dado el "sí" a esta empresa. Resta esperar que una nueva generación de cineastas se forme aquí, en casa, con el aval de un gigante del séptimo arte en Bolivia: Jorge Sanjinés.

Ecuador, Bolivia, el sur del Perú y el norte argentino tienen una memoria colectiva histórica que los aproxima. Abrir un espacio de formación para los jóvenes de esta región cultural, es el objetivo de la "Escuela Andina de Cinematografía", un proyecto que Jorge Sanjinés puso en marcha este año, y al que han sido convocadas figuras e instituciones destacadas del cine latinoamericano y mundial.

La "Escuela Andina" busca formar cineastas integrales que no se limiten a conocer la técnica y estén dotados de un bagaje mayor de conocimientos en distintos terrenos del saber humano. Esa formación, sostiene Sanjinés, será equilibrada y no tendenciosa. Cada creador deberá elegir por sí mismo qué hacer y hacia dónde dirigir sus esfuerzos, interpretando su propia vocación.

UN VIEJO SUEÑO

La "Escuela Andina de Cinematografía" "es un viejo sueño" que en 1961 llevaba como nom-

bre "Escuela Fílmica Boliviana". En esos años en los que Jorge Sanjinés comenzaba su actividad como cineasta, se sentía motivado para incursionar en toda actividad que tuviera que ver con el cine. "Escribía en la prensa artículos sobre el séptimo arte, organizaba muestras del cine boliviano existente entonces, y pensaba que era urgente formar nuevos cineastas y preparar asistentes competentes para los futuros proyectos de cine boliviano por el cual sentía una gran admiración".

Jorge Sanjinés llegó al país en 1960, poco después de recibirse como cineasta en la Universidad Católica de Chile. Para él no fue poco encontrar en ese entonces un cine documental del calibre del que hacían Jorge Ruiz y Augusto Roca. Estaba entusiasmado con esas películas documentales y semidocumentales, tan bien realizadas, con una fotografía estupenda, técnicamente correctísimas en su banda sonora, en el manejo de cámara y en el planteamiento del guión. "Pude

La casa dode funciona la escuela



apreciar al talento de Oscar Soria como escritor y conocedor de las costumbres y alma del pueblo boliviano. A los cineastas de aquella época, efectivamente, se los podía contar con los dedos de la mano, pero eran buenos, conocían su oficio, amaban su trabajo y luchaban encarnizadamente por darle un cine a Bolivia”.

Películas como “Vuelve Sebastiana” (1953), “La Vertiente” (1958) y otras, ahora clásicos de nuestra cinematografía, dieron la seguridad al director de “La Nación clandestina” (1989), de que Bolivia tenía un potencial cinematográfico grande frente a otros países mucho más ricos y con poblaciones mayores que no producían en ese entonces ni películas documentales, ni cortometrajes experimentales y mucho menos cine de ficción. “Creo que esa certeza me impulsó a proponer la creación de una primera escuela de cine para reforzar y desarrollar esa potenciali-

dad creativa del cine boliviano”.

La “Escuela Fílmica Boliviana” funcionó sólo unos cuantos meses. Allí impartieron clases, en sus especialidades, Jorge Ruiz, Hugo Roncal, Augusto Roca, Oscar Soria, Ricardo Rada y el mismo Jorge Sanjinés. El grupo inscrito era pequeño, recuerda, pero apasionado por el cine. “Infortunadamente no bastó nuestro entusiasmo y el apoyo de infraestructura que nos dio el Instituto Cinematográfico Boliviano. Las urgencias de la sobrevivencia personal y la ausencia de un apoyo financiero conspiraron contra el proyecto”.

LAS COSAS HAN CAMBIADO

Las razones fundamentales para formar nuevos cineastas han aumentado en estos 39 años por la relevancia que hoy tienen los medios de comunicación y la ineludible necesidad de contar con una formación profesional sólida. Antes

CONVENIO CON SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS

En agosto del año pasado, Jorge Sanjinés firmó con los ejecutivos de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños (Cuba), la mejor del continente, un convenio de intercambio y cooperación con la “Escuela Andina de Cinematografía”. El apoyo de esta institución será determinante y estará vinculado a la presencia en Bolivia de grandes docentes y realizadores que actualmente trabajan en Cuba. A su vez Jorge Sanjinés anuncia la “exportación” de iniciativas nacidas en la Escuela Andina rumbo a la Escuela cubana, a la que estuvo ligado desde su creación, en 1986.

La Escuela de San Antonio de los Baños se creó bajo los auspicios de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Comenzó sus labores en enero de 1987, impartiendo cursos básicos para principiantes, talleres experimentales y diálogos de altos estudios para profesionales del cine, la televisión y otros medios de comunicación audiovisuales. También llamada Escuela de Tres Mundos, la de San Antonio de los Baños tiene matrícula selectiva, y permite el acceso a las técnicas audiovisuales a estudiantes de América Latina, el Caribe, África y Asia. Uno de sus fundadores, el cineasta argentino Fernando Birri, la dirigió entre 1986 y 1991, y a continuación el realizador brasileño Orlando Senna se ocupó de esa labor.

La experiencia de esta Escuela en varios niveles, servirá de inspiración, en criterio de Sanjinés, a la flamante Escuela Andina de Cinematografía. Importantes realizadores bolivianos, egresados de San Antonio de los Baños, trabajan hoy en el audiovisual boliviano elevando el nivel de este oficio, entre ellos Marcos Loayza, Karina Oroza o Ramiro Fierro.

GIGANTES DEL CINE EN BOLIVIA

Gestiones realizadas por la Escuela Andina de Cinematografía permitirán la visita, en los próximos meses, de grandes figuras del cine latinoamericano para dictar talleres de iniciación cinematográfica y talleres magistrales.

Humberto Solás, uno de los más importantes cineastas cubanos llegará a Bolivia en mayo, invitado por la Escuela Andina de Cinematografía para dictar un curso magistral de puesta en escena. Solás nació en 1941. Comenzó a trabajar en 1960 en el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica (ICAIC) como productor y asistente de dirección. Ha realizado documentales y largometrajes de ficción. Entre sus filmes relevantes figuran los dedicados a la figura de la mujer cubana como "Manuela" (1966), "Lucía" (1968), "Cecilia" (1981) y "Amada" (1983). En 1992 filmó "El Siglo de las Luces", largometraje de ficción basado en la obra del también cubano Alejo Carpentier.

Nelson Pereira dos Santos, figura central del cine brasileño y responsable en 1954, con "Rio 40 graus", del inicio de una nueva era en el cine del país vecino. Su filmografía incluye varios títulos, entre ellos "Juventud" (1950), "Vidas secas" (1963), "El Justiciero" (1966) y "A terceira margem do rio" (1993).

Arturo Ripstein, primero ayudante de dirección de Luis Buñuel, luego, y con sus producciones, una ráfaga de aire fresco en la industria cinematográfica mexicana, marcada por cintas comerciales. Es responsable de "Tiempo de Morir" (1966), "El Lugar sin límites" (1978), "La Reina de la Noche" (1994), "El Coronel no tiene quien le escriba" (1998).

Sergio Cabrera: director colombiano, pintor y político. Destacan de su filmografía "La Estrategia del Caracol" y "Águilas no cazan Moscas" (1994). En 1999 estrenó "Golpe de Estadio", una visión cómica y a instantes ácida sobre el proceso de paz que vive Colombia.

Fernando Solanas: director argentino. Filmó, entre otras películas memorables, "Sur" (1988), "El Viaje" (1992) y "La Nube" (1998) en la que quiere hablar del presente recordando a grandes luchadores del teatro independiente en su país.

Jorge Fons: Viene de la primera generación de mexicanos que estudiaron para hacer cine. Su cortometraje "Caridad" (1973) (parte de la trilogía "Fe, Esperanza y Caridad") es considerado como uno de los mejores del cine mexicano. Su carrera ha crecido recientemente con dos de las películas mexicanas contemporáneas más importantes: "Rojo Amanecer" (1989) y "El Callejón de los Milagros" (1995).

A ellos se sumarán Víctor Gaviria, Julio García Espinoza, Pedro Chasquel y Paul Seban.

era posible hacer cine sin tener una buena formación, sostiene Sanjinés, hoy la complejidad tecnológica y la tremenda competencia, exigen más rigor en cualquiera de las especialidades. "Es una exigencia que no exime a nadie, es como la medicina, tienes que estar al día con el desarrollo tecnológico porque de lo contrario se desfasa la intercomunicación con el propio personal pre-

parado que podría hablar un lenguaje que no entiendes. Esa ignorancia puede llevar también a desaprovechar recursos tecnológicos útiles para el trabajo expresivo".

El medio también ha cambiado dando sorpresas. Estos realizadores formados, preparados para las nuevas exigencias, presentaron en la última versión del Festival de Cine de Berlín, pelícu-

las distintas a las de hace pocos años, pero muy parecidas a las de la década de los 60. "Son obras críticas a la sociedad contemporánea, son películas iconoclastas e inconformistas que cuestionan a la sociedad moderna. Está pasando en varios recientes festivales. Lo he vivido en el último Festival Internacional de Cine Latinoamericano en diciembre pasado, calificando películas en su mayoría de jóvenes realizadores, preocupados por el destino de sus sociedades o del hombre en su dimensión profunda. Es como si la crisis de valores que se vive en todo el mundo exige reflexiones a los artistas, y éstos no las pudieran eludir ya".

CINEASTAS INTEGRALES

La posibilidad de desarrollar una cinematografía persistente, continuada, que contribuya a ampliar el espacio reflexivo para consolidar una identidad, va unida, en la "Escuela Andina", a la idea de formar cineastas integrales y no sólo técnicos en cine. Los cineastas integrales, afirma Sanjinés, son creadores en todo el sentido de la palabra, conocen y dominan la técnica y son capaces de usar el cine como un arte prodigioso. "Conocemos el caso, muy repetido, de egresados que por falta de una mayor formación integral y con lo que saben, sólo están preparados para trabajar en una agencia publicitaria; eso es limitador, castrante y triste, especialmente cuando se trata de gente talentosa. Un es-

tudiante que tiene nociones serias de semiología de la imagen, de la historia, de sociología, de historia comparada del arte, conjunciona un conocimiento que le permite proyectarse con mayor seguridad cuando debe enfrentar por su cuenta los desafíos de la realidad".

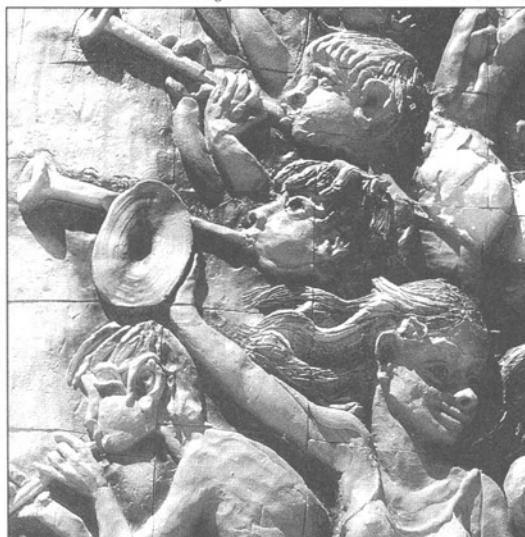
La "Escuela Andina de Cinematografía" implementará, este 2000, talleres de Iniciación y talleres magistrales como experiencia previa al inicio de los cursos regulares. En febrero comenzó el trabajo con el taller del guionista argentino Jorge Goldenberg. En marzo será el turno del boliviano César Pérez, que ofrecerá un taller de fotografía y cámara. En mayo, el cubano Humberto Solás dictará el taller de puesta en escena. A ellos se sumarán otros prestigiosos cineastas latinoamericanos. "Sólo tenemos que

ajustarnos al escaso tiempo que en general disponen nuestros invitados, en algunos casos tendremos que convencerlos de que el tema 'altura' es solo un mito". También se ha conversado la presencia de docentes europeos. Algunas embajadas mostraron su disposición para contribuir con la visita de los mismos.

Los talleres abarcarán la atención de la Escuela durante dos años. Los cursos regulares, después del

2001, tendrán una duración de entre tres y cuatro años. La currícula, diseñada por Jorge Sanjinés, comprende prácticamente todo el espectro del conocimiento cinematográfico incluida la ense-

Lorgio Vaca. Mural Col. Alemán de Sta. Cruz. (Detalle)



ñanza de nuevas tecnologías y procesos novedosos principalmente en el terreno de la edición y la sonorización. Y, como ya se decía antes, formación en otros niveles de conocimiento.

Ahora, esto crecerá en dos años, la Escuela cuenta para los cursos con el equipo donado por el Grupo Ukamau, además de una infraestructura cómoda, una sala de proyección preparada para la exhibición de cine convencional y digital y una sala de sonido.

CUATRO PAÍSES

La Escuela de Cinematografía es "Andina", porque busca llegar a jóvenes de Perú, el norte argentino, Ecuador y Bolivia, países y regiones con una idiosincrasia más o menos compartida. "En realidad las fronteras geopolíticas que nos dividen muy artificialmente no son las fronteras reales. Es curioso ver que un cusqueño, por ejemplo, está más en familia en La Paz que en Lima y es más comprobable para nosotros que estamos más conectados culturalmente como paceños, con Cuzco que con Trujillo o Lima. Eso es evidente y en el caso de la escuela tiene otra razón principalísima: la dificultad en toda esa área geográfico-cultural para acceder a la formación cinematográfica".

La Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños ha intentado, mediante una política de apoyo a diferentes países latinoamericanos, cubrir este vacío ofreciendo plazas a los jóvenes interesados en estudiar cine. Lastimosamente estas son escasas, van entre dos y tres alumnos, número absolutamente insuficiente para cubrir la demanda. Esta situación afecta a los países mencionados en los que no existe un centro de formación al más alto nivel en cine. "No vamos a aplicar una política de discriminación cerrada y la escuela abrirá espacios a estudiantes latinoamericanos de cualquier país, aunque nuestros esfuerzos de convocatoria se dirijan principalmente al área cultural señalada".

TALLERES EN LA ESCUELA ANDINA DE CINEMATOGRAFÍA

Los talleres de iniciación y los talleres magistrales serán la base del trabajo de la Escuela Andina de Cinematografía durante sus dos primeros años de trabajo.

Los talleres de iniciación cubren el espectro básico del cine y se realizan durante dos semanas de intenso trabajo. En estos talleres se exhiben obras del maestro invitado. Se pretende que la explicación teórica y los ejercicios prácticos doten al estudiante de una formación previa polivalente de calidad que lo habilitará para acceder a una formación regular aventajada. Ha sido programada la enseñanza, en este campo, de fotografía, guión, puesta en escena, sonido, dirección de actores, montaje, historia del cine, producción y dirección.

Los talleres magistrales cubrirán los requerimientos en guión cinematográfico, puesta en escena, dirección de actores, dramaturgia, fotografía, nuevas tecnologías para cine, producción y dirección. Realizadores y profesionales que deseen perfeccionar sus conocimientos y formación en el encuentro y trabajo con grandes personalidades del cine latinoamericano y mundial, podrán acceder a esta otra modalidad.

Las oficinas de la "Escuela Andina de Cinematografía" se encuentran ubicadas en la calle Sanauja 651 (Plaza Riosinho) y pueden obtenerse más informaciones en el teléfono 281027.



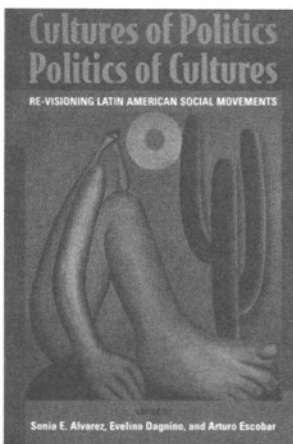
Beretta

Largio Vaca
P.d.A.

La visión del postprogresismo

Willem Assies y Ton Salman¹

Este es un ensayo sobre los movimientos sociales, la ciudadanía y la cultura, a partir de la lectura del libro de Sonia E. Álvarez, Evelina Dagnino y Arturo Escobar (eds.) denominado *Cultures of Politics, Politics of Cultures; Re-visioning Latin American Social Movements*.



Boulder, Colorado
EE UU / Oxford,
RU: Westview Press,
1998. 459 pp.

Como reza el dicho, el búho de Minerva sólo sale después del crepúsculo. De un libro cuya materia prima son unos 25 años de estudio de los movimientos sociales en América Latina, que empieza con una referencia al ya

cercano fin del milenio (p. 1) y que lleva el subtítulo de “Re-visionando los movimientos sociales latinoamericanos”, se podría esperar que arroje nuevas luces sobre los movimientos sociales de ayer y de hoy, y que

ofrezca un puente hacia la nueva era que se acerca. El libro, cuyo título podría traducirse como “Culturas de lo político, política de la cultura; re-visionando los movimientos sociales latinoamericanos”², intenta hacer esto po-

1. Willem Assies trabaja en el Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán, en Zamora, México. Ton Salman trabaja en el PIEB (Programa de Investigación Estratégica de Bolivia), con sede en La Paz. Ambos agradecen a Hugo Montes por su traducción.
2. Cuando hablamos de política cultural (“cultural politics”), nos referimos a los aspectos políticos de lo cultural, y no la gestión política de los asuntos culturales.

niendo la relación entre la política y la cultura en el punto de mira.

Su objetivo es volver a teorizar sobre la dimensión cultural de la política para luego cuestionar la trillada afirmación de que la importancia política de los movimientos sociales ha disminuido con el regreso de la democracia electoral formal en gran parte de América Latina. Por otro lado, al escudriñar de qué manera las demandas culturales de los movimientos sociales en torno a los significados y representaciones están entreverados con sus luchas por los derechos y por el poder económico y político-institucional, el libro propone profundizar la reflexión teórica sobre las dimensiones políticas de lo cultural (pág. ix).

El volumen consta de 18 ensayos precedidos por una introducción y agrupados en cuatro partes. La primera versa sobre la "política cultural de ciudadanía, democracia y el Estado", la segunda se centra en "la política cultural de etnicidad, raza y género", sigue la parte dedicada a "globalización, transnacionalismo y sociedad civil" y por último, sigue la parte dedicada a "reflexiones teóricas y metodológicas sobre lo cultural y lo político en los movimientos sociales de América Latina" y consiste sobre todo en comentarios sobre el cuerpo principal del

libro, además de retomar algunos asuntos sobre la teorización de los movimientos sociales contemporáneos.

Abrimos esta reseña con un esbozo sucinto de los temas principales del capítulo introductorio del libro, que presenta las cuestiones teóricas de la obra, lo que permite una discusión de los siguientes capítulos y una valoración de los avances en el revisionamiento de los movimientos sociales latinoamericanos, además de pasar revista a los principales temas abordados y que son la materia del debate actual sobre los movimientos sociales.

HACIA LO CULTURAL

Después de una antología anterior sobre "estrategia, identidad y democracia" (Escóbar y Álvarez, 1992) los editores del volumen que examinamos han decidido sumarse al giro hacia lo cultural de los estudios sociales y convertir las culturas de lo político y de la política de las culturas en un tema central. La intención es examinar la relación entre la cultura y la política, "escudriñando la naturaleza de la política cultural realizada, con más o menos claridad y mayor o menor alcance, por todos los movimientos sociales, así como el potencial de esta política cultural para promover el cambio social" (p. 2). Si bien los estudios culturales ofrecen una fuente de ins-

piración para este cometido, los editores alegan que éstos no han concedido suficiente importancia a los movimientos sociales como aspecto vital de la producción cultural (p. 3). Añaden que los estudios culturales se han mantenido claramente orientados hacia lo textual, por lo que han soslayado la consideración de los intereses políticos de los actores sociales concretos en los debates sobre significados y representaciones.

La reintroducción de la política, o el desplazamiento de la cultura hacia la política cultural, es el primer tema en la agenda presentada en el capítulo introductorio. Se define entonces la política cultural como "el proceso que se da cuando grupos de actores configurados por significados y prácticas culturales que ellos mismos encarnan, entran en conflicto entre sí (...) Cuando los movimientos presentan concepciones alternativas sobre la mujer, la naturaleza, la raza, la economía, la democracia o la ciudadanía, que alteran los significados culturales dominantes, entonces están realizando una política cultural" (p. 7). Desarrollando esta idea, los editores aducen que tal vez el ángulo más importante para analizar la política cultural de los movimientos sociales sea hacerlo en relación con sus efectos sobre la (s) cultura (s) política (s), es decir, la cons-

trucción social particular de la que en toda sociedad pueda considerarse como política. Esto alude al hecho en que los objetivos de los movimientos sociales contemporáneos van más allá de las conquistas materiales e institucionales tangibles o de la simple inclusión y buscan transformar la cultura política dominante. Los movimientos sociales latinoamericanos han desarrollado diversas versiones de una política cultural que van mucho más allá del (re) establecimiento de la democracia liberal formal y "cuestionan la cultura autoritaria dominante a través de una resignificación de las nociones de derechos, de espacios público y privado, de formas de sociabilidad, ética, equidad y diferencia, etc." (p. 10)³.

Tal enfoque, continúan, implica un concepto ampliado de lo político y una visión descentralizada del poder y la política que transgrede las concepciones reduccionistas de esta última, de la cultura política, de la ciudadanía y de la democracia vigentes en la ciencia política convencional y en ciertas versiones de los enfoques sobre los movimientos sociales desde la movilización de

recursos y del proceso político (p. 11). En contraste con el estrecho enfoque institucional adoptado por la mayor parte de los transitologistas, dirige su atención hacia espacios de enfrentamiento no gubernamentales o extrainstitucionales, inspirados o contruidos principalmente por movimientos sociales, que pueden ser tan esenciales como las instituciones de los nuevos regímenes civiles para la consolidación de una ciudadanía democrática significativa para las clases y grupos sociales subalternos (p. 14).

Las dimensiones menos mensurables de la acción colectiva, quizá las menos visibles o sumergidas, como las redes de movimientos sociales, devienen así en un importante campo de investigación. Se debería tomar en cuenta tanto las redes interpersonales de la vida cotidiana como los lazos entre organizaciones y los vínculos político culturales con otros movimientos, así como con múltiples actores y espacios sociales e institucionales (p. 15).

Naturalmente, la revitalización de la sociedad civil es otro de los temas abordados en la introducción. Allí se hacen algunas

advertencias sobre la celebración generalizada de la sociedad civil, ya sea en sus manifestaciones locales, nacionales o globales. La sociedad civil, se nos dice, es un campo de batalla minado por relaciones de poder a veces no democráticas y por varias formas de exclusión. La sociedad civil es, por tanto, un campo de batalla de los movimientos sociales, y un objetivo prioritario a la vez. En este contexto se trae a colación algunos asuntos planteados por el cambiante papel de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que en algunos casos se han convertido en entidades más bien neo o para gubernamentales. Además, añaden que no se puede conceptualizar la relación entre el Estado y la sociedad civil en términos de límites definidos y que, al contrario, se debe prestar especial atención a los aspectos de la relación que evidencian el carácter ilusorio de una clara delimitación de ambos como entidades independientes y autónomas.

Tal conceptualización también pone de manifiesto esferas públicas distintas de las oficiales, o sea los espacios públicos alternativos desde donde se forjan y

3. Así, se considera que los movimientos sociales desafían tanto al neoliberalismo y sus concepciones minimalistas de Estado y democracia, como la cultura política dominante, que históricamente ha combinado de manera contradictoria características de las culturas políticas europea y norteamericana (racionalismo, universalismo e individualismo) con otros principios orientados a asegurar la exclusión social y política y hasta el control de todo lo que tenga importancia política en sociedades extremadamente jerárquicas e inequitativas (p. 9).

difunden los contradiscursos acerca de las identidades, demandas y necesidades. Esto engloba desde los patios familiares y mercados locales hasta la construcción de nuevos frentes de representación, negociación e interlocución que implican una redefinición del sistema político, así como repensar los parámetros de la democracia existente que contribuirían a la (trans) formación de las políticas públicas.

Por último, se incluye la influencia de la globalización y el neoliberalismo sobre las políticas culturales de los movimientos sociales como un tema de investigación. Por un lado, la globalización ha abierto nuevas oportunidades y ha facilitado una democratización no territorial de asuntos globales. Por otro lado, sin embargo, la globalización y el neoliberalismo han acentuado las desigualdades y parecen haber debilitado y desmantelado las formas de organización y los lenguajes de protesta existentes (Stark 1998). En este contexto, el programa político-cultural del neoliberalismo, expresado en la noción de ajuste social, es un contendiente poderoso en el debate sobre los significados de ciudadanía, sociedad civil y democracia. No pocos movimientos progresistas y ONG han participado en programas de ajuste social, lo que nos lleva a la cuestión de si las nuevas condiciones

impuestas por la globalización neoliberal podrían transformar el propio significado de movimiento social y que acaso deberíamos preguntarnos si es que no se estará reconfigurando lo que consideramos como un movimiento social.

Esto es en resumidas cuentas lo que se presenta como el programa teórico y de investigación del libro, y sin duda plantea un desafío nada despreciable.

YA NADA ES LO QUE ERA: NUEVOS DESAFÍOS EN NUEVOS ESCENARIOS

El asunto de la transformación de los movimientos sociales como resultado de la interacción entre un ambiente cambiante y la dinámica interna está presente en todo el libro. En primer lugar, han pasado ya los heroicos días de la oposición a los regímenes autoritarios y, en parte como resultado de la actividad de los movimientos, la agenda política ha cambiado con la vuelta a la política electoral y la revitalización de las concepciones, a menudo contestadas, de sociedad civil y ciudadanía. Al mismo tiempo, la embestida neoliberal, el proceso de globalización y transnacionalización, así como los dramáticos cambios en la tecnología de la información, han contribuido a una redefinición

del terreno político cultural en el que los movimientos sociales tendrán que llevar adelante sus luchas.

Para empezar, el proceso de democratización ha hecho mucho más que, y en muchos casos algo completamente distinto de, sólo aumentar las posibilidades de los movimientos sociales para obtener concesiones y resultados. Además, ha venido acompañado de cambios en la percepción de los objetivos estratégicos y del significado de sus acciones por parte de los propios movimientos sociales, así como de la de los intelectuales, ya sean éstos interesados, comprometidos o ambas cosas. Evelina Dagnino, por ejemplo, sitúa claramente su contribución (capítulo 2) en el ámbito de la cultura, la ciudadanía y la democracia en el contexto de los cambiantes discursos y prácticas de la izquierda latinoamericana y brasileña. También hace una valoración del impacto de la obra de Gramsci en el repensar de la relación entre política y cultura, así como una reconsideración de la estrategia mediante la cual los conceptos recibidos de transformación revolucionaria fueron reemplazados por nociones de hegemonía, sociedad civil y democracia, y ciudadanía. Democracia y ciudadanía se han convertido en conceptos estratégicos en un proyecto que incluiría, más que un rechazo, una transforma-

ción de la institucionalidad política y del Estado. En el proceso de forjar una institucionalidad política y ajustarse a ella, la cultura política de la izquierda y muchos movimientos sociales ha llegado a abrazar la promoción de una cultura de derechos, entre ellos el de coparticipar en la toma de decisiones del gobierno.

La cuestión de la coparticipación y de la cambiante relación entre los movimientos sociales y la política institucional en el Brasil es elaborada con mayor profundidad en el capítulo 3 por María Celia Paoli y Vera da Silva Telles, quienes discuten los experimentos de democracia participativa local y nuevas formas de negociación experimentadas por el movimiento laboral, y en el estudio que Sergio Baierle (capítulo 5) hace sobre la determinación participativa del presupuesto en la municipalidad de Porto Alegre. Todos ellos analizan los experimentos de construcción de espacios de enfrentamiento en los puntos de contacto entre Estado y sociedad. Estos son, nos dicen, los espacios donde los conflictos se hacen visibles y donde la legitimidad de los intereses en conflicto puede ser reconocida y negociada. Los modos de confrontación característicos de los años 80 han dado paso a la negociación mediante la cual se construyen nuevos parámetros para las políticas pú-

blicas y se reconocen derechos. Después de un breve examen de la experiencia con los consejos sectoriales, en cuyo marco participan el sector empresarial, los trabajadores y el gobierno, y cuyo ejemplo más sobresaliente es el de la industria automotriz, Paoli y Telles afirman que la experiencia fue beneficiosa para los tres sectores por igual. Se vislumbra en el horizonte una tercera vía entre los extremos de la desregulación de los derechos de los trabajadores y la tradicional regulación autoritaria y legalista por parte del Estado.

Estas contribuciones son más bien optimistas en cuanto a la emergencia de una nueva cultura de derechos y ciudadanía o la creación de nuevos espacios públicos para el reconocimiento de la legitimidad de intereses en conflicto y su tratamiento de acuerdo con un nuevo principio ético-político.

No obstante, aún no queda clara la relación de tales experiencias con la idea de que la despolitización es la meta central de la política y con la concepción de la política como la pacificación de lo político, tal como adelanta David Slater en el capítulo 15. Y qué decir de la alusión que hace Baierle sobre los aspectos pedagógicos de la construcción participativa del presupuesto, a través de la cual las clases subalternas aprenden a tener una vi-

sión más global del interés público. Su análisis de la experiencia de Porto Alegre parece más bien un relato de éxitos. Aun sin negar este aspecto, no hubiera estado fuera de lugar analizar algo más el papel de las ONG o los administradores municipales, en parte provenientes del circuito de las ONG, en la formación del proceso. No se hace prácticamente ninguna alusión al éxito o fracaso de otros experimentos de este tipo, tales como la administración del Partido de los Trabajadores en la ciudad de San Pablo y en un puñado de otras ciudades grandes y pequeñas. Sucede otro tanto con la cuestión de la relación entre acumulación y legitimación a que se hacía referencia, una preocupación que fue crucial para anteriores estudios sobre los movimientos sociales urbanos y que sin duda tiene importancia para una ciudad como Porto Alegre, que tiene que competir con otras ciudades portuarias. En la discusión de Paoli y Telles sobre la experiencia del consejo sectorial no se menciona la abrupta disminución de la fuerza de trabajo en la industria automotriz, un 40% entre 1987 y 1996, ni el hecho de que mientras los significativos incrementos de la productividad se reflejaban en salarios algo mejores para los empleados, después de los acuerdos el número de empleados se mantuvo prácticamen-

te estable, en tanto que las modalidades de organización y disciplina laboral sufrieron una profunda modificación con la flexibilización del empleo. Hacemos notar también la ausencia de una discusión seria del debate sobre el neocorporativismo al que han dado lugar las nuevas formas de negociación.

En tanto que las contribuciones brasileñas sobre el surgimiento de una ciudadanía activa parecen expresar un optimismo de la voluntad, la relación que Verónica Schild hace del movimiento de la mujer bajo al democracia neoliberal chilena refleja más bien un realismo del intelecto. Schild presenta un recuento bastante mesurado de la, a menudo, ignorada dimensión cultural del proyecto neoliberal y de cómo el nuevo Estado democrático neoliberal chileno se alimenta de los recursos de la sociedad civil y de los movimientos sociales en la construcción de su nuevo modelo de ciudadanía. Esta autora muestra cómo los esfuerzos emancipatorios de las activistas y profesionales feministas están siendo transformados en recursos para la construcción de nuevas formas del Estado y cómo la búsqueda de autonomía y participación significativa del movimiento feminista, por ejemplo,

está siendo manipulada como un recurso para una redefinición neoliberal de la ciudadanía. Las actividades de inspiración feminista que vinculaban las exigencias económicas con el empoderamiento⁴ están siendo sutilmente asimiladas y transformadas en actividades orientadas a invertir a las mujeres como sujetos económicos en el marco del mercado. Este proceso va acompañado de la incorporación de las profesionales y expertas feministas capaces de manejar información vital en agencias estatales y una profesionalización de las actividades de las ONG por medio de la cual las mujeres pobres y de la clase trabajadora pierden la notoriedad pública que tenían. Las alianzas iniciales entre mujeres en su lucha por una concepción inclusiva de la democracia están siendo contrarrestadas por su retorno a la política normal a medida que la integración política de unas se da a costa de la marginalización de otras. La lección de los últimos años, comenta Schild (p. 107), es que “la clase importa en tanto la mujer y su lucha estén involucradas.”

¿CIUDADANOS COMUNES?

Si la primera sección del libro que estamos examinando

subraya la transformación de algunos movimientos sociales y la redefinición de las estrategias, en la segunda parte son las culturas políticas de etnicidad, de raza y género y los temas de política de identidad los que ocupan el centro del escenario. Las contribuciones a esta sección plantean una serie de cuestiones en cuanto a la heterogeneidad de los movimientos sociales y a la ambigüedad y las contradicciones de los movimientos y que cuestionan la asimilación directa de los movimientos sociales con el progresismo. Más aún, en tanto que las contribuciones anteriores mostraban que las dimensiones de ciudadanía son objeto de debate, las contribuciones de esta sección ponen en tela de juicio la propia noción de un paradigma común de ciudadanía cuya expresión clásica son tráfadas como libertad, igualdad y fraternidad o los derechos civiles, políticos y sociales de Marshall.

Jeffrey Rubin toca en el capítulo 6 el caso de la COCEI, movimiento radical de base en la ciudad zapoteca de Juchitán, en el sur de México. A diferencia de la tendencia de la mayor parte de las contribuciones, este artículo descarta que la política progresista de un movimiento corresponda necesariamente a una cul-

4. Del inglés *empowerment*: proceso por el que las mujeres (u otros actores sociales) adquieren poder interno para el ejercicio de su ciudadanía, posibilitando la expresión y difusión de sus derechos, el aumento de su autoestima y de su autodeterminación en la construcción de su propia identidad.

tura política de ese tipo. Al contrario, ilustra cómo un movimiento radical que cumple los prerequisites de apoyarse en una base social bien motivada y fácilmente movilizable, de ser formador de identidad y políticamente eficaz, con autonomía respecto de los partidos, se caracteriza también por poseer rasgos culturales con resonancias que están lejos de lo deseable. El caudillismo, la violencia y las amenazas de violencia, el recurso racista de la contundente imagen del indígena fiero e indomable, imágenes de liderazgo vanguardistas, un discurso económico retrógrado y todo menos equidad de género en sus prácticas son rasgos propios del estilo de organización de la COCEI. Pero más allá de la mera denuncia o explicación de estas características como algo inherente a muchas culturas populares, Rubin afirma que estos rasgos podrían explicar de alguna manera el éxito de la COCEI: eran parte de los recursos que la COCEI desplegó para crear un movimiento contradictorio, ambiguo y descentralizado, en el que había lugar, por ejemplo, para relaciones cuidadosas y sutilmente orquestadas con los “despreciados” políticos del oficialista PRI, así como para un feroz discurso de condena a todo forastero que osara introducirse en la comunidad de Juchitán y contaminarla.

Al margen de su principal conclusión: que la combinación de militancia y oportunismo producen una coexistencia de diferencias que propicia “nuevos espacios para la producción de significado” (p. 160), lo que en parte explica el éxito de la COCEI, Rubin también hace que la cultura aflore como una dimensión testaruda e incontrolable, que presenta vicisitudes mucho más intrincadas que lo sugerido por frases centradas básicamente en la capacidad de los movimientos sociales para “desafiar o desestabilizar las culturas políticas dominantes” (p. 8). La cultura, como ilustra Rubin, desafía la idea de la naturaleza inherentemente progresista o democrática de los movimientos sociales. No obstante, al enfatizar este aspecto incontrolable, caprichoso, salvaje y estratégicamente ingobernable de la cultura, Rubin está prácticamente solo.

Tal como resalta Rubin, cuando los discursos puristas de clase y etnia se combinan de maneras ambiguas con otras creencias y formas de acción pueden reflejar las experiencias de la gente y al mismo tiempo ser de considerable utilidad estratégica (p. 161). Además, señala las tensiones que esto implica en relación con las nociones habituales de ciudadanía (p. 151, 155). A partir de otras contribuciones sobre la política cultural de

etnicidad, raza y género emergen diferentes dimensiones de este tema. Por ejemplo, Kay Warren alude a las tensiones entre los objetivos de base étnica del movimiento panmaya en Guatemala por un lado y el paradigma organizacional de la izquierda popular por otro lado y en general a las reacciones hostiles frente a la reafirmación de los derechos culturales y colectivos mayas y la imaginación de una nación maya. Señala también las posibilidades para el diálogo que podría mitigar la continua polarización étnica y abrir una perspectiva de democracia pluralista.

Libia Grueso, Carlos Rosero y Arturo Escobar examinan el surgimiento de una organización de la comunidad negra en la costa del Pacífico en Colombia tras la reforma constitucional de 1991, que entre otras cosas reconoce el carácter pluriétnico y multicultural de la sociedad colombiana. Intentan destacar prácticas innovadoras y formulaciones teóricas sobre la relación entre territorio, biodiversidad, cultura y desarrollo y sostienen que la definición del movimiento de biodiversidad como territorio más cultura encarna toda una ecología política que apunta una lucha cultural en pos de la autonomía y la autodeterminación. El movimiento pretende formular un proyecto etnocultural que desafíe las prácticas

clientelistas de los políticos negros convencionales y constituya una ruptura con los intentos previos de organización negra que apelaban a la integración como una vía para superar la discriminación y la opresión raciales. Se presenta como portadora de un mensaje post desarrollo y como una defensa de la vida. Para mucha gente del Pacífico, afirman, las pérdidas territoriales equivalen a poco menos que una vuelta a la esclavitud o, peor aún, a convertirse en “ciudadanos comunes” (p. 211).

Por su parte, Olivia María Gomes da Cunha explora el desarrollo de políticas de identidad negra en el Brasil. Examina diversas estrategias discursivas desplegadas por los intelectuales del movimiento delineando las relaciones entre lo cultural y lo político y la incomodidad eventualmente causada por posiciones maximalistas y polarizantes. Señala las maneras en las que la comunidad exagera y radicaliza las diferencias y crea fronteras entre “nosotros” y “ellos”, lo que puede contribuir a la consolidación de “comunidades”, que de acuerdo con la tradición filosófica clásica estarían opuestas a la ciudadanía. La incomodidad consiguiente llevó a una nueva orien-

tación del discurso de modo que hablar de ciudadanía se convierte en un recurso para escapar a la “lógica de identidad” y para referirse de otra manera a temas de discriminación dentro de un marco más amplio.

Un aspecto presente en la discusión de la política de la identidad negra, la interacción entre la biografía individual y el activismo de los movimientos, se trata con mayor grado de elaboración en el artículo de Miguel Díaz-Barriga sobre la participación de las colonas (mujeres pobres) en los movimientos urbanos de la ciudad de México. Examina, a partir de tres relatos personales de participación, algunas de las herramientas conceptuales usadas con frecuencia en el análisis del activismo de la mujer, tales como las dicotomías necesidades prácticas/necesidades estratégicas, lo privado/lo público y lo social/lo político. Sostiene que tales categorizaciones son excesivamente rígidas y difícilmente captan las maneras en que tales opuestos son manejados y replanteados en las prácticas y los discursos cotidianos. De igual manera llama nuestra atención sobre las “zonas limítrofes” de la hibridación, de la improvisación, la ambigüedad y la ironía y su

papel en la transformación de los significados culturales y las relaciones sociales, y al hacerlo retoma algunos de los temas subrayados por Jeffrey Rubin.

La última contribución a esta parte de del libro es un artículo de Jean Franco acerca de la ofensiva del Vaticano en contra del uso de la noción de género durante la conferencia de Beijing y su impacto entre algunas de las delegaciones oficiales latinoamericanas.

Las varias contribuciones sobre la política de etnicidad y raza en esta parte del volumen plantean importantes cuestiones que, sin embargo, no se retoman en la introducción ni en la conclusión del libro. En primer lugar, las movilizaciones de los pueblos indígenas cuestionan radicalmente la noción de ciudadanía. En respuesta a estos movimientos varios estados latinoamericanos han modificado sus constituciones y han reconocido el carácter multiétnico y pluricultural de las sociedades que los conforman. Este hecho marca por sí mismo una ruptura significativa con respecto al proyecto homogeneizador puesto en marcha desde la independencia: el “constitucionalismo posnacionalista” avanza hacia el reconoci-

5. Para una discusión *in extenso* del nuevo constitucionalismo pluricultural en América Latina y su implementación en Bolivia y Colombia, ver Van Cott (de próxima aparición, reseñado en este número de *Tinkazos*). Sobre pueblos indígenas y la reforma del Estado latinoamericano, ver Assies, Van der Haar y Hoekema (de próxima aparición).

miento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas⁵. Puesto que el asunto de los derechos colectivos es tema de ardiente debate entre los teóricos políticos progresistas, y en vista de que las notas de Kay Warren despertan la suspicacia de teóricos de la democracia radicales como Chantal Mouffe, hubiera sido apropiado profundizar algo más la discusión. Las reivindicaciones “autonomistas” y “autodeterministas” de los pueblos indígenas y el reconocimiento constitucional de los derechos colectivos no encajan cómodamente con el repertorio de la ciudadanía. Aquí no se trata sólo de un asunto de “estilo de vida”, pues estos derechos colectivos incluyen el derecho a mantener instituciones políticas y jurisdicción indígenas. En el caso de Colombia, por ejemplo, esto ha generado un considerable debate sobre la relación entre la jurisdicción indígena y los derechos humanos. Dicho de manera más general, la tensión entre el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los de las mujeres indígenas es objeto de debate. Y en el caso de México, la reticencia del gobierno para cumplir los acuerdos alcanzados con los zapatistas en San Andrés (1996) está ideológicamente arropada en un discurso univer-

salista que rechaza la concesión de “privilegios” a los pueblos indígenas.

En segundo lugar, el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad también trae a la superficie importantes cuestiones con respecto al concepto de cultura que los autores esbozaban en su introducción. Aunque volveremos sobre este asunto más tarde, aquí interesa señalar que el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas implica el reconocimiento de una pluralidad de culturas políticas, con las instituciones asociadas, y, más en general, una pluralidad de culturas entendidas sin más como prácticamente asimilables a “sociedades” o “pueblos”. Por otro lado, el sobreentendido que subyace tácitamente en la introducción y en la mayor parte de las contribuciones del volumen es que la cultura ofrece un sustrato común. En otras palabras: la cultura liga las posturas enfrentadas, y a la vez es parte del conflicto, como sugiere la imagen de Laclau y Mouffe (1985), según la cual dentro de un “campo de discursividad”, los “significantes flotantes” pueden ser articulados en diferentes cadenas de equivalencia. No obstante, el pluriculturalismo implica la existencia de diferentes

“campos de discursividad”⁶ y de culturas políticas muy diferentes, como aquella de la segmentaria sociedad sin Estado del pueblo wayuu en Colombia, para mencionar sólo un ejemplo. Y cuando la Constitución colombiana de 1991 iba a ser traducida a las lenguas indígenas para instruir a los mismos indígenas sobre sus recién adquiridos derechos de ciudadanos indígenas, la palabra ley fue comprendida en la lengua iku como “aquello que conlleva el bien” (cfr. Padilla, 1995).

En nuestra opinión, un libro focalizado en los movimientos sociales, la democracia y la ciudadanía en América Latina, con contribuciones que sostienen que convertirse en “ciudadanos comunes” podría ser peor que la esclavitud, no puede omitir una alusión a los temas de “ciudadanía pluricultural” y a las formas en las que podría subvertir el paradigma habitual de ciudadanía. Es cuando menos curiosa la ausencia de un tratamiento sistemático de tales cuestiones en la introducción, que pretende ofrecer un marco teórico.

GLOBALIZACIÓN, CIBERCULTURA Y LA NUEVA SOCIEDAD CIVIL

En la tercera parte del libro entran en el cuadro la globalización y las nuevas tecnologías de

6. Kay Warren ha avanzado algo en la explicación de este aspecto.

la comunicación y sus efectos sobre una hipotética “nueva sociedad civil”. En vez de centrarse en los logros de los movimientos en sus bases, las contribuciones de esta sección revelan otros aspectos de la actividad de los movimientos. Así, en la contribución de Álvarez (capítulo 12) sobre la presencia de las feministas latinoamericanas en Beijing y su contraparte alternativa, el foro paralelo de ONG que tuvo lugar fuera de Beijing, el objeto de reflexión no son las vicisitudes de las mujeres en el ámbito de las organizaciones, ni, para el efecto, los asuntos político culturales en juego, sino las características de las posiciones de sus representantes y las fricciones entre ellas. El vínculo entre la cultura y la política de la acción colectiva se traslada por tanto a un ámbito en el que las acciones y las posturas de los cuadros profesionales de los movimientos y sus portavoces que están en la política o en cargos de la administración pública son los protagonistas.

En ese contexto, Álvarez toca algunas de las cuestiones planteadas por el surgimiento de lo que algunos han dado en llamar “tecnocracia de género”, constituida por los estratos más profesionalizados y orientados hacia la gestión del campo feminista, y que se han convertido en interlocutores privilegiados de las

autoridades nacionales, los medios de comunicación y las agencias de cooperación y desarrollo bilaterales y multilaterales. En opinión de Álvarez, los avances en una amplia gama de espacios institucionales y extrainstitucionales son la consecuencia de cierta descentralización del movimiento que refleja incursiones relativamente exitosas en un ámbito que hasta ahora era de dominio masculino, y de la difusión del discurso feminista, proceso no exento de desequilibrios de poder dentro del movimiento.

El diseño de mecanismos y procedimientos efectivos para la democratización dentro del campo feminista es un verdadero desafío para las feministas de la región, añade. Sin embargo, en la profesionalización y la institucionalización de los sectores del movimiento se pone en juego mucho más que una simple fisura entre las dimensiones ético cultural y estructural institucional de los movimientos o que simples “desequilibrios de poder”, como Álvarez los llama. La afirmación de Schild de que “la clase cuenta” debería ser tomada en serio y repensada en el marco de las teorizaciones sobre una sociedad de la información (cfr. Bader et al. (eds.) 1998).

Como afirma Melucci en su contribución a la sección final del libro (capítulo 18), las cuestio-

nes de poder y diferencia cultural se han convertido en un asunto teórico central para el análisis de una sociedad basada en la información. A lo largo de los últimos 25 años, los profesionales comprometidos y cierto estrato de portavoces de los movimientos han hecho de su compromiso una carrera, lo que implica una usurpación del capital simbólico generado por los movimientos sociales que ellos mismos han ayudado a construir. Este hecho tiene sus consecuencias en la dinámica de los movimientos, pues los profesionales pasan gradualmente de promotores radicales del movimiento a mediadores con conocimiento específico e información acerca del mismo, ventaja que les proporciona una base de poder sobre los grupos clientes, y a la vez están vinculados a intereses relacionados con oportunidades de su carrera profesional. En otras palabras, el surgimiento de una “tecnocracia de género” en el contexto de una sociedad en la que la dominación está enraizada en la manipulación de la información y los símbolos requiere de un análisis mucho más sistemático.

En el capítulo 13, Gustavo Lins Ribeiro alude a otro aspecto de la emergencia de nuevas tecnologías de la información y señala con agudeza que hay una diferencia entre las comunidades imaginarias del capitalismo de la

era de la imprenta y las comunidades virtuales de "internautas". La comunidad virtual es algo más que una abstracción simbólica y políticamente construida: es una realidad de otro tipo, un estado intermedio y paralelo entre la realidad y la abstracción donde la simulación y los simulacros tienen vida propia (p. 330). Esto introduce una perspectiva sobria que llama al desengaño sobre las, a menudo, exaltadas expectativas acerca de la fuerza liberadora de las nuevas tecnologías.

Ribeiro intenta poner en consideración asuntos de poder, las exageradas opiniones de miembros de las comunidades transnacionales acerca de su poder, las presuntas cualidades liberadoras de la nueva tecnología y la estratificación generada por las distintas habilidades en el manejo de las computadoras. Finaliza con un examen del empoderamiento de los actores locales a través de las comunidades virtuales creadas por las redes, que son armas poderosas para generar una solidaridad transnacional con respecto a muchos "temas urgentes", pero también señala algunas de las limitaciones del "activismo a distancia" y concluye que las redes informáticas no representan una verdadera panacea libertaria, puesto que en última instancia los conflictos se dirimen en el "mundo real".

Entre otras cosas, este análisis nos recuerda que el "activismo a distancia" está fuertemente relacionado con el valor de noticia de los eventos que también insinúa Yúdice en su contribución (p. 366). Una de las cuestiones planteadas aquí es que la realidad virtual difundida por las redes para generar el máximo impacto no siempre refleja la complejidad a menudo mucho más sórdida de las situaciones cotidianas sobre el terreno. Otra cuestión, relacionada con la anterior, es la volatilidad de la solidaridad internacional inspirada ya sea por el zapatista encapuchado o por una imagen romántica de los sirringueros (recolectores de caucho) de la selva amazónica, que acaparan instantáneamente las primeras planas, pero pasan a las páginas interiores tan pronto como desaparece la novedad.

En el capítulo 14, George Yúdice habla sobre la globalización de la cultura y la nueva sociedad civil. Afirma que aunque por lo general la izquierda tiene una visión pesimista de la globalización, la vuelta a la sociedad civil en el contexto de las políticas neoliberales y las nuevas tecnologías que sirven de base a la globalización han abierto nuevas formas de lucha progresista en las que lo cultural es el campo de batalla (p. 357). Finaliza el capítulo con lo que a nuestro entender son especulaciones

algo exageradas sobre la manera en que el movimiento zapatista intenta contribuir a las nuevas prácticas de debate y crítica en la sociedad civil, supuestamente manifiestas sobre todo en su crítica del neoliberalismo. Su búsqueda de una tendencia descentralizada que contrarreste el esfuerzo estabilizador y de control por parte del Estado sigue careciendo de sustancia, sobre todo porque la magnitud de ambos procesos requiere de una exploración más sistemática.

David Slater aborda temas relacionados con la globalización en sus reflexiones sobre la espacialidad de los movimientos sociales. Afirma que es necesario complementar, y desafiar, las estructuras de la democracia territorializada con una política de democratización no territorial de asuntos globales (p. 382), pero matiza esta afirmación arguyendo que la democratización no territorial carece de una base regional segura y está menos firmemente cimentada en términos de exigencia de responsabilidad. Por lo demás, Slater explora el valor explicativo de la dimensión espacial en las investigaciones sobre los movimientos sociales. A pesar de una valiosa serie de reflexiones sobre puntos de vista y conceptos, y sus efectos reveladores y encubridores, a la postre su explicación de las acciones de los movimientos sociales en términos de metáforas

“espaciales” no siempre resulta convincente como nuevo enfoque sobre la política de lo cultural.

VOLVIENDO A TEORIZAR SOBRE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

En el esfuerzo de sopesar la importancia y las carencias de esta publicación uno se encuentra con la sorpresa de que la tarea ya ha sido realizada, al menos parcialmente, en la sección final titulada “Reflexiones teóricas y metodológicas sobre lo cultural y lo político en los movimientos sociales latinoamericanos”. Sin embargo, no todas las contribuciones de esta parte elaboran sus planteamientos ni se refuerzan o complementan mutuamente, y algunas tienden a arrogarse la importancia de una especie de posdata, anticipando la acogida del libro y el papel que éste podría jugar en investigaciones y debates futuros.

En el capítulo 16, Elizabeth Jelin examina la relación entre la democratización política y el carácter excluyente de la economía neoliberal, cuyos efectos marginalizantes socavan el fortalecimiento de la sociedad civil y el desarrollo de una cultura de ciudadanía. Discute, además, el cambiante papel de las ONG o “tercer sector”, que en el discurso neoliberal tiende a fundirse con la sociedad civil como tal.

Por un lado, señala la relativa falta de exigencia de responsabilidad institucional y civil a las ONG, que sólo rinden cuentas ante las entidades financiadoras, y por otro lado sostiene que el Estado no puede, ni debería, renunciar a su función y obligación de promover la ciudadanía.

En un comentario sobre las contribuciones al volumen, Paulo Krischke (capítulo 17) dirige nuestra atención sobre el proceso cultural no lineal del cambio social y político y al aspecto de “ambigüedad” subrayados a lo largo del libro. Si bien este enfoque cultural permite tomar una distancia crítica con respecto a otros enfoques, así como una nueva comprensión de la “esfera pública”, Krischke afirma que se debería dar el paso de adoptar una escala comparativa para calibrar el “desarrollo político”, y a continuación destaca la necesidad de evaluar los procesos de aprendizaje social de los derechos democráticos y de “desarrollo moral/cognitivo”, aspectos que curiosamente se tiende a considerar más allá del horizonte de los enfoques postestructuralistas.

En su comentario, Alberto Melucci (capítulo 18) vuelve sobre la aparición del concepto de “nuevos movimientos sociales”, del que era en parte responsable, y expresa su preocupación por lo fundamentalmente inapropiado

del debate a que dio lugar el mencionado concepto. Este debate, afirma, ignoró en gran parte la cuestión verdaderamente importante, es decir, si en la sociedad contemporánea existen relaciones y estructuras sociales que puedan ser explicadas en el marco de la sociedad capitalista industrial, tal como la definen los modelos clásicos de la sociología. El surgimiento de la sociedad de la información ha creado nuevos recursos para la autonomía, así como nuevas formas de poder y de control, dando lugar a nuevas formas de acción colectiva y de conflicto que por un lado son eminentemente culturales en tanto invaden la esfera de la formación de significado, pero que a la vez son de carácter estructural, porque afectan las formas de dominación de esta sociedad basada en la información.

En el capítulo que cierra el libro, Mary Louise Pratt pone de relieve el trasfondo pragmático, antiidealista y antiprescriptivo de la mayor parte de las contribuciones, lo que en su opinión refleja una tentativa de reposicionamiento del intelectual metropolitano con respecto a lo social y particularmente con respecto a las zonas de influencia y las periferias tradicionales de este campo. Advierte una “retórica desinflada” en el rechazo de los autores a juzgar los movimientos analizados bajo criterios presun-

tamente progresistas u otros criterios políticos que los intelectuales metropolitanos o sus seguidores puedan dar por supuestos. En cambio, estos autores hacen un esfuerzo por desplazar el centro de gravedad del conocimiento, la comprensión y el juicio hacia los protagonistas. En la opinión de Pratt, este nuevo enfoque implica además una decidida localización de los análisis y un giro hacia lo cultural que permita reflexionar sobre la democracia, la cotidianidad, la libre experimentación (ya no limitarse a seguir modelos) y la toma de conciencia política. Contrariamente a la teorización ortodoxa, basada en las clasificaciones dicotómicas y en la homogeneización, y opuesta a la heterogeneización, el enfoque de los estudios culturales muestra que lo que se ve como “fragmentación” y “desintegración” quizá refleje estructuras de exclusión y una ignorancia supina. Así, ella sostiene, algo exaltadamente a nuestro entender, que el “estudio de los ‘nuevos movimientos sociales’ ha implicado importantes conflictos con los hábitos mentales homogeneizantes que la teoría social ha fomentado tradicionalmente” (p. 431).

¿UNA NUEVA VISIÓN?

Hemos optado por un examen más bien extenso de las contribuciones a una publicación

que sin duda llegará a un público amplio. Aún considerando que el libro ofrece importantes perspectivas y comprensiones, y que muchas de sus contribuciones individuales tienen un alto valor intrínseco, tenemos la impresión de que no cumple en un 100 por ciento con la pretensión de ser un aporte decisivamente innovador al estudio de los movimientos sociales ni es el resultado de un “diálogo y colaboración genuinamente transdisciplinarios” (pág. xi). En lo que sigue, evaluaremos las fortalezas y las limitaciones de algunas de las principales propuestas teóricas del libro.

FUNDAMENTOS PARA EL “GIRO HACIA LO CULTURAL”

Desde fines del decenio de 1970 se ha prestado una atención creciente a los temas de identidad y de la construcción social y discursiva de los movimientos sociales, de los actores y los intereses sociopolíticos. Apoyándose en los estudios culturales, el capítulo introductorio podría haber dado un paso más allá de las conceptualizaciones culturalistas-autonomistas que tendían a inspirar tales esfuerzos, pero en sus elaboraciones la cultura sigue siendo el elusivo concepto característico de las rencillas antropológicas. Aunque los editores critican el énfasis demasia-

do “textual y artístico” que tan a menudo encontramos en los estudios culturales, no llegan a proponer una línea teórica que supere el argumento circular de que la cultura es algo que está “más allá de lo llamado material” y que tiene que ver con la representación, el significado y la textualidad, con las narrativas y el discurso, mientras que al mismo tiempo siempre hay “algo más” detrás de la cultura, “algo incómodo ahí abajo”: los cimientos, las prácticas, los actores sociales y el poder.

Afirmar que “en la América Latina de hoy todos los movimientos sociales desarrollan una política cultural” es una obviedad, y podríamos añadir que cualquier movimiento social, contemporáneo o no, conlleva una política cultural, como han demostrado sobradamente los estudios culturales de los movimientos sociales “antiguos”. El marco propuesto no ofrece un fundamento para el “giro hacia lo cultural”. Se debe recordar que todo el debate sobre los “nuevos movimientos sociales” ha estado profundamente vinculado al asunto de la cultura y la intuición de que una nueva lógica societal había producido un cambio en la actividad del movimiento social. La idea era que el desarrollo de la producción de mercancías combinado con la tecnología de la información había llevado a un

“triunfo de la cultura de la significación”, que entonces invierte el sentido del deter-minismo (cfr. Featherstone, 1988).

Tal como sostiene Melucci en su contribución, los nuevos tipos de conflictos son de carácter eminentemente cultural en tanto afectan la esfera de la formación de significado, pero a la vez son de carácter estructural en tanto afectan las formas de dominación de una sociedad basada en la información. Las bases teóricas del libro tienden a sobredimensionar las innovaciones de la “mirada cultural”, a apropiarse de ellas, y a silenciar la persistente relevancia de ese “algo incómodo de ahí abajo”, y hasta retroceden a posiciones ya superadas por equilibrios alcanzados en el pasado (por ejemplo, Arturo (comp.) 1994, Warren 1998, Vélez Ibáñez 1991, Raschke 1987).

Lo anterior también abre una nueva perspectiva sobre la emergencia de una “tecnocracia de género”, tal como señala Sonia Álvarez, y se hace inevitable la sospecha de que hay algo más que simples “desequilibrios de poder entre las mujeres que actúan en diferentes niveles y que ocupan diferentes espacios” dentro del heterogéneo, policéntrico, espacial y organizacionalmente disperso ámbito feminista latinoamericano. Aunque indudablemente esto ha contribuido a las incursiones en el terreno discursivo de las organiza-

ciones e instituciones de claro dominio masculino, creemos que la afirmación de Veronica Schild de que “la clase cuenta”, merece ser considerada seriamente.

Esto no quiere decir que la antigua imaginaria teleológica se deba considerar como válida, pero sí significa que reconsiderar la “clase” en el contexto de las relaciones de poder, dominación, gobernabilidad y exclusiones de la “sociedad de la información” puede resultar una poderosa herramienta analítica que podría ofrecer nuevas comprensiones de las vicisitudes de la democratización y la democracia en el presente contexto (Benschop, Krätke y Bader 1998: 25).

LA POLÍTICA Y “LO POLÍTICO”

El análisis de la interacción entre la cultura y la política es sin duda una valiosa manera de ingresar al estudio de los movimientos sociales, y el centrarse en la política cultural de los movimientos sociales como intentos, deliberados o no, de desestabilizar las culturas políticas dominantes demuestra ser muy fructífero, aunque a veces se tienda a exagerarlo, a lo largo del libro. Sin embargo, el énfasis en lo cultural, tal como se lo presenta en la introducción, no puede alejar la sospecha de que se está buscando una red más fina como para poder seguir “pescando” los

logros de los movimientos cuando haya pasado la euforia. Al mismo tiempo, parecería que con el pretexto de “transgredir las estrechas y reduccionistas concepciones de política, cultura política, ciudadanía y democracia vigentes tanto en la ciencia política establecida, como en algunas versiones del enfoque de movilización de recursos y de proceso político sobre los movimientos sociales” (p. 11), estarían arrojando al bebé junto con el agua sucia del bañador.

La cuestión central, a la que también alude David Slater en el capítulo 15, parece girar alrededor de la relación entre “política” y “lo político” y la definición de lo que se toma como “político”. Así, Slater elabora la distinción entre “política” y “lo político” y afirma que “(L)o político es entonces un movimiento vivo, una especie de ‘magma de voluntades en conflicto’ o antagonismos; es móvil y ubicuo, va más allá de los ámbitos institucionales de la política y hasta los subvierte” (p. 388). La política, en cambio, se puede considerar como la deseada pacificación de lo político o la instalación y la encarnación del orden y de las prácticas más aceptadas en una sociedad dada, y la despolitización es la tarea mejor establecida de la política (p. 386).

No obstante, Slater subraya que la imbricación entre lo político y la política deriva del debate

sobre las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y luego se adhiere a la reciente admonición de Ernesto Laclau en contra de los enfoques que equiparan la radicalización de la democracia a la profundización de la división entre la sociedad civil y el Estado, ya que, en muchos casos el avance de la democracia requiere de una legislación progresista que se oponga a intereses profundamente establecidos y arraigados en la propia sociedad civil. Las políticas democráticas requieren entonces de muchas y complejas acciones que disuelvan la distinción entre Estado y sociedad civil.

El problema teórico, y práctico también, es que, al menos según Slater, la “política” se ve como inherentemente represiva y normativa y, por tanto, obviamente provoca resistencia. Ese punto de vista al final dificulta la conceptualización de “política progresista” o empoderamiento recurriendo al uso del poder estatal y la legislación. Tales cuestiones dejan en claro que los temas de la “larga marcha a través de las instituciones” y la política de reestructurar y democratizar las instituciones requieren de una teorización crítica. En vez de limitarse a desechar los enfoques de la movilización de recursos y de los procesos políticos de Foweraker (1995) como reduccionistas y con la estrechez de miras propia de las teorías esta-

blecidas, sería más provechoso iniciar un debate crítico que abra una perspectiva para la política progresista.

PROGRESISMO

Aunque la noción de “progresista” se da generalmente por sentada a lo largo del libro, Kay Warren señala que se trata de una noción muy cuestionada, Jeffrey Rubin habla de “ambigüedad y contradicción” y Paulo Krischke añade que la interpretación de la democratización social y política conlleva la adopción de una escala comparativa para calibrar el “desarrollo político” y el aprendizaje social de los derechos democráticos (p. 417). Pero en ningún otro lugar de esta compilación se aborda este tema sistemáticamente, hecho que Mary Louise Pratt intenta convertir en una virtud cuando sostiene que los autores de las contribuciones se resisten a juzgar los movimientos que examinan bajo criterios de presunto progresismo mantenidos por intelectuales metropolitanos y sus lectores. En su opinión, los autores sí emiten juicios expresados por otros actores de la situación que estudian, pero sin tomar partido.

Creemos que un relativismo neopopulista como este no es de mucha ayuda y que en realidad no hace más que enmascarar posiciones, evitar el debate crítico y obstruir la elaboración de una

teoría “progresista” de los movimientos sociales. Es notable, por ejemplo, que aunque en el capítulo introductorio los editores observan que en los “movimientos sociales de derecha” también existe una política de lo cultural (p. 8), no desarrollan el punto a pesar de que podría tener importantes implicaciones para la conceptualización de los movimientos sociales⁷. Más allá, los editores simplemente afirman que “democratizar las relaciones sociales, ya sea al nivel micro del hogar, del barrio y de la comunidad o al nivel macro de las relaciones entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, ricos y pobres, es una meta declarada de los movimientos sociales latinoamericanos” (p. 18). Lo anterior revela una determinada conceptualización de los movimientos sociales, sesgada hacia los movimientos de alguna manera afines y que malamente darían lugar a una consideración y una teorización seria de los “movimientos sociales de la derecha” o de los “rasgos no democráticos de la sociedad civil”.

CIUDADANÍA

De manera similar, el libro contiene numerosas referencias a la “ciudadanía”, que en muchos casos parecen tomarla como una promesa que se debe cumplir y complementar con otros rasgos participativos, particularmente en

algunas de las contribuciones a la primera parte. Sin embargo, hace falta reencuadrar el debate sobre la ciudadanía, sus dimensiones y significados en un contexto de globalización. Es tan necesario realizar una discusión histórico antropológica de la ciudadanía y tratar de llegar a su especificación cultural, como también lo es una defensa política de la misma. También se echa de menos en el libro un análisis de la visibilidad cultural pública y la legitimidad de la ciudadanía y, lo que tal vez sea aún más importante, un esfuerzo para entender anteriores procesos de aprendizaje cultural, que a menudo han llevado a la estrategia política de renunciar a la ciudadanía, justamente porque ésta despoja al actor subalterno de precisamente los pocos mecanismos de que dispone para evitar el abuso y el maltrato por parte de los funcionarios estatales (Salman, en prensa). Otra omisión que ya señalamos antes es la de un análisis de las implicaciones de la política de identidad o las demandas de los movimientos indígenas, tema de la parte II del libro, sobre las nociones universalistas de ciudadanía vigentes, asunto altamente controvertido en varios países de América Latina.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En resumen, el libro no es tan equitativo ni presta igual atención a todas las corrientes principales del debate teórico como podría parecer. Su énfasis en la imbricación entre cultura y política no sólo que no siempre es tan convincente ni tan innovador como se presagiaba, sino que ha impedido una discusión más sistemática de contribuciones como la del enfoque de la movilización de recursos y el proceso político. Aunque podría parecer que el vocabulario de esta corriente no es el más apropiado cuando se trata de imaginar el vínculo entre cultura y política, sus contribuciones teóricas más recientes (McAdam, McCarthy y Zald, eds., 1996; Johnston y Klandermans, eds. 1995) no sólo incluyen explícitamente el "recurso cultural" y el "marco cultural" como componentes de sus modelos analíticos, sino que además tienen algo que decir sobre las estructuras de las oportunidades políticas, contextos de movilización micro y estructuras de movilización. Desechar esta corriente ha significado, en el caso de este volumen, dejar de lado los procesos de organización desde abajo y de

formación de los movimientos en el esfuerzo de "culturalizar" los asuntos políticos y materiales alrededor de los cuales se han formado muchos movimientos.

No pocas contribuciones reflejan la dificultad de ceñirse al tema central dado, con el resultado de inserciones forzadas y caprichosas del término "cultura" en análisis de los movimientos sociales contemporáneos en América Latina que por lo demás son lúcidos. El tema común, entonces, no ha sido adoptado con la misma pasión por todos los autores de las contribuciones. Al mismo tiempo, algunas de las elaboraciones teóricas parecen replantear su interés por la relación entre el Estado y la sociedad o entre la política y los movimientos sociales en unos términos cada vez más oscuros y con la pretensión de una "profunda teorización". Al mismo tiempo que justificadamente llaman nuestra atención, o en algunos casos hasta la exacerban, sobre la ambigüedad, la heterogeneidad, la multiplicidad, la pluralidad, las tierras de nadie y la precariedad de los arreglos y conceptos existentes, las contribuciones teóricas apenas nos llevan más allá de la sensación de vértigo (Slater, p.

7. Castells (1997) intenta tomar en cuenta dichos "movimientos de la derecha".

386) frente a la tarea de repensar, re-visionar y reimaginar nuestro cada vez más precario aparato conceptual. No estamos seguros de que las exploraciones de las zonas de penumbra nos lleven más allá de un mero registro de lo híbrido y las ambigüedades.

Una última observación crítica tiene que ver con la sugerencia, implícita en el libro de que se aborda básicamente todos los temas relevantes dentro del debate sobre los movimientos sociales y de que da un salto cualitativo al insertar el concepto de cultura desarrollado en los estudios culturales, lo que no hace justicia a importantes contribuciones recientes como *Theorizing Social Movements*, de Joe Foweraker y a contribuciones más antiguas como *Injustice- The Social Bases of Obedience and Revolt*, de Barrington Moore.

El libro, sin duda alguna, debería ser lectura obligada para todos aquellos que siguen estudiando los movimientos sociales en América Latina, y con mayor razón aún para aquellos que han dejado de hacerlo a la luz de los "decepcionantes" resultados. Este libro debería estar en las estanterías de todo aquel que trabaje sobre el tema, aunque tampoco hace falta deshacerse de los otros libros acumulados antes.

BIBLIOGRAFÍA

Arturo, Julián (compilador), 1994: *Pobladores urbanos - Ciudades y Espacios*, Bogotá: TM-Editores.

Assies, Willem, Gemma van der Haar y André J. Hoekema (eds.) (en prensa): *The Challenge of Diversity: Indigenous Peoples and Reform of the State in Latin America*, Amsterdam: Thesis Publishers.

Bader, Veit et al (eds), 1998: *Die Wiederentdeckung der Klassen*, Hamburgo: Argument Verlag.

Benschop, Albert, Michael Krätke y Veit Bader, 1998: "Eine unbequeme Erbschaft: Klassenanalyse als Problem und als wissenschaftliches Arbeitsprogramm", en: Bader, Veit et al (eds): *Die Wiederentdeckung der Klassen*, Hamburgo: Argument Verlag, pp 5-26.

Castells, Manuel, 1997: *The Power of Identity*, Malden MA, Oxford: Blackwell.

Castells, Manuel, 1983: *The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements*, Berkeley: University of California Press.

Cohen, Jean L. & Andrew Arato, 1992: *Civil Society and Political Theory*, Londres/Cambridge: MIT-Press.

Escobar, Arturo y Sonia E. Alvarez (eds.), 1992: *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy & Democracy*, Boulder: Westview Press.

Featherstone, Mike, 1988: "In Pursuit of the Postmodern: An Introduction", en: *Theory, Culture & Society*, Vol. 5, no. 2-3.

Foweraker, Joe, 1995: *Theorizing Social Movements*, Londres: Pluto Press.

Johnston, Hank y Bert Klander-mans, 1995: *Social Movements and Culture*, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe, 1985: *Hegemony & Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*, Londres: Verso.

McAdam, Doug, John D. McCarthy y Mayer N. Zald (eds.), 1996, *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framings*, Cambridge, Nueva York, Melbourne: Cambridge University Press.

Padilla, Guillermo, 1995: "What Encompasses Goodness: the Law and the Indigenous People of Colombia", en: *The Woodrow Wilson Center: Ethnic Conflict*

and Governance in Comparative Perspective, Latin American Program Working Paper no. 215, Washington D. C.

Moore Jr., Barrington, 1978: *Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt*, Nueva York: M.E.Sharp Inc.

Raschke, Joachim, 1987: *Soziale Bewegungen - Ein historisch-systematischer Grundriss*, Frankfurt del Meno/Nueva York: Campus Verlag.

Salman, Ton, 2000 (en prensa): "Politico-cultural models and collective action strategies: the

pobladores of Chile and Ecuador in search for effective political pressuring and lobbying", en: Luis Roniger y Tamar Herzog (eds.): *Collective Identities, Public Spheres and Political Order. Latin American Dynamics*, Sussex Academic Press.

Stark, Jeffrey (1998): "Globalization and Democracy in Latin America", en: Felipe Agüero y Jeffrey Stark (eds.): *Fault Lines of Democracy in Post-Transition Latin America*, Miami: North-South Center Press, pp67-96.

Van Cott, Donna Lee (en prensa): *The Friendly Liquidation of*

the Past: Democratization and Constitutional Transformation in Latin America, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Vélez-Ibañez, Carlos G., 1991: *Rituals of Marginality - Politics, Process, and Culture Change in Central Urban Mexico, 1969-1974*, Berkeley/Los Angeles/Oxford: University of California Press.

Warren, Kay B., 1998: *Indigenous Movements and Their Critics - Pan-Maya Activism in Guatemala*, Princeton University Press.

Lorgio Vaca. Cabeza de ayoreo. (Detalle Radioaficionados)



La visión de Llameros y Caseros

Alison Spedding



*Una reseña crítica del libro de
Michael Schulte sobre la
economía regional callawayana*

Jesús dijo: “Los pobres siempre estarán con ustedes”, una observación que debe calentar los corazones de todos los que laburan en las hONGos (así llamadas, porque aparecen de la noche a la mañana y por lo general en los lugares más podridos) y declaran su dedicación a la causa del desarrollo en Bolivia. Este brazo de la lucha contra la pobreza proporciona un caudal constante de “pegas”¹ y también es la base para investigaciones que justifican su propio actuar. El hecho de que muchos de los participantes en estas actividades tengan buenísimas intenciones, antes con transfondo izquierdista y ahora con aditamentos ecologistas, feministas y

comunitaristas, no cambia la naturaleza fundamental de su empresa ni el paternalismo que subyace en el fondo de su conducta. Este paternalismo es a veces abierto, pero otras veces puede disfrazarse bajo formas de vanguardismo o, más francamente, de una búsqueda de colaboradores más aptos para la élite dirigente. El barniz teórico de preferencia varía, pero las posiciones de base son sorprendentemente similares.

Aunque quizás esto no sea tan sorprendente, dado que se trata de una aplicación de teorías europeas, sean estas marxistas, neoclásicas o de cualquier punto del espectro entre estos dos extremos. Se debe notar que en tér-

minos de la antropología económica, entre formalistas y sustantivistas, Marx es tan formalista como Keynes.

El estudio que reseñamos (“Llameros y Caseros”) hace mucha referencia a Karl Polanyi, fundador de la escuela sustantivista y a su seguidor Marshall Sahlins. Al mismo tiempo utiliza como barniz principal la versión de la teoría de sistemas propuesta por Niklas Luhmann. El autor no declara su posición política personal, pero hay resabios que sugieren que le gusta la del Partido Verde alemán, sobre todo cuando opina que “se puede pensar en (...) reforzar la economía de subsistencia mediante mayores im-

1. Forma popular de decir empleos o puestos de trabajo.

puestos sobre los recursos energéticos" (p. 47). Esto puede ser factible en Berlín, pero si alguien que escribe así, vive en Bolivia, evidentemente no vive en la Bolivia de los gasolinazos.

El autor busca "un desarrollo de la región más equitativo en lo social y menos destructivo hacia la naturaleza" (p. 79), al respecto me es difícil imaginar cuán menos destructiva hacia la naturaleza podría ser lo que actualmente se hace en Charazani y resulta tan valorado en el libro. También opina, como es habitual, que un obstáculo para el desarrollo del Tercer Mundo es "la venalidad". Es innegable que la ética protestante, presentada aquí en la versión seglar como "actitudes que (...) se suelen llamar "civismo" o "virtudes éticas" (p. 48), brilla por su ausencia en Los Andes, pero la venalidad de los políticos y las "relaciones mercantiles donde menos se las espera" no es monopolio de los países en desarrollo, como ha demostrado el reciente escándalo en Alemania en torno a las donaciones ilegales en favor del Partido Demócrata Cristiano (CDU), escondidas por su jefe Helmut Kohl.

En la región callawayá, Schulte busca identificar una ética económica (pp. 49-50) que, al parecer, es prescriptiva y descriptiva al mismo tiempo: "Para nosotros la cuestión es si la economía campesina aporta aspectos interesantes para donar o civilizar el sistema de la economía de mercado" (p. 72). Esta es la misma idea de fondo que pregonar un "Retorno al Ayllu", un "Ayllu universitario" (Untoja), o en su versión más sofisticada (García Linera), una "forma comunidad" ("cuatro patas buenas"), opuesta a una "forma valor" ("dos patas malas")². Se le puede hacer la misma pregunta a todos: de existir estos aspectos positivos, ¿cuántos de ellos son parte de su propia condición campesina y cuántos podrían ser universalizados y trasladados a otros espacios sociales?

Al menos Schulte, a diferencia de Untoja o García Linera, intenta buscar la salvación no capitalista en una región concreta y no una comunidad abstracta desubicada en el tiempo y el espacio, aunque ninguno de ellos estaría a su vez tan ilusionado como para decir que "una forma moderna y reciente de la comu-

nidad en Bolivia es el municipio descentralizado" (p. 76).

TRES COMUNIDADES

En realidad Schulte no estudia una región³, sino tres comunidades:

- Altarani, alpaquera de la puna.
- Moyopampa, de altura intermedia entre puna y valle, ganadera y agrícola con una especialización en la cerámica ya cayendo en desuso.
- Chajya, valluna, agrícola y callawayá, aunque muchos de los verdaderos callawayas ya residen en La Paz y esta especialización regional también parece estar en vías de desaparición.

No sólo la ecología es diferente entre estos lugares, sino también la organización social. En particular en el caso de Chajya, los residentes han logrado mantener la propiedad de sus tierras, aunque ellos mismos no las trabajan y las entregan bajo diversos arreglos a personas sin tierra llamadas *yanapacos*, que defienden los intereses de los residentes frente a los originarios (propietarios) que siguen en el lugar. Chajya también incluye

2. "Cuatro patas buenas, dos patas malas" es el tema de las ovejas que repiten hasta sofocar cualquier intento de debate o disidencia en "La Granja de los Animales" de George Orwell, una sátira sobre la revolución soviética que también satiriza los movimientos de la izquierda en general.

3. Consta que la región callawayá no existe como una realidad subjetiva, y sí había cierto grado de integración regional a través de los intercambios intercológicos. Esto ha decaído mucho desde que las carreteras lo conectaron con los centros urbanos.

un pueblo, mientras Altarani y Moyopampa son comunidades, es decir, asentamientos dispersos, lo que implica un estatus político y social distinto. Muchas de las características particulares de Altarani, cuyos habitantes están “más ligados al mercado” (p. 90), son la muestra actual del hecho de que los ganaderos de altura siempre eran los más ricos. Su ganado, como medio de transporte, les permite controlar las redes de intercambio. Son ellos los que van a ofrecer bienes en trueque a los valles y no a la inversa, y la flexibilidad de los rebaños con referencia a la mano de obra permite que si son hábiles pastores, puedan reunir cientos y hasta miles de animales, mientras las posibilidades de expansión de la producción agrícola son mucho más restringidas con referencia a la mano de obra y a la tierra. Incluso el sistema de tenencia de pastizales es más flexible, en vez de ser limitado a las parcelas sobre las cuales uno puede aseverar posesión y ocupar extensiones mayores de pastoreo según los rebaños que tiene.

Todo esto es cierto, pero no es nada novedoso, y los datos de Chajaya contradicen la aseveración de que en “la región

callawayá, la propiedad se establece sólo a través del trabajo” (p. 127), porque dos páginas más tarde los residentes de Chajaya aparecen esgrimiendo sus títulos y en la página 131 surgen los “cargos sindicales y festivos” como otro requerimiento para tener derecho a la tierra³.

También encontramos el panorama conocido de monolingüismo femenino en idiomas nativos, una menor educación formal para las mujeres que para los hombres y su consiguiente marginalización de posiciones de autoridad y participación en sindicatos, cooperativas y similares (pp. 142-147), aunque el autor ignora la cuantiosa producción sobre relaciones de género surgida en los últimos años. Quizás considera que eso es merecido por ser mayormente superficial, repetitiva y quejumbrosa, aunque la única publicación que cita como fuente sobre la famosa complementariedad de los géneros es “Filosofía andina. Fundamentos, Alteridad y Perspectiva” de Jorge Miranda (p. 221), que no es exactamente un clásico en la materia.

¿Qué otras fuentes etnográficas ha utilizado Schulte? Sus referencias sobre economía campesina en Los Andes son tres:

Platt y Harris sobre el Norte de Potosí (Laymi y Macha en los años 70) y para su propia región de estudio, la tesis inédita en inglés de Caro sobre Ulla Ulla, referida a la situación alrededor de 1980. Existen publicaciones recientes que analizan la economía campesina en la región de Charazani, pero no las cita, y tampoco considera algunos excelentes estudios sobre otras partes del país, como el trabajo sobresaliente de “Raquaypampa” escrito por Luz María Calvo y otros.

Según su presentación, la perspectiva de Caro es la de la resistencia frente al mercado: “La estructura no-mercantil está relacionada con el control de la diferenciación social en la comunidad...una limitada venta de productos permite a la comunidad defender su tierra y mantener el control sobre su trabajo” (por “trabajo” se debe entender “mano de obra”; sospecho que la palabra original era *labour* no *work*) y una clave es “la exclusión del dinero de la producción de subsistencia” (p. 72 y ss.). Habla de “Tener éxito en no mercantilizarse”. Ningún campesino lo consideraría así, y aunque es cierto que ellos intentan minimizar el uso del dinero en la producción⁴, pero minimizar no

4. Por ejemplo, reduciendo al mínimo los insumos como los agroquímicos que necesariamente hay que comprar, tratando de conseguir mano de obra extra-doméstica a través de arreglos que no implican tener que cancelar en efectivo, etc.

es lo mismo que excluir. La venta de productos es limitada por las condiciones de producción y mercado, aunque también por las necesidades limitadas, y no porque se rechaza intencionalmente la venta. Lo que el expendio de productos sí permite, en caso de tener algo vendible, es evitar la venta de mano de obra, el otro recurso alternativo para obtener dinero. Si tienen la oportunidad de escoger entre los dos, los campesinos generalmente prefieren vender productos antes que mano de obra jornaleando en la región o mediante la migración laboral temporal y estacional, porque al vender sus productos mantienen la autonomía laboral, un valor importante para ellos, que Schulte nunca menciona como parte de su “ética económica”.

El libro “Llamereros y Caseros” estudia detenidamente los productos que se venden y los trabajos temporales realizados, pero los mete en la misma bolsa como parte de la “economía de mercado” y no considera que representan dos formas totalmente diferentes de articularse con ese mercado, por lo menos desde la perspectiva de los campesinos, que debe asumir como substantivista que es.

Es totalmente ridículo pensar que uno está presentando una perspectiva andina al decir que la articulación de la economía

campesina con la capitalista representa una “complementariedad de opuestos, que es un principio básico del mundo andino” (p. 275).

LUGARES COMUNES

Hasta aquí, entonces, no hay más que lugares comunes, incluso lugares comunes repasados superficialmente. Los “sistemas autopoieticos” de Luhmann no iluminan nada nuevo, aunque puede ser que un lector más acucioso que yo, pueda sacar conclusiones interesantes de diagramas como las de las páginas 63, 80 y 193 a la 195. Schulte identifica tres “tipos de economía” (p.44):

- “De subsistencia” o reproducción simple de la unidad doméstica.
- “De mercado”: las transacciones con dinero, dirigidas a la ganancia y/o la reproducción ampliada de la unidad doméstica, y también cualquier actividad considerada “empresarial”.
- “Doméstica-comunitaria”, que representa “relaciones económicas básicas”, aunque al parecer es lo que convencionalmente se denomina como la estructura social o cultura, donde ingresan elementos como el sistema de parentesco y la religión, o sea lo no-económico. En la página 45 es el “ámbito ideológico-moral” y en la 47,

el “seguro social de la economía de subsistencia”.

Como explica Sahlins con relación a este último, en un sistema de economía doméstica las relaciones de parentesco y los ritos, fungen como relaciones de producción (es por eso que Godelier lo denomina “modo de producción-parentesco”), pero tomar esto como motivo para clasificarlos directamente como económicos es una especie de reduccionismo a la ultranza.

Que estas tres economías sean “interdependientes en su constitución” es porque evidentemente se realizan dentro de la estructura social, e incluso, si uno no es seguidor de Meillassoux, se considera que el parentesco o la religión, aunque coherentes con la economía, son independientes en su constitución, mientras cualquier componente o subsistema propiamente económico es interdependiente con los demás elementos económicos. Schulte considera que sus tres economías son “independientes en su funcionamiento” (p. 62). Esa es otra aseveración desmentida por sus datos como cuando considera que debido al nivel elevado de migración laboral temporal (economía “de mercado”), en Chajaya se ha cambiado la técnica de siembra (economía “de subsistencia”) debido a la falta de mano de obra masculina.

MÉTODOS

Veamos ahora los datos que usa el autor para aplicar su marco teórico. Dice que los métodos utilizados eran “la observación participante, las entrevistas, las encuestas y los talleres comunales” (p. 85). Hace los saludos a la bandera obligatorios en el mundo hONGO de hoy en día, referidos a “lograr la máxima participación posible de los comunarios”, una “investigación compartida” y una “metodología reflexiva”. Al hacerlo, no consideró “la encuesta como técnica central del trabajo, sino como un instrumento adicional para proporcionar un marco de cuantificación para los estudios de caso” (p. 89) y pone en evidencia las dificultades prácticas de implementarla en las tres comunidades, sobre todo en Chajaya donde sólo logra aplicarla a 15 personas. En Altarani obtuvo mayor cobertura a cambio de un pago al sindicato comunal para montar una oficina, y en Moyopampa la mayoría de los comunarios respondió a cambio de un pago individual. Como resultado, el alcance de la encuesta es muy variable según la comunidad e incluye a pocas mujeres (p. 119).

Se hicieron 27 estudios de caso sobre familias (se entiende

unidades domésticas) individuales y es de suponer que éstos proporcionarían mejores datos sobre las estrategias económicas. Sin embargo hay una sola referencia que detalla un estudio de caso (en Altarani: la familia Mamani, pp. 245-247) y la masa de datos presentados procede precisamente de la encuesta. Se basan en los estudios de caso sólo los capítulos sobre egresos e ingresos, sumamente difíciles de cuantificar en una economía campesina, donde nadie lleva la contabilidad. Al mismo tiempo se utiliza la encuesta para cuantificar factores como la “importancia de las relaciones de parentesco”, algo tan difícil de medir como la creencia religiosa, que también trata de ser medida a través de la pregunta sobre la “importancia” que se da a las ofrendas a la tierra. No se sabe qué está pensando el informante cuando dice que su padre es el pariente “más importante”, de quien has heredado más tierra o ganado, con quien te ves a diario, a quien consultas cuando tienes un conflicto con otro comunario, con quien tienes la relación más cariñosa... mientras el hecho de que pocas personas dicen que su madre es la pariente más importante probablemente tiene que ver

con el número reducido de mujeres encuestadas y el matrimonio virilocal, que quiere decir que aunque una mujer quiera más a su madre, después de casarse ya no la ve a diario.

Es interesante el peso de los hermanos (p. 158), que coincide con mi propia interpretación del parentesco andino⁵, pero no se analiza como se expresa en la práctica (¿quizás a través de la colaboración laboral más constante y regular y la asistencia en otras actividades sociales?), aunque los estudios de caso deberían proporcionar datos sobre la interacción social y las actividades conjuntas que explicarían qué significa realmente un “pariente importante” para un comunario. Cuando se pasa a indagar sobre el compadrazgo “más importante” (pp. 159-163), no se distingue entre el dado (bautizo al hijo de otro...) y el pedido (la persona que ha bautizado a mis hijos) y el autor parece ignorar el hecho de que en cuanto al matrimonio, los padrinos de uno pueden ser muy importantes, pero la relación de compadrazgo, establecida formalmente entre los cuatro consuegros y los padrinos es débil, mientras en lo referente al bautizo, la relación padrino-ahijado puede ser muy débil, pero

4. Ver David Llanos y Alison Spedding, 1998, *Derechos sobre la Tierra*. Lo que la Ley INRA no dice, La Paz, Tinkazos #1.

5. Ver Spedding, 1999, “Breve Curso de Parentesco”, UMSA/IDIS, Cuadernos de Investigación # 6, pp. 42-43.

también, muy fuerte, dependiendo de las personas involucradas. Muchas veces la relación entre los padrinos y los padres del ahijado, es decir, los compadres, es lo que más importa. La poca importancia que se da a las relaciones de *rutucha* probablemente se debe a que en esta región generalmente se reduplica un compadrazgo existente y no se establece una relación independiente. La tabla 14 demuestra esta estructura con claridad, al mismo tiempo que es probable que cuando el comunario responde, está pensando en cierto padrino o compadre que él tiene y define en “importancia” según esas relaciones puntuales. Una vez más, sólo los estudios de caso podrían aclarar en qué realmente consiste esta “importancia”, pero de esto no nos enteramos.

Es de suponer que el sistema de parentesco es básicamente el mismo en las tres comunidades y por lo tanto es correcto unir los datos en este rubro. Pero esto no es válido cuando se pasan a considerar las relaciones de *ayni* (intercambio de trabajo) y *mink'a* (pago en dinero o en productos). Dentro de la agricultura en la provincia Bautista Saavedra, la *mink'a* significa principalmente pago en productos durante la cosecha, mientras otras etapas como la siembra o el desyerbe se realiza en *ayni*, y, ocasionalmente, pagando un jornal en dinero.

No existe cosecha de animales, por lo tanto, la *mink'a* ganadera es muy distinta y no hay razón para unir estas categorías en una sola tabla (p. 167). Tampoco tiene sentido ofrecer un promedio de días en el año prestado y recibido, para el total de 99 encuestados, en un intercambio pastoral llamado *awatjasiña* (pastear para otro con pago en ganado, alimentación y alojamiento) cuando “esta forma de trabajo es típica sólo de la ganadería alpaquera” (p. 201) y nunca es practicada por agricultores. Se debe presentar el promedio sólo para el subconjunto de los alpaqueros.

El *ayni* mismo está lejos de ser un fenómeno unitario, los hay paralelos (entre dos varones y dos mujeres), cruzados (entre varón y mujer, a veces un día por dos y otras veces un día por un día, según el trabajo en cuestión) y luego hay el *ayni* festivo en cerveza o en eventos infrecuentes como los techados de casa... Hasta el acompañar a alguien en una fiesta puede ser visto como *ayni*. Otra vez, no se sabe a cuáles de estas diversas transacciones, los informantes daban mucha, poca o ninguna importancia. Sin embargo el autor no comprende las etnocategorías del trabajo, porque piensa que *yanapa* (ayuda sin remuneración, generalmente entre parientes cercanos) es una forma de *mink'a* (p. 267) y tam-

co entiende la teoría económica si cree que cuando los acomodados contratan más mano de obra, se da “una redistribución... hacia los más pobres” (p. 232). No importa lo generoso que parezca el pago en productos durante la cosecha, es evidente que el cosechador recibe menos que la cantidad que ha cosechado y que en cualquier otro contexto el pago del jornal siempre representa menos que lo producido durante ese jornal. Ese decir, se explota la *mink'a* por definición y los mismos jornaleros campesinos lo saben muy bien.

Las ocasiones en que se recibe un pago que aparentemente excede en generosidad se refieren a, por ejemplo, un pariente residente que ha venido a ayudar en la cosecha. La generosidad consistirá en considerar que el modo de producción doméstico depende de que los miembros no exijan “que se mida su aporte a la familia como en un trueque o una venta de servicios” (p. 64). Es cierto que no se anotan o suman los aportes día por día, pero los miembros sí saben quién ha aportado y cuánto, y estos aportes son reconocidos cuando se llega a dividir la herencia, según quien ha “ayudado” más, o cuando un miembro considera que su aporte no ha sido reconocido adecuadamente puede llegar a abandonar la casa y romper relaciones con su familia.

Al fin, entonces, la teoría de sistemas no ha servido para proporcionar una perspectiva novedosa y la metodología reflexiva y participativa tampoco ha eliminado visiones idealizadas de la comunidad ni el paternalismo tenocrático. Las sugerencias incluyen “un proyecto de apoyo crediticio sin dinero en efectivo, puesto que los créditos (...) suelen ser desviados de sus fines productivos” (p. 282)). Es decir, como es sabido, se utiliza el dinero para pagar la farra en el bautizo del hijo, o sino, en vez de invertir en el hato de alpacas, se compra un camión y esto demuestra que los campesinos no son lo bastante reponsables como para recibir dinero en efectivo. Por eso, plantea Schulte, habría que darles sólo lo que se piensa que deben comprar. Además, si uno considera que el parentesco es parte de las relaciones económicas básicas y éstas a su vez son un seguro social, se deberían dar

cuenta de que las farras en reuniones familiares son precisamente una inversión en estas relaciones y por lo tanto, tan “productivas” como una bolsa de fertilizante químico o una alpaca macho reproductor de raza mejorada.

El hecho de que la diferenciación social dentro de la comunidad sea limitada no se debe a la resistencia, al control social o a la redistribución de los acomodados, sino es consecuencia estructural de la naturaleza centrípeta de la economía campesina, donde los más pobres se descampesinizan proletariándose y los más ricos se descampesinizan aburguesándose, con el factor adicional de que, debido a las condiciones técnicas de la agricultura y ganadería en una región como Bautista Saavedra, esta descampesinización avanza junto a la salida de la comunidad a otro lugar, generalmente urbano. Esto ha sido demostra-

do hace décadas, por ejemplo, en el estudio de Glyn Custred sobre el trueque entre llameros del Perú, incluido en la compilación de Alberti y Mayer⁶, citado por Schulte. Custred muestra que el trueque no es “un lujo” (Schulte, p. 234) sino una actividad económica con costos, beneficios y requerimientos y que los que no participan son los más pobres, porque no tienen ni las llamas ni la mano de obra familiar necesarias, y sí los más ricos, porque se meten plenamente a la economía capitalista con miras a convertirse en camioneros. Después de tantos años no debería ser necesario seguir repitiendo estos puntos, pero dados los intereses económicos que hay en seguir manteniendo hONGos y otras organizaciones que buscan “el desarrollo” de los campesinos, tampoco debería ser sorprendente que se sigan produciendo textos como éste, como soporte ideológico y justificación.

6. Giorgio Alberti y Enrique Mayer (comps.), 1974, Reciprocidad e Intercambio en Los Andes peruanos, Lima, IEP.

LA AMIGABLE LIQUIDACIÓN DEL PASADO

Willem Assies

Donna Lee Van Cott:
The Friendly Liquidation of
the Past:
*The Politics of Diversity in Latin
America*,
Pittsburg: University of
Pittsburg Press, 2000. El
Colegio de Michoacán, Centro
de Estudios Rurales.

El reconocimiento formal por recientes reformas constitucionales de la conformación multiétnica y pluricultural de las sociedades latinoamericanas es un fenómeno notable y hasta la fecha poco estudiado. La autora que reseñamos, Donna Lee Van Cott, observa que cuando empezó su proyecto de investigación en 1996, sólo algunos Estados habían aprobado tales reformas. Entre tanto el debate sobre el tema se ha difundido y nuevas reformas han sido realizadas, lo que sugiere que quizás estamos pre-

senciando la emergencia de un “modelo regional multicultural”.

El libro trata sobre las reformas constitucionales en dos países: Colombia y Bolivia. En ambos casos, dichos cambios fueron motivados por la conjunción de una crisis de representación, participación y legitimidad, que convenció a las élites políticas que los costos de omitir una reforma probablemente serían más altos que los de mantener el *statu quo*.

Conjunciones como estas crearon ambientes favorables para que los pueblos indígenas influenciaron las reformas en cuestión. Coincidiendo con la necesidad de una renovación simbólica y la búsqueda de un nuevo pacto social, el reconocimiento del fracaso del proyecto de construir un Estado-nación criollo fue una fuente de renovada legitimidad moral de “lo indígena”. Nuevas ideas alrededor de “la fuerza y la unidad en la diversidad” se abrieron entonces camino hacia un nuevo “constitucionalismo post-nacionalista”,

dentro del cual se insertaron los derechos colectivos indígenas y dentro del cual fueron incorporados nuevos mecanismos de democracia participativa.

Para estudiar los procesos de reforma constitucional, la autora propone un modelo de tres etapas como marco para los estudios de caso. Después de una “conjunción constitucional”, viene la “etapa creativa” de reforma constitucional, y luego la “de implementación”.

DOS CIRCUNSTANCIAS DISTINTAS

El contexto para el reconocimiento del carácter pluricultural de la sociedad fue muy diferente en los dos países. En Colombia, los indígenas sólo conforman un 2% de la población. En Bolivia, los pueblos indígenas altiplánicos, junto a los dispersos de las tierras bajas, llegan al 60% de la población. En ambos países, las movilizaciones de las últimas décadas contribuyeron a un rápido incremento de la visibilidad de

los pueblos indígenas y también fortalecieron su habilidad para aprovechar las oportunidades de una nueva constelación política.

En los dos países también fue distinta la conjunción para las reformas. En Colombia, la violencia creciente y el atolladero del sistema tradicional bi-partidario provocaron una campaña dentro de la sociedad civil en pos de una reforma constitucional, que encontró apoyo en el candidato presidencial César Gaviria, mandatario electo en 1990. Más tarde, en el mismo año, fue elegida una asamblea constituyente, dentro de la cual, además de los partidos tradicionales, también obtuvieron una representación significativa grupos de la guerrilla desarmada y los movimientos sociales, entre otros dos delegados indígenas que lograron un prominente rol en el proceso. Éste devino en una nueva constitución para 1991.

Por su parte, Bolivia vivió el retorno a la democracia en 1982, y después sufrió una política de duros ajustes estructurales, implementados bajo pactos políticos bastante precarios. La elección de Gonzalo Sánchez de Lozada junto al intelectual aymara Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente, abrió paso en 1993 a una nueva generación de reformas, luego del tratamiento anterior vía “shock”. En su conjunto, a diferencia de Colom-

bia, la reforma en Bolivia fue un proceso “desde arriba hacia abajo”, aunque es cierto que el debate social sobre el reconocimiento de la naturaleza multiétnica y pluricultural de la sociedad boliviana había crecido en fuerza, y tuvo su eco dentro de élites con inclinación reformista. En 1994, la Constitución boliviana fue enmendada. Ambas cartas magnas nuevas lograron incluir importantes derechos étnicos.

En el caso de Colombia la implementación de la nueva constitución resultó una tarea muy difícil y prácticamente se estancó durante la presidencia de Samper, mandatario electo en 1994. Los avances más importantes se han logrado en el área de la reforma judicial, por medio de, entre otros, la instalación de una Corte Constitucional, un Defensor del Pueblo de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la Nación. Con respecto a derechos étnicos, la nueva constitución contribuyó a consolidar territorios indígenas en la forma de “resguardos” y a la transferencia de recursos. Sin embargo, la implementación de un nuevo régimen territorial con competencias más amplias para las autoridades indígenas se estancó. Las comunidades negras de la costa pacífica también obtuvieron algunos nuevos derechos. La Corte Constitucional jugó un papel crucial cuando pasó a sos-

tener los nuevos derechos, especialmente mediante la popular “acción de tutela”, un simple mecanismo de apelación para ciudadanos comunes contra las violaciones de sus derechos elementales. Además, dado que falta una legislación de implementación, la Corte desarrolló criterios para el reconocimiento de una “jurisdicción especial indígena”, lo que les permitió a estos pueblos juzgar asuntos civiles y criminales de acuerdo con sus propios procedimientos y normas.

En Bolivia, uno de los pilares del paquete de reformas propuesto por Sánchez de Lozada fue una política de “participación popular”. A ello se sumó el reconocimiento de las autoridades indígenas locales, que fueron importantes componentes de una política de descentralización y municipalización. En el proceso se crearon 314 municipios con lo que se dio fin a un sistema centralista vigente hasta esta fecha. Los montos municipales consignados en las transferencias intergubernamentales crecieron substancialmente y fueron distribuidos con más equidad entre los municipios. La población local, incluyendo a los pueblos indígenas, fue convocada a participar en la gestión municipal mediante los llamados comités de vigilancia. Otras reformas en beneficio de los pueblos indígenas

fueron realizadas en los campos de legislación agraria y la educación, mientras se inició también una reforma judicial.

Todas estas reformas recibieron una buena acogida en el mundo de los donantes internacionales. Sin embargo, aunque contaron con amplio respaldo, su implementación fue paralizada en el actual gobierno de Hugo Banzer, presidente electo en 1997. El discurso estatal sobre la participación y la multiculturalidad fue abandonado y las prioridades cambiaron. La comunidad internacional de donantes se ha mantenido, en buena medida, callada, aparentemente porque las reformas económicas y la erradicación de las plantaciones de coca fueron considerados más importantes.

En el último capítulo, la autora busca evaluar el impacto de las reformas a través de dos hilos conductores: la participación y la representación, por un lado, y los efectos de medidas y derechos especiales para pueblos antes marginados, por el otro. Además, toma en cuenta factores adicionales como la desigualdad y la violencia. En cuanto a la participación y la representación, los resultados de las reformas son ambiguos, aunque Bolivia parece haber logrado algo más que Colombia, donde la violencia impidió mayores avances.

Por otra parte, la reforma judicial en Colombia ha contribui-

do a frenar los excesos de los entes ejecutivos y legislativos del gobierno y ha consolidado la jurisdicción indígena. En ambos países, la consolidación de un modelo multicultural orientado a la defensa de los derechos indígenas sigue siendo precario debido, en parte, a los retrocesos políticos después de la aprobación de las reformas, y también a la todavía modesta capacidad de las organizaciones indígenas de asumir poderes antes monopolizados por el Estado. Además, en ambos casos, las reformas no fueron acompañadas por substanciales redistribuciones. Las políticas económicas fueron cuidadosamente apartadas del proceso de reforma, que incluso reforzó el modelo neoliberal. En Colombia, resultó imposible frenar la violencia, lo que inhibió un mayor progreso. Por todo eso, las reformas constitucionales en ambos países están en una etapa delicada. La euforia inicial se ha disuelto y las perspectivas para una transformación democrática, capaz de contribuir a su consolidación, son inciertos.

A pesar de estos resultados decepcionantes, Van Cott argumenta que es posible reconocer y asumir estos desafíos sin por ello desestimar las nuevas constituciones como si sólo fueran retórica. Nuevos derechos fueron formulados y pueden funcionar como base para futuras

movilizaciones. Además, como señala el último capítulo, el modelo de relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, planteado en Bolivia y Colombia, está siendo adoptado por varios otros países latinoamericanos.

Este estudio, meticulosamente informado y bien escrito, es una contribución pionera en el análisis comparativo de las perspectivas, dilemas y estancamientos del emergente constitucionalismo multiculturalista en América Latina. Tomando como enfoque la perspectiva de la transformación democrática, el documento dirige su atención a los problemas de consolidación una vez lograda la democratización formal y además acentúa los aspectos normativos del esfuerzo por apuntalar la legitimidad estatal. El estudio destaca que las transiciones en América Latina en realidad fueron transiciones de doble cara, tanto hacia la democracia como hacia economías del mercado. A través de todo el libro, este doble carácter es un punto central, y no deja ninguna duda de que la política económica fue excluida del proceso de construcción de las democracias más participativas.

Por otra parte, necesitamos recordar que el neoliberalismo incluye un importante componente cultural y moral. Si términos como "participación" y "la ley gobierna" son consensuados

por diferentes actores, la comprensión de estas palabras puede ser disperso, lo que, quizás ayuda a entender la aplicación de ciertas políticas que van en contra de las expectativas generadas por las mismas reformas consti-

tucionales. Antes de ser elegido vicepresidente de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas contribuyó al desarrollo de una teoría katarista para “ver la realidad con los dos ojos”, haciendo hincapié en la asociación entre la lucha de los

pueblos indígenas contra la opresión étnica y su lucha como una clase campesina explotada. Una vez en el cargo de vicepresidente del gobierno de Sánchez de Lozada, fue criticado justamente por “haber cerrado un ojo”.

Lorgio Vaca. Niña Montando un burro. (Fragmento mural de ENDE)



Consejos para escribir en *T'inkazos*

Si usted ha decidido escribir en esta revista, ha tomado una buena decisión. Su artículo llegará a un amplio público nacional y extranjero interesado en las ciencias sociales y en la investigación de la realidad boliviana. *T'inkazos* es una empresa de largo plazo, con regularidad comprobada y un espacio de irradiación cada vez más extendido.

Para que su colaboración llegue a buen puerto, le pasamos los siguientes consejos:

Contenido: Su aporte debe situarse dentro de las Ciencias Sociales y ser un avance o resumen de una investigación.

Extensión: Para una mejor presentación de sus ideas, usted puede redactar un artículo central que no exceda las 35 páginas tamaño carta a espacio normal (90 mil caracteres). A ello podrían sumarse uno o dos recuadros complementarios de a dos páginas tamaño carta a espacio normal cada uno (5 mil caracteres). Estos recuadros deberían poder ser leídos de manera autónoma sin necesidad de pasar por el artículo central.

Intertítulos: Procure evitar una puntillosa división en acápites y subtítulos marcados por números y/o letras, es mejor colocar breves intertítulos que den una idea rápida sobre el texto venidero. Si tiene fotografías, cuadros, tablas o infogramas a la mano, serán de gran ayuda para el lector.

Idiomas: Aunque *T'inkazos* tiene difusión en el extranjero, trate de evitar citas o referencias en otro idioma. Si de todos modos le interesa incluirlas, incorpore la traducción al castellano. En caso de que usted lo haya escrito íntegramente en otra lengua, si la revista lo considera adecuado, puede financiar la traducción.

Título: Proponga un título claro y directo, que no exceda las cinco o seis palabras.

Resumen: Es importante contar con un breve resumen del artículo que no pase de las seis líneas a fin de que el lector tenga una orientación previa del contenido.

Bibliografía: Al final del texto seguramente tiene una lista de libros que ha citado previamente. Le pedimos al redactarla, imite los siguientes ejemplos en cuanto a tipografía y orden. Nos ahorrará el trabajo de uniformización en el estilo:

Gutiérrez, Jorge, 1989, *Las Estructuras democráticas primitivas entre los Talibanes*, Barcelona, editorial Taurus, tomo III, cap. XVIII, pp. 234-256.

Aguado, María Luisa, 1998, *Los Otros Salvajes en Miradas desde Ultramar*, Avilés, Mauricio (comp.), Sao Pablo, ediciones Muriel, pp. 12-16

Sandóval, Juan Luis, 1986, *Historias para la Economía Mundial* en Puerta Abierta de Presencia, La Paz, 21 de julio, sección cultural, p. 12-13

Trotsky, León, 1965, *El Periodo termidoriano* en su Historia de la Revolución rusa, p. 34-89

Andrade, Ernestina, 1998, *Revelaciones en Abril*, mimeografo inédito, La Paz.

Mateo, 10, 34, *Evangelio según San Mateo*, La Biblia, cap. 11, versículo 39.

Envío: Ahora que lo tiene listo, envíelo sin demora a la siguiente dirección electrónica: contarch@ceibo.entelnet.bo o, siempre en un diskete, a las oficinas del PIEB, Edificio Fortaleza, Piso 6, Of. 601, Av. Arce, La Paz, Bolivia. Una vez recibido nos pondremos en contacto con usted para informarle sobre los siguientes pasos. Su texto será sometido a una revisión por parte de nuestro Consejo Editorial que sabrá valorar su aporte a la investigación en el país.

Periodicidad: *T'inkazos* aparece tres veces al año. Los meses "fatales" de cierre son febrero, junio y octubre. Todo texto que sea enviado y aceptado en esos periodos de tiempo, puede salir publicado en las revistas correspondientes a abril, agosto y diciembre.

Lorgio Vaca, modelando en la arcilla fresca. El carretón de la vida. (mural BANCO DE STA. CRUZ)

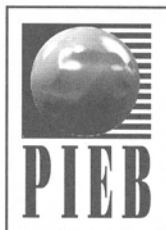


LIBRO / DOCUMENTO DE:

PIEB

FECHA DE INGRESO:

21 06 1999



El Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), patrocinado por el Directorio General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones de los Países Bajos (DGIS), es un programa autónomo de apoyo a las investigaciones en ciencias sociales establecido en 1995.

Los objetivos del PIEB son:

1. Apoyar la investigación dirigida a la reflexión y comprensión de la realidad boliviana, con la finalidad de contribuir a la generación de propuestas políticas frente a las diferentes problemáticas nacionales, promover la disminución de las asimetrías sociales y las inequidades existentes, lograr una mayor integración social y fortalecer la democracia en Bolivia.
2. Incentivar la producción de conocimientos socialmente relevantes y las aproximaciones multidisciplinarias que permitan visiones integrales de la sociedad, promoviendo simultáneamente la excelencia académica. Para el PIEB, desarrollar el conocimiento, la investigación y el acceso a la información son pilares clave para que una sociedad pueda afrontar su futuro.
3. Promover la formación de nuevas generaciones de investigadores haciendo énfasis en la formación de los jóvenes.
4. Desarrollar la capacidad regional y local de la investigación con relevancia social.

El PIEB pretende alcanzar estos objetivos a través de cuatro líneas de acción:

- a) Investigación. Brindar apoyo financiero a equipos de investigación, previo concurso de proyectos.
- b) Formación. Fortalecer la capacidad de investigadores jóvenes y profesionales a través de la formulación y ejecución de proyectos de investigación, cursos, conferencias y talleres.
- c) Fortalecimiento institucional. Desarrollar actividades de apoyo a unidades de información especializadas en ciencias sociales, como respaldo indispensable para sostener la investigación.
- d) Difusión. Impulsar una línea editorial que contemple la publicación de libros resultantes de las investigaciones financiadas por el Programa y de la Revista de Ciencias Sociales "T'inkazos".

En todas las líneas de acción el PIEB aplica dos principios básicos. Primero reconocer la heterogeneidad del país, lo cual implica impulsar la equidad en términos regionales, genéricos y generacionales. Segundo, respetar las propuestas de investigación en términos teórico-metodológicos, de enfoques y de actores que investigan y se investigan.

Esta revista se terminó de imprimir en el mes de mayo de 2000,
en los Talleres de Editorial Offset Boliviana Ltda. "EDOBOL".
Calle Abdón Saavedra N° 2101 • Telfs.: 41 04 48 - 41 22 82 - 41 54 37
Fax: 37 25 52 • Casilla 10495
La Paz - Bolivia

Tinkazos



revista boliviana **6** de ciencias sociales

Mayo de 2000



Programa de Investigación Estratégica en Bolivia